

## Rehabilitación de la justicia cortesana: la visita de Diego de Córdoba (1553-1554)

*Ignacio Ezquerro Revilla*  
Universidad Autónoma de Madrid

La inspección administrativa acometida en Castilla por impulso del príncipe Felipe en torno al comienzo de la década de 1550 expresó la tensión política existente en la corte entre protagonistas bien diferenciados. Por un lado, aquellos ministros con experiencia en el manejo de los asuntos y favorecidos por la reciente desaparición de grandes patrones (Tavera o Francisco de los Cobos), como Fernando de Valdés y Juan Vázquez de Molina. Por otro, los personajes de origen político opuesto como el presidente Hernando Niño, de carrera impulsada por el difunto cardenal Tavera, con quienes pronto entraron en connivencia los servidores del príncipe, entre los que destacó su gentilhombre Ruy Gómez. Quien valoró correctamente a don Felipe como nuevo referente de fidelidad política y sacó provecho de su viaje europeo entre 1548 y 1551 para consolidarse como su principal mentor. Esta contienda faccional, cuya composición simplificamos a sabiendas, en nuestra opinión, animó las mutaciones registradas en la transición del Imperio de Carlos V a la Monarquía Hispánica de Felipe II<sup>1</sup>. A este proceso no permaneció ajeno el Consejo Real de Castilla, dadas las atribuciones que conservaba pese al proceso de multiplicación consiliar ocurrido desde tiempos de los Reyes Católicos.

Pero la eminencia de la causa faccional para entender la regeneración administrativa instigada por el príncipe no anula la operatividad de otras como el deseo de acompañar su irremediable acceso al trono con la imposición efectiva de la justicia, que numerosos síntomas permitían considerar menguada. La impartición de justicia era elemento sustancial a la realeza desde su origen, así como fundamento de la posición del monarca en el sistema político de la monarquía corporativa<sup>2</sup>, lo que permite comprender la

---

<sup>1</sup> FERNÁNDEZ CONTI, S., *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II, 1548-1598*, Valladolid, 1998, pp. 32-80.

<sup>2</sup> NIETO SORIA, J. M., *Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI)*, Madrid, 1988, p. 152: «El rey justiciero será un ideal político que se repetirá sin solución de continuidad a lo largo de los siglos bajomedievales en Castilla. Se entendía que si existía alguna función propia del monarca y, como

preocupación de don Felipe al respecto. Por ello, encargó la inquisición de la actividad judicial a un experimentado visitador, Diego de Córdoba, pese a su lejanía política de sus asesores.

Con esta decisión, el príncipe demostró ser consciente de la debilidad institucional de los organismos judiciales, cuya funcionalidad estaba determinada por las relaciones personales <sup>3</sup>, e incidió de manera especial (tanto en el caso de la chancillería de Valladolid como en el del Consejo Real), en la parcela del ejercicio forense más material, la constituida por los oficiales de justicia: lo que hoy se denominaría «oficina judicial». Por lo general, no se ha subrayado adecuadamente el protagonismo de estos oficiales en la tarea judicial castellana y se les ha considerado exentos de responsabilidad tanto en las afecciones que mostraba como en su percepción pública <sup>4</sup>. Pero, como se deducirá del contenido de la inspección dirigida por Diego de Córdoba, tal responsabilidad era mayúscula, si se considera su influencia en el ritmo del expediente o su propensión a alterar el sentido de las resoluciones del Consejo o la Sala de Alcaldes, movidos por los más variados intereses.

Que reparemos en el estudio de tales oficiales no significa que se confiera un significado institucional a la organización judicial, del que en nuestra opinión carecía. La extensión, pertinencia y diversidad de las irregularidades cometidas por relatores, secretarios, escribanos, alguaciles, etc., habla de la falta de cauces normalizados y ordinarios de control de la función judicial, difícilmente vigentes en un sistema político basado en las relaciones personales entre ministros de diferente ubicación política. De esta manera, la dilación, o al menos amplia mengua de la actividad forense que se deduce de las faltas descubiertas por Diego de Córdoba, remitía más bien a la importancia de las relaciones personales como levadura del Consejo Real y el resto de los tribunales de la corte, no sólo en lo relativo a los miembros con potestad jurisdiccional, sino a los oficiales de justicia.

Dotado de una cultura política medieval, el príncipe se consideró obligado a un manejo continuo y cercano de la justicia a través del fortalecimiento del incipiente mecanismo adecuado a tal propósito. Esta determinación expresó un «modo judicial de gobernar» <sup>5</sup> cuya rehabilitación puso el fundamento de un desarrollo administrativo que

---

tal, absolutamente intransferible, ésta era la de castigar a los que no servían adecuadamente a la causa real»; HESPAÑA, A. M., *Visperas del Levantamiento. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, 1989, p. 392.

<sup>3</sup> MARTÍNEZ MILLÁN, J., «Introducción» a *id.* (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, 1994, pp. 13-35.

<sup>4</sup> Entre las obras que sí han reparado en tal influencia destaca KAGAN, R. L., *Pleitos y pleiteantes en Castilla. 1500-1700*, Salamanca, 1991, pp. 59-62. Obras del mismo autor pertinentes al tema que abordamos son: *id.*, «Pleitos y poder real. La chancillería de Valladolid (1500-1700)», *Cuadernos de Investigación Histórica*, 2 (1978), pp. 291-316; *id.*, «A Golden Age of Litigation: Castile, 1500-1700», en BOSSY, J. (ed.), *Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West*, Cambridge, 1983, pp. 145-165.

<sup>5</sup> Al respecto, cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., *Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1977, p. 443; ULLMAN, W., *Principios de Gobierno y Política*

desembocó en el curso de su propio reinado en la superioridad de la decisión política, canalizada por las sucesivas juntas de *noche y gobierno* <sup>6</sup>. Aportación de importancia fundamental para la historia político-administrativa en cuanto sustrato necesario para la actual separación de poderes <sup>7</sup>.

La actividad de Diego de Córdoba permite apreciar otro resabio medieval en la organización judicial del siglo XVI. La inquisición simultánea de los oficiales del Consejo Real y la Sala de Alcaldes reflejó una consideración corporativa y unitaria de la justicia, derivada de su naturaleza constitutiva de la *corte regia*. Para asimilar la expansión y consolidación de su poder, el Rey amplió en el medievo su organización doméstica y a los oficiales que le servían en su casa se añadieron los que administraban justicia en su representación: en principio (1371), los componentes de la audiencia; más adelante, tanto éstos como los del Consejo Real (originado en 1385), cuando se atribuyó a éste la capacidad de resolver asuntos de justicia cometidos por el Rey o el conocimiento de la segunda suplicación <sup>8</sup>. La corte poseía así un sentido jurídico generalmente desatendido ante el boato de la vida palaciega, sobre cuyo estudio es necesario profundizar. Por lo demás, el estudio de esta visita permite conocer el contenido de la actividad de oficiales que no han solido atraer el interés de los historiadores <sup>9</sup>, si bien recientemente varios trabajos se han ocupado de ellos <sup>10</sup>.

en la *Edad Media*, Madrid, 1971, p. 125; MARONGIU, A., «Un momento típico de la Monarquía Medieval: el rey juez», *AHDE*, núm. 23 (1953), pp. 678-715. Cfr., además, ANDRÉS IBÁÑEZ, P., y MOVILLA ÁLVAREZ, C., *El Poder Judicial*, Madrid, 1986, p. 36. Finalmente, CLAVERO, B., «La justicia», en ARTOLA, M., *Enciclopedia de Historia de España*, 2, *Instituciones Políticas. Imperio*, Madrid, 1995, pp. 243-247, esp. pp. 377-400.

<sup>6</sup> MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS, C. J. de (dir.), *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, Salamanca, 1998, pp. 231-246.

<sup>7</sup> Al respecto, SILVESTRI, G., *La separazione dei poteri*, Milano, 1979, pp. 125-126.

<sup>8</sup> De ahí que cuando la audiencia dejó de ambular permanentemente con el Rey, para evitar perjuicios a los súbditos, nunca perdiera totalmente (tanto la que terminó siendo de Valladolid como la que terminó siendo de Granada, así como en menor grado las sucesivas) tal rango constitutivo de la corte regia. Naturaleza que, según se deduce del sustantivo que en lengua inglesa denomina el concepto tribunal, *court*, no fue exclusiva de Castilla. Sobre tan confuso concepto, cfr. PÉREZ DE LA CANAL, M. A., «La justicia de la corte en Castilla durante los siglos XIII al XV», *Historia, Instituciones, Documentos*, 1975, núm. 2, pp. 412-416; CLAVERO, B., «Sevilla, concejo y audiencia: invitación a sus ordenanzas de justicia», introducción a las *Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla*, Sevilla, 1603 (reimp. Sevilla, 1995), pp. 9-13 y 18-25, páginas que unen claridad y profundidad. Igualmente, GARRIGA, C., *La audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525)*, Madrid, 1994, pp. 224-232. Sobre el recurso extraordinario, GARCÍA-BADELL ARIAS, L., «La práctica judicial frente a las leyes. La admisión de nuevas pruebas en la Segunda Suplicación», SCHOLZ, J. M. (dir.), *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz*, 15. Bis 20. Jahrhundert, Frankfurt, 1994, pp. 368-398.

<sup>9</sup> ALONSO ROMERO, M. P., *El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Salamanca, 1982, p. 107, ha subrayado con acierto la falta de trabajos que trataran sobre la compleja organización y fundamento doctrinal de la organización judicial en la edad moderna.

<sup>10</sup> MONTAGUT CONTRERAS, E., *Los alguaciles de Casa y Corte en el Madrid del Antiguo Régimen*, Tesis Doctoral dirigida por el doctor BRAVO LOZANO, J., UAM, 1996. LÓPEZ GÓMEZ, M. A., «Los escribanos de Cámara (Justicia y Gobierno) del Consejo de Castilla», *Hidalguía*, núm. 212 (1989), pp. 119-144; id., «Los

Fueron éstas las coordenadas que situaron el pesado trabajo de Diego de Córdoba, del que vamos a ocuparnos no sin antes emplazarle políticamente e ilustrar su larga carrera como visitador de diferentes organismos.

## La situación cortesana

La muerte, en torno a 1545, de los principales ministros que fijaban la dirección del gobierno en la corte de Carlos V supuso una variación sustancial del panorama faccional reinante hasta ese momento. El cardenal Tavera, mentor de la administración regia desde el aplacamiento de las Comunidades, falleció el 1 de agosto de 1545<sup>11</sup>. Un mes después lo hizo Hernando de Silva, cuarto conde de Cifuentes, mayordomo de las infantas doña María y doña Juana<sup>12</sup>. El año siguiente falleció el presidente de Indias y arzobispo de Sevilla, García de Loaysa (22 de abril), así como, entre otros, el conde de Osorno, la marquesa de Lombay y Juan de Zúñiga, de manera que desapareció el entramado de gobierno instaurado por el Emperador a su partida en 1543<sup>13</sup>. La pervivencia de Fernando de Valdés y su pronta promoción desde la presidencia de Castilla hasta la plaza de inquisidor general enaltecieron su posición cortesana y le confirieron indiscutible iniciativa tanto en la resolución de los asuntos como en la promoción de ministros, aun en aquellos organismos que no controlaba de forma directa.

Pese a todo, el Emperador no profesaba especial aprecio por el ministro asturiano, según permite deducir el conjunto de documentos que dejó al partir hacia su jornada en mayo de 1543. En ellos se advirtió con claridad que el valor atribuido por Carlos V al presidente Valdés era meramente instrumental, como había sido su nombramiento para la presidencia del Consejo Real en 1539, con ocasión de su anterior viaje<sup>14</sup>. Igualmente, la opinión vertida sobre su persona en las conocidas *instrucciones secretas* que dictara para su hijo el príncipe Felipe constata lo afirmado<sup>15</sup>. Testimonio de esta reserva

---

relatores del Consejo de Castilla y de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte», *Hidalguía*, núm. 218 (1990), pp. 43-61.

<sup>11</sup> SALAZAR DE MENDOZA, P., *Crónica de el Cardenal don Iuan Tavera*, Valladolid, 1603.

<sup>12</sup> AGS, E., leg. 73, núm. 194; *ibid.*, CSR, leg. 63, fol. 140v.

<sup>13</sup> KENISTON, H., *Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V*, Madrid, 1980, pp. 290-291.

<sup>14</sup> Tras describir la sorpresa causada por el apartamiento de Tavera, Girón continuaba: «El señor licenciado Aguirre preside hasta aora. No se sabe quién sucederá en la silla. Créese que el de Valladolid...» GIRÓN, P., *Crónica del Emperador Carlos V*, Madrid, 1964, p. 323.

<sup>15</sup> «El Presidente es buen hombre; no es, a lo que yo alcanço, tanta cosa como serya menester para un tal Consejo, mas tampoco hallo ny sé otro que le hiziese mucha ventaja. Mejor era para una Chancillería que para el Consejo, y más después que estas paciones andan, sin las quales a my ver no anda, y aunque le encomendé mucho la conformydad con Covos, pareceme que le es muy sujeto y que antes quedarya por Covos que por él en hacer cosa que no fuese muy lícita por complazerle y que antes él le enzenderya en las paciones que no se las desharya. Mas todavya creo que no usará de su oficio syno bien» [FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., *Corpus Documental de Carlos V*, Salamanca, 1972-79, 5 vols. (en adelante citaré por CDCV),

fue igualmente el nombramiento de Hernando Niño, *criatura* del cardenal Tavera, para ocupar la vacante de Valdés en la presidencia del Consejo Real en 1546, dado que ambos habían protagonizado sonoras discrepancias durante su coincidencia previa en el Consejo de Inquisición.

La estrecha relación entre el príncipe Felipe y el presidente del Consejo Real, cimentada en la aplicación de las Instrucciones de 1543 y la preparación de la postura hispana en el Concilio de Trento, supuso que el primero recomendará a Fernando de Valdés para cubrir la vacante de García de Loaysa en el arzobispado de Sevilla. La intercesión tuvo un efecto inesperado, como fue el uso de Valdés para ejercer el otro importante puesto que la muerte de Loaysa había dejado libre, el de inquisidor general<sup>16</sup>. La promoción hubiera sido inmediatamente aceptada por el presidente y el príncipe, de no venir acompañada del paso a la presidencia del Consejo Real del presidente de la chancillería de Granada, destacado ejemplo de los letrados llegados al ejercicio forense de la mano del difunto cardenal Tavera. La reticencia del príncipe y Fernando de Valdés hacia los cambios decididos se tradujo en una llamativa dilación de su trámite, pero finalmente, el breve de Valdés como inquisidor general se expidió el 20 de enero de 1547, y el de Hernando Niño como presidente del Consejo Real ocho días después<sup>17</sup>. Pese a la posición disfrutada por Valdés, el nombramiento de Niño significó una alternativa al dominio del inquisidor general, que no tardó en alcanzar consistencia legal con motivo de las ordenanzas que Carlos V dejó a los regentes Maximiliano y María en 1548.

Las restricciones al poder general de los regentes firmadas por el Emperador en Bruselas el 29 de septiembre de ese año le reservaron la designación de las vacantes de oidores del Consejo Real y otras importantes plazas judiciales, tras revisión de las propuestas que desde Castilla le enviaban tanto el inquisidor general como el presidente<sup>18</sup>. Con ello, Carlos V favoreció un equilibrio político confirmado por el hecho de que, generalmente, los nombramientos para las vacantes cortesanas más relevantes

doc. CCLII, pp. 115-116; GAN, P., *El Consejo Real de Carlos V*, pp. 134-136; GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, I, p. 126, y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., «Valdés y el gobierno de Castilla a mediados del siglo XVI», p. 101].

<sup>16</sup> AGS, E., leg. 73, núm. 119, príncipe Felipe al Emperador, Madrid, 10 de mayo de 1546, cit. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés*, I, Oviedo, 1968, p. 163; AHN, Inq., lib. 100, fol. 82, pub. por TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., «Felipe II y el Inquisidor General D. Fernando de Valdés. Documentos inéditos», *Salmaticensis*, núm. 16 (1969), pp. 345 y ss.

<sup>17</sup> GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, pp. 203-205. El título de Niño como presidente, en AGS, EMR, QC, leg. 15, pub. por GAN GIMÉNEZ, P., «Los presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)», *Chronica Nova*, núm. 1 (1968), pp. 9-37, p. 28.

<sup>18</sup> El Emperador impuso las siguientes restricciones a su sobrino Maximiliano y su hija María, en lo relativo a provisión de plazas: «Que prouean todos los ofiçios de Justicia que uacaren con paresçer del presidente del Consejo y arçobispo de Seuilla hallándose Juan Vázquez presente como lo suele estar, eçebto los presidentes y oydores de Consejo y Chañçillerías de Valladolid y Granada y alcaldes de corte y chañçillerías y regente de Nauarra y gouernación de Galizia, asistente de Seuilla, corregidor de Toledo, que estos solamente

durante la regencia recayeron en aquellos candidatos en los que coincidían tanto Valdés como Niño. Si bien no siempre fue así, y el sesgo de los nombramientos producidos en el periodo es indicio fiable de las fluctuaciones en la composición del poder entre ambos ministros, que muestra una ligera tendencia general favorable al inquisidor general. En este sentido, la paulatina consolidación jurisdiccional experimentada por el Consejo Real bajo la presidencia de Hernando Niño, patente en la entrada de dos oidores del Consejo —los doctores Corral y Anaya— a entender en pleitos en Contaduría Mayor <sup>19</sup>, supo ser momentáneamente contenida en el caso de la Suprema por Fernando de Valdés, al impedir la asistencia de los licenciados Hernando Martínez de Montalvo <sup>20</sup>. Quien asimismo logró menoscabar la autoridad de Hernando Niño tanto en el derribo de ciertas casas en Valladolid como al lograr la postergación de la *visita* del aposento cortesano impulsada por el presidente <sup>21</sup>.

Como decíamos, el respectivo ascendiente cortesano del inquisidor general Valdés y del presidente Niño se puede valorar, más allá de las atribuciones propias de los importantes cargos que desempeñaban, en relación con las provisiones de plazas decididas por el Emperador en su campo. Para ello resulta útil perfilar las designaciones judiciales más relevantes consumadas durante la ausencia del príncipe Felipe entre 1548 y 1551, relación que no pretende ser exhaustiva.

Después de los trámites que dieron con el doctor Pérez de Rivadeneyra y el licenciado Gracián Briviesca de Muñatones en el Consejo de Indias <sup>22</sup>, la primera de las vacantes

---

reseruo para my; y los dichos patriarca y arzobispo me enbían cada uno por sy sus memoriales de las personas que les ocurren por medio del dicho Juan Vázquez para que elija los que fuere servido.

Y demás desto por el presente y hasta que los dichos serenísimos Príncipes tengan más experiencia y noticia de las personas que hay en el reyno conuenientes y suficientes para semejantes cargos, haviéndolo ellos comunicado con los dichos patriarca, arzobispo y Juan Vázquez, nos consultarán la prouisión de los lugares que vacaren en el consejo de Nauarra, audiencia de Galizia y los grados de Seuilla y los corregimientos de Granada, Córdoua y Segouia» (AGS, PR, 26-104, Bruselas, 29 de septiembre de 1548, pub. en CDCV, III, doc. CDII, p. 27).

<sup>19</sup> AGS, EMR, QC, leg. 5; GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, pp. 99 y 144; AGS, E., leg. 78, núm. 30-31, los regentes a Carlos V, 10 de abril de 1549, pub. por RODRÍGUEZ RASO, R., *Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España. Cartas al Emperador*, Madrid, 1963, pp. 94-95. La entrada de los oidores del Consejo Real sería para resolver pleitos «grandes y arduos a suplicación de ciudad o villa o aquellos en que no hubiera acuerdo entre los oidores de Contaduría, y era resultado de una petición de las cortes de 1523. El 4 de julio de 1549 se estableció, ante las distorsiones causadas por el defectuoso despacho de este tipo de causas, que se formalizase la reunión de dos oidores del Consejo con los de contaduría cada jueves por la tarde (AGS, E., leg. 87, s. n.). La determinación real pronto generó la oposición de los contadores, y esta actitud arreció al solicitar las cortes que fueran cuatro, y no dos, los letrados que entraran en contaduría (AGS, E., leg. 87, núm. 128, de 24 de noviembre de 1551).

<sup>20</sup> AGS, E., leg. 77, núm. 153, Hernando Niño al príncipe, 25 de febrero de 1549, cit. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, p. 209; *ibid.*, leg. 78, núms. 44-50, Maximiliano y María a Carlos V, Valladolid, 19 de febrero de 1549, pub. en RODRÍGUEZ RASO, R., *op. cit.*, pp. 72-73.

<sup>21</sup> GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, I, pp. 209-21; AGS, E., leg. 81, núm. 50, en RODRÍGUEZ RASO, R., *op. cit.*, pp. 183-184.

<sup>22</sup> Respectivamente el 4 y el 30 de julio de 1549. Relaciones biográficas en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.),

del Consejo Real cubiertas según el modo de provisión estipulado por el Emperador fue la causada por el licenciado Pedro Cortés, que fue ocupada por el licenciado Pedro López de Arrieta con título de 23 de diciembre de 1549<sup>23</sup>. El inquisidor general Valdés abrió con él su propuesta por ser oidor decano en Valladolid, además de «buen letrado y buen juez»<sup>24</sup>, formando asimismo parte de la propuesta del presidente de Castilla. Como aludimos, prueba de que el Emperador deseaba ante todo el equilibrio político, fue que solía elegir sólo entre aquellos candidatos en los que coincidían ambos ministros<sup>25</sup>. No obstante, tal coincidencia en los propuestos era lo excepcional. En la misma tanda de nombramientos que favoreció a López de Arrieta, se decidió formalizar el servicio interino que el licenciado Arpide prestaba como juez mayor de Vizcaya. Tanto el patriarca como el inquisidor general abogaron por su nombramiento formal, y coincidieron además en el del licenciado Alderete, yerno del alcalde Ortiz. Pero a ellos, Niño añadió al licenciado Horozco, propuesto en otras ocasiones como oidor, y al licenciado Salazar, relator del Consejo<sup>26</sup>.

No fueron las únicas plazas que tuvieron que proveerse por entonces de acuerdo con las instrucciones del Emperador, y en las que se evidenció una orientación política opuesta entre presidente e inquisidor general, patente en el escaso número de candidatos en los que coincidían. La necesidad de cubrir vacantes consiliares provocaba otras en las chancillerías. En la de Valladolid, se decidió designar al doctor Redín en lugar de quien fuere al Consejo de Órdenes, y para la plaza del promovido al Consejo Real, patriarca y arzobispo concurren tan sólo en los licenciados Bártulo de Totoles, colegial de San Bartolomé, y Juan Tomás, colegial de Santiago.

Pero junto a ellos, el patriarca Niño nombraba por su lado a otros candidatos, como fueron el licenciado Jarava, alcalde mayor del adelantamiento de León y colegial

---

*La Corte de Carlos V*, Madrid, 2000, III, pp. 336-337 y 69-70. Asimismo, el licenciado Francisco de Castilla pasó a ser alcalde de Valladolid. Durango ocupó la vacante de Morillas como alcalde del crimen. Bustamante ejerció como fiscal de Valladolid en lugar de Oviedo, y su plaza en Granada como fiscal pasó a ser ocupada por Ojalora. Como alcalde de Navarra pasó a desempeñarse Bermúdez (AGS, *ibid.*, núms. 163-164).

<sup>23</sup> Tomó posesión el 21 de febrero de 1550 (AGS, EMR, QC, leg. 31, cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988, p. 223). Hicimos una breve biografía en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, Salamanca, 1998, p. 419.

<sup>24</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 174. Síntoma de la preferencia por Valdés de la chancillería de Valladolid —tribunal que había presidido— para nombrar oidores de los consejos es que la propuesta de oidores de esta audiencia precedió a la de miembros de otros consejos como los de Indias u Órdenes.

<sup>25</sup> El documento se iniciaba, de acuerdo con lo afirmado: «Hauiendose visto los memoriales del patriarca y el arzobispo de Sevilla, paresce q. para la plaça del Consejo concurren ambos en tres personas». Se trataba del doctor González de Arteaga, el licenciado López de Arrieta y el licenciado Castro, quien se había excusado de servir plaza de Ordenes. El patriarca Niño nombró además al ldo. Pedrosa, en propuesta que indicaba su sintonía con el grupo político que se estaba formando en torno a príncipe. Ya que Pedrosa accedería al Consejo Real en 1554 (AGS, E., leg. 13, núms. 166-167). En principio, se eligió a González de Arteaga, pero su nombre fue tachado y sustituido por el de López de Arrieta.

<sup>26</sup> *Ibid.*

de Valladolid, y el licenciado Gómez González, a quien Niño atribuía experiencia en los negocios. Por su parte, Valdés incluyó al doctor Arbizu, alcalde de Hijosdalgo y colegial de Valladolid <sup>27</sup>.

En realidad, el procedimiento de designación que venimos tratando sufrió desde pronto alteraciones favorables al campo imperial, donde se propusieron candidatos para oficios que en un principio no formaban parte de la restricción del Emperador a los poderes de los regentes, como la vacante del licenciado Juan Sarmiento en el Consejo de Órdenes. Para ella se juzgó apropiados en el campo imperial al licenciado Pedro de Pedrosa, el doctor Vázquez y el licenciado Santillán. Igualmente, se consideró que si el Emperador tomaba para el Consejo Real al doctor Jacobo González de Arteaga, su plaza en Órdenes debía ser cubierta entre los candidatos antedichos <sup>28</sup>. Ello perjudicaba la posición administrativa del presidente de Castilla, tradicionalmente encargado de proponer candidatos para estas plazas, y originó su queja <sup>29</sup>.

Con todo, y pese a los impedimentos que Valdés estaba poniendo a la acción cortesana del presidente Niño, su propuesta fue seguida por el Emperador para proveer diferentes plazas del Consejo de Navarra, comenzando por la propia regencia, conferida al doctor Cano <sup>30</sup>. Las vacantes de oidores y alcaldes, en las que se pretendió guardar

<sup>27</sup> A quienes se añadió en el campo imperial el alcalde Durango, quien no iba nombrado, AGS, E., leg. 13, núm. 167. Biografías de Jarava y Durango en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de (dir.), *op. cit.*, pp. 366 y 409-410.

<sup>28</sup> Asimismo, para letrado de contadores se propuso, en caso de que el Emperador decidiera dar su salario al licenciado Villa (180.000 mrs.), al licenciado Lope de León, oidor de Granada (aunque resultaba algún cargo contra él de la visita de Miguel Muñoz a la chancillería y además poseía licencia para abogar en los pleitos del duque de Escalona), el licenciado Birués y el licenciado Ágreda (AGS, E., leg. 13, núm. 167).

<sup>29</sup> La alteración parece que además pasaba por consultar estas plazas al arzobispo Valdés: «El motivo que Su Majestad ha tenido para alterar lo que solía hacer yo no lo sé, mas por otras cosas no verdaderas que han escrito en días pasados en mi perjuicio, sospecho que debe haber sido por relaciones de personas que no me tienen buena voluntad» (AGS, E., leg. 77, núm. 155, pub. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, I, p. 208).

<sup>30</sup> Oidor de los grados y sustituto del doctor Galvez como asistente de Sevilla. Junto a él, propuso al licenciado Juan de Vargas, hijo del difunto tesorero Vargas, y el licenciado Juan Zapata de Cárdenas, que estaba como corregidor en Vizcaya (AGS, E., leg. 13, núm. 165). No gozó nueva promoción hasta que accedió como regente al Consejo de Navarra, en sustitución del licenciado Argüello, el 11 de septiembre de 1550 (SALCEDO IZU, J. J., *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI*, Pamplona, 1964, p. 275). Llevó la plaza a Diego de Simancas, quien se vio perjudicado por sus exigencias económicas (SIMANCAS, D. de, «La vida y cosas notables del señor obispo de Zamora don Diego de Simancas... escrita por el susodicho», en SERRANO Y SANZ, M., *Autobiografías y memorias*, Madrid, 1905, p. 153). Posteriormente, tomó posesión del cargo de consejero del real el 19 de noviembre de 1554 ante el presidente Fonseca, en el que estaba nombrado desde el 13 de marzo para la plaza vacante del licenciado Pedro Mercado de Peñalosa. Como oidor contribuyó decisivamente a agilizar el despacho en tiempo de doña Juana, acumulando en 1557 las comisiones de presidente de la Mesta y visitador de la universidad de Salamanca, difícil tarea por razón del malestar causado en el cuerpo universitario por el retraso del Consejo en aprobar los estatutos elaborados por el obispo de Coria en 1551 [MARCOS RODRÍGUEZ, F., «Don Diego de Covarrubias y la Universidad de Salamanca», *Salmaticensis*, 6 (1959), pp. 37-85 y 64; MARTÍN DE SANDOVAL Y FREIRE, E., «Presidentes del



equilibrio entre beamonteses y agramonteses, fueron provistas según el criterio de Niño en los licenciados Ollacarizqueta, Roda, Pasquier, Balanza y Elio <sup>31</sup>. Igualmente, gracias a la mediación de Niño, la vacante del doctor Ovando en la chancillería de Valladolid, por su paso al Consejo de Órdenes, fue ocupada por el doctor Juárez, alcalde de la misma chancillería. Su plaza sería ocupada por el licenciado Palomares, alcalde de Galicia <sup>32</sup>. De la misma manera, la opinión de Niño favoreció a Morillas para ser nombrado alcalde de corte y al licenciado Alderete para ocupar plaza de oidor en lugar de Rivadeneyra <sup>33</sup>.

De nuevo en marzo de 1550 se hubo de poner en práctica el procedimiento de designación sancionado en septiembre de 1548 a causa de la muerte del licenciado Francisco de Montalvo, y tanto el presidente Niño como el inquisidor general Valdés coincidieron en proponer al doctor Jacobo González de Arteaga, consejero de Órdenes <sup>34</sup>. Con todo, muy pronto habría necesidad de volver a proveer la plaza, dado que Arteaga falleció el 4 de enero de 1551.

Igualmente, en 1550 se acometió el proceso de designación del asistente de Sevilla, que el Emperador también había reservado para sí. De Castilla vinieron nombrados en los memoriales respectivos el conde de Monteagudo, el de Chinchón, el de Coruña y don Álvaro de Bazán, si bien la decisión pareció postergarse <sup>35</sup>. En cuanto al corregimiento de Córdoba, llegaron nombrados don Bernardino de Mendoza, procurador de cortes de Madrid, don Pedro de Mendoza y Bobadilla, hermano del cardenal de Coria, don Gaspar Manrique, regidor de Toledo, Garci Tello, que fue corregidor de Salamanca y don Fernando de Acuña, quien había servido en la jornada de Carlos V. En el campo imperial se añadieron Alonso Fajardo, tío del marqués de los Vélez; el

---

Honrado Concejo de la Mesta (1500-1827)», *Hidalguía*, 201 (1987), pp. 407-420 y 414]. Falleció en Valladolid el 25 de agosto de 1559 (AGS, QC, leg. 13).

<sup>31</sup> Asimismo la plaza vacante en la chancillería de Granada por muerte del licenciado Diego de Córdoba fue ocupada por el licenciado Bártulo Sánchez, y la del doctor Gálvez, en el mismo tribunal granadino, por el licenciado Jaraba, alcalde mayor del adelantamiento de León y colegial de Valladolid (AGS, E., leg. 13, núm. 165).

<sup>32</sup> Con argumento que denotó el significado de la institución de la *visita* para la promoción administrativa: «no resultando contra ellos (los alcaldes de Galicia) cosa notable de la visita como es de creer que no resultará» (*ibid.*).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 139, cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, p. 223; previamente, fue propuesto para sustituir al licenciado Cortés (AGS, E., leg. 13, núm. 145). Su biografía, en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V*, tomo III.

<sup>35</sup> Finalmente fue elegido don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de Coruña, quien ejerció como asistente y juez de residencia de su predecesor el licenciado Cano, entre 1550 y 1553. Había sido virrey de Nueva España y, cuando estaba nombrado para el virreinato de Perú, pasó a Sevilla (ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., *Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla...*, Madrid, 1796, V, p. 218). Alusión a las funciones del asistente, en MONTOTO, S., *Sevilla en el Imperio (siglo XVI)*, Sevilla, 1937, pp. 54-56.

comendador de las Elches, Antonio Enríquez de Salamanca, y don Hernando de Rojas, quien no lo aceptó <sup>36</sup>.

En definitiva, cabe concluir de la evolución de los nombramientos durante la regencia de Maximiliano y María una tendencia al equilibrio que animó una mayor intensidad en la disputa cortesana entre ambos ministros, y que sólo se rompió con el regreso del príncipe en julio de 1551 <sup>37</sup>, cuando el presidente Niño se superpuso con los asesores de don Felipe y contestaron la posición de Valdés. Si bien la pronta muerte del presidente, así como los viajes del príncipe a Monzón e Inglaterra, permitieron reconquistar terreno al inquisidor general. Ello se desprende tanto de la orientación de las promociones consumadas en torno al regreso del príncipe, como del fluir de las inspecciones administrativas iniciadas en época de los regentes y desarrolladas a la vuelta del anterior.

La muerte del doctor González de Arteaga hizo necesario proveer su plaza en el Consejo Real según el modo arbitrado por Carlos V en su restricción al poder de los gobernadores Maximiliano —por entonces ausente en la dieta imperial— <sup>38</sup> y María. Poco después de su fallecimiento se elaboró memorial para proveer tanto su vacante, como otras de cargos menos destacados, que esbozó no sólo la ventaja del círculo del príncipe sino el sentido de los nombramientos entre su regreso a Castilla en 1551 y su nueva partida en 1554. Pues se abría con los alcaldes encargados de la administración de justicia cerca del príncipe y el Emperador, respectivamente los licenciados Menchaca y Juan Briviesca de Muñatones, y los dos *letrados* que por entonces actuaban comisionados en Trento, el licenciado Vargas y el doctor Velasco. La relación se completó con el licenciado Pedrosa, del Consejo de Órdenes; el doctor Pérez de Rivadeneyra, de Indias; el licenciado Gracián Briviesca de Muñatones, asimismo consejero de Indias; el licenciado Castro, oidor antiguo de Valladolid, y el licenciado Alarcón, quien era oidor decano de Granada. El memorial no sólo se resolvió con concesión de la plaza al licenciado Francisco de Menchaca, sino que otros escolios de mano de Eraso indicaron las promociones que seguidamente tendrían lugar <sup>39</sup>. Menchaca se convirtió en testimonio de la situación que apuntaba en la corte, ya que también sustituyó al doctor

<sup>36</sup> Finalmente, se determinó que sirviera esta plaza GARCÍA TELLO (AGS, E., leg. 13, núm. 166).

<sup>37</sup> AGS, E., leg. 84, núm. 282, en RODRÍGUEZ RASO, R., *op. cit.*, pp. 31 y 276.

<sup>38</sup> Con tal motivo, el Emperador envió a los gobernadores orden de colaborar con su hija, que adquirió valor de instrucción acorde con la nueva situación (AHN, Inq., lib. 323, fol. 122, carta a Valdés, de 20 de septiembre de 1550, en GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *op. cit.*, II, pp. 117-118).

<sup>39</sup> Ya en 1551 se concedió al licenciado Juan Briviesca de Muñatones cédula en que el rey le concedía título del Consejo para cuando regresase a España, y antigüedad de la fecha de la cédula (AGS, E., leg. 13, núm. 169; al margen se lee: «al al[ca]ld[e] Briviesca c[édula] en q. Su Md. diga q. ydo a Spaña le mandará dar título del Consejo, y q. desde agora es su voluntad q. goze del añcianidad»). Briviesca terminaría recibiendo su título el 1 de septiembre de 1554. Asimismo, ya entonces se afirmó que «de los otros nombrados paresce q. sería buena prouisión en Pedrosa o Castro»; el primero recibió título del Consejo el 13 de marzo de 1554 (*ibid.*). Asimismo, en las chancillerías, la vacante en Valladolid del licenciado Ordóñez fue cubierta con el licenciado Juan Zapata de Cárdenas (*ibid.*, Colegial de Oviedo, corregidor de Vizcaya, «[h]ombre de buen casta e letrado...»). Para la vacante causada por el licenciado Diego de Deza en Granada, fue

Escudero en la Cámara y a Galarza en el Consejo de Hacienda, y se convirtió en fiel aliado de Niño en el Consejo Real <sup>40</sup>.

Las decisiones tomadas respecto a estas plazas indicaron un fortalecimiento del presidente Niño y un consecuente debilitamiento del inquisidor general, confirmado por la designación del licenciado Ágreda para la fiscalía de Indias, «al qual se inclina más el patriarca» o la delegación en su persona desde el campo imperial para cubrir las vacantes del licenciado Ollacarizqueta y el licenciado Rada, respectivamente como consejero y alcalde de Navarra <sup>41</sup>. Nuevas bajas en el Consejo Real, en las personas de los doctores Corral y Escudero (desaparecidos respectivamente el 11 de mayo y el 11 de septiembre de 1551) y en la sala de alcaldes, Ronquillo y Castillo <sup>42</sup>, ofrecieron nuevas oportunidades al presidente Niño y los asesores del príncipe para adecuar el aparato administrativo a su perfil político <sup>43</sup>. Con todo, Valdés supo sacar beneficio de la repentina muerte del presidente Niño, el 16 de septiembre de 1552, acontecida con el príncipe en Monzón, al sucederle en importantes cometidos que le permitieron recomponer su situación con tanta eficacia que aconsejó al gentilhomme de la cámara del príncipe, Ruy Gómez, acelerar el retorno a la corte, en la que don Felipe estaba para final de año <sup>44</sup>.

Las *visitas* que por entonces sufrió la administración hispana respondieron asimismo a la vitalidad de la oposición política en la corte, en manera especial dada su potencialidad depuradora de los organismos que eran sometidos a ellas. Al tiempo, la complejidad del escenario administrativo autoriza a matizar, al menos parcialmente, la orientación

---

nombrado el licenciado Otorla, fiscal de Granada que había sido propuesto desde Castilla como fiscal de Indias; siendo sustituido en la fiscalía de Granada por el licenciado Francisco Hernández que había venido nombrado como oidor de Valladolid. Para la vacante del licenciado Pobladora en el Consejo de Navarra se nombró al doctor Arbizu (*ibid.*).

<sup>40</sup> AGS, EMR, QC, leg. 18, cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V...*, op. cit., pp. 247-248; *ibid.*, E., leg. 84, núm. 231, carta de Niño de 23 de noviembre de 1551, en CARLOS MORALES, C. J. de, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Junta de Castilla y León 1996, p. 63. Sobre su carrera, cfr. MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V*, III, pp. 276-277.

<sup>41</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 169.

<sup>42</sup> GAN GIMÉNEZ, P., op. cit., pp. 145 y 235; MARTÍNEZ MILLÁN, J., «Elites de Poder en tiempo de Felipe II...», p. 128. Biografías de Corral, Escudero y Castillo en MARTÍNEZ MILLÁN, J., op. cit.

<sup>43</sup> El 29 de marzo de 1552 el Emperador expresó a Juan Vázquez de Molina: «Las plaças de los Consejos y otras cosas q. han resultado se an proueydo en las personas que vereys por los títulos q. sembían los quales se darán a las partes para q. vayan a seruir sus cargos, y hauiéndose mirado en lo de las fiscalías que vacan, hauemos nombrado para la de Granada en lugar de Contreras al licenciado Virues y en la de Val[lado]lid en el de Bustamante al licenciado La Canal y en caso q. estos se escusassen por algunas causas en la de Granada al doctor Nauarrete y en la de Val[lado]lid al doctor Orozco y así lo scriuimos al Patriarcha (AGS, E., leg. 89, núm. 5, Carlos V a Juan Vázquez de Molina, 29 de marzo de 1552).

<sup>44</sup> AGS, E., leg. 92, núm. 32; *ibid.*, núms. 253, 284 y 289, pub. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., op. cit., II, pp. 126 y 130-134. La tarea en la que Valdés sucedió a Niño era tan sensible como la negociación del encabezamiento con las cortes.

y significado que venimos dando a estas inspecciones, en especial las que constituyen el objeto de este trabajo. Como institución jurídica la *visita* viene siendo objeto de una larga controversia semántica. Existe acuerdo entre los historiadores que se han ocupado de este procedimiento en considerarla una inquisición de la actuación de oficiales subordinados, conducida por un comisario por orden del Rey o —en su señorío— un noble. Las obras que han tocado esta institución no han logrado establecer diferencias significativas entre la visita, la pesquisa y la residencia, si bien ésta poseía caracteres más permanentes y regulares, al someterse a ella oficiales salientes en figura de juicio<sup>45</sup>. Pero existieron organismos, como el Consejo de Navarra, en el que las visitas poseían un carácter periódico y rutinario que las aproximaba a las residencias en Castilla<sup>46</sup>, de manera que en contextos particulares mostraba un carácter regular y metódico<sup>47</sup>. Paralelamente, distintas denominaciones poseían un mismo significado según el territorio en que fueran aplicadas<sup>48</sup>, todo lo que subraya la mencionada dificultad de distinción<sup>49</sup>.

Los caracteres dados a la actividad visitadora por Céspedes del Castillo permiten conferir un carácter político a la visita, de instrumento en el contexto de la lucha por el poder y las pugnas faccionales. Pues poseía caracteres adecuados para ser aplicada

<sup>45</sup> Los numerosos estudios sobre la visita en Indias han aportado mucho al conocimiento de la institución: CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., «La visita como institución indiana», *Anuario de Estudios Americanos*, núm. 3 (1946), pp. 984-1025; MARILUZ URQUIJO, J. M., *Ensayo sobre los juicios de residencia indios*, Sevilla, 1952; ZUMALACÁRREGUI, L., «Visitas y residencias en el siglo XVI. Unos textos para su distinción», *Revista de Indias*, núm. 26 (1946), pp. 917-921; SÁNCHEZ BELLA, I., *Derecho Indiano. Estudios. I. Las Visitas generales en la América española (siglos XVI-XVII)*, Madrid, 1991. La aplicación de la visita y otros procedimientos de control por la nobleza en sus estados, de raíz doméstica gemela a la de las visitas reales, ha sido aludida por RIVERO RODRÍGUEZ, M., «Buen gobierno y ejemplaridad: la visita del Consejo de Italia», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica*, Madrid, 1998, pp. 705-730, 705-706, y su estudio tiene buen ejemplo en RUBIO PÉREZ, L. M., *Visitas, juicios de residencia y poder concejil en la provincia de León: mecanismos de control en el marco del régimen señorial durante la edad moderna*, León, 1998; CARRASCO MARTÍNEZ, A., *Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de residencia en las tierras del Infantado (1650-1788)*, Valladolid, 1991. Estos procedimientos también han merecido una atención local, FRANCÉS CAUSAPÉ, M.<sup>a</sup> C., y FRANCÉS PÉREZ, P., *Las visitas de inspección a las boticas de la ciudad de Burgos (siglos XVI al XVIII)*, Burgos, 1993.

<sup>46</sup> Ha existido controversia acerca del carácter preventivo de la visita; CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., «La visita como institución indiana», *Anuario de Estudios Americanos*, núm. 3 (1946), pp. 985-986, defendió su carácter excepcional y su aplicación tras indicios de irregularidad administrativa. Sin duda, esta tipificación es la más acorde con la metodología de oposición faccional que aplicamos.

<sup>47</sup> Rasgo en que coinciden tanto SALCEDO IZU, J. J., *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI*, Pamplona, 1964, pp. 231-232, y MARILUZ URQUIJO, J. M., *Ensayo sobre los juicios de residencia indios*, Sevilla, 1952, p. 146.

<sup>48</sup> Mientras en las Indias todos los servidores reales quedaron sujetos a juicio de residencia, en los reinos peninsulares los oidores de los Consejos fueron fiscalizados por visita (MARILUZ, J. M., *op. cit.*, pp. 84-88).

<sup>49</sup> Se pueden señalar con Céspedes las siguientes características distintivas: la residencia era un juicio formal, implicaba suspensión del servidor juzgado, tenía carácter individual, lugar determinado y plazo fijo. Mientras que en la visita, los oficiales permanecían en sus plazas, no era periódica pero sí colectiva y carecía de plazos. Finalmente, la pesquisa inquiría sobre un asunto muy concreto (CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., *op. cit.*, p. 991).

por el grupo político cercano a la confianza regia a su conveniencia y según la coyuntura cortesana, con el propósito de adecuar el organismo perquirido a su perfil político e ideológico.

El inicio del proceso de visitas coincidió en líneas generales con el comienzo de la regencia de Maximiliano y María, conscientes el Emperador y don Felipe de la idoneidad de las *jornadas* regias para acometer determinaciones con sensibilidad política. Por entonces, Hernando Niño y el Consejo Real fueron requeridos para proponer visitadores a los principales tribunales y establecimientos docentes de Castilla. Entre los organismos que deseaban someterse a inspección destacó la chancillería de Valladolid, sin constar entre ellos la audiencia de Granada por la reciente visita a que la sometió Miguel Muñoz<sup>50</sup>. Para *visitar* la chancillería de Valladolid el presidente y el Consejo Real propusieron a los obispos de Astorga, Pamplona y León<sup>51</sup>. Para inspeccionar la universidad de Salamanca, se consideraron adecuados don Diego Enríquez, don Lorenzo Suárez de Figueroa y el deán de Toledo Diego de Castilla<sup>52</sup>. Idóneos para la visita de la universidad de Alcalá se consideró al obispo de Oviedo, don Gaspar de Zúñiga, y don Andrés de Cabrera<sup>53</sup>. Finalmente, para visitar la audiencia de los grados de Sevilla se propuso al doctor Hernán Pérez de la Fuente, quien permanecía en la ciudad visitando la casa de contratación, el licenciado Juan Sarmiento, oidor de Granada como el tercer candidato, el licenciado Gómez Tello Girón, con quien también compartía tonsura eclesiástica<sup>54</sup>.

La designación de los visitadores y por tanto la orientación de las inspecciones dependió de la Cámara itinerante que se formó una vez reunidos en los Países Bajos el Emperador y el Príncipe. Formada por el doctor Juan Rodríguez de Figueroa, camarista de Carlos V desde 1540, y el doctor Diego Escudero, nombrado por el príncipe Felipe

<sup>50</sup> Tratada por GARRIGA, C., *Génesis y formación histórica de las visitas a las chancillerías castellanas (1484-1554)*, Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Salamanca en 1989, dirigida por B. GONZÁLEZ ALONSO, III, pp. 937-993.

<sup>51</sup> El primero, Pedro de Acuña y Avellaneda, nombrado para la sede asturicense el 4 de junio de 1548 [VAN GULIK-EÜBEL, *op. cit.*, 3, p. 135; GUITARTE IZQUIERDO, V., *Episcopologio español (1500-1699)*. Españoles obispos en España, América, Filipinas y otros países, Roma, 1994, p. 61; RODRÍGUEZ LÓPEZ, F., *Episcopologio asturicense*, Astorga, 1908, pp. 32-40]. Había sido oidor de la audiencia de Valladolid y consejero de Inquisición; el obispo de Pamplona, Antonio de Fonseca, autorizaba su propuesta con sendas visitas previas a los grados de Sevilla y el reino de Navarra [AGS, E., leg. 13, núm. 140, cit. también por GARRIGA ACOSTA, C., *op. cit.*, III, pp. 994-995. Relación biográfica en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V*]. Finalmente, con toda probabilidad el obispo de León aludido en el billete fue Juan Fernández Temiño, sucesor de Esteban de Almeyda en 1548 (ATHANASIO DE LOBERA, Fr., *Historia de las grandezas de la muy antigua y insigne ciudad, y Iglesia de León*, Valladolid, 1596 (ed. facsímil, León, 1987), fol. 256r].

<sup>52</sup> Los dos primeros eran de cuna noble: el primero, tío del marqués de Alcañices, «letrado y criado de V. Mt.»; el segundo tío del duque de Arcos (*ibid.*).

<sup>53</sup> Ambos nobles (el primero era hijo del conde de Miranda y el segundo hermano del conde de Chinchón) y vecinos de Salamanca (*ibid.*).

<sup>54</sup> *Ibid.*

para el manejo ambulante de la gracia antes de partir en 1548, con Francisco de Eraso como secretario <sup>55</sup>, este comité —en el que como era de esperar se aprecia preferencia de Figueroa en la elaboración de los dictámenes— sopesó las propuestas venidas de Castilla. El regente no estimó pertinente la realización de la visita a la chancillería de Valladolid por prelados y defendió que la realizase un miembro del Consejo Real, criterio que suscribió el doctor Escudero <sup>56</sup>. Por ello en el campo imperial se formularon como candidatos el maestrescuela de Salamanca, quien poseía experiencia visitadora, don Diego Enríquez, quien venía nombrado desde Castilla para inspeccionar la universidad de Salamanca, así como Diego Tavera y Pedro Ponce de León, consejeros de Inquisición. En el caso de la universidad de Salamanca, el comité añadió al abad de Valladolid, sin que corrigiera los candidatos venidos para la universidad de Alcalá y la audiencia de los grados <sup>57</sup>.

Al margen de la chancillería de Valladolid, de la que nos ocuparemos más detalladamente, los visitadores designados tras la intervención de la cámara itinerante fueron don Diego Enríquez de Almansa, obispo de Coria, para la universidad de Salamanca <sup>58</sup>, quien en principio fue añadido en el campo imperial para realizar inspección en la universidad de Alcalá, si bien en este caso fue finalmente elegido don Gaspar de Zúñiga, hijo del conde de Miranda. En cuanto a la audiencia sevillana de los grados, se suscribió la opinión venida de Castilla y se nombró a Hernán Pérez de la Fuente <sup>59</sup>. Como opina C. Garriga, la extensión de la remodelación administrativa acontecida por entonces era comparable a la producida tras las Comunidades. Diego Enríquez inició su tarea en la universidad de Salamanca en 1551 <sup>60</sup>, año en que también acometió su indagación

<sup>55</sup> AGS, CC, LC, núm. 121, *passim*, cit. por MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, «La administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-1575)», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, p. 31.

<sup>56</sup> «Hanse nonbrado (*sic*) en Consejo tres ob[is]pos: el de Astorga, el de Panplona y el de León. Y si conuiniese ser obispo, el de Astorga y del Consejo de Órdenes y Inq[ui]sición. Pero el regente es de opinión q. no conuiene al seruy[ci]o de V. Md. y descargo de su conciencia q. ningún obispo salga de su ygl[esi]a para venir a visitar ning[un]a audiencia, mayormente q. este de Astorga reside en su iglesia y la anda visitando y tiene mucha montaña y lo mismo el de León sino q. en caso q. houiese de ser clérigo no fuese perlado. Aunq. tiene por más conueniente cosa q. visitase las audiencias uno del Consejo por muchas causas y razones q. le paresçe q. ay. Y en q. es más conueniente q. sea uno del q[on]sejo concurre el dotor» (AGS, E., leg. 13, núm. 166, cit. por GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 995, quien no parece identificar en el «regente» al doctor Juan Rodríguez de Figueroa).

<sup>57</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 166, cit. por GARRIGA, C., *op. cit.*, I, p. 995.

<sup>58</sup> En un primer momento, se designó a Enríquez y fue tachado por el abad de Valladolid, si bien fue Enríquez el finalmente elegido (AGS, E., leg. 13, núm. 166, cit. por GARRIGA, C., *op. cit.*, III, p. 995).

<sup>59</sup> AGS, *ibid.* su biografía en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, pp. 453-454.

<sup>60</sup> ALEJO MONTES, F. J., *op. cit.*, pp. 186-187. Resultado de su actuación fueron nuevos estatutos de la universidad, que curiosamente no se aprobaron hasta 1560, cuando el visitador Diego de Covarrubias y la universidad trabajaban en otros nuevos. Al respecto, FERNÁNDEZ UGARTE, M., «Estatutos de la Universidad de Salamanca: la reforma de 1550-1551», *Homenaje al profesor Manuel Fernández Álvarez*, III, Salamanca,

a la universidad de Alcalá de Henares don Gaspar de Zúñiga —comisionado en ella el 17 de agosto de 1550—, interrumpida por su marcha a la segunda asamblea tridentina y culminada a su vuelta en 1555 con la reforma del colegio mayor de San Ildefonso <sup>61</sup>.

En cuanto a la administración judicial, la inspección comenzó, como veremos, por la chancillería de Valladolid y continuó con la audiencia de los grados de Sevilla <sup>62</sup>, cuyo inicio coincidió con la culminación de la visita de la audiencia de Canarias que realizó el licenciado García Sarmiento. Inspecciones ambas que demostraron la cercana tutela que el príncipe dio a este proceso <sup>63</sup>, e indicaron con claridad su interés en que arrojaran resultados y fuera imponiéndose cierta racionalidad en el procedimiento y organización interna de estos tribunales. Con el primer propósito, la retribución fijada para el doctor Hernán Pérez de la Fuente superó los cuatrocientos ducados percibidos durante la realización de la inspección, y el 19 de noviembre de 1552 el príncipe decidió que se le pagaran otros seiscientos <sup>64</sup>. En segundo lugar, pocos días después el príncipe consultó al Consejo sobre el oficio de *ejecutor* que el organismo abogaba por introducir en la audiencia de Canarias <sup>65</sup>. Finalmente, la audiencia de Galicia padeció juicio de

1989, pp. 689-705. Con todo, Pedro Chacón afirmó que Enríquez no hizo nuevos estatutos, «contento que en su presencia se allanó y reformó lo poco que había que reformar...» [*Historia de la Universidad de Salamanca hecha por el maestro Pedro Chacón*, CARABIAS TORRES, A. M.<sup>a</sup> (ed.), Salamanca, 1990, p. 102].

<sup>61</sup> Estudiada por GARCÍA ORO, J., y PORTELA SILVA, M.<sup>a</sup> J., *Los reyes y la universidad de Alcalá en el siglo XVI. Las visitas reales*, Santiago de Compostela, 1999, pp. 38-49. Zúñiga centró su atención especialmente en la impunidad que provocaba la peculiaridad jurisdiccional del estudio de Alcalá, y sus rencillas con el arzobispo Silíceo.

<sup>62</sup> La cual concluyó con el nombramiento del propio Pérez de la Fuente como regente y la conversión de la audiencia de los grados en real audiencia, mediante las Ordenanzas que recibió en 1554, culminadas con el denominado privilegio de Bruselas de 1556 (TENORIO, N., *Noticia histórica de la real audiencia de Sevilla*, Sevilla, 1924, esp. pp. 11-20; ÁLVAREZ JUSUÉ, A., «La audiencia de Sevilla, creación de Carlos I», *Anales de la Universidad Hispalense*, núms. 18-19 (1957-1958), pp. 67-87; MORALES PADRÓN, F., *La ciudad del Quinientos*, Sevilla, 1977, pp. 226-229. GARRIGA, C., *op. cit.*, III, pp. 1057-1058; cfr. asimismo, ÁLVAREZ JUSUÉ, A., «La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la audiencia de los grados», *Archivo Hispalense*, 60 (1953), pp. 17-50.

<sup>63</sup> AGS, E., leg. 92, núm. 58, respuesta del príncipe al Consejo Real de 22 de octubre de 1552: «ya hauemos visto lo q. nos embiastes a consultar sobre la visita q. el liçenciado don García Sarmiento hizo en el audi[en]cia de los juezes de app[elaci]ón de Canaria y hanos parecido bien lo q. dezis aunque según las culpas del liçenciado Çurbarán pudiera se le dar mayor pena. Y en su lugar hauemos proueido persona qual conuiene. Y el executor q. os pareçe q. deue hauer en aque[lla] audiencia proueere breuemente y los despachos q. para lo demás de la dicha visita fueren menester hareis los hazer conforme a lo q. os pareçe y embiarloseis para q. los firme». Respecto a la audiencia de los grados comentaba: «Los dos juezes q. faltauan en el audi[en]cia de los grados de Seuilla están ya proueidos y yrán a residir en ella breuementen». Asimismo, AHN. Consejos, lib. 1433, fol. 15.

<sup>64</sup> Trescientos en las condenaciones hechas para los estrados de la citada audiencia y el resto en las penas de cámara de la ciudad (*ibid.*, núm. 62, billete del príncipe al Consejo de 28 de noviembre de 1552).

<sup>65</sup> *Ibid.*, núm. 61, carta del príncipe, en Monzón, a 23 de noviembre de 1552: «Presidente y los del Q[onsejo] de la Cat[ólic]a reyna y em[perad]or y rey mis señores. Ya sabeyz que auiendo visto la visita quel liçencia[do] don G[al]r[cia] Sarmy[en]to hizo a los juezes de app[elaci]ón de las ys[las] de Can[ari]a entre otras cosas que nos embiastes a consultar q. pareçia q. conbenya p[ro]u[er]se fue q[u]e se debía

residencia, pero fue la última vez que recibió esta clase de inspección y desde entonces fue sometida a visita <sup>66</sup>. De la misma manera, en todo el período tratado se apreció una creciente atención por la consumación efectiva de los juicios de residencia <sup>67</sup>.

El propósito inspector impulsado por el príncipe superó el ámbito castellano. El duque de Maqueda, virrey de Navarra, expresó su descontento por cierta determinación tomada contra el licenciado Francés, miembro del Consejo de Navarra, pese a haber salido libre de la visita realizada a este Consejo. El presidente Niño había ordenado su presencia ante el Consejo Real, para reprenderle, y el virrey consideraba esta determinación castigo suficiente <sup>68</sup>.

Con todo, el celo mostrado por el príncipe en la supervisión de las inspecciones, la intensidad, extensión y sincronía de las mismas y la coordinación general que caracterizaba el proceso indicaban que en su realización operaba algo más que la disputa entre los grupos políticos de la corte, con ser éste el motivo fundamental. Es verosímil que el príncipe deseara acompañar su indefectible acceso al trono, ante la próxima herencia de los reinos gobernados por su padre, con cierta imagen de garante de la justicia y el orden, propia de los príncipes de la Monarquía Corporativa <sup>69</sup>, especialmente

---

crear un off[ic]io de executor y como os respondymos q. conforme a v[uest]ro parecer lo mandábamos p[ro]ueer. Y porque p[ar]a hazerlo queremos saber q[u]é off[ic]io y de q[u]é calidad será éste y de q[u]é ha de s[er]uir el que lo tviere y que p[er]sona ha de seer y sy ha de llebar alg[un]os d[e]r[ech]os con él y qué montarán aquellos al año y sy se le dará sal[ar]io y q. tanto será y dónde y cómo se le pagará os mandamos que nos e[m]bieys rel[aci]ón de lo susod[ic]ho p[ar]a que visto p[ro]ueamos en ello lo que más conbenga....».

<sup>66</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, III, p. 1058, y FERNÁNDEZ VEGA, L., *La Real Audiencia de Galicia. Órgano de gobierno en el Antiguo Régimen. 1480-1808*, La Coruña, 1982, I, pp. 261-262.

<sup>67</sup> Por ejemplo, en billete de 28 de noviembre de 1552 el príncipe alabó que el Consejo Real estuviese viendo «la r[es]sidencia que el licenciado Sotom[ai]or alcalde m[ai]or del adelantamiento de Castilla en el partido de Palencia tomó al licenciado Alonso de Herrera juez de r[es]idencia y la q. Alonso Suárez de Lugo corregidor de Plazen[cia] al licenciado Juan Ponçe de León juez de r[es]id[en]cia y hauemos visto los cargos q. se les hizo, y hanos parecido bien lo que dezis q. en cada uno dellos se deue proueer» (AGS, E., leg. 92, núm. 62).

<sup>68</sup> *Ibid.*, leg. 93, núm. 210, carta de 18 de marzo de 1552 al príncipe. Al margen fue anotado: «q. esto se proueyó consultado con Su Magt.».

<sup>69</sup> De hecho, la tutela y ejercicio de la justicia constituían motivo principal de inserción de la corona en el sistema político de tal monarquía, HESPAÑA, A. M., *Vísperas del Levantamiento. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, 1989, p. 392: «La limitación del poder real dependería, en otras palabras, de un conjunto de normas de gobierno, provenientes de la deontología del oficio de reinar, normas que sujetarían al rey, tanto a la observancia de los fines últimos de la sociedad (ley divina, moral), como el respeto de los equilibrios tradicionales que se daban en ésta (justicia).» Más concretamente, *op. cit.*, p. 405: «Las primeras (atribuciones jurídicas del rey) son las que nacen de su función dominante, que, de acuerdo con la teoría corporativa de la sociedad y del poder, era, ante todo, la de *garantizar la Justicia*, secundariamente la de garantizar la paz. En ella se funda, de un lado, la esencial adscripción al rey de la justicia suprema, concretada en el conocimiento de las causas en última instancia, tanto por vía ordinaria (caso de las apelaciones o agravios), como por vía extraordinaria (caso de las revisiones de sentencias).» Sobre el concepto de sociedad corporativa, *op. cit.*, pp. 233-241. Ante lo transcrito, se comprende el celo del príncipe en impulsar la revisión



si se considera que el funcionamiento judicial venía concitando la atención de las asambleas de cortes. En un momento tan reciente como la asamblea de 1548, los procuradores solicitaron la institución trienal de las visitas a chancillerías y audiencias por un miembro del Consejo Real u otra persona cualificada, así como su pronta vista y determinación en el organismo<sup>70</sup>.

Esta actitud del príncipe se advierte al menos desde que asumió la regencia en 1543, momento en que elevados corresponsales aseguraron a su padre la preocupación por la justicia que mostraba<sup>71</sup>. Evidencia de ello fue asimismo el viaje de presentación ante los súbditos septentrionales iniciado por don Felipe ese mismo año, en el que se atisban gestos tanto simbólicos como tangibles de preocupación por una imposición efectiva de la justicia. En la jornada, el protagonismo de los letrados que acompañaron al príncipe no fue meramente jurídico y don Felipe dio ante sus futuros súbditos muestras de aprecio por la justicia, como la vivida ante los frescos del palacio de Bruselas. En primer lugar, Calvete de Estrella encomió la presencia en esta jornada de tales personas de un modo más que informativo:

... y aunque era muy grande el estado y pujanza de la real casa del Príncipe con tanto acompañamiento de Grandes, Señores y Caballeros, no era de menor consideración y estima ver los señalados varones que en su corte y servicio venían, tan excelentes cada uno en su facultad cuanto en el mundo se pudieran hallar: no hablo de los militares, pues nunca Príncipe los sacó de su reino más principales y señalados que ellos, sino de algunos caballeros y personas por su ingenio, letras y habilidad celebrados...<sup>72</sup>

---

administrativa. Por su parte, NIETO SORIA, J. M., *Fundamentos ideológicos del Poder Real en Castilla*, Madrid, 1988, pp. 152-155, subraya la idea justiciera que sus súbditos tenían del rey.

<sup>70</sup> GARRIGA ACOSTA, C., *Génesis y formación histórica de las visitas...*, III, pp. 993-994. También se solicitó en la misma asamblea de cortes, como vimos con éxito, la conversión del usual juicio de residencia de la audiencia de Galicia en visita, como instrumento de fiscalización de su funcionamiento, lo que indicaba el mayor calado y repercusión que se atribuía a este segundo procedimiento (CLC, V, pp. 394 y 457-458). Cfr. asimismo, ALONSO ROMERO, M. P., «Las Cortes y la administración de justicia», en *Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León*, Valladolid, 1989, pp. 503-563, quien ha subrayado la preocupación de la asamblea por estas cuestiones.

<sup>71</sup> El secretario Cobos expresó a Carlos V: «[El príncipe] siempre está pensando e discurriendo en las cosas de la buena gobernación e justicia, sin dar entrada ni parcialidad al ocio ni a la lisonja ni a ningún vicio... Enciérrese muchas veces conmigo por algunas horas para tratar negocios de Estado de mucha monta. Lo mismo hace después con el presidente para comunicar las de justicia...» (BNM, ms. 10.300, «Copia de una carta que Francisco de los Cobos, grandemente estimado del señor Emperador Carlos V, y su secretario de estado, escribió a S. M. Cesárea, respondiendo a otra que tubo de dicho señor Emperador», pub. por KENISTON, H., *Francisco de los Cobos...*, pp. 257-261, especialmente pp. 257-258).

<sup>72</sup> CALVETE DE ESTRELLA, J. C., *El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe Don Felipe, I*, Madrid, 1930, pp. 14-15. Calvete relacionó como integrantes destacados de la comitiva del rey: «En la Jurisprudencia y derechos, el doctor Diego Escudero, del Consejo de la Cámara del Emperador, varón entero y de singular bondad, prudencia y gobierno. El doctor micer Miguel Terça, Regente de Cataluña en el Supremo

El mismo autor estimó que la comitiva regia bastaba «para que las otras naciones entiendan que no sólo florecen hoy día en España la milicia y valor en las armas, mas también las letras y artes liberales y mecánicas»<sup>73</sup>.

La arquitectura efímera levantada para recibir al príncipe incidió igualmente en el desvelo por la justicia que adornaba a la casa de Austria<sup>74</sup>. Asimismo, tras ser jurado como heredero en Bruselas, Felipe admiró las pinturas ilustrativas de las virtudes justicieras de Trajano y Henrikbaldo que adornaban la sala del Consejo de Brabante<sup>75</sup>.

Tal inquietud arreció al regreso a Castilla en forma de contacto estrecho con el presidente Niño, quien no sólo respondió con rapidez al deseo del príncipe<sup>76</sup>, sino que aseveró a su padre que «las cosas de la justicia van bien a Dios gracias y asy confío q. será en lo de adelante por la prudencia y buena gracia con q. Su Al. las trata»<sup>77</sup>. Y asimismo apunta tras el proceso de *visitas* que venimos refiriendo, si bien bajo sombra de la oposición política cortesana. La coexistencia de ambos impulsos se apreció con toda claridad cuando aquél llegó a la corte en 1553, en la forma de inspección tanto a los ministros con capacidad jurisdiccional del Consejo Real como a los oficiales de la justicia cortesana, que, dirigida por el propio príncipe (y coincidente con la inspección que el doctor Velasco llevaba a cabo a las Contadurías y Cruzada)<sup>78</sup>, mostró una ambivalencia funcional y faccional de la que nos ocuparemos detalladamente. Y que traslució en todo el proceso, especialmente en lo relativo a la chancillería de Valladolid, cuya visita puede considerarse, por compartir protagonista y contenido inspector, preludio de la mentada visita cortesana.

---

Consejo de la Corona de Aragón. El Licenciado Francisco de Menchaca, Alcalde de la casa y corte del Emperador y del consejo de Príncipe.»

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Por ejemplo, CALVETE DE ESTRELLA, J. C., *op. cit.*, pp. 121 y 127.

<sup>75</sup> *Op. cit.*, pp. 247-261.

<sup>76</sup> El 12 de marzo de 1552, el presidente Niño remitió al Emperador noticia de cómo el Consejo entendía en los capítulos más sustanciales solicitados por las cortes que entonces se celebraban. Los procuradores de Burgos pidieron, en lo relativo al pleito que la ciudad mantenía con la villa de Arcos por no querer pechar la primera (pleito sentenciado en vista y revista y que pendía en el Consejo al suplicar la ciudad por vía de mil y quinientas), que se sobreseyese o que el Emperador les diera privilegio de nuevo para no pechar, o al menos, que el pleito se viera por tabla. Mostrando su celo de justicia, el presidente dijo no poder hacerse las dos primeras cosas porque se cometería injusticia con la otra parte, pero la tercera se les podría conceder, pese a las disposiciones del Emperador en contrario. Consejo que el Emperador siguió. Además, el presidente continuó solicitando la respuesta de capítulos de cortes de 1548 pendientes y la orden que se debía tener en labrar moneda de vellón, cuestiones ambas que satisfarían al reino (AGS, E., leg. 89, núm. 299).

<sup>77</sup> *Ibid.* La carta se completaba dando cuenta de la petición del reino de aumentar el salario a los miembros del Consejo y los oidores de las audiencias, y de la orden recibida del príncipe de ir a residir noventa días en su diócesis, como estaba establecido que residieran los prelados con responsabilidad administrativa.

<sup>78</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, III, p. 1058.

Si bien la designación de varios visitadores contenidos en la propuesta del presidente Niño hizo patente la tendencia del Emperador a fomentar el equilibrio político, como vimos la formación de una Cámara común para él y el príncipe y la precedencia en ella de Figueroa provocó una vinculación de las inspecciones con la tradición política de Carlos V, apreciable sobre todo en el caso de la chancillería de Valladolid, que se encargó a un ministro de ubicación ideológica opuesta a los asesores del príncipe en la *jornada* europea. En el proceso de selección de los visitadores, un nombre se repitió varias veces: Diego de Córdoba, a quien se consideró sucesivamente apropiado para visitar tanto la audiencia de los grados <sup>79</sup>, la universidad de Salamanca <sup>80</sup> y finalmente la chancillería de Valladolid, que fue el organismo para el que finalmente fue destinado gracias a la intervención del regente Juan Rodríguez de Figueroa <sup>81</sup>. Junto al evidente apoyo del círculo político del Emperador, en la designación de Córdoba influyó tanto su experiencia previa en labores de inspección administrativa <sup>82</sup> como su condición eclesiástica, dado el origen canónico de la institución de la visita y la identidad completa de su procedimiento con la aplicada en la administración real <sup>83</sup>. Sin desdeñar su desplazamiento a la corte imperial, tras una larga y azarosa carrera favorecida por Fernando de Valdés y Juan Martínez Silíceo y que pasamos a detallar.

<sup>79</sup> «... hijo del conde de Alcaudete», como visitador de la audiencia de los grados de Sevilla. Junto a él fue propuesto Antonio de Vega, hermano del virrey de Sicilia Juan de Vega y Hernán Pérez, del Consejo de Indias, que no había venido nombrado desde Castilla. Eraso apuntó al margen que «V. Md. Myrará qual destos le satisfará más apunt[an]do q. yendo don Diego no a de boluer a seruyr a nadie», decidiéndose finalmente que fuera el consejero de Indias Pérez de la Fuente (AGS, E., leg. 13, núm. 169).

<sup>80</sup> En la corte del Emperador, los camaristas añadieron a los candidatos venidos de Castilla «... don Diego de Córdoba si lo quisiese açebtar y el abbad de Val[lado]lid q. dizque está recogido muchos años ha» (AGS, E., leg. 13, núm. 166, cit. por GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 995).

<sup>81</sup> «Al regente por lo q. conosco de don Diego de Córdoba le paresçe q. uisitaría bien la chan[ciller]ía de Val[lado]lid», escolio al que se añadió el «fiat» que certificaba la *comisión* (*ibid.*).

<sup>82</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 995.

<sup>83</sup> RIVERO RODRIGUEZ, M., «Buen Gobierno y ejemplaridad...», p. 707, y la bibliografía que cita en p. 722. Por ello son numerosos los trabajos sobre la visita en un ámbito eclesiástico, en especial las realizadas por los obispos: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., *Una visita a las fortalezas del Arzobispado de Toledo a fines del siglo XVI*, Madrid 1958; PÉREZ MARTÍNEZ, L., *Las visitas pastorales de don Diego de Arnedo a la diócesis de Mallorca (1562-1572)*, 2 vols., Palma, 1963; GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *Las visitas ad limina de los obispos de Oviedo (1585-1901)*, Oviedo, 1986; ALONSO, OSA, C., «Las visitas ad limina de Alejo de Meneses, OSA, arzobispo de Goa y de Bragá», *Archivo Agustiniano*, 1988, 190, pp. 39-74; TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., *La diócesis de Ciudad Rodrigo: las relaciones de visitas ad limina (1594-1952)*, Roma, 1996; MIGUEL, C. de, *Las visitas ad limina de los arzobispos de Granada*, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 1997; ROYAL ESPIGARES, P. (dir.), NUBOLA, C., *Per una banca dati delle visite pastorali italiane: le visite de la diocesi di Trento (1537-1940)*, Bologna, 1998, y HEVIA BALLINA, A. (dir.), *Las visitas pastorales en el ministerio del obispo y archivos de la Iglesia: santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España*, Actas del XIII Congreso de la Asociación de archiveros de la Iglesia en España (Sevilla, 1997), Oviedo, 1999.

## Diego de Córdoba, un hombre de Valdés

Descendiente de una estirpe militar, don Diego Fernández de Córdoba y Velasco era hijo de Martín Alonso de Córdoba, sexto señor de Alcaudete, séptimo señor de Montemayor, undécimo de Dos Hermanas, Torre Cardela y otros lugares, y de doña Leonor Pacheco, primogénita del primer marqués de Comares<sup>84</sup>. La segura influencia de los hechos de armas de don Martín en el favor que Carlos V mostró a sus hijos, aconseja aludir a su carrera. Se halló presente en la conquista de Navarra bajo órdenes del duque de Alba, tras la que fue nombrado Capitán General del Reino, si bien esta promoción no culminó su progreso administrativo en el reino dado que el 1 de enero de 1527 recibió nombramiento como virrey<sup>85</sup>. Desempeñó tan relevante cargo —al que el 11 de abril de 1529 se añadió título condal, posiblemente en pago por cierto préstamo realizado al Emperador—<sup>86</sup> hasta que en 1534 sucedió a su cuñado el marqués de Comares como alcaide, gobernador y capitán general de la plaza de Orán y el reino de Tremecén. Recibió el difícil cargo con la merced de poder dejarlo encomendado en su ausencia a cualquiera de sus tres hijos hábiles para ello. Las penalidades sufridas por don Martín y sus hijos en este destino fueron numerosas, pero en líneas generales consiguió proteger a los pequeños reyes tributarios de Castilla y contener el fortalecimiento turco en el Magreb<sup>87</sup>. Si bien como tendremos oportunidad de tratar este estado de cosas no duró mucho, en gran parte a causa de la indiferencia sentida por el príncipe Felipe hacia su persona y sus determinaciones.

<sup>84</sup> Así como bisnieto de Martín Alonso de Córdoba y doña María Carrillo de Córdoba y nieto de Alonso Fernández de Córdoba y María de Velasco, predecesores en los títulos de sus padres. Referencias genealógicas en LÓPEZ DE HARO, A., *Segunda parte del nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España*, Madrid, 1622, pp. 151-152, y en FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española. Casa Real y Grandes de España*, XI, Madrid, 1912, p. 292. Escueta referencia familiar asimismo en *Episcopologio calagurritano desde la reconquista de la sede en 1045*, Logroño, 1944, p. 47. Por todo lo dicho, era descendiente del Gran Capitán, LOJENDIO, L. M. de, *Gonzalo de Córdoba (El Gran Capitán)*, Madrid, 1942, p. 59.

<sup>85</sup> *Op. cit.*, p. 292; SALCEDO IZU, J. J., *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI*, Pamplona, 1964, p. 272. Puede que entre tanto ejerciera como corregidor de Toledo, nombrado en 1523, de lo que no tenemos absoluta certeza (PEDRAZA RUIZ, E., «Corregidores toledanos», *Toletum*, núm. 8 (1974-1976), p. 159; FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, p. 292). Pocos meses antes de su nombramiento como virrey, Carlos V había permanecido unos días en Alcaudete (entre el 25 y el 28 de mayo de 1526), CAPEL MARGARITO, M., «Estancias y viajes del Emperador Carlos V en la provincia de Jaén y relación de algunas providencias de carácter administrativo a ella relativas», *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, núm. 77 (1973), pp. 67-75, p. 71; CADENAS Y VICENT, V. de, *Diario del Emperador Carlos V. Itinerarios, permanencias, despachos, sucesos y efemérides relevantes de su vida*, Madrid, 1992, p. 175.

<sup>86</sup> ZÚÑIGA, F. de, *Crónica burlesca del Emperador Carlos V*, Barcelona, 1981, p. 222.

<sup>87</sup> La política castellana en el norte de África ha sido tratada por HESS, A. C., *The forgotten frontier: a history of the sixteenth-century ibero-african frontier*, Chicago, 1978; GARCÍA ARENAL, M., y BUNES IBARRA, M. A. de, *Los españoles y el norte de África, siglos XV-XVIII*, Madrid, 1992.

Del matrimonio con Leonor Pacheco de Córdoba, don Martín Alonso tuvo la siguiente descendencia: Alfonso Fernández de Córdoba y Velasco, sucesor de su padre tanto en el título condal como en su cargo norteafricano<sup>88</sup>; Diego Fernández de Córdoba y Velasco, quien centrará nuestra atención; don Martín de Córdoba y Velasco, asistente de su padre en África y marqués de Cortes por matrimonio, presidente de Órdenes entre 1595 y 1599<sup>89</sup>; Francisco Fernández de Córdoba, caballero de la orden de Santiago y comendador de la de Calatrava, general de las galeras de España, gobernador y capitán general de la costa de Granada, ayo de Juan de Austria, con quien concurrió en diferentes episodios bélicos —como la guerra de Granada—; Beatriz Pacheco de Córdoba; y, finalmente, doña Leonor Pacheco de Córdoba, quien sería abadesa de Santa Clara de Alcaudete<sup>90</sup>.

Sin duda, la confianza que don Martín supo cultivar en el Emperador con los peligrosos servicios de armas que hemos referido facilitó el inicio de la carrera de don Diego Fernández de Córdoba y Velasco, consagrada a las letras como era común entre los *segundones* de las familias nobles. Adquirida a temprana edad la condición eclesiástica, Carlos V complementó la concesión del título condal a su padre integrando a don Diego en su capilla, el 10 de julio de 1529. Poco después (1530) fue su hermano Francisco de Córdoba quien entraba a servir como paje a la emperatriz Isabel, en la reforma de su casa decidida entonces por su marido<sup>91</sup>.

Don Diego de Córdoba realizó sus estudios en la universidad de Salamanca, habiéndose afirmado que fue colegial de Santiago<sup>92</sup>. Es dato del que conviene dudar, toda vez que Diego de Córdoba ejerció el rectorado del estudio en los cursos 1533-1534 y 1537-1538<sup>93</sup> y los estatutos de 1529 prohibían el ejercicio del cargo por estudiantes

<sup>88</sup> Datos biográficos en FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, pp. 300-303.

<sup>89</sup> Sobre este personaje, *op. cit.*, pp. 296-300, así como MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de (dirs.), *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, Salamanca, 1998, pp. 351-352.

<sup>90</sup> FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, p. 300. Igualmente, sobre otra rama del linaje, radicada y benefactora de Alcaudete y descendiente de Alfonso Fernández de Córdoba y Velasco, hermano de don Martín Alonso, y doña Teresa Ramírez de Cárdenas, ULIERTE RUIZ, T., *Los otros Fernández de Córdoba de la Casa de Alcaudete*, Jaén, 1999.

<sup>91</sup> Las quitaciones de Diego de Córdoba en la casa real, en AGS, CSR, leg. 104, fols. 396-406; las de su hermano, en *ibid.*, leg. 31, fols. 55 y 57. Asimismo, LÓPEZ DE HARO, A., *Segunda parte del nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España*, Madrid, 1622, p. 152.

<sup>92</sup> Sin embargo, no aparece referencia a él en la obra de FERRER EZQUERRA, L., y MISOL GARCÍA, H., *Catálogo de colegiales del Colegio mayor de Santiago el Cebedeo, del arzobispo, de Salamanca*, Salamanca, 1956.

<sup>93</sup> VIDAL Y DÍAZ, A., *Memoria histórica de la Universidad de Salamanca*, Salamanca, 1869, p. 371; ESPERABÉ DE ARTEAGA, E., *Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca*, II, Salamanca, 1917, p. 8; RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., *El oficio de Rector en la Universidad de Salamanca y en las Universidades Hispanoamericanas (desde sus orígenes hasta principios del siglo XIX)*, Salamanca, 1979, p. 118. Por el momento desconocemos si ejerció otros cargos en el estudio salmantino antes o después de desempeñarse como rector.

pertenecientes a colegios<sup>94</sup>. Lo que es seguro es que don Diego alcanzó cargo tan importante ayudado de su cuna y su habilidad para atraerse el apoyo de los estudiantes, que con su voto cubrían el cargo<sup>95</sup>. Así como que lo ejerció cuando aún no había obtenido grado de licenciado —presumiblemente en Derecho canónico—, puesto que el reglamento universitario estipulaba que «quando los hombres nobles de en esta Universidad tomaren el grado de Licenciado, sea con el honor que se deve a sus letras, sin atribuirse a otras causas»<sup>96</sup>.

La llegada de Diego de Córdoba al cargo se produjo tras un momento convulso, a causa de la elección irregular de Pedro García de la Gasca como rector en 1528, que condujo al Emperador a ordenar *visita* en las personas de Pedro Pacheco y el licenciado Mexía y culminó con la elección del humanista Fernán Pérez de Oliva, todo ello entre la hostilidad de la institución docente<sup>97</sup>. El episodio denotaba la sustitución como orientador del poder universitario del colegio de San Bartolomé, por el flamante colegio del arzobispo Fonseca, al que pertenecía el elegido<sup>98</sup>. Pero más profundamente, la inspección encarnó la pretensión de control de la institución universitaria por el poder temporal y culminó el ciclo de reformas orgánicas iniciado antes de las Comunidades y conducido por el cardenal Tavera<sup>99</sup>.

<sup>94</sup> O que gozara de prebenda, beneficio o capellanía en cualquier iglesia, FUERTES HERREROS, J. L., *Estatutos de la Universidad de Salamanca*, 1529; *mandato de Pérez de Oliva, rector*, Salamanca, 1984, pp. 75-76. Con todo, se ha dudado con fundamento de la efectividad del mencionado reglamento (VALERO, P., *La universidad de Salamanca en la época de Carlos V*, Salamanca, 1988, pp. 359-384, para quien fue un anteproyecto culminado en los estatutos de 1538) y existen poderosas pruebas que avalan tal duda. El claustro pleno de 3 de febrero de 1530 estableció que «el Rector, allende de ser helegido conforme a la constytvçion que dello habla, (...) si colegial fuere helegido... por los quatro años siguientes no pueda ser del mismo colegio otro colegial elegido por rector o Vicerrector ni en el año siguiente inmediate del mismo colegio ni de otro alguno...» [pub. por VALERO, P., *Documentos para la historia de la Universidad de Salamanca (1500-1550)*, Cáceres, 1989, pp. 138-139]. De manera que don Diego pudo reunir ambas condiciones.

<sup>95</sup> La influencia de un origen noble para la elección como rector, en RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., *El oficio de Rector en la Universidad de Salamanca y en las Universidades Hispanoamericanas (Desde sus orígenes hasta principios del siglo XIX)*, Salamanca, 1979, p. 38. El procedimiento de elección, en *op. cit.*, pp. 42-45.

<sup>96</sup> Como advierte en RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., *op. cit.*, p. 50, esta obligación no tomó forma legal hasta los estatutos de 1594, si bien era práctica secular en el estudio. Sobre estos últimos, cfr. ALEJO MONTES, F. J., «La reforma educativa de Juan de Zúñiga en la Universidad de Salamanca (1594)», en *Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 1990, núm. 9, pp. 183-196, especialmente p. 191.

<sup>97</sup> La tormentosa época ha ocupado la atención de VALERO GARCÍA, P., *La universidad de Salamanca en la época de Carlos V*, Salamanca, 1988, pp. 41-51, y HAMPE MARTÍNEZ, T., «Don Pedro de la Gasca y la proyección del mundo universitario salmantino en el siglo XVI», *Melanges de la Casa de Velázquez*, núm. 22 (1986), pp. 171-195, especialmente pp. 177-180, además de la obra ya referida de Fuertes Herreros.

<sup>98</sup> HAMPE MARTÍNEZ, T., *op. cit.*, p. 179; FERRER EZQUERRA, L., y MISOL GARCÍA, H., *op. cit.*, pp. 144-145; FUERTES HERREROS, J. L., *op. cit.*, p. 75.

<sup>99</sup> Tendencia apuntada antes de las Comunidades [SALAZAR DE MENDOZA, P., *Crónica del Cardenal don Juan Tavera*, Toledo, 1603, pp. 63-67; GARRIGA, C., *La audiencia y las chancillerías castellanas (1371-1525)*, Madrid, 1994, pp. 161-163] y que con ellas experimentó gran impulso, guiando sus peticiones reformistas —a través de las cortes— las medidas impuestas por Tavera (HALICZER, S., *Los comuneros de Castilla: la*

En su desempeño como rector, don Diego acusó rasgos típicos del cargo y otros novedosos, pero en todo caso originó del Emperador una atención beneficiosa para su devenir político. Entre los primeros cabe destacar las diferencias con el maestrescuela, de origen casi tan antiguo como la propia universidad. En principio sólo esta dignidad eclesiástica vitalicia, cubierta a presentación del arzobispo de Toledo, era la encargada del cumplimiento de las constituciones y estatutos, la inspección del estudio y el ejercicio de la jurisdicción universitaria. Pero con la creación del cargo de rector a imitación de la universidad de Bolonia<sup>100</sup>, en principio para auxiliar al maestrescuela, se sembró la semilla de una dualidad de poderes. Pronto comenzó el rector a adquirir autoridad propia, correspondiente a su papel de agente del gobierno universitario, que condujo al pontífice Juan XXII a agregar al maestrescuela atribuciones de secretario inspector y canciller del pontificado<sup>101</sup>. Si bien los ostentadores interinos de la maestrescuela en lugar de Francisco de Mendoza y Bobadilla (quien acompañó a Carlos V a su coronación en Bolonia), caso del licenciado Pedro García de la Gasca o Juan Martínez de Silíceo no protagonizaron diferencias especiales con el rector —e incluso el segundo inició en la universidad un estrecho contacto con Diego de Córdoba que favoreció la carrera de éste y en el que profundizaremos—<sup>102</sup>, en el siglo XVI persistieron ejemplos de discordia entre ambos cargos que se venían saldando en favor del maestrescuela en razón de su carácter vitalicio. Por ello tiene especial interés el episodio de esta clase en el que se vio implicado don Diego, del que pasamos a tratar.

En junio de 1534, el Emperador realizó un pequeño viaje por Castilla, en compañía de diferentes nobles y ministros<sup>103</sup>. Tras pasar la fiesta del Corpus en Ávila, partió hacia Salamanca, donde fue recibido por el clero de la ciudad, el estudio universitario y el concejo. En aquel momento era rector de la universidad Diego de Córdoba<sup>104</sup>, quien se envió en una acre disputa con el maestrescuela, Juan de Quiñones, sobre quién de los dos debía hacer la alocución de bienvenida de la real persona. Aunque

*forja de una revolución, 1475-1521*, Valladolid, 1987, pp. 259 y ss.; RADY, M., *Carlos V*, Madrid, 1991, trad. de RIVERO RODRÍGUEZ, M., pp. 67-68).

<sup>100</sup> BELTRÁN DE HEREDIA, V., «Constitución y régimen académico en Salamanca durante los siglos XIII, XIV y principios del XV», en *id.*, *Cartulario de la universidad de Salamanca*, I, pp. 189-209.

<sup>101</sup> VIDAL Y DÍAZ, A., *op. cit.*, pp. 201-202. Las atribuciones respectivas, en *op. cit.*, pp. 203-208. Para las funciones del rector, cfr. RODRÍGUEZ CRUZ, A. M.<sup>a</sup>, *op. cit.*, pp. 37-53, y VALERO GARCÍA, P., *op. cit.*, pp. 31-53.

<sup>102</sup> HAMPE MARTÍNEZ, T., *op. cit.*, p. 180. Silíceo venía ejerciendo la interinidad en nombre de Gasca desde marzo de 1533 (AUS, ms. 770, fol. 39, cit. por este autor). El juramento de Bobadilla como maestrescuela, de 9 de julio de 1531, fue publicado por VALERO, P., *Documentos para la historia de la Universidad de Salamanca*, pp. 56-57.

<sup>103</sup> Le acompañaron Tavera, el cardenal de Sigüenza, el conde Enrique de Nassau (marqués de Cenete), Cobos y el conde de Benavente. Del Consejo Real de Castilla les acompañaron el licenciado Aguirre y los doctores Hernando de Guevara, Gaspar de Montoya y el licenciado Acuña (GIRÓN, P., *Crónica del Emperador Carlos V*, Madrid, 1964, ed. a cargo de SÁNCHEZ MONTES, J., p. 41).

<sup>104</sup> A quien Girón trata como hijo del obispo de Zamora, electo de Palencia (*op. cit.*, p. 42).

el azar favoreció a este último al ganar a suertes que el punto fuera dirimido por los doctores juristas de la universidad (don Diego prefería que la diferencia se decidiera en claustro pleno), el comité prefirió que fuera el rector quien recibiese a Carlos V <sup>105</sup>. De esta manera, don Diego tuvo la ocasión de atraer la atención real, que presumiblemente afianzaría en los días sucesivos (de estrecho contacto del Emperador con la universidad), favorecido por consejeros reales vinculados con el estudio, como el doctor Montoya.

Ejemplo de la importancia de la breve estancia de Carlos V en Salamanca (17-21 de junio de 1534), para la modificación del servicio administrativo que acometió en visperas de su partida a Túnez en 1535, fue el caso del doctor Pedro López de Ribera. Natural de El Espinar, colegial del Arzobispo, fue promovido entonces a la chancillería de Valladolid como oidor acrecentado junto al doctor Collado y el licenciado Oviedo <sup>106</sup>. López de Ribera hizo coincidir su doctorado con la estancia de Carlos V, quien a juzgar por los hechos permaneció atento al acto, pese a no acudir <sup>107</sup>. Si lo hizo a otras actividades universitarias, como las disertaciones, entre otros, de los doctores Montoya, Azpilcueta, Montemayor y del maestro Silíceo <sup>108</sup>. Aunque Diego de Córdoba permaneció en la universidad, donde volvería a ejercer el rectorado en 1537, debió atraer la atención del Emperador.

Entre los rasgos relativamente novedosos que don Diego presentó como rector destacó la consolidación de la jurisdicción universitaria experimentada desde 1532, de origen papal y temporal. Aunque ya en la década precedente existieron indicios en este sentido, el 10 de octubre de ese año Clemente VII eximió a la capilla del estudio salmantino de entredichos y cesaciones como el vivido en 1531, para celebrar oficios en ciertos días; e igualmente, el 17 de junio de 1533 expidió bula conservatoria para el estudio, como lo habían hecho sus predecesores. Asimismo, entre 1535 y 1543 fueron varias las cédulas reales que consolidaron esta tendencia: el corregidor intentó impedir las rondas de los ministros del tribunal eclesiástico y halló la oposición real, y tiempo después se le conminó a auxiliar al maestrescuela u otros jueces del estudio para el castigo de los estudiantes <sup>109</sup>. Con todo, la reanudación de las diferencias entre rector y maestrescuela a la altura del segundo rectorado de Diego de Córdoba obligó al envío

<sup>105</sup> No fue la única disensión que en ese momento acogió la universidad. Hubo una disputa de precedencia entre los estudiantes *generosos* y los colegios ganada por los primeros (*op. cit.*, p. 42).

<sup>106</sup> Unidos a incorporaciones formales de oidores como el licenciado Acuña, Diego Soto y el doctor Martín Ortiz, AGS, E., leg. 13, núm. 186, «La prouisión de los oficios q. se hizo a la partida de su magestad de Madrid, año de XXXV», cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo real de Carlos V*, Granada, 1988, p. 257; DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, C., *Los oidores de las salas de lo civil de la chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1997, pp. 44-45.

<sup>107</sup> GIRÓN, P., *op. cit.*, pp. 42-43; la datación de la permanencia de don Carlos en Salamanca, en CADENAS Y VICENT, V. de, *op. cit.*, p. 235.

<sup>108</sup> GIRÓN, P., *op. cit.*, p. 43.

<sup>109</sup> VIDAL Y DÍAZ, A., *op. cit.*, pp. 61-64. Las determinaciones pontificias fueron asentadas en la *Historia*



de un capellán de honor y posteriormente del visitador Juan de Córdoba, deán de Córdoba y abad de Villanueva de Rute, resultado de cuya labor fue la publicación de nuevos estatutos en cuyo contenido trasluce el desconcierto reinante en tiempo de Diego de Córdoba, cuya percepción no consiguieron mitigar medidas como la institución de dos cátedras de medicina o la conclusión de las Escuelas Menores y el Hospital del Estudio <sup>110</sup>.

De manera significativa, los estatutos de Juan de Córdoba se iniciaron con el procedimiento de elección de rector, estipularon que no pudieran desempeñar la plaza miembros del cabildo catedralicio o la clerecía menor de la ciudad, ni religiosos, capellanes, catedráticos propietarios o sustitutos, oficiales de la universidad —salvo diputados—, colegiales, ni capellanes de colegio. Igualmente, se debía respetar el procedimiento electivo, y si pasaba a colegial durante el ejercicio como rector debía ser sustituido <sup>111</sup>. Clara relación con la trayectoria seguida por Diego de Córdoba tuvieron determinaciones de los nuevos estatutos como la ampliación de dos a cuatro años del período en que no se podía repetir rectorado, o la obligación del rector de visitar cada facultad cada dos meses <sup>112</sup>.

La resistencia mantenida por Diego de Córdoba ante las reformas en primer término le causó dificultades, pero le ganó el completo apoyo del maestro Silíceo, quien en el curso de la crisis de 1529 llegó a formar parte de una comisión universitaria desplazada a la corte para protestar por las resoluciones de los visitadores Pacheco y Mejía <sup>113</sup>. De esta manera, la paulatina entidad de Silíceo debió favorecer la trayectoria de Diego de Córdoba, que desconocemos desde que abandonó Salamanca hasta que acometió por encargo real *visita* a la universidad de Valladolid en 1544. En el transcurso de esta comisión dio muestra de una rigidez y acompasamiento con la política imperial que le hizo acreedor de nuevas comisiones de esta clase. De hecho, la tipología de asuntos tratada en esta *visita* no difirió en gran medida de los acometidos en la inspección de la chancillería de Valladolid desde 1550 o el Consejo Real y otros oficiales cortesanos desde 1553. Asimismo, en su curso también atrajo la atención de Fernando de Valdés, llegado a la presidencia de Castilla y cada vez más influyente.

---

de la Universidad de Salamanca hecha por el maestro Pedro Chacón, CARABIAS TORRES, A. M.<sup>a</sup> (ed.), Salamanca, 1990, pp.101-102.

<sup>110</sup> *Op. cit.*, p. 102.

<sup>111</sup> *Op. cit.*, pp. 63-65.

<sup>112</sup> Títulos II y XVII de los Estatutos de 1538, cit. por AJO G., C. M.<sup>a</sup>, y SAINZ DE ZÚNIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días*, II, *El siglo de oro universitario*, Ávila, 1958, pp. 219-220. El plazo original de repetición en el rectorado, en VALERO GARCÍA, P., *La universidad de Salamanca en la época de Carlos V*, p. 33, y en RODRÍGUEZ CRUZ, A. M.<sup>a</sup>, O. P., *El oficio de rector en la universidad de Salamanca y en las universidades hispanas*, p. 51. Por otro lado, los estatutos de Juan de Córdoba recogieron parcialmente el proyecto de 1529, ALEJO MONTES, F. J., *op. cit.*, p. 186.

<sup>113</sup> VALERO GARCÍA, P., *op. cit.*, p. 43. De la comisión también formaron parte el maestrescuela Bobadilla, los doctores Santisidro, Tapia, Benito de Castro y los maestros Silíceo y Oropesa.

La reticencia a crear normas para su gobierno lastraba el funcionamiento de la universidad de Valladolid, carencia que paliaron sólo en escasa medida los Estatutos publicados entre 1517 y 1523, al impulso de la llegada del Emperador<sup>114</sup>. La comisión de Diego de Córdoba en este estudio partió en primer lugar de una necesidad general del mismo, la elaboración de una reglamentación más concreta, que pusiera coto tanto a la libre interpretación de la reglamentación anterior como a la costumbre, y en segundo lugar de otra más específica y derivada de la anterior, los abusos arancelarios cometidos por el escribano Cristóbal de Menchaca, quien al tiempo era canónigo<sup>115</sup>.

Diego de Córdoba presentó la *comisión* de la visita en el claustro de 5 de febrero de 1544, poco antes de ser recibido documento de Paulo III de 20 de febrero en salvaguarda de los privilegios y derechos de la universidad, en respuesta a sus quejas por atropellos de las autoridades temporales y eclesiásticas<sup>116</sup>. El visitador comenzó por depurar las culpas del escribano<sup>117</sup>. Menchaca fue acusado principalmente de percibir derechos abusivos por la concesión de los grados de doctor y bachiller, recibir la colación de los graduandos sin tener derecho a ello y no acudir a los claustros y otros actos<sup>118</sup>. El imputado encontró defensa convincente en la confusión reglamentaria que afectaba a la universidad vallisoletana, al carecerse en sus textos de conversión en maravedís de los francos, moneda en que se expresaba el arancel<sup>119</sup>. Indicio tan claro de desconcierto legislativo llevó al Emperador a reclamar del visitador la inmediata reforma y mejora de los estatutos de 1517-1523.

Pese a la enjundia de su misión la actitud del estudio fue de colaboración, abordándose la tarea en una comisión mixta formada por el visitador y algunos doctores. Tras intensas reuniones, a mediados de septiembre de 1544 el claustro aceptó los Estatutos formados por Diego de Córdoba, si bien poco después, como era usual en estos casos, enviaron una comisión ante el Consejo Real para informar de los agravios que observaban en ellos, que no consiguió reformarlos. De esta manera, en mayo de 1545 el visitador y los comisionados recibieron los estatutos firmados y sellados por el Emperador y el Consejo Real. La interacción entre los desmanes del escribano y la elaboración

<sup>114</sup> TORREMOCHE HERNÁNDEZ, M., «Visitas para el gobierno de la Universidad de Valladolid a comienzos de la Edad Moderna (1503-1545)», en *Investigaciones Históricas*, núm. 18 (1998), pp. 29-43, p. 30; ALCOCER, M., *Historia de la Universidad de Valladolid*, Valladolid, 1917, I, p. 206; *op. cit.*, p. 31.

<sup>115</sup> Seguimos a partir de aquí el hilo de TORREMOCHE HERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, pp. 34-37. Según esta autora, el proceso incoado por el visitador se conserva en AUV. Libro núm. 546, «Sentencia e autos hechos e pronunciados en fauor del escribano mayor del Estudio de esta Universidad de Valladolid por el Sr. Dn. Diego de Córdoba, Visitador de dicho Studio. El año (sic) de quinientos y quarenta y quatro años».

<sup>116</sup> AJO G., C. M.<sup>a</sup>, y SAINZ DE ZÚNIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y Desarrollo desde su aparición hasta nuestros días*, II, *El siglo de oro universitario*, Ávila, 1958, p. 252.

<sup>117</sup> AUV. Libro de Claustros, núm. 2, pp. 139-142v.<sup>o</sup> y 144-146, cit. por TORREMOCHE HERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, p. 35.

<sup>118</sup> A modo ilustrativo, TORREMOCHE HERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, p. 34, afirma que percibía en los actos de concesión del grado de doctor 3665 mrs., cuando debía recibir 1555.

<sup>119</sup> *Op. cit.*, p. 35.

de los estatutos quedó patente en el hecho de que éstos contuvieron artículos destinados a reprimir los primeros, caso del nombramiento de dos escribanos que «no lleuen más, ni otros derechos de los que estuviere tassados y señalados en el arancel que la Uniuersidad manda hazer...»<sup>120</sup>.

Diego de Córdoba compatibilizó estas dos labores con una tercera en la que debió aflorar su ideología: el contenido e impartición de los tres cursos de Gramática (Menores, Medianos y Mayores), mediante la revisión de su reglamento de 1541, tarea en la que fue ayudado, entre otros, por el rector y el maestro Montoya<sup>121</sup>. De la misma manera, por entonces vio aumentada su retribución la cátedra de prima de Teología, asignatura por la que el visitador mostró natural preocupación, hallándose presente tanto en el claustro pleno que decidió la subida, como en el que recibió la real cédula en su aprobación<sup>122</sup>. En definitiva, de su labor resultaron los Estatutos más duraderos de la universidad de Valladolid.

De su labor se concluyó una eficacia que atrajo el interés del presidente de Castilla Fernando de Valdés —quien despuntaba en la corte desde la partida del Emperador en 1543 y andaba necesitado de *clientes* para la conformación de una red de influencia— y renovó la atención que suscitara del Emperador en las aulas salmantinas. Tan renombrada fue su intervención en la universidad de Valladolid que Carlos V ordenó su presencia ante él, en principio sin ocupación concreta<sup>123</sup>, al mandar que su nombre completara carta en blanco remitida a la corte en previsión de la necesidad de un letrado<sup>124</sup>. Pero el Emperador encontró inmediato destino para don Diego de Córdoba, al atender el consejo formulado en mayo de 1545 por Valdés de emplearle en una difícil tarea: la visita del reino de Sicilia<sup>125</sup>.

<sup>120</sup> TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., *op. cit.*, p. 36.

<sup>121</sup> *Op. cit.*, pp. 35-36.

<sup>122</sup> AJO G., C. M.<sup>a</sup>, y SAINZ DE ZÚÑIGA, *op. cit.*, pp. 252-253.

<sup>123</sup> Así se expresó el príncipe Felipe en carta a su padre en Valladolid, de 25 de marzo de 1545, tras comentar las comisiones otorgadas al fiscal Vargas y al doctor Velasco para desplazarse a Trento: «El otro letrado que V. M. manda que acá se mire que se nombre ha parecido que debe ser don Diego de Córdoba, que ha hecho la visita desta universidad de Valladolid con mucha diligencia y es persona de muy buen seso y en quien concurren todas buenas cualidades para encomendarle cualquier cosa y en edad y disposición para tomar cualquier trabajo. Él irá derechamente donde V. M. estuviere para que le mande lo que será servido que haga» (AGS, E., leg. 69, núms. 20-26, en CDCV, II, doc. CCCXIII, p. 364). El príncipe le repitió este aviso el 16 de abril (*ibid.*, núm. 34, en CDCV, II, doc. CCCXVI, p. 374).

<sup>124</sup> Carta del príncipe a su padre de 5 de mayo de 1545: «... Don Diego de Córdoba que fue nombrado, como a V. Md. tengo scripto, en el lugar del letrado para quien vino la carta en blanco, se parte mañana y por lo que se ha entendido que V. Md. se quería servir dél en lo de la visita del reyno de Sicilia se le ha mandado que vaya derecho donde V. Md. estuviere, para que pueda mejor entender su voluntad y cumplir lo que se le mandare, y aunque con él scriu a V. Md., no quiero dexar de dezir en ésta que es persona virtuosa y según entiendo de muy buenas letras y que se le puede encomendar qualquier cosa de confianza» (AGS, *ibid.*, núm. 38, en CDCV, doc. CCCXIX, p. 383).

<sup>125</sup> Carta de don Fernando de Valdés, presidente del Consejo Real, obispo de Sigüenza, al Emperador,

La inspección que Diego de Córdoba condujo en la isla tuvo importancia tanto en una consideración jurídica, como en la faccional. Con esta labor, en primer lugar Diego de Córdoba participó intensamente en lo que C. Garriga ha denominado la «segunda gran expansión de la visita», en tiempo de Carlos V, ya que al comenzar la década de 1540 recibieron inspección, junto a las chancillerías de Granada y Valladolid y el Consejo de Navarra (en las personas respectivamente de Tristán Calvete, Juan de Córdoba y Bernardino de Anaya), la audiencia de Galicia, por el doctor Gonzalo Pérez de Rivadeneyra <sup>126</sup>, y el Consejo de Indias, por el propio Emperador y seguidamente el regente Figueroa <sup>127</sup>. Fue precisamente uno de los letrados promovidos a este Consejo como consecuencia de la inspección, el licenciado Gregorio López, quien en 1543 visitaría la Casa de Contratación sevillana <sup>128</sup>, poco antes de que el licenciado Tello de Sandoval recibiera comisión para visitar tanto el virreinato de Nueva España como la audiencia de México <sup>129</sup>.

---

en Valladolid, 6 de mayo de 1545: «S C C Mt.: Habiéndose entendido que el licenciado don Diego de Córdoba es suficiente para lo que V. Mt. envió a mandar que fuese de acá alguna persona eclesiástica, por la experiencia que se tiene de sus letras y cordura, reposo y honestidad de su persona así del tiempo que residió en el Estudio de Salamanca, donde fue rector dos veces (en 1533 y 1537), como en la visita de las escuelas y Universidad de esta villa en que se ha ocupado algún tiempo y halo hecho muy bien y en gran provecho de los negocios; y teniendo por cierto lo continuará en lo que más V. Mt. le mandare, su alteza le ha mandado ir. Espero en Dios que Don Diego acertará a servir de manera que merezca que V. Mt. le emplee siempre en su servicio para hacerle la merced que acostumbra hacer a los que bien le sirven... En Valladolid 6 de mayo de 1545... F[erdinandus] Seguntinus» [AGS, E., leg. 72, núm. 152, pub. por BELTRÁN DE HEREDIA, V., *Cartulario de la universidad de Salamanca. La universidad en el siglo de oro*, II, Salamanca, 1970, p. 529, así como por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568)*, II-*Cartas y Documentos*, Oviedo, 1971, p. 101].

<sup>126</sup> «[Parecer] para que secretamente se visiten los alcaldes y gobernador de Galicia», BNM, ms. 904, fol. 246v. pub. por GAN GIMÉNEZ, P., «Una colección de pareceres que en diversos tiempos el Consejo ha dado en cosas generales (1523-1549)», *Crónica Nova*, 1984-1985, núm. 14, pp. 161-247 y 222-223. Noticias de la inspección conducida por Calvete, en [Archivo de la] C[atedral de] O[viedo]. Obispos de Oviedo, caja 260, Valdés, s. n.

<sup>127</sup> Iniciada en mayo de 1542, la inspección al Consejo de Indias se condujo con gran dureza y concluyó con la destitución de dos consejeros y la promulgación de las primeras ordenanzas que rigieron el Consejo de Indias. SCHÄFER, E., *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, Sevilla, 1935, I, pp. 61-70. Igualmente, alusiones a esta visita en CDCV, III, doc. DXIX, p. 386, príncipe Felipe a Carlos V, 24 de noviembre de 1551.

<sup>128</sup> Labor referida en ZUMALACÁRREGUI, L., «Visitas y residencias en el siglo XVI. Unos textos para su distinción», *Revista de Indias*, núm. 7 (1946), pp. 917-921; HEREDIA HERRERA, A., *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias, I (1529-1591)*, Madrid, 1972, pp. 45-47; MARTÍNEZ CARDOS, J., *Gregorio López, consejero de Indias, glosador de las Partidas (1496-1560)*, s. l., 1960, pp. 128-129; CDCV, II, p. 154.

<sup>129</sup> SÁNCHEZ BELLA, I., «Ordenanzas del visitador de la Nueva España, Tello de Sandoval, para la administración de justicia (1544)» *Historia*, 1969, núm. 8, pp. 439-561; ARREGUI, P., *La Audiencia de México según los visitadores (siglos XVI y XVII)*, México, 1981, pp. 68-74. Esta hilazón de visitas es referida por GARRIGA, C., *Génesis y formación histórica de las visitas a las chancillerías castellanas (1484-1554)*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 1989 (dirigida por el profesor Benjamín González Alonso), II, pp. 924-928.

La mencionada expansión de la visita no paró aquí. Con la comisión recibida por Diego de Córdoba en 1545 para realizar visita al reino de Sicilia<sup>130</sup>, este procedimiento inspector volvía al Mediterráneo oriental hispano, después de la llevada a cabo por Pedro Pacheco en Nápoles en 1536. Mientras realizaba su labor en la isla, prácticamente acababa de concluir la *visita* de la chancillería de Granada consumada por Miguel Muñoz en 1546 y se iniciaba la segunda visita que sufriría la audiencia de Canarias, encomendada en 1548 al licenciado García Sarmiento<sup>131</sup>. A poco de concluir esta inspección Diego de Córdoba regresó de Sicilia para acometer la visita de la chancillería vallsioletana<sup>132</sup>.

La labor de Diego de Córdoba se incardinó en la historia política del reino de Sicilia. El Parlamento había solicitado en 1535, 1540 y 1545 una reforma del sistema judicial que pusiera orden en la administración de justicia y terminase con los abusos de los oficiales reales. Para ello era idóneo un visitador extranjero, ajeno a los intereses creados en la isla, de manera que se solicitó un comisionado con este perfil<sup>133</sup>. Asimismo, la labor de Córdoba en la isla tenía un propósito paralelo, si bien no contenido en su comisión, relativa a las autoridades temporales; cual era apoyar el restablecimiento de la autoridad temporal y espiritual del Santo Oficio, suspendida por Carlos V en 1535 y restablecida el 6 de junio de 1546. Al tiempo que el visitador iniciaba su tarea, fue nombrado como inquisidor don Bartolomé Sebastián, por intervención directa del príncipe<sup>134</sup>. Visita y reorganización del Santo Oficio convergían, proceso impulsado por la conquista del poder del grupo que rodeaba al príncipe y la paulatina imposición de su concepción política confesional<sup>135</sup>.

Por otro lado, en una consideración faccional la labor de Diego de Córdoba en la isla mostró una intención política ajena al secretario Cobos, auténtico muñidor de la plantilla gubernativa de Sicilia y toda Italia. En concreto, denunció la elección de Luis Sánchez como regente de Sicilia, facilitada por el modo de elección de consejeros<sup>136</sup>. Con tal interés, recurrió a informadores secretos o alejados de los centros de poder

<sup>130</sup> Sobre esta comisión, GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 928; BURGARELLA, P., y FALLICO, G., *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, Roma, 1977, pp. 26-35; SCIUTI RUSSI, V., *Astrea in Sicilia*, pp. 55-60, y sobre todo, pp. 297-316.

<sup>131</sup> Sobre la *visita* en la audiencia de Galicia, cfr. FERNÁNDEZ VEGA, L., *La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el antiguo régimen (1480-1808)*, II, La Coruña, 1982, pp. 261-285.

<sup>132</sup> Esta relación, en GARRIGA, C., *op. cit.*, II, pp. 928-929. Sobre el tribunal canario, ROSA OLIVERA, L. de la, «La Real Audiencia de Canarias. Notas para su historia», *Anuario de Estudios Atlánticos*, 1957, núm. 3, pp. 91-161.

<sup>133</sup> BURGARELLA, P., y FALLICO, G., *op. cit.*, pp. 25-28; SCIUTI RUSSI, V., *op. cit.*, pp. 55-56.

<sup>134</sup> Carta del príncipe a Carlos V de 31 de julio de 1546, en CDCV, II, pp. 478.

<sup>135</sup> Como ha afirmado RIVERO, M., *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, 1998, p. 88, autor a quien seguimos en este particular.

<sup>136</sup> AGS, *Visitas de Italia*, leg. 152, c. 3, cit. por RIVERO, M., *op. cit.*, p. 34.

de la isla como el licenciado Hernando de Montenegro, juez en el condado de Módica<sup>137</sup>, y orilló tanto a Parlamento como a virrey. Los informadores no eran imparciales, eran contrarios al virrey Ferrante Gonzaga y utilizaron la inspección en su contra, lo que generó la queja de este último. Con todo, ante la respuesta contra Gonzaga que surgió en la isla al calor de la visita, el Emperador dio muestra de arrepentimiento por ordenar la inspección y la persistencia de Córdoba en desacreditar al virrey le condujo a suspender la visita en 1548<sup>138</sup>.

Al retorno de Sicilia, la intervención de Diego de Córdoba en el funcionamiento administrativo debió mucho al inquisidor general Fernando de Valdés, quien pareció sentirse en deuda con el letrado por haberle recomendado para la comisión en la isla y apreciar las dificultades de promoción que padecía. Por ello, intercedió en su favor ante el Emperador y el secretario Eraso<sup>139</sup>, lo que debió influir, con la suficiencia mostrada en Sicilia y la negativa del príncipe Felipe a conferir el mando de las galeras de España a su padre el conde de Alcaudete —desplazado a la corte imperial para dar cuenta de las cosas de Berbería—<sup>140</sup>, para que le fuera comisionada la inspección de la chancillería de Valladolid. Con todo, para entonces la orientación política de Diego de Córdoba no era tan uniforme como hasta ese momento; seguía fiel a Valdés pese al perjuicio que le había causado la estancia en Sicilia, pero pasaba a ejercer una comisión pareja al acercamiento al poder del príncipe Felipe. De manera significativa, el oficio

<sup>137</sup> Posteriormente, regresó a Castilla para ejercer como oidor en la chancillería de Valladolid (1569) y regente del Consejo de Italia (1571), RIVERO, M., *op. cit.*, pp. 227-228, y acceder al Consejo Real en marzo de 1576. Para esta última designación, el secretario Mateo Vázquez valoró la idoneidad del secretario «para comisiones que suelen ofrecerse sobre cosas de fuera de estos reinos, podrá conuenir la noticia de las que aurá uisto en el Consejo de Italia y también la autoridad de estar en el Consejo Real (IVDJ), e. 53, c. 69, cuad. 5, núm. 43). Más datos sobre este letrado en PÉREZ MARTÍN, A., *Proles Aegidiana*, Bolonia, 1979, II, pp. 818-819.

<sup>138</sup> BUGARELLA, P., y FALLICO, G., *op. cit.*, Roma, 1977, pp. 26-35; SCIUTI RUSSI, V., *op. cit.*, pp. 58-60. La visita de Córdoba, a la que pese a su trascendencia política —o quizá por ello— fue denominada por el virrey Gonzaga *Sindacato*, también ha sido tratada en *id.*, «Visita e sindacato nella Sicilia spagnola», en VVAA, *L'educazione giuridica*, Perugia, 1981, IV-I, pp. 577 y ss., cit. por RIVERO, M., «Buen Gobierno y ejemplaridad...», p. 723, que desgraciadamente no hemos podido consultar.

<sup>139</sup> AGS, PE, leg. 1, cartas de 30 de septiembre de 1549. A Eraso le expresó: «En lo que toca a don Diego de Córdoba tengo por cierto que vuestra merced le ayudará por lo que terná conocido que su persona meresce, y ha seruido y por lo que puede seruir; y así le pido por merced lo haga, que yo lo recebiré por propia merced, por la obligación que tengo a desear todo buen acrescentamiento y por muchos respetos, y porque sé que ha gastado y trabajado mucho en Secilia, y por mi ruego, aceptó aquella jornada». Igualmente, escribía al Emperador: «V. Md. tendrá entendido lo que meresce don Diego de Córdoba, por sus letras y virtud, y el cuidado y trabajo con que ha procurado acertar en lo que V. Md. le mandó seruir en Sicilia. Suplico a V. Md. tenga memoria dél para hacerle merced en lo que ahora se ofresce, con que pueda mejor seruir a V. Md. pues tiene cualidades para emplearle en cosas de importancia; y yo soy obligado de hacer este oficio porque, a mi ruego, tomó el trabajo de ir a seruir a V. Md. en aquel reino, y porque sé que es benemérito de la merced que V. Md. le hiciere...» (Ambas pub. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés*, II, Oviedo, 1971, pp. 110-112).

<sup>140</sup> FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT F., *op. cit.*, pp. 293-294.

de Valdés en favor de su patrocinado se producía cuando ya le había sido comisionada la nueva inspección. Ello hizo a la tarea iniciada entonces por don Diego extremadamente sensible a los vaivenes de la disputa cortesana, circunstancia que aumentó con la visita acometida por él mismo en la corte desde 1553. Hecho que subraya la utilidad de ambas inspecciones para abordar el complejo y equilibrado escenario cortesano en estos años, complementada por su evidente valor para el conocimiento de la coyuntura funcional de la administración de justicia.

Con todo, Valdés no fue el único ministro que favoreció a Diego de Córdoba, quien también gozó del apoyo de Juan Martínez Silíceo, sucesor del cardenal Tavera en la mitra primada de España, sobre quien Francisco de Pisa afirmó con acierto que «en el processo y discurso de su vida, se hallarán claramente dibuxados muy al viuo los baxos, y altos de la fortuna...»<sup>141</sup>. Tras ser maestro del príncipe, seguidamente ejerció como confesor y capellán mayor del mismo, cargos a los que desde 1540 se añadió el de obispo de Cartagena<sup>142</sup>. No fue del agrado del Emperador por su inclinación a complacer al príncipe, hasta el punto de que al partir en mayo de 1543 recomendó a su hijo tomar un confesor y consagrar a Silíceo a las tareas de capellán mayor<sup>143</sup>. Desde entonces se inició una oposición creciente con el secretario Cobos, quien consideraba a Silíceo partícipe de los manejos del duque de Alba, Juan de Zúñiga y el

<sup>141</sup> PISA, F. de, *Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, y historia de sus antigüedades, y grandezas...*, Toledo, 1605 (ed. facsímil, Madrid, 1974), fol. 259r. Inició sus estudios en Llerena, cerca de Villagarcía natal, su pueblo natal, de donde pasó sucesivamente a Sevilla, Valencia y París. La fama alcanzada como catedrático de artes en esta última ciudad le abrió las puertas de la universidad de Salamanca, donde ejerció cátedra de Artes y Filosofía. Posteriormente, ganó por oposición la canonjía magistral de Coria, de donde pasó a ser maestro del príncipe Felipe. Para conferir este puesto se constituyó una comisión formada por Tavera, el duque de Alba y Cobos, quienes nominaron quince candidatos, reducidos finalmente a tres: el doctor Ciruelo, de la Universidad de Salamanca; el doctor Carrasco de la de Alcalá, y el maestro Silíceo (*op. cit.*, p. 260). Parece que fue la Emperatriz quien terminó eligiendo a éste, cuyo título como maestro del príncipe data del 1 de julio de 1534 (AGS, CSR, leg. 113, fol. 602).

<sup>142</sup> *Op. cit.*, fol. 260.

<sup>143</sup> Esta opinión trasluce tanto en la instrucción de 1539 (KENISTON, H., *Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V*, Madrid, 1980, p. 247) como en la de 6 de mayo de 1543, que transcribimos: «En el obispo de Cartagena conoçeyse y todos lo conocemos por muy buen hombre; cierto que no ha sydo ny es el que más os conyene para vuestro estudio; ha deseado contentaros demasyadamente. Plegue a Dyos que no haya sydo por algunos respetos particulares. Él es vuestro capellán mayor. Vos os confesays con él. No sería bien que en lo de la conciencia os desease tanto contentar como ha hecho en el estudio. Hasta aquy no ha havydo inconveniente, de aquy adelante lo podrya haver y muy grande: Myrad lo que os va en ello, porque no es más que el alma, y va mucho que a los principios de la edad conviene comencéis a tener buena conciencia y reformada; y asy, hijo, os lo ruego y que en ello hagays durante las ausencias de vuestra mujer lo que os amonesta: y para este efecto creo que serya bien que, pues el obispo es vuestro capellán mayor, tomássedes un buen frayle por confesor. Desta otra carta y instruxión que os enbyo será bien que la vea el obispo, y él es tan bueno que estoy cierto que él terná mano y os acordará asy dello como de lo demás que le pareciere; y él alcançará que useys de toda virtud y verdad, y en ello le podreys creer y también tomar sus consejos en las cosas que os pareciere, que será bastante para ello. Cierito estoy que su voluntad es buena, la sufficiencia y bstança vos la sabeys» (CDCV, doc. CCLII, pp. 110-111).

conde de Osorno para dirigir la voluntad del regente <sup>144</sup>, y que se manifestó en la controversia habida en torno a la provisión del adelantamiento de Cazorla.

El cardenal Tavera había nombrado el 18 de mayo de 1534 para esta dignidad al secretario Cobos, quien comenzó inmediatamente a presionar a Tavera para que transfiriese el título a su hijo Diego. El prelado se negó, pero terminó cediendo ante el perjuicio que podía causar a su iglesia el enfado del todopoderoso secretario, y firmó un documento en tal sentido el 28 de febrero de 1535, confirmado por Paulo III y el Emperador poco después. Era sólo un primer paso, puesto que Cobos deseaba conseguir una bula que garantizase a Diego y sus descendientes la posesión perpetua del adelantamiento, a espaldas de Tavera. Paulo III concedió lo solicitado el 6 de diciembre de 1539, si bien Cobos no hizo valer los derechos adquiridos por el documento papal hasta el día siguiente de la muerte de Tavera. Ese día, Cobos comisionó a Gonzalo Pérez para mostrar al príncipe las bulas recibidas y solicitarle una orden dirigida al capítulo catedral de Toledo, para hacer efectiva la entrada en Cazorla <sup>145</sup>.

Silíceo aprovechó su cercanía al príncipe para recomendar el sometimiento de la cuestión al Consejo Real, presidido por Fernando de Valdés. No obstante, Cobos se las ingenió para atraer a los miembros de Consejo a su casa, quienes devolvieron la cuestión sin resolver al príncipe, que terminó ordenando al cabildo obedecer el documento papal. El procedimiento del secretario motivó la queja de Silíceo, y fue buena muestra de la postración del Consejo Real ante los intereses de los *patrones* cortesanos, en perjuicio tanto de la propia naturaleza *consiliar* del organismo como de un concepto ideal de justicia. Es decir, del estado de cosas que el príncipe no deseaba ante su acceso al trono.

Con todo, no existe acuerdo sobre el sentido de la intervención de Cobos en la promoción de Silíceo al arzobispado de Toledo, vacante por muerte del cardenal Tavera el 1 de agosto de 1545. Un cronista más cercano a los hechos afirmó que en la elección Silíceo tuvo que vencer la resistencia del secretario Cobos a causa de su comentada oposición a ceder en el asunto de Cazorla <sup>146</sup>. Por el contrario, también se ha afirmado

---

<sup>144</sup> «Vales no a la zaga Silíceo el obispo y confesor de Su Magestad, con quien concurren algunas vezes y aún no estoy muy lexos de decir a Vuestra Magestad Cesárea le han ofrecido entre los tres sobredichos un capelo, si dirige al ánimo de Su Magestad a cierta cosa que no digo a Vuestra Magestad Cesárea por no estar mui cierto de ella, y lo haré quando lo esté, pues ando mui diligente por el servicio de Vuestra Magestad Cesárea y de Su Magestad, como siempre he acostumbrado, a la vista de todos», en BNM, ms. 10.300, «Copia de una carta que Francisco de los Cobos, grandemente estimado del señor Emperador Carlos V, y su secretario de estado, escribió a S. M. Cesárea, respondiendo a otra que tubo de dicho señor Emperador», pub. por KENISTON, H., *Francisco de los Cobos...*, pp. 257-261.

<sup>145</sup> KENISTON, H., *op. cit.*, pp. 279-281.

<sup>146</sup> Parece que el Emperador estaba decidido a dar la importante dignidad a Gaspar Dávalos, arzobispo de Granada, pero que no lo hizo por la intervención de su hijo, deseoso de que fuera dada a su maestro,



que Cobos sugirió su nombre para cubrir la vacante toledana<sup>147</sup>, algo que no cabe duda hicieron las hermanas del Emperador, Leonor de Francia y María de Hungría<sup>148</sup>. Sea como fuere, tras ser comunicado el nombramiento a Silíceo y recibirse sus bulas, el obispo de Sigüenza Pedro de la Gasca tomó posesión del arzobispado de Toledo en su nombre el 30 de enero de 1546. El flamante prelado continuó ignorando la pretensión del secretario sobre Cazorla, aunque estuviera secundada por el propio Emperador y nuevos documentos pontificios<sup>149</sup>, de tal manera que su relación con el secretario fue hostil hasta la muerte de éste el 10 de mayo de 1547<sup>150</sup>. Por ello no resulta extraño ni el parentesco político de Silíceo con el presidente de Castilla Fernando de Valdés, quien agrandaba su figura en la corte desde la muerte de Tavera, ni la amalgama de *clientes* de ambos ministros, favorecidos en su carrera por la consolidación de sus respectivos patrones, de quienes constituye ejemplo Diego de Córdoba.

Por su influencia en la labor desempeñada por este letrado junto a Silíceo, es necesario aludir a la institución del estatuto de limpieza de sangre en la iglesia de Toledo, que en realidad supuso la extensión a toda ella del vigente en la capilla de los Reyes Nuevos desde 1531<sup>151</sup>. Decretada por el arzobispo el 29 de julio de 1547 y confirmada por el papa el 28 de mayo de 1548<sup>152</sup>, la reacción que provocó entre los canónigos de origen converso aconsejó al príncipe Felipe suspender la determinación de Silíceo, pese al oficio realizado ante él por don Rodrigo de Ávalos y el doctor Placencia, oidores del Consejo de Gobernación del arzobispado con quienes Diego de Córdoba no tardó en compartir actividad<sup>153</sup>. De la controversia subsiguiente destacó que los favorables

---

como el propio Carlos V había logrado que se diera el pontificado a su maestro Adriano (PISA, F. de, *op. cit.*, fol. 260r-v).

<sup>147</sup> En lo que constituía una forma más sutil de vencer la resistencia de Silíceo, KENISTON, H., *op. cit.*, p. 282; CODOIN, I, p. 151. Existe una referencia explícita a la relación de la intercesión de Cobos en favor de Silíceo, con su deseo de ganar el adelantamiento de Cazorla, entre los papeles de Florián de Ocampo, RAH, MSS, Muñoz, 93, fol. 25, cit. por KENISTON, H., *op. cit.*, p. 282.

<sup>148</sup> PISA, F. de, *op. cit.*, fol. 260r-v.

<sup>149</sup> Cfr. al respecto KENISTON, H., *op. cit.*, pp. 284-285. Silíceo no estaba dispuesto a vincular a sus sucesores en el arzobispado a una decisión propia; por otra parte, había mostrado su poca inclinación por Cobos, relevándole de su cargo como alguacil mayor de Talavera (RIVERA RECIO, J. F., *El adelantamiento de Cazorla. Historia General*, Toledo, 1948, pp. 107-117). Del largo episodio del adelantamiento se ocupó asimismo MARCH, J. M., S. J., *Niñez y Juventud de Felipe II*, Madrid, 1941, I, quien traza su biografía (aclarando distintos puntos oscuros), antes de transcribir documentación valiosa para conocer su labor como servidor del príncipe (*op. cit.*, pp. 51-67).

<sup>150</sup> KENISTON, H., *op. cit.*, pp. 295 y 334.

<sup>151</sup> SICROFF, A. A. *Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII*, Madrid, 1985, p. 129.

<sup>152</sup> PISA, F. de, *op. cit.*, fol. 261v.

<sup>153</sup> SICROFF, A. A., *op. cit.*, pp. 140 y 169; Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo, conde de Cedillo, *Toledo en el siglo XVI*, Madrid, 1901, p. 135; comisionados en contra fueron, por su parte, el maestrescuela don Bernardino de Alcaraz y el capellán mayor don Rodrigo Zapata (conde de Cedillo, *op. cit.* p. 135; SICROFF, A. A., *op. cit.*, p. 170).

al estatuto acudieron a la autoridad regia, y los opuestos a la papal<sup>154</sup>. Con todo, las tribulaciones del estatuto en la iglesia de Toledo constituyen buena referencia de la evolución político-religiosa de los reinos hispanos. Ya que alcanzado el trono y tras la paz de Augsburgo, Felipe varió su actitud y, ante la necesidad de encontrar rasgos definitorios que consolidasen la monarquía, revocó su prohibición el 6 de agosto de 1556, tras nueva confirmación del estatuto por Paulo IV en 1555<sup>155</sup>. Por lo demás, el episodio en torno al estatuto había enrarecido las relaciones entre el arzobispo y la Compañía de Jesús, dado que ésta se mostró dispuesta a aceptar cristianos nuevos<sup>156</sup>.

Pues bien, la aplicación tácita del estatuto desde 1547 afectó a diez canónigos de origen converso, y la dudosa presencia de Diego de Córdoba en el capítulo catedralicio pudo producirse en lugar de uno de ellos, contra los que actuaba el arzobispo<sup>157</sup>. Con todo, el favor de Silíceo por Diego de Córdoba tuvo mayor expresión en la presidencia que le confirió de su Consejo de Gobernación del arzobispado, que profundizó su idoneidad para las altas inspecciones administrativas que no tardaría en acometer.

Al tanto de la apurada situación en que Diego de Córdoba había vuelto de Sicilia, el arzobispo debió recordar el tiempo compartido en la universidad de Salamanca y le llamó para presidir el mencionado Consejo de Gobernación del arzobispado de Toledo. Aunque se sospecha con fundamento que este organismo atravesó una crisis precisamente en tiempo de Silíceo<sup>158</sup>, y la historiografía no ha reparado en esta labor, debió resultar decisiva en su elección para inspeccionar seguidamente el funcionamiento de

<sup>154</sup> SICROFF, A. A., *op. cit.*, pp. 139 y 141 ss.

<sup>155</sup> *Op. cit.*, p. 170. De forma significativa, la decisión de Felipe fue tomada tras consulta con el Consejo Real, cuya actitud había cambiado significativamente para Sicroff desde 1548 (*op. cit.*, p. 172), cuando aconsejaron lo contrario al príncipe bajo la presidencia de Niño. Se apreciaba la influencia de Valdés, con el príncipe ausente. Indicio de la rápida mutación de la situación fue un memorial de reclamaciones contra Silíceo, elaborado por los canónigos de origen converso (BNM, ms. 13043, fols. 27 y ss., cit. por SICROFF, A. A., *op. cit.*, pp. 174-175).

<sup>156</sup> La oposición de Silíceo hacia los jesuitas sólo declinó ante el apoyo que el nuncio, el Consejo Real y el mismo príncipe mostraron por ellos, permitiéndoles finalmente confesar y predicar en el arzobispado. Había intentado imponerles el estatuto de limpieza (MARCH, J. M.<sup>a</sup>, p. 64). Asimismo, cfr. al respecto ASTRÁIN, P. A., *Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España*, I, *San Ignacio de Loyola, 1540-1556*, Madrid, 1902, cap. IX, así como SICROFF, A. A., *op. cit.*, pp. 315-321, con alusión a la mediación de Poggio, a causa del enfrentamiento causado por la apertura sin licencia arzobispal del colegio jesuita de Alcalá, en 1551. Igualmente, el P. Gonzalo González evocó en 1565 la beligerancia de Silíceo, al recordar cómo había hallado un libro de los *ejercicios* con escolios malévolos de pluma de un dominico que lo revisó por orden del arzobispo (MHSI, Borgia, IV, pp. 88-90; GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés*, II, *Cartas y Documentos*, pp. 296-297).

<sup>157</sup> La desacreditación e identidad de los canónigos por el arzobispo, en *op. cit.*, pp. 149 y ss. El deseo de Silíceo era la expulsión de todos los canónigos de origen converso, con alguna indemnización (BNM, ms. 13038, fol. 90r-v). Pese a que FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, p. 295, afirma que «fue canónigo de la primada de Toledo...», no consta en la lista de capitulares consignada por FERNÁNDEZ COLLADO, A., *La catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte y personas*, Toledo, 1999, pp. 47-104.

<sup>158</sup> Así, el arzobispo no aludió al Consejo en el decreto de colación (suscrito únicamente por él y su

la chancillería de Valladolid (desde 1550) y de la justicia cortesana (desde 1553). En este Consejo, el licenciado vivió la etapa inmediatamente anterior a su conversión de gestor de la administración y la justicia en el señorío temporal formado por los arzobispos de Toledo en la Edad Media, en una instancia superior diocesana y metropolitana, definida en la transición del siglo XVI al XVII <sup>159</sup>.

La calidad y precedencia orgánica del Consejo de Gobernación del arzobispado de Toledo era notable, como se deduce del hecho de que su presidencia correspondía al Rey, si bien debido a las pocas ocasiones en que acudía a él, era desempeñada por el oidor decano <sup>160</sup>. Asimismo, poseía mayor antigüedad que el Consejo Real de Castilla y guió su trayectoria institucional. Con un campo de intervención netamente temporal en su origen, había sido creado en el siglo XIII por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, quien aconsejó a Fernando III la selección de letrados doctos para que orientaran su acción de justicia y gobierno, «de lo que tuvo indudablemente principio la forma de instruir las causas civiles y criminales en el Real Consejo de Castilla» <sup>161</sup>. En el siglo XVI, el Consejo de Gobernación del arzobispado de Toledo era ya una instancia superior, con verdadera primacía entre las instituciones eclesiásticas de la diócesis. Formalmente, se componía de no menos de cuatro consejeros con secretario, relator, escribano-notario, registrador, amanuenses, sellador y portero, «configurando de esta manera una auténtica chancillería arzobispal al estilo de la chancillería real» <sup>162</sup>. En realidad, el desarrollo de

secretario), si bien quedó clara su intervención en la formación del expediente (GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., *op. cit.*, p. 69).

<sup>159</sup> Para esto y lo que sigue, cfr. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., *op. cit.* El mismo autor se ocupa de la evolución del organismo desde el siglo XVII, en *id.*, «El Consejo de la Gobernación del arzobispado de Toledo (segunda parte)», 1988, 25, pp. 109-147.

<sup>160</sup> GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., «El Consejo de Gobernación del arzobispado de Toledo», *Anales Toledanos*, núm. 16 (1983), pp. 63-138, p. 89. En el *Episcopologio calagurritano* se asevera que Córdoba «fue nombrado por el Cardenal Silíceo Presidente de su Consejo» (*op. cit.*, p. 47); por su parte FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, p. 295, escribe que fue «presidente del Consejo del Cardenal Silíceo su famoso arzobispo...». El más rotundo fue PISA, F. de, *Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo...*, Toledo, 1605 (ed. facsímil, Madrid, 1974), fol. 261v: Silíceo «... proueyó los oficios de su arzobispado, así los espirituales como los temporales, quitando las pensiones q. antes dél se dauan a la cámara arzobispal. Tuvo en su consejo de la dignidad personas de grande autoridad, y entre ellas por presidente a don Diego de Córdoba, hijo del Conde de Alcaudete, q. murió obispo de Calahorra». Salvo los personajes nombrados al tratar del estatuto de limpieza, por el momento no hemos podido fijar los odores que compartieron tareas en el Consejo arzobispal con Diego de Córdoba, si bien parece que coincidió en él con Diego de Paredes Ollauri, contador de cuentas (GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., *op. cit.*, p. 102).

<sup>161</sup> Con todo, hay que considerar que el autor de estas palabras fue un arzobispo de Toledo, el cardenal Lorenzana, en la biografía de Jiménez de Rada que precedió a la edición de su *De Rebus Hispaniae* que en 1793 patrocinó el primero (GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., *op. cit.*, pp. 65-66). Un archivero de este Consejo escribió en 1812: «... este Tribunal fue creado antes de que se formase el Real Supremo Consejo de Castilla y... éste, para la extensión de sus Reales Provisiones, tomó la fórmula o rutina de los de este de la Gobernación» (*op. cit.*, pp. 66-67).

<sup>162</sup> GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, M., *op. cit.*, p. 68. PISA, F. de, *Descripción de la imperial ciudad de Toledo, y historia de sus antigüedades y grandeza*, Toledo, 1605 (ed. facsímil, Madrid, 1974), fol. 39r, abunda en la

ambas fue paralelo y la designación de los documentos (Provisiones) y el *estilo* diplomático observado en ambas también lo fue. En la secretaría del Consejo arzobispal, bajo dirección del secretario, se formalizaban los documentos resultantes de las determinaciones de los consejeros. Su organización anterior a los finales del siglo XVI no se puede escribir con detalle, pero del arancel se deduce que existía un registrador de documentos, sellador y portero. Francisco de Pantoja, nombrado secretario del Consejo el 5 de marzo de 1558 —lo que denota el giro político que entrañó el acceso de Carranza al arzobispado—, confirmado en 1577 y 1595, afirma que en su oficina tenía oficiales y escribientes <sup>163</sup>.

Señal de esta semejanza fue asimismo el hecho de que el Consejo de la Gobernación era itinerante, en seguimiento del arzobispo y resolviendo los asuntos a su lado, como acontecía con el Consejo Real medieval <sup>164</sup>, así como que el cargo de secretario en el Consejo de Gobernación lo desempeñó por regla general un seglar con experiencia jurídica en otros tribunales eclesiásticos o temporales. Como en el caso del Consejo Real de Castilla, ganaba su sueldo de los derechos que le producía el cargo y que venían estipulados por arancel regulado por el Consejo Real, a tenor del que en éste estuviese vigente <sup>165</sup>. Por todo ello, nada extraño tiene que el presidente del Consejo de Gobernación del Arzobispado fuera designado para la visita de los oficiales de la chancillería de Valladolid y seguidamente del Consejo Real, dado que iba a inquirir ministros y procedimientos que conocía bien.

En cuanto a los consejeros, llamados también oidores o jueces de la gobernación, eran nombrados directamente por el arzobispo entre los jueces de tribunales menores de todo el arzobispado, tribunales de visitas o entre los prebendados de la catedral, canónigos o racionero, pero en todo caso titulados en Derecho <sup>166</sup>. Poseedores de gran prestigio por la plaza, recibían su sueldo de la hacienda propia del arzobispo y no de las diocesanas.

Con todo, ante las sensibles tareas que no tardó en acometer, es muy probable que Diego de Córdoba permaneciera poco tiempo en la presidencia del Consejo de

---

alusión realizada al Consejo de gobernación del arzobispo, distinguiéndolo del tribunal del vicario, que poseía la segunda instancia en causas recurridas en sedes sufragáneas. Escrito a los pocos años de consumadas las modificaciones de García de Loaysa, decía estar formado por un presidente y cuatro oidores. Además de tratar sobre causas civiles y criminales en primera instancia, ante él podían ser recurridas las sentencias del vicario general de Toledo. Sería «Vicario del Arzobispo, en quanto primado». En cuanto a plantilla específica del Consejo, Pisa le atribuyó un secretario, con otros notarios coadjutores.

<sup>163</sup> *Op. cit.*, p. 94. Semejante parentesco guardaba la figura del relator, provisto por oposición (*op. cit.*, p. 99). En la etapa en que Diego de Córdoba estuvo en este Consejo, el cargo de secretario y el de relator fueron desempeñados por el mismo individuo (*op. cit.*, p. 100).

<sup>164</sup> *Op. cit.*, p. 69.

<sup>165</sup> *Op. cit.*, p. 90.

<sup>166</sup> *Op. cit.*, p. 89.

Gobernación<sup>167</sup>, pese a que los arzobispos no solían remover a sus consejeros, los que podían resignar la plaza voluntariamente, salir por nombramiento para cargo incompatible o cesar con la muerte del arzobispo. En este último caso podían permanecer en sus plazas si así lo disponía el cabildo, quien, como encargado del gobierno de la sede vacante, podía nombrar otros, quienes a su vez podían ser confirmados o relevados por el nuevo arzobispo<sup>168</sup>. Pese a todo lo expresado, la jerarquía de Diego de Córdoba entre los protegidos de Silíceo debió ser relativa, dado que en el «Inventario de los Papeles y otras cosas que se hallaron en el escriptorio del Illmo. Card. Silíceo, mi señor», elaborado tras su muerte y publicado por J. M.<sup>a</sup> March, no consta correspondencia con él, a no ser que formara parte de aquellos atados en los que no se especifica autor de las cartas<sup>169</sup>. Si bien la estrecha cercanía pudo hacer prescindible el mantenimiento de correspondencia, sin olvidar que la relegación de Diego de Córdoba al obispado de Calahorra coincidió con la muerte de Silíceo, como tendremos ocasión de tratar.

### La visita de Diego de Córdoba a la chancillería de Valladolid: anticipo de la visita al Consejo Real y la justicia cortesana

La designación de Diego de Córdoba para efectuar visita a la chancillería de Valladolid tuvo relación, junto con el apoyo de Valdés que ya referimos, con la intervención del propio Emperador. El interés de Carlos V en el desenlace de la inspección al reino de Sicilia le llevó a ordenar a su conclusión el paso inmediato de Córdoba a Bruselas, donde paraban tanto la corte del Emperador como la del príncipe Felipe. Su informe sobre la situación en la isla debió resultar muy valioso para el primero ya que, como sabemos, eligió al letrado para visitar la audiencia vallisoletana. El interés del príncipe en que el proceso de renovación administrativa no se viera afectado por demoras significó el encargo a los regentes Maximiliano y María de la inmediata elaboración de *comisión* al efecto —junto a la de otras inspecciones—, mientras llegaba don Diego a Castilla<sup>170</sup>.

<sup>167</sup> Silíceo falleció el 31 de mayo de 1557, mandando ser enterrado en el colegio de Doncellas que dejó dotado en Toledo en las casas del don Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito (Pisa, F. de, *op. cit.*, fols. 203v-204r), poco después de haber alcanzado el cardenalato con título de los santos Nereo y Aquileo (*op. cit.*, fol. 203v).

<sup>168</sup> *Op. cit.*, pp. 89-90.

<sup>169</sup> MARCH, J. M.<sup>a</sup>, *op. cit.*, pp. 65-67

<sup>170</sup> AGS, E., leg. 504, núms. 21-22, carta del Emperador a lo regentes Maximiliano y María en Bruselas, 31 de marzo de 1550: «Para visitar la Chancillería de Valladolid hauemos nombrado a don Diego de Córdoba que está aquí, el qual partirá breuemente, y para la Uniuersidad de Salamanca a don Diego Enriques, y la de Alcalá a don Gaspar de Cúñiga, electo obispo de Segouia, y para que lo puedan hazer con breuedad los que están allá y llegado el dicho don Diego, mandaréys que se hagan los despachos nesçesarios» (pub. en CDCV, III, doc. CDLXV, p. 201).

La respuesta de los regentes no se hizo esperar, y el 20 de abril de 1550 remitieron a Bruselas aviso de haberse iniciado la elaboración de las comisiones<sup>171</sup>. El nombramiento tenía lugar en un ambiente de tensión faccional correspondiente al equilibrio en el poder cortesano, expresado en la visita frustrada del aposento de la corte incitada por el presidente Niño<sup>172</sup>, y fue formalmente despachado el 2 de mayo<sup>173</sup>. Con todo, el comienzo efectivo de la visita a la chancillería no se produjo hasta el mes de octubre, sólo después de recibir don Diego el día 12 título de consejero de Inquisición, gracias a la determinación del inquisidor general Valdés por favorecerle<sup>174</sup>. De esta manera, el visitador afrontaba su misión autorizado (además de por su comisión) por la potestad de aplicar el celoso procedimiento inquisitivo, común a estas tareas. Daba así inicio un intenso período que la incierta situación política alargó hasta el año y medio, en el que Alonso de Mariana actuó como secretario y Diego Gracián examinó los numerosos testimonios resultado de la actividad del visitador.

La visita de Diego de Córdoba a la chancillería de Valladolid no ha resultado muy conocida entre los historiadores de este tribunal<sup>175</sup>, aunque sí ha originado gran interés desde un punto de vista jurídico, según muestra la tesis doctoral de C. Garriga Acosta. En general, la historiografía no ha reparado en una inspección ejecutada en momento con tan complejo escenario faccional. Como subraya este autor, el trabajo de Córdoba se caracterizó por su detalle y extensión<sup>176</sup>, según se concluye del hecho de que, una vez presentada su comisión en la chancillería, el 6 de octubre de 1550, las averiguaciones alcanzaron todo su distrito, en persona o mediante escribanos.

Diego de Córdoba inició su actividad inspectora a gran ritmo, puesto que para el día 10 de octubre, cuando tomó declaración al presidente Miguel Muñoz, eran varios los oficiales que ya le habían dado testimonio. Pero la celeridad que la situación política impuso en la inspección motivó que el visitador comenzara a notificar los cargos resultantes de su labor en octubre de 1551, con las indagaciones todavía en curso, las cuales

<sup>171</sup> AGS, E., leg. 81, núms. 47-48, carta de los regentes al Emperador de Valladolid, 20 de abril de 1550: «Hanos parescido bien el nombramiento de personas que V. Mt. ha hecho para la visita desta chancillería y de las universidades de Salamanca y Alcalá y havemos hordenado a los del Consejo que luego entiendan en haser los despachos de los questán acá y los de don Diego de Córdoba, para que venga como V. Mt. lo manda» (pub. por RODRÍGUEZ RASO, R., *Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España*, Madrid, 1963, p. 182).

<sup>172</sup> AGS, *ibid.*, núm. 50, los regentes al Emperador, pub. en *op. cit.*, pp. 183-184.

<sup>173</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, III, p. 996, quien fija su ubicación en el Archivo de la Chancillería de Valladolid, L. Ac. II, fols. 33r-34v.

<sup>174</sup> AHN, Inq., lib. 575, fol. 50r; *ibid.*, lib. 500, fols. 366v, 367v, 368v, 369v, 370v, 371v, 372v, 373v; GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General...*, I, p. 216.

<sup>175</sup> MARTÍN POSTIGO, M.ª S.ª, *Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1982, p. 45; sí fue conocida por la malograda DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, C., *Los oidores de las salas de lo civil de la chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1987, p. 54.

<sup>176</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 996-997. Prueba de ello son las numerosas actas conservadas, en AGS, CC, Legs. 2711-2716, cit. por este autor, que desglosa su contenido por oficios en *op. cit.*, p. 1003.

se prolongaron hasta enero de 1552, cuando algún testigo todavía depuso contra los fiscales o los escribanos. Este hecho reveló cierto carácter caótico y acelerado en la inspección, apreciable asimismo en el traslado literal de los cargos generales como propios a algún oficial<sup>177</sup>. No obstante, esta distinción entre cargos particulares —imputados a cada oficial individualmente— y generales —formulados contra cada categoría de oficiales, cuando más de uno incurría en un comportamiento irregular— constituyó novedad en el procedimiento de visita, luego aplicada por el propio don Diego en su inspección cortesana.

Pronto se advirtió la primacía de la cuestión faccional sobre la funcional entre los motivos de su actividad, lo que provocó la resistencia del cuerpo de la chancillería a colaborar con el visitador<sup>178</sup>. El licenciado Ordoño se quejó amargamente de las intensas diligencias realizadas por él para hacerle cargos por cierta comisión realizada en Madrid y el Real de Manzanares. Como forma de obstaculizar la labor de Diego de Córdoba, se discutió su facultad para asistir al acuerdo de la chancillería, protegido por riguroso secreto. El visitador intentó entonces asistir a los acuerdos particulares de las salas, incluido el despacho, determinación y votación de los pleitos, como medio apropiado para cumplir su propósito de situar políticamente a cada oidor. Pero pese a contar con el apoyo de una cédula real, no logró su propósito<sup>179</sup>.

Con todo, estas dificultades no impidieron a Diego de Córdoba concluir su indagación y presentar los cargos resultantes. En su labor se apreció el doble impulso de la lucha política y la revitalización judicial perseguida por el príncipe. El 10 de junio de 1552 notificó al Emperador la conclusión de la visita, al tiempo que realizaba consejos sobre esta institución que debieron constituir para Carlos V prueba de su celo y que insistían en la necesidad de una instrucción más pausada y la inquisición personal del visitador por todo el distrito de la chancillería<sup>180</sup>. Pese a todo, aunque al visitador

<sup>177</sup> Todo lo anterior, *op. cit.*, pp. 999-1005.

<sup>178</sup> La chancillería de Valladolid estaba formada al comenzar la labor de Diego de Córdoba: presidente, Miguel Muñoz; oidores: Santander, Castro, Santillán, el doctor Redín, sustituto del doctor Pedro López de Arrieta (trasladado al Consejo Real) desde el 21 de febrero, el licenciado Francisco Ordoño, el doctor Vázquez, Gasca, Velasco, el doctor Santiago, Alderete, el licenciado Villagómez, el licenciado Gómez González (recibido en la audiencia el 5 de marzo de 1550), el licenciado Pero Gasco, el doctor Simancas, el doctor Suárez de Toledo (nombrado oidor el 9 de octubre), el doctor Redín (alcalde promovido a oidor el 20 de febrero); como escribano estaba Juan Gutiérrez; y como alcaldes, el licenciado Arceo (desde 21 de febrero en lugar de Redín), el licenciado Palomares, alcalde recibido el 9 de octubre en lugar de Suárez de Toledo, y el licenciado Francisco de Castilla. El licenciado Arpide actuaba como juez mayor de Vizcaya (AGS, CMC, 1.ª época, leg. 1587, s. n.).

<sup>179</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1012-1013. Descripción del episodio, en las *Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid*, 1765, fol. 174r-v. La cédula real llevaba fecha de 1 de julio de 1551.

<sup>180</sup> AGS, E., leg. 89, núm. 137, carta de Diego de Córdoba al Emperador, de 10 de junio de 1552: «La visita de la real aud[i]encia de Val[lado]l[i]d se a fecho según q. V. Mt. fue s[e]ruido mandármela. Lo q. della resulta embio en relación y para cumplirse con lo q. se deue al seruy[ci]o de Dios y de V. Mt. Y conuenia a la buena administración de Just[i]cia estas visitas no se auian de hazer tan de tropel q. según

le hubiera gustado profundizar su investigación en él, se detectan comisiones relacionadas con la visita realizadas en distintos puntos de Castilla por personajes como fray Francisco de Saavedra.

A juzgar por los detallados cargos imputados por Diego de Córdoba a los miembros del tribunal, éste mostró en la conducción de la visita un talante inquisitorial, un profundo dominio del procedimiento del Santo Oficio que sólo la pertenencia al Consejo de Inquisición proporcionaba, y que le permitió llenar cincuenta y seis folios con culpas tan detalladas y pormenorizadas; esto es, sacar cargos prácticamente de la nada.

Los cargos particulares formulados por Diego de Córdoba se extendieron de la cúspide a la base del tribunal, y reflejaron, desde un punto de vista actual, un ejercicio incompleto o menguado de la justicia, cuando no su sencilla ausencia. Por primera vez en la historia de la *visita*, el presidente de la chancillería fue sometido a la inspección y recibió cargos particulares, seguramente en razón de la postrera intervención del cardenal Tavera en el nombramiento de Miguel Muñoz en 1542, poco antes del inicio de su debilitamiento cortesano con la partida del Emperador. El visitador inició sus conclusiones con el reproche de su inhabilidad para reformar la audiencia y castigar los notorios excesos de sus oficiales <sup>181</sup>.

---

se hazen es más por forma q. no por descargo de la real conçiencia de V. Mt. q. pasando de una visita a otra diez años y siendo los officiales más de quatroçientos y auñiéndose de ynquirir así de los excessos dellos como de lo q. conuemia al buen gouiermo de la audy[encia] y execución de just[i]cia arya menester más tiempo y q. [e]l visitador anduuiere por todo el distrito de la audy[encia] q. en Vall[adoli]d ni se puede saber ni descubrir verdad y q. [e]l remedio del daño q. se descubriese fuese breue q. quando se viene a ber una bisita ya ay neçesidad de hazer otra y los visitados son muertos o p[ro]ueidos en auentajados lugares y lo q. conuenia en el discurso de la visita p[ro]ueirse después con la mudança de t[ie]m[p]o y costumbres no conuiene. De mi p[ar]te se a p[ro]curado y deseado acertar en esto a s[er]uir a V. Mt. y trabajado q. [e]l efecto correspondiese al crédito q. V. Mt. fue s[er]uido tener en mandarlo. Aliende de lo q. en la relación va se an entendido alg[un]as cosas cuyo remedio es en descargo de la real conçiencia de V. Mt. Quando fuere s[er]uido daré razón dellas». La complacencia imperial con el discurso del visitador se deduce de la respuesta apuntada al margen de la carta de don Diego: «Q. Su Mgd. a mandado ver la r[elaci]ón q. enbió de la visita y q. aq[ue]lla q[ue]l da p[ar]a q[uan]do venga la del q[onse]jo, la q[ua]l p[ro]curará q. se vea con la más breuedad q. se pueda y q. en las otras p[ar]ticularidades q. scriue cerca de la orden q. se debria tener en hazer la visita p[ar]a saberse y aueriguarse mejor la v[er]dad y escusarse los ynconuenientes q. dize que auise... al serfien[s]i[m]o p[ri]ncipe y a los del q[onse]jo lo p[ar]a q. se uea y p[ro]uea en lo de adelante lo q. más conuiynere y q. Su Magt t[ie]ne por çierto q. en lo q. ha sido a su cargo a echo lo q. de su p[er]sona se confia.»

<sup>181</sup> Referencia biográfica de don Miguel Muñoz, en MARTÍN POSTIGO, M.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup>, *Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1982, pp. 44-45. Natural de Poyatos, en el obispado de Cuenca, ingresó como bachiller en Cánones en el colegio de San Bartolomé en 1521, y ejerció mientras como juez metropolitano. Concluidos sus estudios se desempeñó como oidor de Granada, doctoral de Coria, capellán mayor de la capilla real de Granada y miembro de la Suprema. En 1540, una vez elegido obispo de Tuy, el Emperador le ordenó realizar una visita a la chancillería de Granada y antes de su conclusión ya había recibido nombramiento como presidente de Valladolid, en 1542 [LÓPEZ, M., *Memorias históricas de Cuenca y su obispado*, I, GONZÁLEZ PALENCIA, A. (ed.), Madrid, 1949, pp. 238-239]. Pasó a ser obispo de Cuenca en 1547 al morir Sebastián Ramírez de Fuenleal, a quien también había sucedido en la presidencia del tribunal vallisoletano.



Los cargos contra los oidores se iniciaron contra el doctor Santander, a quien se achacó pasión y favoritismo en su actividad judicial, como se aprecia en el siguiente cargo:

Q. auíendose regebido uno por relator en su sala porq. le fue contrario en una cáthedra se le mostraua indignado y enojado y lo maltrataua de palabra y le demandaua en el relatar algunas cosas q. parecían ser pedidas de industria, p[ar]a tomalle en herrar y p[ar]a turbarlo hasta q. tuuo man[er]a como le fue quitado el offi[ci]o y regebido otro en su lugar q. auía botado por él en una cáthedra, siendo tan ábil el primero y a este seg[un]do faborecía y sobrelleuaua <sup>182</sup>

Con el doctor Santander se inició una larga serie de cargos a diferentes ministros de la audiencia cuya actitud perjudicaba seriamente el ritmo del despacho. Se le acusó de no votar los pleitos y desobedecer al presidente cuando le ordenaba ver algunos en su sala. Semejante acusación se hizo contra el licenciado Castro, sin ser menor la distorsión que causaba en el despacho judicial de la audiencia tanto la tendencia del doctor Santiago a acaparar la vista de procesos, como la desidia del doctor Vázquez <sup>183</sup>. Del resto de los cargos particulares a los oidores destacó la dureza empleada por el doctor Suárez de Toledo como alcalde de la chancillería en cierta causa criminal <sup>184</sup>, pero sobre todo la indulgencia mostrada con oidores patrocinados por Valdés como el doctor Gasca o el doctor Simancas <sup>185</sup>.

El predominio de los cargos generales permite valorar el deseo de restauración forense del príncipe y conocer la despreocupación de los oficiales de la chancillería por el imperio de la justicia, si bien el visitador también estuvo animado en esta parcela por una intención política manifiesta en el hecho de que formuló casi la mitad de los setenta

En la segunda asamblea del Concilio de Trento, Diego Hurtado de Mendoza se inclinó, entre otros candidatos al cardenalato, por Miguel Muñoz (MARÍN OCETE, A., *El arzobispo don Pedro Guerrero y la política conciliar española en el siglo XVI*, Madrid, I, 1970, p. 227). Murió en Valladolid el 8 de septiembre de 1553, ejerciendo desde entonces la dirección de la audiencia el oidor decano. Cfr. asimismo CARABIAS TORRES, A. M., «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé (siglo XVI)», *Salamanca. Revista Provincial de Estudios*, núms. 18-19 (1985-1986), p. 237.

<sup>182</sup> Los cargos concluidos por Diego Fernández de Córdoba se hallan en AGS, E., leg. 89, núm. 139. Al doctor Santander por lo demás le caracterizó su querencia por otras plazas como una cátedra de vísperas de la universidad de Valladolid, referida en el texto, de cuya oposición sólo le apartó una tajante orden del príncipe en 1548, o una canonjía obtenida en 1551 (DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, C., *op. cit.*, pp. 47-48).

<sup>183</sup> Diego de Córdoba inició sus cargos contra el doctor Vázquez, de la siguiente manera: «q. a sido muy descuidado y por no trabajar se a tenido a lo q. votan sus compañeros muchas vezes sin auer entendido el proceso y juntándose p[ar]a ver en particular el alguna p[ar]te por él y por sus compañeros algunos procesos se echaua a dormir diziendo q. el se contentaua con lo q. sus compañeros hiziesen y lo firmaría» (AGS, E., leg. 89, núm. 139).

<sup>184</sup> «Q. siendo alcalde en una causa criminal siendo recusado por un preso pasando por la cárcel le dixo enojado: recusáisme yo os doy por ydo y asi después fue ahorcado» (*ibid.*).

<sup>185</sup> Al primero sólo se le acusó de no asistir a alguna audiencia, y al segundo acusaciones leves de cariz procesal (*ibid.*).

cargos generales con uso de leyes tan remotas —aunque vigentes— como las Ordenanzas de Medina del Campo (1489) o las Leyes para la brevedad de los pleitos (1502) <sup>186</sup>. La relación se inició con la denuncia del moroso expediente: desatención de la curia en el despacho de los pleitos e inobservancia de los plazos de sentencia fijados en la legislación regia, y continuó con la denuncia de otros vicios que afectaban al despacho forense como la violación del secreto o el capricho de presidente y oidores en el manejo del mismo: expresado en la vista aleatoria de los pleitos, y no por antigüedad. El retraso en sentenciar las causas motivaba que las partes desistieran de seguir su justicia, el volumen de pleitos era excesivo por la tendencia de presidente y oidores por entender de aquellos cuyo conocimiento pertenecía a los alcaldes. Otros cargos se refirieron a su predilección por las causas de ricos, la ignorancia de la vista preferente de las causas eclesiásticas, o la pendencia de la visita de los presos, así como a la desobediencia de la Ordenanza en lo relativo a asiento de las sentencias <sup>187</sup>.

Los alcaldes, los licenciados Francisco de Castilla, Arceo y Palomares, fueron igualmente acusados de desobediencia del asiento obligatorio de las sentencias en el libro de acuerdo, así como de antojo en el expediente desatención por las causas de los pobres <sup>188</sup>.

Los cargos contra los fiscales permiten atestiguar la indefensión de los derechos legales del monarca y la jurisdicción regia. En este sentido es especialmente ilustrativo uno de los cargos formulados contra el doctor Bustamante, fiscal del crimen:

Q. en una causa en q. se pedía se hiziese justicia contra ciertos delinquentes asistía y respondía por la parte acusada anteponiendo lo que no era verdad p[ar]a q. se hiziese lo q. él quería en favor del acusado, mostrándoseles aficionado <sup>189</sup>,

acusación que perjudicaba el amparo regio de la justicia como lo hacía su propensión a delegar en letrados la elaboración de alegaciones <sup>190</sup>. Asimismo, Bustamante fue acusado de demorar los negocios y desatender las diligencias necesarias en las causas fiscales, muchas de las cuales se habían dejado de seguir y permanecían pendientes. Como aludiremos, el impulso que experimentó la carrera de este fiscal pese a estos cargos hace evidente la motivación política de la inspección. De hecho, la conclusión de cargos era en muchas ocasiones el paso previo de la promoción administrativa, para justificar el abandono del organismo inquirido. Por su parte, el licenciado Ibargüen, fiscal de lo civil, fue acusado principalmente de retención de los pleitos y ausencia de las audiencias.

<sup>186</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1006 y 1015.

<sup>187</sup> AGS, E., leg. 89, núm. 139.

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Sus faltas se extendían al terreno amoroso: «q. se encerraua en su estudio con una muger litigante y mandaua q. no entrase ninguno estando allí, y al salir la retoçaua y se sospeçaua mal dello» (*ibid.*).

En cuanto a los relatores, de los cargos generales presentados por Córdoba se concluyó que cobraban derechos incluso por pleitos no relatados, así como cantidades superiores al arancel. Del mismo modo, delegaban irregularmente la relación de pleitos en sus escribientes, o la realizaban en su propia casa. Tales acusaciones permitían dudar de la efectividad del ejercicio judicial, como también lo hacían las formuladas contra los escribanos, quienes modificaban lo sentenciado por presidente y oidores, se ejercitaban en función de la generosidad de la parte y retenían pleitos en connivencia con los receptores <sup>191</sup>.

Las imputaciones también alcanzaron al juez mayor de Vizcaya, el licenciado Arpide, a quien se culpaba de no tener tabla de arancel en la sala de su juzgado, acudir poco a la chancillería y hacer audiencia en el colegio en que residía <sup>192</sup>. La tarea del visitador se completó con la presentación de cargos contra alcaldes de hijosdalgo, notarios, escribanos de provincia y alguaciles <sup>193</sup>. A salvo de la cautela que debe acompañar la atribución de criterios de eficacia al despacho judicial en la edad moderna, hubo circunstancias que autorizan a pensar en esta prioridad. Pues la dilación de las resoluciones de los tribunales distorsionó en numerosas ocasiones el funcionamiento de la Monarquía e impuso la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, la carencia de remeros condujo al Consejo Real a ordenar a los alcaldes de las chancillerías de Valladolid y Granada que ejecutaran las condenas a galeras pendientes <sup>194</sup>.

Por su parte, los escribanos fueron acusados de alterar las ejecutorias <sup>195</sup> y llevar derechos de manera ilegal <sup>196</sup>. Entre las irregularidades de procedimiento más llamativas se encontraban el asiento de sentencias como notificadas cuando aún no se habían

<sup>191</sup> Incluso sus oficiales y criados pedían albricias a las partes cuando recibían sentencia de su agrado (*ibid.*).

<sup>192</sup> *Ibid.* Se trata de Juan Martínez de Arpide, colegial de Santa Cruz desde 1543 (CUARTERO Y HUERTA, B., y VARGAS ZUÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. de, marqués de Siete Iglesias, *Índice de la colección de don Luis Salazar y Castro*, 21, p. 226. Detalles de su labor judicial en la chancillería, en LABAYRU Y GOICOECHEA, E. B. de, *Historia General del Señorío de Bizcaya*, Bilbao, 1968, p. 384.

<sup>193</sup> AGS, *ibid.*

<sup>194</sup> AGS, E., leg. 92, núm. 10, consulta del Consejo al príncipe: «Después acá, theniendo rrespeto al yntento de v. a. se a probeido que los al[ca]ldes de las audiencias rreales de Granada y Valladolid y las otras justicias del reyno con toda breuedad despachen las cabsas de los que están condenados para galeras e de los que conforme a las cartas que están dadas se an de condenar a ellas y que luego den horden como se enbien y con esto pareçe que se probee algo de la neçesidad que ay de rremeros». Al margen, se anotó por orden de don Felipe: «está bien y tengan esp[eci]al cuydado de q. se cumpla y execute».

<sup>195</sup> «Q. después de pasadas y firmadas las ex[ecutoria]s por pre[siden]te e oidores an sacado y metido pliegos en ellas añadiendo e menguándolas» (AGS, E., leg. 89, núm. 139).

<sup>196</sup> «Q. en sus casas se an lleuado dos y tres reales y un real más y menos por buscar los proçesos oluidados y lo an uisto ellos y aunq. no los hallen», o bien «Q. dizen a la p[ar]te que pide la ex[ecutoria] pagad bien su trabajo a Fulano q. la escribe porq. os despache breuemente y desta manera lleuan a las p[ar]t[e]s muchos derechos demasiados». El tercer cargo que se les realizó fue no anotar sus derechos en los procesos; a él siguieron otros por desobediencia del arancel de Molins de Rei. Incluso sus propios oficiales y criados habían pedido albricias a las partes cuando se daban las sentencias en su favor (*ibid.*).

emitido, ausencia de sus escritorios, letra poco clara... Asimismo, retenían los negocios a ruego de los receptores <sup>197</sup>, e incluso se dieron comportamientos guiados por la codicia que provocaron grave retraso en el expediente:

Q. alargan las ex[ecutori]as por llevar más derechos de q. se causa gastos y costas a las p[ar]t[e]s poniendo muchas scripturas y autos q. no auía neçesidad de ponerse imp[er]tinentes y no ponen los renglones y parte q. manda la ordenança <sup>198</sup>.

La misma división en cargos procesales y arancelarios puede aplicarse para conocer cómo afectó la inspección a los escribanos del crimen. La relación se abría culpándolos de delegar en sus oficiales la toma de informaciones, falta tan grave como no incluir traslados de las escrituras originales en los procesos, faltar de sus escritorios... No era inusual que este comportamiento redundara en un retraso del despacho, dado que no solían dar en plazo los procesos fiscales a los relatores.

En cuanto a culpas económicas, entre otras cobraban a uno y dos reales los pleitos no fenecidos ni olvidados; percibían contra la ordenanza los derechos de vista antes de llevar los procesos al tasador; hasta triplicaban los cuatro maravedís que debían recibir por tomar declaración a imputados e incluso sus oficiales cobraban con su conocimiento por el traslado de las peticiones <sup>199</sup>.

A su vez, los cargos generales presentados contra los notarios del reino, el licenciado Verdugo (notario de Toledo), el licenciado Arrieta (notario de León) y el doctor Espinosa (notario de Castilla), consistían en la no celebración de audiencias ordinarias y la obtención de gruesas cantidades por el despacho de documentos (entre 12 y 24 mrs.) <sup>200</sup>.

Los seis escribanos de provincia recibieron también cargos procesales, y por otra parte arancelarios: respecto a los primeros, habían delegado en sus oficiales la toma de testigos de las probanzas; desatendían las determinaciones de los alcaldes, y habían dado mandamientos en blanco a los tratantes y merchanes válidos para las cinco leguas, gracias a las cuales emplazaban sin notificación; sacaban las rebeldías de los registros sin presencia de las partes y faltaban en ocasiones a la visita de la cárcel. Mayor relevancia tenían las culpas económicas, dado que prescindían del arancel y recibían lo que las partes estuviesen dispuestas a pagar <sup>201</sup>. Asimismo, no apuntaban en los procesos los

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> «Q. no an guardado el aranzel e no hazen sino dezir dad acá dos o tres reales o más de qualquier cosa q. ante ellos se haga sin saber de q. ni dan razón dello a las p[ar]t[e]s sino q. lleuan los d[e]r[e]chos q. quieren e dizen dad lo q. quisiéredes y así lo lleuan» (*ibid.*).

derechos percibidos y no despachaban con tanta diligencia a los pobres como a quienes les pagaban <sup>202</sup>.

La sensibilidad del expediente de la chancillería a la actuación de sus ministros se advirtió igualmente en la forma en que se vio afectado por la labor de oficiales de tan poca jerarquía como los receptores del primero y segundo número. Su tendencia a acumular negocios para partir había propiciado que a muchas partes se les pasaran los plazos. Igualmente, alargaban las probanzas de los negocios y ponían en ellos cosas impertinentes por llevar más derechos <sup>203</sup>.

Tan enfadosa relación de cargos se hacía necesaria para certificar la aptitud visitadora de don Diego de Córdoba, tanto como las limitaciones que por entonces afectaban al ejercicio judicial. La fundamentación de la actividad forense en las relaciones personales debilitaba la entidad institucional de los organismos de justicia y con ello la tangibilidad de sus resoluciones. Consciente de esta restricción y del océano de arbitrariedades que afectaban al manejo judicial, el príncipe sancionó medidas inspectoras que redujeran la sujeción de los tribunales a los intereses individuales, situación que consideraba contradictoria con la imagen que deseaba dar de su inminente monarquía. Propósito importante de tales medidas fue la limitación del arancel, síntoma perceptible e inmediato de la dimensión que aspiraba dar a la reconstitución judicial, en forma de acceso del pueblo a la tutela de los tribunales. Con todo, el proceso de visitas no escapó al régimen político de la monarquía corporativa y quedó sometido al juego de los grupos de poder cortesanos, de suerte que respondió al doble impulso funcional y faccional que pretendemos subrayar aquí. Testimonio de la tensión cortesana fue sin duda la proposición de don Diego por el Emperador para formar parte del acompañamiento de su hija doña María cuando pasó a Austria en 1551, en funciones de capellán mayor <sup>204</sup>. Si bien fue elegido otro candidato y don Diego pudo concluir los cargos de los que hemos hecho detallada relación.

Igualmente, la coyuntura política de la corte explica que, aun antes de ser presentados sus descargos por los oidores, el inquisidor general Valdés consiguiera la promoción

<sup>202</sup> Por lo demás, llevaban dos mrs. por hoja cuando entregaban el proceso a las partes para realizar el interrogatorio, cuando no debía ser cantidad ninguna; y doce mrs. y medio real por el asentamiento de sentencias sin deber ser sino seis mrs., conforme al capítulo 11 de arancel de Molins (*ibid.*).

<sup>203</sup> *Ibid.* los receptores en las audiencias, tribunales de adelantamientos y los de la corte, eran competentes en los mismos asuntos que los escribanos de Cámara, asistían a la sustanciación de los juicios, escribían las declaraciones de los testigos, recibían las peticiones, elaboraban los autos, expedían los despachos y provisiones. Pero les diferenciaba la circunstancia de que ejercían tales funciones a distancia del tribunal al que estaban adscritos (MARTÍNEZ GIJÓN, E., «Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna», en *Centenario de la ley del Notariado. Sección Primera. Estudios Históricos*, Madrid, 1964, I, pp. 289-292).

<sup>204</sup> En carta del Emperador a su hija desde Augsburgo, el 12 de marzo de 1551, se lee: «En lo del capellán mayor, porque siempre me han puesto escrúpulo en tenerlos absentes de sus iglesias, ha parecido que bastaría un clérigo de calidad, letras e honestidad, e discurriendo por algunos se han nombrado a don Diego Tauera e don Diego de Córdoua, ambos del Consejo de la Santa Inquisición, e don Diego de Córdoua, hijo del conde de Alcaudete, e don Pedro Sarmiento, prior del Burgo de Osma, entre los quales podréis

de miembros de la chancillería a importantes plazas, de los que había recibido informes confidenciales por parte del visitador. En el momento de la inspección había importantes vacantes que se deseaban cubrir con rapidez: dos plazas de oidores del Consejo Real, una plaza de alcalde de corte y otra de fiscal. Entre otros candidatos, Valdés propondría de la chancillería para las primeras vacantes al licenciado Castro, al doctor De la Gasca y al licenciado Villagómez; a éste y a su compañero el doctor Vázquez para la alcaldía de corte, y a los dos fiscales para la fiscalía vacante en el Consejo<sup>205</sup>. Síntoma de la vitalidad del inquisidor general en la corte no fue sólo la designación para el Consejo en marzo de 1552 del doctor De la Gasca (a quien acompañó otro oidor de Valladolid, ausente en Trento, el doctor Velasco) y del doctor Bustamante para ocupar la fiscalía en el Consejo Real, pese a los cargos que le fueron formulados en la visita. Además, en la vista de esta última en el Consejo tendrían honda participación los oidores recién llegados de la chancillería de Valladolid, convirtiéndose así en jueces de la inspección de la que habían sido objeto<sup>206</sup>. De momento, el inquisidor general mostró contar con recursos para someter el proceso visitador a su interés político, si bien la situación cortesana cambiaba rápidamente y, como veremos, una nueva provisión de plazas a finales de 1553 se sujetó al resultado de la visita a la chancillería.

Poco después, el cuerpo de la audiencia presentó descargos a las acusaciones formuladas por Diego de Córdoba. Ante la acusación de no reformar la audiencia e ignorar los excesos de los oficiales, Miguel Muñoz aclaró que entre sus atribuciones no estaba la reforma del tribunal y que había mostrado mayor diligencia que sus predecesores, «viendo por mi persona todas las executorias que se libravan en todas las salas, contando partes y renglones, y dando orden como no se pusiessen cosas superfluas... y visitando continuamente las más de las semanas los pressos y cárcel...»<sup>207</sup>. El licenciado Ordoño y el doctor Santander, los oidores que padecieron más intensamente la inspección, presentaron los descargos más contundentes. El primero achacó el celo del visitador a su deudo con el duque del Infantado, contra quien el oidor había ejecutado cierto

---

escoger el que será más a propósito...» Este último fue el finalmente elegido (AGS, E., leg. 646, s. f., pub. en CDCV, III, doc. CDLXXXV, p. 263).

<sup>205</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 129, el presidente afirmó, mostrando tanto la relación estrecha con Diego de Córdoba como la virtualidad de la visita para captar letrados favorables, que «yo he visto los cargos que se les hazen e no ay contra ellos cosa que sea de inportancia». Sólo el visitador pudo darle sus conclusiones de la inspección, o cualquiera de sus contactos en el seno del Consejo: Garriga afirma que «no había cauce institucional por el que Valdés debiera conocer las actas de la visita» (*op. cit.*, p. 1020).

<sup>206</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1019-1020. Sendas biografías de Gasca y Velasco en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V*, III, pp. 158-161 y 456-458. Fueron nombrados el 28 de marzo, en Insbruck, como también lo fue el fiscal, doctor Luis Sanz de Bustamante (*Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. José María Huet. El día 30 de junio de 1867*, Madrid, 1867, p. 61; GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988, pp. 226-227).

<sup>207</sup> Finalmente, se defendió de la acusación de permisivo con las irregularidades. Los cargos y descargos de Miguel Muñoz se contienen en AGS, CC, leg. 2712; el descargo principal del presidente ha sido publicado por GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1049-1050; cfr. asimismo *op. cit.*, p. 1015.

pleito con la villa de Madrid. El segundo, acusado principalmente de haber roto en los estrados un memorial de la reina de Bohemia, tachó de confusos y generales los cargos formulados por el visitador, respuesta común entre los inquiridos. En cuanto a los descargos generales, el cuerpo de la audiencia no se preocupó en detallar respuesta y se limitó a afirmar que habían respetado las leyes que regulaban el funcionamiento de la audiencia y a mostrar solidaridad con el presidente.

Una vez presentados los descargos por los componentes de la chancillería, don Diego dio por acabada la visita, si bien en los meses siguientes finalizó cuestiones pendientes y algunos visitados acudieron al Consejo Real para continuar su defensa, caso del licenciado Alemán, relator, quien presentó entre noviembre y diciembre de 1552 nueva relación en su descargo<sup>208</sup>. Como hemos visto, la visita llevaba en el Consejo desde junio, donde la presentó don Diego después de dieciséis meses de profundo trabajo inquisitivo, pero el Consejo no comenzó a verla hasta entonces. Testimonio del interés del príncipe Felipe en la conclusión de determinaciones que modificaran el funcionamiento y composición de la audiencia fue que poco tiempo después del comienzo de la vista en el Consejo, ordenó darle mayor intensidad. El 20 de noviembre de 1552, don Felipe se dirigió al organismo en aprobación del comienzo de la vista<sup>209</sup>; tan sólo ocho días después, dispuso el aumento de las sesiones extraordinarias dedicadas a la misma<sup>210</sup>. El inmediato sometimiento del Consejo Real y la justicia cortesana a la inspección respectiva y simultánea del príncipe y el propio Diego de Córdoba (que no tardaremos en abordar), mientras se trataba en el primero la visita de Valladolid, pretendió evitar dilaciones en la vista de esta última; así como la expansión de la revisión administrativa y recompensar la satisfacción que Diego de Córdoba causó en el príncipe, tanto por la instrucción en sí de la visita como durante las reuniones que motivó entre ambos<sup>211</sup>.

La consideración de la visita en el Consejo contó con la presencia de Diego de Córdoba y de su secretario Alonso de Mariana. La atención de los oidores por la misma fue irregular, a causa de la presencia del príncipe en las cortes de Monzón durante

<sup>208</sup> Todo lo expresado en GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1010 y 1015-1018.

<sup>209</sup> AGS, E., leg. 92, núm. 60, billete del príncipe al Consejo de 20 de noviembre de 1552: «Presidente y los del Consejo de la cathólica reyna y emp[er]ador y rey mis señores. Ví lo q. me consultastes (*sic*) a seis del presente y está bien hauerse comenzado a ver la visita de la chançill[er]ía de Val[lado]lid. Continuarlo eis hasta q. se acabe y consultarmeis lo q. della resultare conforme a lo q. os tenemos escripto.»

<sup>210</sup> El 28 de noviembre de 1552, el príncipe escribía desde Monzón al Consejo Real: «Don Diego de Córdoba del Consejo de la Inquisición ha s[er]c[i]pto q. la visita que él hizo en la audiencia de Val[lado]lid la hauéis empeçado a ver y señalastes para ello las tardes del jueves y viernes de cada semana. Y porq. si no se le diesse más tiempo parece q. tardaría mucho en acabar de ver y holgaría q. con breuedad se hiziese os encargo y mando q. también señaléis las tardes de los martes de manera que cada semana se ocupen estas tres tardes en ver la d[ic]ha visita q. en ello seremos seruido...» (*ibid.*, núm. 62).

<sup>211</sup> En prueba de la satisfacción del príncipe con el trabajo de Diego de Córdoba, en una relación de personajes que esperaban merced apareció «el liçenciado don Diego de Córdoua, del mismo Consejo (Inquisición), que ha seruido en la visita de Sicília y en la visita de Val[lado]lid y no se le ha hecho ninguna m[e]r[c]e» (AGS, E., leg. 13, núms. 183-184).

el último semestre de 1552, y quizá con ánimo de agilizar la vista don Felipe comprometió a Córdoba en 1553 en la aludida inspección del Consejo Real y la justicia cortesana.

La coexistencia de propósito faccional y funcional en la visita de la chancillería afectó también a la forma de tramitación de la misma en el Consejo, de tal manera que hasta agosto de 1553 se entendió de lo relativo a las culpas averiguadas contra los ministros de la audiencia (etapa en la que los consejeros procedentes de ella mitigaron los efectos contra los protegidos de Valdés), y desde entonces de la elaboración de capítulos procedimentales que mejoraran el funcionamiento de la chancillería, los cuales se promulgaron en marzo de 1554<sup>212</sup>

En cuanto a la sentencia de los ministros de la chancillería, el equilibrio político existente en el Consejo supuso que no se acordaran penas graves contra ningún oidor de Valladolid, si bien dos de ellos merecían reprobación concreta: el doctor Santander y, especialmente, el licenciado Ordoño. El primero fue declarado culpable de mostrarse favorable a las partes en los estrados, actuar de forma arbitraria con los oficiales y, sobre todo, maltratar a los pleiteantes y denegarles audiencia, conducta que para el Consejo era grave<sup>213</sup>. En opinión del organismo, el licenciado Ordoño también había incurrido en responsabilidades procesales, asimismo por maltratar y denegar audiencia a los pleiteantes, y sobre todo por mostrar parcialidad en el pleito entre la villa de Madrid y el real de Manzanares<sup>214</sup>. Pese a todo ello, la sanción fue liviana, y ambos oidores sólo fueron obligados a comparecer ante el Consejo para recibir reprensión y apercibimiento de enmienda con amenaza de remoción. Tal ligereza se extendió a los doctores Santiago y Suárez, quienes fueron reprendidos y advertidos para lo sucesivo, y al licenciado Castro, sólo reprendido, si bien este último, como el doctor Vázquez y el propio licenciado Ordoño, fueron obligados a resarcir a los particulares perjudicados por su actuación irregular. En todo lo demás, el Consejo Real dio por libres a los oidores.

Con todo, el Consejo no se limitó a entender de las conclusiones alcanzadas por Diego de Córdoba, sino de la actitud de resistencia mantenida por los oidores en el curso de su inquisición. Reprendió duramente a los responsables, en especial la maniobra de recurrir ante otra autoridad para desautorizar al visitador. El organismo consideró grave la soltura del doctor Santander en sus descargos, y la actitud del doctor Suárez de Toledo, quien reveló el contenido de los cargos, prendió a un testigo y se descargó ante persona distinta que el visitador. El licenciado Ordoño y el doctor Santiago también merecían reprimenda por su descomedimiento en la respuesta, y el doctor Vázquez

<sup>212</sup> AGS, CC, leg. 2711, y GARRIGA, C., *op. cit.* III, pp. 1021-1023.

<sup>213</sup> Sus cargos se contienen en AGS, CC, leg. 2715, y sus pobres descargos en *ibid.* leg. 2714 (*op. cit.*, p. 1027).

<sup>214</sup> A estos cargos se añadieron otros seis, posteriores a la finalización de la visita, que le enredaban en lios de faldas. Sus doce cargos se contienen en AGS, CC, leg. 2715, y los descargos, en *ibid.* leg. 2712 (*cit. en op. cit.* p. 1028).



por hacer información para su descargo ante un alcalde<sup>215</sup>. Ante lo expuesto sobre los resultados de los cargos formulados por Diego de Córdoba y estas culpas paralelas, se concluye que el equilibrio cortesano menguó la materialización política de la visita, que como veremos se distinguió sobre todo por un resultado funcional.

En cuanto a los oficiales de la chancillería, las consecuencias punitivas de la visita también fueron escasas. Como resultado de su incompetencia y maldad el bachiller Santisteban fue privado de la relatoria de Vizcaya y se ordenó al juez mayor que hiciera justicia a los particulares dañados por su actuación. Asimismo, el licenciado Alemán, inculcado de parcialidad y recepción de presentes, fue suspendido por seis meses y condenado a 15.000 mrs. a repartir entre la cámara y los pobres. Del resto de los oficiales, atrajeron en especial la atención del Consejo los escribanos, sancionados mayoritariamente con reprensión, apercibimiento y pena pecuniaria por los excesos cometidos en inobservancia del arancel de Molins de Rei. Entre los relatores, el licenciado Figueroa fue multado por su afición al juego y su desabrimiento con los negociantes. Si bien también hubo oficiales especialmente beneficiados de la actividad de Diego de Córdoba, dado que el licenciado Sanjuán fue repuesto en su cargo de relator<sup>216</sup>.

Una vez culminada la vista de la inspección en la parte de potencial repercusión política, el Consejo Real pasó a considerar medidas para mejorar el precario ejercicio judicial que se deducía de la visita de Diego de Córdoba a la chancillería, para lo que además se consultó a los propios ministros de la audiencia<sup>217</sup>. Resultado de esta labor fueron unos capítulos generales, incluidos en la recopilación legislativa del tribunal que tiempo después se hiciera<sup>218</sup>.

Tales capítulos cubrieron todos los oficios del tribunal, y traslucieron la interpretación por Diego de Córdoba de la voluntad del príncipe de fortalecer la organización judicial. La mayor parte de los capítulos recogidos en la normativa sancionada encomendaban a los oficiales un ejercicio diligente y el cumplimiento de las disposiciones previas que hubiesen sido inobservadas. Un segundo grupo de disposiciones se centraron en lo que Garriga ha llamado régimen jurídico de la chancillería, resultantes en su mayoría de la consulta que el Consejo hizo al Rey sobre la visita. El objeto de los capítulos generales dictados el 16 de marzo de 1554 fue la rectificación y mejora del funcionamiento de la chancillería, que pasó en primer lugar por el acrecentamiento de otra plaza de alcalde. Encomendaron ante todo la prontitud de los jueces, al disponer por ejemplo que los alcaldes sólo dedicaran dos tardes a la semana a la visita de presos, y reservaran las demás para las audiencias civiles. Igualmente, las ausencias de los alcaldes

<sup>215</sup> Las anteriores conclusiones del Consejo en *op. cit.*, pp. 1029-1032.

<sup>216</sup> *Op. cit.*, pp. 1040-1044.

<sup>217</sup> *Op. cit.*, p. 1024.

<sup>218</sup> Real Cédula de la Chancillería de Valladolid, 16 de marzo de 1554, contenida en *Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid*, 1765, fols. 227v-235v.

serían cubiertas por el oidor más reciente, como se impuso en la chancillería de Granada en 1549 y se practicaba en el propio Consejo Real, con lo que se mostró cierta tendencia a la homologación organizativa de la cúspide del entramado judicial<sup>219</sup>. Por su parte, los fiscales fueron obligados a seguir conjuntamente los pleitos especialmente graves.

Igualmente, con propósito de hacer más eficaz el despacho, el acuerdo general vio aumentadas sus atribuciones reguladoras en perjuicio de las salas y se arbitró un modo de solucionar las diferencias entre oidores y alcalde por la definición civil o criminal de los pleitos, mediante la reunión de una comisión formada por el presidente, un oidor y un alcalde. Finalmente, se tendió a conjugar la brevedad con la imparcialidad en el trámite de los procesos. También reclamó el interés de esta legislación el despotismo mostrado por los alcaldes en el ejercicio de la justicia criminal<sup>220</sup>.

Como resultado de la labor de don Diego quedó afirmado un sistema de control del funcionamiento propio de la chancillería que hubo de ser muy valorado por el príncipe. Independientemente del respeto que se guardara por él, por una parte estuvo constituido de un desarrollo de los dispositivos fiscalizadores ya existentes. Por otro lado, se asimiló el régimen de la *visita* y juicio de residencia en la organización interna de la audiencia.

La regulación instaurada por el visitador estableció que los alcaldes visitaran anualmente a los escribanos del crimen y de provincia, con sus oficiales; a los tenientes de alguaciles, así como a los procuradores, porteros y emplazadores, con envío de relación al Consejo. Excepcionalmente, los alguaciles del campo quedaron sometidos a residencia pública, que los alcaldes debían tomarles. De forma simultánea, también se encomendó a presidente y oidores el control por visita de los oficiales de la audiencia. Al comienzo de cada año, nombrarían un oidor que informara de cómo ejercían los oficiales, y asimismo enviarían relación anual al Consejo. Asimismo, junto al establecimiento de sanciones por la inobservancia de disposiciones, o el endurecimiento de las existentes, se insistió en el reparto igualitario de los procesos, el control de las distintas actuaciones y la elección cuidadosa de los oficiales. Tras dedicar numerosos puntos a reprimir las prácticas viciosas de los oficiales, uno de los últimos capítulos ordenaba remisión anual al Consejo de certificación sobre aquellos que se considerasen de difícil cumplimiento, bajo supervisión directa del presidente<sup>221</sup>.

Pese a su discreción y —a juzgar por el desinterés mostrado por casi todos los autores— poco calado, cabe destacar la trascendencia de la comisión realizada por Diego de Córdoba tanto en un sentido administrativo como faccional. Como apunta el historiador de esta visita, de la labor de don Diego de Córdoba se dedujo que las irre-

<sup>219</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, pp. 1035-1036.

<sup>220</sup> *Op. cit.*, pp. 1037-1039.

<sup>221</sup> *Op. cit.*, pp. 1048-1049.

gularidades cometidas por los ministros eran consustanciales a los oficios y ajenas en lo esencial a sus titulares. En nuestra opinión, ello correspondía a un sistema político y administrativo basado en las relaciones personales entre *patrón* y *cliente*, en el que las decisiones manaban de este cauce y distaban de resultar del funcionamiento normalizado de un organigrama administrativo rígido y jerárquico <sup>222</sup>.

La entidad de esta circunstancia, y el límite que imponía al ejercicio gubernativo y contencioso anhelado por el príncipe en su acceso al trono, tuvo como primera consecuencia la designación del propio Diego de Córdoba para continuar la indagación administrativa. Dado que no existían razones para pensar que en el Consejo Real la situación fuese distinta (más bien al contrario), se cometió averiguarlo al experimentado visitador, pese a su distancia ideológica con los ministros instalados en la confianza del príncipe desde el viaje de 1548. Las numerosas voces de distinta ubicación política que clamaban por la visita del Consejo Real —de las que nos ocuparemos cumplidamente— debieron quedar confirmadas a ojos del príncipe, cuando el organismo quitó importancia a las irregularidades halladas en la chancillería, en especial a las económicas. El tribunal debió temer que éstas atrajeran la curiosidad del príncipe sobre el Consejo Real y con ello peligrara la constelación de derechos ilegalmente cobrados en su seno por una legión de oficiales. Y por eso quitó hierro al desprecio del arancel por parte de los oficiales de la chancillería:

Otras cosas resultan contra oficiales y personas que residen en aquella audiencia de poca calidad e menudas, que por no dar ynportunidad a vra. Alteza no se refieren, de que serán reprehendidos y amonestados como conviene, para que adelante aya la henmienda neçesaria <sup>223</sup>

Como cabía esperar, con ello multiplicaron el ánimo inquisitivo del príncipe, quien cometió la fiscalización de los manejos de los oficiales de la corte a quien tanta exacción ilegal descubriera en la audiencia. La fisonomía institucional de los tribunales era tan débil, que cuando el príncipe mostró determinación de hacer de la justicia señal de su acceso al trono, tuvo que someter a visita los principales foros para dotarlos de cierta consistencia.

Los resultados políticos de la inspección de Diego de Córdoba a la chancillería no se limitaron a las promociones consumadas en 1552. A finales del año siguiente

<sup>222</sup> El fenómeno posee mayor complejidad que la «corrupción institucionalizada» definida por Garriga, si bien es cierto su diagnóstico acerca de que «la visita reveló cómo la negligencia, la codicia del *interese* y, en general, el comportamiento antijurídico de los oficiales se hallaba tan generalizado que había llegado a vertebrar el funcionamiento ordinario de los oficios» (GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 1045). El *interese*, definido por Covarrubias como «el provecho, la utilidad, la ganancia que se saca o espera de una cosa», COVARRUBIAS, S. de, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Barcelona, 1998 (ed. facsímil de la de Barcelona de 1943, p. 739).

<sup>223</sup> GARRIGA, C., *op. cit.*, p. 1047, quien alude a ciertas alteraciones en este fragmento.

volvió a plantearse la necesidad de cubrir vacantes, caso de la presidencia de la propia chancillería por muerte de Miguel Muñoz el 8 de septiembre, para la que se propuso a los obispos de Astorga y León y a los consejeros de Inquisición Diego Tavera y Diego de Córdoba, quien «también es letrado y tiene experiencia y a sido visitador de la d[ic]ha audiencia»<sup>224</sup>. Así como de dos plazas en el Consejo Real (por el doctor Castillo de Villasante y el licenciado Pedro Mercado de Peñalosa), para las que se consideró candidatos al licenciado Pedrosa, del Consejo de Órdenes, y al licenciado Castro, oidor de Valladolid, que con anterioridad renunció a servir en el Consejo de Órdenes, y había servido como juez de residencia en Toledo. También fue nombrado el doctor Vázquez, oidor de Valladolid, pero sus deudos en el Consejo Real hacían recomendable su paso al Consejo de Órdenes. Al mismo tiempo se hallaba vacante la alcaldía de corte ocupada por Ronquillo, para la cual se propuso el licenciado Muñoz, oidor de los grados y los alcaldes de la chancillería de Valladolid don Francisco de Castilla y el licenciado Palomares<sup>225</sup>.

Cuando el Emperador fue consultado sobre el particular, decidió remitir los títulos en blanco al príncipe, y le avisó que no sería adecuado proveer las plazas hasta conocer el resultado de la *visita* a la audiencia<sup>226</sup>. Así se procedió, y la mayoría de las vacantes se cubrieron al tiempo de conocerse los resultados de la inspección. El doctor Suárez de Toledo y el licenciado Villagómez fueron promovidos a una alcaldía de corte y al Consejo de Indias<sup>227</sup>. Poco después, en mayo, el licenciado Castilla, alcalde de la chancillería, accedió a una de la corte<sup>228</sup>. La visita de Diego de Córdoba a la audiencia tuvo un significado positivo de reclutamiento de letrados, en que hasta el momento

<sup>224</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 170; MARTÍN POSTIGO, M.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> *Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1982, p. 44.

<sup>225</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 162, s. f., pero datable a finales de 1553, dado que el consejero Mercado había fallecido en agosto. Relaciones biográficas de Castillo y Mercado en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V*, III, pp. 82-84 y 282-283.

<sup>226</sup> AGS, E., leg. 508, núm. 88, Carlos V al príncipe Felipe, Bruselas, 13 de marzo de 1554: «Por no tener acá relación de las consultas de las visitas, me ha parecido remitiros la provisión de plaças del conseio u alcalde de corte y chancillería y las que desto dependieren y ban los títulos firmados en blanco; nombraréis las personas, los mandaréis henchir y que se den a las partes, y avisarme eys de los que fueren proveydos» (En CDCV, III, doc. DXCIX, p. 667).

<sup>227</sup> GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real*, pp. 148-149; SCHÄFER, E., *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, I, p. 354. Ambos fueron nombrados el 13 de marzo de 1554 (si bien se demoró su toma de posesión, hasta el 17 de mayo de 1555). El primero había ejercido anteriormente como corregidor de Madrid (CORRAL, J. del, «Corregidores y alcaldes de Madrid. Estado de la Cuestión», *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 1996, núm. 36, p. 192) y el segundo había protagonizado un paso fugaz por la alcaldía mayor de la cuadra de Sevilla (AGS, EMR, QC, leg. 5). El mismo día 13 de marzo habían sido provistas las plazas del Consejo Real en el licenciado Pedrosa y el doctor Fernando Cano (GAN, P., *ibid.*). Asimismo, biografías de Suárez de Toledo y Villagómez en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de (dir.), *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, pp. 485-486 y 513, y III, pp. 326-330 y 77-78, en id. (dir.), *La Corte de Carlos V*.

<sup>228</sup> GAN, P., *ibid.*, nombrado el 15 de mayo, tomó posesión el 21. Desde Valladolid, el 11 de mayo

no habíamos insistido, y cuyo trasfondo faccional se ofrecerá al abordar las determinaciones tomadas por el príncipe antes de partir a Inglaterra, si bien parece menos hostil al inquisidor general Valdés de lo que habíamos supuesto <sup>229</sup>.

Cabe concluir de la visita a la chancillería vallisoletana que confirmó al príncipe la necesidad de extender la inspección administrativa a la cúspide del aparato contencioso representado por el Consejo Real, alcaldes y oficiales de la justicia cortesana. Como veremos, esta inspección se configuraba sometida a distintas influencias políticas, circunstancia común entre las visitas que se demoraban largo tiempo. Pero menos habitual era la manifestación simultánea de direcciones políticas opuestas en el curso de la misma comisión, como era el caso. Dado que desde 1553 el príncipe inquirió el proceder de los ministros con atribución jurisdiccional, mientras don Diego inspeccionaba la labor de los oficiales del Consejo Real y el tribunal de los alcaldes de Casa y Corte. El rango de don Felipe dio ventaja a la tendencia política característica de los ministros elegidos para asesorarle en la toma de decisiones, como Ruy Gómez. Si bien don Diego de Córdoba supo mitigar efectos no deseados por su patrón Fernando de Valdés, cuando con ocasión de la partida del príncipe en julio de 1554, este delegó en él la culminación de la inspección jurisdiccional. Con todo, como venimos indicando el impulso de la revisión administrativa no sólo tenía un motivo faccional y también procedió del deseo de don Felipe de reconstituir la función judicial, pretensión que, como pasamos a analizar, tenía desde largo tiempo antes los alegatos de todos los grupos de poder cortesanos.

## Equilibrio político y clamor por la visita del Consejo Real

De lo expuesto hasta aquí, se deduce que el discurso del Consejo Real en la transición del Imperio a la Monarquía Hispana resultó tanto de la contienda política, como de la convicción general sobre las limitaciones que su inconsistencia orgánica imponía a la materialización de las decisiones gubernativas y judiciales. Este estado de opinión estaba encabezado por el propio príncipe, circunstancia que unida a los sólidos indicios que lo avalaban, canceló las diferencias entre los grupos políticos en este particular,

---

de 1554, Felipe II comunicó a su padre que había provisto otra plaza de alcalde de corte para acompañarle en la jornada que iba a emprender, considerándole «persona suficiente» (CDCV, IV, p. 60).

<sup>229</sup> Finalmente, así quedó compuesta la chancillería al publicarse los capítulos generales: fallecido Miguel Muñoz el 8 de septiembre de 1553, dirigía la audiencia de forma interina el doctor Santander, acompañado del doctor Vázquez, los licenciados Francisco Sarmiento (desde el 10 de noviembre de 1553), Castro, Ordoño, Santillán, Villagómez, Alderete y Gasco, los doctores Simancas, Redín y Suárez de Toledo (sustituido de inmediato por el licenciado Arce de Otálora), Gómez González, los licenciados Juan Zapata y Juan Tomás. Como juez de Vizcaya continuó el licenciado Arpide, y como alcaldes Francisco de Castilla (hasta su mencionado paso al Consejo Real el 13 de mayo), Juan de Vargas, Arce y Palomares. En cuanto a las fiscalías, el licenciado Tovar sustituyó al difunto Ibargüen, y continuó el licenciado Alderete (AGS, CMC, 1.ª época, leg. 1587).

y los alegatos favorables a la visita del Consejo Real superaron las divisiones faccionales. En noviembre de 1550, Gutierre López de Padilla pidió al príncipe Felipe que no olvidara «la justicia y buena gouernación de acá y de los estos sus reinos, mandando bisitar este Consejo y los alcaldes de Corte y oficiales de Contaduría y otros Consejos y ministros de justia...»<sup>230</sup>.

Indicio contundente para matizar el origen que venimos dando a la visita de Diego de Córdoba, exclusivamente en el entorno inmediato del príncipe Felipe, lo constituye el alegato del arzobispo Silíceo para someter el organismo a inspección, con excusa en la remoción que el Consejo ordenó de los vicarios nombrados por el prelado en diferentes obras pías, conforme al Concilio de Trento. El parentesco político entre Valdés y Silíceo resultó patente al menos desde la designación del primero para el arzobispado de Sevilla, pues en la ceremonia de recepción de la plaza, Silíceo había portado el palio con el obispo de Lugo Juan Suárez de Carvajal<sup>231</sup>. Igualmente, cuando el prelado pacense entorpeció la expansión de la Compañía de Jesús en su arzobispado en 1552, Ignacio recurrió al inquisidor general, al corriente de su ascendiente sobre el arzobispo<sup>232</sup>.

En primer lugar, se debe destacar que la elección de Diego de Córdoba para la visita, conocido su paso por el Consejo de Gobernación del arzobispado, representa la influencia del grupo político de Silíceo en su preparación. Por otro lado, el memorial en que el prelado defendía la inspección del Consejo permite advertir cómo intransigencia ideológica y respeto a la jurisdicción papal todavía eran compatibles en Castilla, al faltar el escenario resultante de la conclusión del Concilio de Trento:

... la materia de que al presente trataré en esta carta toca a la honrra de Dios y preheminiencia de su yglesia vniuersal, la qual no se mira por su Consejo Real como sería justo se mirasse...<sup>233</sup>

La circunstancia que permitió a Silíceo debatir la actuación del Consejo Real fue su determinación de anular los nombramientos realizados por el arzobispo, en cumplimiento del mandato tridentino que ordenaba a los prelados la provisión de vicarios en todos los beneficios curados anejos a obras pías, monasterios, colegios y hospitales, con asignación aproximada de la tercera parte de la renta. A petición de estos institutos, el Consejo Real exigió a Silíceo remover a los propuestos, dado que su determinación

<sup>230</sup> AGS, E., leg. 81, núm. 318, doc. cit. por CARLOS MORALES, C. J. de, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Junta de Castilla y León, 1996, pp. 66-67, así como por DIOS, S. de, *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca, 1986, p. XXXIV, quien lo atribuye al conde de Buendía.

<sup>231</sup> GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568)*, I, Oviedo, 1968, pp. 312-313.

<sup>232</sup> MHSI, *Epistolae et Institutiones*, IV, epístola 2304.

<sup>233</sup> AGS, E., leg. 89, núm. 57, carta de Silíceo al príncipe Felipe, 11 de noviembre de 1552.

modificaba la relación entre la jurisdicción episcopal y la temporal. El arzobispo envió a un oidor de su Consejo ante el organismo, que adujo la obediencia debida al Emperador para ignorar la actuación del prelado <sup>234</sup>. No por ello este removió a los vicarios nombrados y en su descargo adujo sus diferencias con el presidente Niño y la inclusión de materia tan sensible entre las muchas cuestiones rutinarias sometidas al Consejo <sup>235</sup>.

Pero entreverado con el suceso y su trasfondo faccional, en el alegato de Silíceo emergieron las dudas dominantes en la corte acerca de la adecuación del Consejo Real y los cimientos tradicionales de su autoridad —la infalibilidad y autoritarismo de sus decisiones, extendidos del Rey— con la situación administrativa. Acusó tanto al Consejo como a otros tribunales de practicar procedimientos inadecuados:

... De aquí naçe que muchas cosas se hazen assí en el Consejo Real como en las Chancillerías ynjustas no mirando como se deue mirar con muchos ojos lo que proueen y ya que la primera prouisión sea ynjusta mayor ynjusticia es quererla llevar adelante, que o reuocarla o suspenderla, porque no son dioses para que no puedan errar. *Y de aquí naçe que en España se quexan muchos por no mandar Su Magt. del emperador N. Sr. tomar residencia al dicho Consejo Real y a los demás que están en su corte y a los alcaldes y apossentadores y otras personas que son así esentas, que sabiendo cómo no se les ha de tomar residencia salen con todo lo que quieren justo o ynjusto.* Aliende de lo que tengo dicho no sé cómo se puede saluar que las personas particulares del Consejo Real confiessen después de auer venido la consulta que lo que yo he hecho es justo y sancto y que ellos no son parte... <sup>236</sup>

El arzobispo continuó con queja sobre que el Consejo había deshecho todo lo pro- visto por él y retornado a su lugar a los mercenarios designados por los colegios y otros lugares píos <sup>237</sup>, determinación que para Silíceo no sólo era contravención del Concilio, sino rayana en la herejía. En su opinión, se trataba de una *fuerza* contra la autoridad eclesiástica impropia de una corona cuya grandeza se basaba en el respeto de las determinaciones papales <sup>238</sup>. Las razones del arzobispo llegaron al ánimo de su

<sup>234</sup> «... los oydores le dixerón que el concilio hera sancto y lo en él contenido, digno que se cumpliese, todo lo decretado y que ellos confessauan ser justas y sanctas todas las prouisiones que yo hauía hecho y que ellos no hean parte para deshazer ni ynpedir, lo que por mí estaua proueydo...» (AGS, *ibid.*).

<sup>235</sup> «... porque como algunas vezes he dicho y escripto a V. Al., el patriarcha presidente del dicho consejo me fue siempre contrario tengo sospecha que o él solo o el consejo persuadido por él escriuieron a Su Magt. que sería bien mandase sobreseer en esta causa y estando en tan graues negoçios ocupado Su Magt. es de creer que se remitió a ellos y por tanto el dicho consejo está en su porfía prosiguiendo su propósito, creyendo que le es afrenta al Consejo Real después que ha dado una prouisión por ynjusta que sea no la llevar a execución» (*ibid.*).

<sup>236</sup> *Ibid.* Subrayado nuestro.

<sup>237</sup> «De manera que contra toda justicia ha usurpado el Consejo Real, la authoridad del papa...» (*ibid.*).

<sup>238</sup> «Estos y muchos mayores ynconuenientes se siguen por estar los del Consejo tan tercós y tan pertinazes... y pues V. Al. es obligado a deshazer las fuerças y agrauios cometidos contra la authoridad eclesiástica, yo le supplico tenga por bien de mandar al dicho Consejo reuocar lo por él proueydo o se suspenda hasta

ex pupilo, don Felipe llamó al Consejo Real a mantener una actitud menos beligerante en el asunto y así mostró que sus determinaciones respecto al organismo no eran de la influencia exclusiva de su entorno político <sup>239</sup>.

Con todo, junto a alegatos de matriz más o menos política —entre los que destacaron los de Ruy Gómez— <sup>240</sup>, otros trascendieron directamente a la posición del Consejo Real en la situación administrativa e insistieron en la inadaptación de los fundamentos tradicionales de su autoridad. Faltaba disposición ejecutiva, según se deduce de su defensa de la consulta con teólogos sobre el traslado de los pagos, y el príncipe se apresuró a tomar medidas que la paliaran <sup>241</sup>.

Las mutaciones que experimentaba la gestión de los asuntos ya se definían con el sustantivo «gobernación», cuando el príncipe recabó el 5 de mayo de 1554 el memorial que pasamos a tratar, documento en que la responsabilidad de la falta de respuesta del Consejo a la creciente complejidad del gobierno se achacaba a los letrados que cubrían sus escaños y la exención que creían connatural a sus acuerdos <sup>242</sup>. En el documento se consideraron suficientes las atribuciones tradicionales del organismo y se pro-

---

su venida a esta corte de Madrid, pues plaziendo a Dios será muy en breue a donde será más ynformado y conozará que todo lo que en esta carta tengo escripto es verdad, porque yo estoy determinado de proçeder con çensuras y entredichos y si fuere necessario çesçión a diuinis en esta causa, no solamente contra el executor que es el liçenciado Villena, pero contra el Consejo Real». El arzobispo concluyó pidiendo al príncipe que escuchara al licenciado Mesa, de su Consejo (AGS, *ibid.*).

<sup>239</sup> AGS, E., leg. 92, núm. 63, billete del príncipe al Consejo Real de 5 de diciembre de 1552: «Está bien lo que dezís en lo del arçob[is]po de T[ole]do sobre las vicarias y en lo que proveyeredes en esto de aquí adelante, ternéis el miramiento y consideración q. soléis de manera que el dicho arçob[is]po no tenga causa de se agrauiar.»

<sup>240</sup> En mayo de 1553, CARLOS MORALES, C. J. de, *op. cit.*, p. 67.

<sup>241</sup> AGS, E., leg. 97, núms. 53-63, pub. en CDCV, III, doc. DLVIII; *ibid.*, leg. 98, núms. 88-93, en *op. cit.*, doc. DLXXIV; *Autos i acuerdos del Consejo de que se balla memoria en su archivo desde el año MDXXXII hasta el de MDCXLVIII*, Madrid, 1649, fols. 4v-6r.

<sup>242</sup> AGS, E., leg. 103, núm. 33, «Algunos apuntamy[ent]os sobre la gouernación del reyno. Diose traslado dellos al P[ri]ncipe n[uest]ro. Señor en Vall[ad]olid a cinco de mayo de dliii años». Se iniciaba: «Los del Consejo por lo que han estudiado y lugar que tienen pretenden que pueden saber y entender todo lo que es menester para proueer en las cosas de la buena gouernación. Y en saliendo de lo de su facultad que consiste en letras como lo demás no lo han estudiado y alg[un]os no tienen esp[er]iència dello pasan trauajo en determinarse y aunque procuran de tomar pareçeres de quien entienden que los podrán dar como es diferente negocio de su profesión no lo pueden bien entender e están confusos en la elección dello y como para determinarse no lo platican ny confieren con los que dan los pareçeres en algunas cosas uienen a proueer y determinar lo que no conbiene y después de auello mandado pregonar y guardar aunque se aya herrado lo mandan escutar sin querello hemendar por la abtoridad del Consejo. Y a causa desto padeçe el rreyno y en algunas cosas se perjudican las rrentas rreales por lo qual pareçe que las cosas de gouernación se açertarían mejor a proueer por personas sin letras que fuesen desocupadas de otros negoçios y de buen natural...» Se continuaba reclamando cierta especialización en la resolución de las materias, sobre todo las económicas y valorando la mofa que provocaba en otros reinos el descuido en Castilla «de la gouernación y de lo mal que se probeen algunas cosas que tocan a ella y todos tienen por aueriguado que la culpa dello está en ser “regidos” por letrados...».



pusieron mejoras en la gestión que en lo sustancial no se formalizarían hasta la reforma del Consejo en 1598:

A los del Consejo bastarles ya uer e prouer bien lo que toca a las rresidençias y visitas de chançillerías y otras audiencias y del consejo de Nabarra y estudios y pleytos de 1Ud doblas y cosas de pesquisidores y entender e las otras cosas que tienen a cargo como son hordenes, contaduría, ynquisición, mesta, cámara y hazienda y otras cosas extrahordinarias que les encomiendan sin ocupallos en lo de la gouernación que es algarauya para algu[n]os dellos y no tienen tiempo para ello y aún por ser muchas las cosas susod[ic]has y no poder juntarse de hordinario todos por enfermedades o por otras causas sería bien acreçentar otras dos salas de Consejo que fuesen por todos diez y ocho para que mejor y con más breuedad se despachasen los negoçios porque como uienen a ser del Consejo ya de hedad no tienen fuerças ny dispusiçión para trabajar mucho y esta falta padeçenla los negoçiantes y el rreyno uisto la utilidad que dello le uernya holgaría de seruir para los salarios <sup>243</sup>.

El memorial defendió asimismo la cualificación de los oidores del Consejo y su adecuada retribución <sup>244</sup> y se mostró opuesto a la eminencia adquirida por el organismo mediante el secreto en sus actuaciones. Por ello defendió la necesidad de que el monarca asistiera a algunas sesiones además de las consultas de los viernes, que deberían abrirse a las partes <sup>245</sup>. Asimismo, en el memorial se suscribía el ideal de don Felipe de favorecer la ejecución ideal de la justicia, mediante el envío de comisionados que entendieran con secreto de la actuación de corregidores y otros jueces, para evitar las irregularidades propias de los juicios de residencia. Del mismo modo, se denunciaron los vínculos matrimoniales entre oidores y personas acaudaladas, por el riesgo de alterar la actividad del Consejo <sup>246</sup>. De acuerdo con la significación creciente de determinadas áreas del gobierno en la evolución de la administración regia, el memorial insistió en limitar la intervención del Consejo Real en materias hacendísticas, salvo en aquellas con contenido judicial, dado que cometía errores «como se ha visto por espiriència en lo de la toma de los libros de los mercaderes y saca de la moneda...». De la misma manera, se abogó por despachar «cónsules o jueces de abeniencias» para determinar diferencias hacen-

<sup>243</sup> La simple enumeración de tales atribuciones indicó la confusión que afectaba en el siglo XVI al término «gubernativo» (AGS, *ibid.*).

<sup>244</sup> «En la prouisión de los del Consejo se deuría mirar muy mucho que fuesen personas calificadas y limpias de toda rraça mala y de espiriència y grandes letras y de buenos naturales y no seguir la contumbre que se tiene de traellos de los colegios a las chançillerías y dellas a los Consejos porque muchas uezes se yerra en guardar esta horden...» (*ibid.*).

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.* «Los casamientos que algunos del Consejo hazen de sus hijos o hijas con personas rricas porque los fauorezcan en sus pleytos o en algunas pasiones y pendencias que les tocan mucho y otros casamientos que se hazen con letrados por proueeellos de ofiçios y cargos preminentes se deurían escusar porq. acarrean muchos ynconbinientes y perjuyzios y así pareçe que se deuría hazer una ley inuiolable para que no se pudiesen hazer los d[ic]hos casamientos por las causas susod[ic]has o sin sabiduría e liçençia del rrey.»

dísticas y hereditarias sobre el terreno<sup>247</sup>. Tanto la denuncia de los vínculos matrimoniales de los oidores, como esta propuesta de despacho de comisionados (sin reparar en los inconvenientes que causaba), indican que el memorial era obra de un personaje ajeno a la gestión de los asuntos.

Del mismo modo, el escrito criticó las exacciones permitidas en los cuadernos de alcabalas para obtener las sumas encabezadas, así como el desorden de las disposiciones legales tocantes a rentas reales y jurisdicción de la Contaduría Mayor<sup>248</sup>. Contenía asimismo diferentes puntos recurrentes en la literatura administrativa del momento, caso de la conveniencia de que los presidentes de las chancillerías no fuesen prelados, la mejora del recaudo de la memoria de la administración custodiada en Simancas —mediante la comisión específica de un oficial del Consejo, como había sido el licenciado Catalán— o el nombramiento de un fiscal consagrado a Contaduría.

A este respecto, Hernando Díez, diputado para ayudar a Bustamante y el licenciado Jerónimo Contreras en este tribunal, no podía atender en solitario a las cuestiones litigadas en él, dada la tendencia de los fiscales titulares a atender en exclusiva las cuestiones propias del Consejo Real. La petición denotó la inadecuación del aparato administrativo ante una realidad gubernativa crecientemente compleja y diversificada. En el medievo todas las áreas de gestión estaban comprendidas en el Consejo Real, pero tal desarrollo condujo a desgajar sínodos de actuación más concreta con competencias judiciales, en los que la carencia de fiscal propio supuso que, en un principio, los derechos regios quedaran desprotegidos. Situación que retrata la mencionada petición y que no tardó en ser resuelta, en lo que constituyó un hito en la evolución administrativa castellana<sup>249</sup>.

A su vez, en opinión del autor de este memorial los regimientos cadañeros convertidos mediante pago en vitalicios debían volver a su estado original. Junto a determinaciones militares, las últimas recomendaciones destacables se refirieron a la creación de una audiencia de descargos para aquellos con quienes la corona estuviese en deuda, la entrada de oidores sin voto en el Consejo, que estuviesen habilitados cuando les llegase el momento de ejercer como jueces, y la diputación de comisionados para determinar la alteración del valor de la moneda<sup>250</sup>.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Ibid.* Todo ello se trata ampliamente en CARLOS MORALES, C. J. de, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602...*

<sup>249</sup> «... sería cosa muy necesaria y prouechosa prouer para ella (la Contaduría) un fiscal distinto y desocupado de los otros negocios que fuese muy buen letrado y estubiese y residiese de hordinario en la dicha audiencia porque así estaría ynformado de todo lo que en ella pasa y seguiría mejor los pleytos fiscales...» (*ibid.*). El licenciado Jerónimo de Contreras también había sido nombrado en Innsbruck el 28 de marzo de 1552 [*Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. José María Huet...*, p. 61; GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, p. 232; asimismo, relación biográfica del personaje en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, p. 350].

<sup>250</sup> *Ibid.*

Además de estos alegatos, el escaso concierto que regía el funcionamiento del Consejo Real se deducía de hechos objetivos como la propensión de los fiscales a compatibilizar su tarea con la abogacía o su pretensión de tener voto no sólo en las causas fiscales, circunstancia que de hecho les hubiera convertido en oidores <sup>251</sup>.

Ante su partida, una de las prioridades del príncipe fue la adopción de medidas respecto a la situación del Consejo Real que hemos presentado, junto a la designación de las vacantes del aparato administrativo, cuyo amplio número amenazaba con afectar al precario equilibrio político. Señal elocuente del mismo fue el propio Consejo Real, en el que el presidente Antonio de Fonseca (nombrado el 2 de abril de 1553) <sup>252</sup> poco pudo hacer por extender la influencia de Ruy Gómez ante una composición de oidores predominantemente favorable al Inquisidor General. Como aludíramos, el Emperador delegó en su hijo estos nombramientos mediante el envío de títulos en blanco <sup>253</sup>. La delicadeza de la materia tuvo señales expresas como las irónicas alusiones de Ruy Gómez <sup>254</sup> y otras más encubiertas como la lentitud del proceso, culminada por don Felipe en dos fases mientras se aprestaba para partir. Una primera serie de provisiones fue acordada por el príncipe la víspera de su salida de Valladolid hacia La Coruña —donde se celebrarían cortes y se embarcaría a Inglaterra—, el 7 de mayo de 1554, con nombramientos de toda índole que indican la amplitud del proceso <sup>255</sup>. En el Consejo Real, el licenciado Pedrosa ocupó la vacante del doctor Castillo de Villasante y el regente

<sup>251</sup> AGS, E., leg. 98, núm. 125, billete de Bustamante al Emperador de 8 de marzo de 1552: «... Por otras tengo suplicado a V. Mt. q. pues yo a más de doze año[s] q. le sirbo en Ytalia y acá en las dos chancell[er]ías y muy bien y soy hombre en quien concurren todas bu[en]as calidades y edad y fue V. Mt. seruydo q. con solas ccU le sirbiese de fiscal aquí auíendose dado siemp[r]e aquí a Bargas y a los predecesores ccU y aún quitadome que no abogase no pudiendo tener otra nying[un]a ayuda ny p[r]lobocho como tienen los del Consejo, y gastando yo de mi hacienda otro tanto y sirviendo yo a V. Mt. solam[en]te en su p[at]rimonyo y corona real me híciese m[er]ced fuese con honor: pues yo holgaba de gastar lo q. tenía. Y se diese calor y abtoridad a los negocios porq. lo auían menester p[ar]a haçerse bien y q. p[ar]a ello conuenía q. V. Mt. me híciese m[er]ced q. tuiuese voto en los pleitos q. no fuesen fiscales y q. no q[ue]ría sala[r]io por ello. Pues si por tenerle tengo de estar p[r]esente con los del Consejo al ber y botar de los tales pleytos y ocupo en ello el t[ie]m[p]o y los podría votar pues me hallo allí y despachar en mi officio de fiscal como agora. Pues auía abido fiscal q. era tanbién (*sic*) del Consejo y aún llebaba sala[r]io de todo. Sup[li]co a V. Mt. me haga esta m[er]ced q. será muy bien s[er]uydo de my p[ar]a q. yo biba con honrra y contento...»

<sup>252</sup> AGS, EMR, QC, leg. 8, título pub. por GAN GIMÉNEZ, P., «Los presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)», *Chronica Nova*, 1968, núm. 1, p. 28.

<sup>253</sup> El 13 de marzo de 1554 el Emperador escribió a su hijo desde Bruselas: «... por no tener acá relación de las consultas de las visitas, me ha parecido remitiros la provisión de plaças de Consejo y alcalde de Corte y Chancillería y las que desto dependieren y ban los títulos firmados en blanco; nombraréis las personas, los mandareys henchir y que se den a las partes, y avisarme eys de los que fueren proveydos» (AGS, E., leg. 508, núm. 88, pub. en CDCV, III, doc. DXCIX, p. 667).

<sup>254</sup> En carta ya conocida de 21 de abril, Ruy Gómez escribió: «... la provisión de las plaças del Consejo andan de manera que no puede onbre romper por las calles según los licenciados andan a la batalla» (AGS, E., leg. 103, núm. 123, cit. por FERNÁNDEZ CONTI, S., *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II, 1548-1598*, Junta de Castilla y León, 1998, p. 46).

<sup>255</sup> La relación de nombramientos producidos aquel día se contiene en AGS, E., leg. 13, núm. 175.

de Navarra, el doctor Cano, pasó a la del licenciado Mercado de Peñalosa. Por su parte el doctor Suárez de Toledo ocupó como sabemos la plaza dejada por Ronquillo. Su plaza en la chancillería de Valladolid fue ocupada por el licenciado Sancho López de Otor, cuyo asiento en la de Granada pasó al doctor Ruiz, colegial de San Bartolomé. En la audiencia granadina también se incorporó el licenciado Montalvo, colegial de Santiago, en la plaza vacante por muerte del licenciado Oviedo, mientras el doctor Simancas, oidor de Valladolid, fue propuesto infructuosamente como oidor de Rota, de manera que se frustró el paso del licenciado Francisco Sarmiento a la vacante que iba a dejar el primero. Estas designaciones se completaron con el nombramiento de Francisco de Castilla, alcalde de la chancillería de Valladolid, para ocupar alcaldía de corte acrecentada, con la intención de acompañar al príncipe en su jornada, y del licenciado Juan de Vargas en la plaza que dejaría libre en Valladolid. Por su parte, el licenciado Gaspar Ortiz ocuparía otra alcaldía de corte igualmente acrecentada y el doctor Tovar la fiscalía de Valladolid vacante. Si bien quedó sin cubrir la plaza del Consejo de Órdenes libre por la promoción del licenciado Pedrosa al Consejo Real. El sesgo de tales promociones indicó el cuidado de don Felipe en no alterar el equilibrio cortesano en los prolegómenos de su viaje, según indica la satisfacción con los mismos del presidente Fonseca <sup>256</sup>.

El proceso se completó el mismo día de la partida del príncipe, el 12 de julio de 1554, momento en que se cubrieron las plazas que habían quedado sin designar <sup>257</sup>, según se deduce del nombramiento del doctor Pérez de Rivadeneyra, del Consejo de Indias, para la vacante del licenciado Pedrosa en el Consejo de Órdenes. Su vacante en Indias fue cubierta por el licenciado Villagómez, cuya plaza en la chancillería de Valladolid pasó a ser desempeñada por el doctor Horozco, catedrático de Salamanca. De la misma manera, el príncipe rectificó el perjuicio causado al licenciado Francisco Sarmiento al no pasar Diego de Simancas a la Rota, ocupando la plaza del doctor Vázquez en la chancillería de Valladolid, quien pasó al Consejo de Indias en sustitución del licenciado Gracián Briviesca. La fase final del proceso de cambios afectó más claramente a la organización judicial subordinada y periférica, ya que don Felipe decidió que el licenciado Menchaca, juez de los grados de Sevilla y el licenciado Villafañe, alcalde mayor de Galicia, pasaran a oidores de Contaduría y sus vacantes fueron cubiertas respectivamente por el licenciado Antonio de Ulloa y el licenciado Santillán. Por su parte, el licenciado Tejada fue nombrado alcalde mayor de Sevilla y los corregimientos de Toledo, Asturias y Málaga pasaron a ser respectivamente servidos por Antonio de

<sup>256</sup> *Ibid.*, leg. 103, núm. 171, presidente Fonseca al Emperador, 15 de mayo de 1554: «Las plaças del Consejo y los otros officios proueyó su alt[ez]a antes de su partida con la mejor election de personas que se han podido descubrir. La mesma diligencia se pone en buscarlar para los otros cargos de justicia temporales de que no ay menos neçessidad en esta sazón.» En la misma carta, Fonseca agradeció al Emperador su provisión para el arcedianazgo de Calatrava, del que esperaba desahogo económico, y medió en favor de los hijos del difunto Íñigo de Guevara.

<sup>257</sup> *Ibid.*, leg. 13, núm. 176, «Las prouisiones q. Su Alteza ha hecho, antes de su enbarcación.»

Fonseca, Francisco de Benavides (señor de Guadalcanal) y Pedro de Vivero. Finalmente, Antonio de Eguino fue nombrado contador en lugar de Francisco de Laguna, en tanto se determinaba su causa o el Rey proveía el oficio del primero <sup>258</sup>.

En lo relativo a provisión de oficios, se puede concluir que la solidez cortesana de Fernando de Valdés perjudicó una rápida plasmación del ascendiente de Ruy Gómez sobre el príncipe en la composición de los organismos administrativos, lo que sería resultado sólo de un largo proceso. El gentilhombre del príncipe tuvo más proyección en la visita del Consejo Real y la justicia cortesana abordada personalmente por el propio don Felipe en 1553, como continuación del proceso de inspección administrativa que venimos ilustrando. Mas el inquisidor general supo evitar perjuicios para sus intereses de esta indagación mediante un viejo *cliente* que intervenía en su realización, Diego de Córdoba; en especial desde que el príncipe abandonó la península.

## Rehabilitación forense de Castilla: la visita de los organismos judiciales de la corte y sus ramificaciones

El príncipe decidió ampliar la actividad inspectora a una revisión general de la organización judicial, desde la cúspide cortesana al tribunal más apartado, como continuación del proceso de visitas, e influido por la situación política, su inmediata partida y el deseo de caracterizar su llegada al trono por el imperio de la justicia —como correspondía a un Rey de la Monarquía Corporativa—. Como cabe suponer, la amplitud de la medida hizo imposible su conducción por un solo ministro y necesitó la participación de distintas personas que actuaron de forma coordinada.

Don Felipe se reservó personalmente la fiscalización de aquellos miembros de los tribunales cortesanos dotados de atribuciones jurisdiccionales —es decir, oidores, fiscales y alcaldes de corte— y aguardó para iniciarla al nombramiento de Antonio de Fonseca como presidente el 2 de abril de 1553, plaza que había permanecido vacante desde la muerte de Hernando Niño en septiembre del año anterior. Al mismo tiempo, encargó la inquisición del proceder de los oficiales judiciales de la corte (secretarios, relatores y porteros del Consejo, fiscal de la cárcel, alguaciles, abogados, procuradores y escribanos del crimen y civil y sus oficiales) a Diego de Córdoba, en razón de su larga experiencia visitadora.

Parece evidente que, dada su mayor delicadeza, la tarea acometida por el príncipe destiló más claramente los rasgos *domésticos* y *arbitrarios*, de oposición faccional y muta-

<sup>258</sup> *Ibid.* Ésta y la memoria anterior de provisiones se hicieron sobre propuestas como AGS, E., leg. 13, núm. 177, de mano de Juan Vázquez de Molina.

ciones en la corte característicos de estos episodios inspectores, que tan vívidamente reflejara el secretario Antonio Pérez <sup>259</sup> y otros coetáneos <sup>260</sup>. Mientras que la visita que al tiempo condujo Diego de Córdoba parecía menos determinada por motivos políticos que por el mencionado deseo del príncipe de acompañar su acceso al trono con la imposición de la justicia, cuyo artefacto material no había experimentado impulso notable desde las mutaciones administrativas que siguieran a las alteraciones comuneras <sup>261</sup>.

Con ser inspecciones complementarias, la intervención simultánea del príncipe y el consejero de Inquisición las sometió a influencias políticas opuestas, carácter no infrecuente en las visitas que se demoraban largamente, pero sí en aquellas cuya resolución se consideraba urgente, como es el caso. Ambos instructores manifestaron una ideología contrapuesta, pero el rango del príncipe y de la parcela objeto de su interés hizo primar, temporalmente, la tendencia humanista. Finalmente, como culminación del proceso, distintos comisionados de estado religioso partieron por Castilla para evaluar el estado de la justicia de primera instancia <sup>262</sup>.

Al poco de partir a Inglaterra en julio de 1554, el príncipe envió detallada relación de la inspección a su padre <sup>263</sup>, que permite apreciar hasta qué punto estuvo influido en su labor por Diego de Córdoba. Puesto que al formular los cargos distinguió en ella un sentido particular y otro general, en función de la extensión de las responsabilidades en el seno de los tribunales de la justicia cortesana, según y como había hecho Córdoba al inspeccionar la chancillería de Valladolid:

Tomóse información contra los del Q[onsejo], fiscales y alcaldes de corte y de lo q. resultó en general y particular se les dieron cargos y respondieron <sup>264</sup>.

La sensibilidad faccional de los cargos particulares condujo al príncipe a dar cuenta de los mismos al Emperador en persona, mientras que escribió las culpas generales

<sup>259</sup> PÉREZ, A., *Relaciones y cartas*, ALVAR EZQUERRA, A. (ed.), Madrid, 1986. En p. 123 el secretario cayó en desgracia captó el carácter distintivo de la comisión al afirmar que era un «juicio en que no se da traslado de proceso ni testigos, sino sólo los cargos, y que Dios le ayude a cada uno en su descargo.»

<sup>260</sup> Caso de Scipio de Castro, BNM, ms. 5791, 249, *Advertimientos a Marco Antonio Colonna nombrado por virrey de Sicilia*, cit. por RIVERO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 708, y otros teóricos del poder tratados en GARCÍA MARÍN, J. M.<sup>a</sup>, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Madrid, 1986.

<sup>261</sup> Sobre estos cambios y su parentesco con las peticiones de los sublevados, GARRIGA, C., *La audiencia y las chancillerías castellanas (1371-1525)*, Madrid, 1994, p. 199; HALICZER, S., *Los comuneros de Castilla: la forja de una revolución, 1475-1521*, Valladolid, 1987, pp. 259 y ss.; RADY, M., *Carlos V*, Madrid, 1991, p. 67.

<sup>262</sup> Que sepamos, el primer historiador en subrayar la coordinación a diferentes alturas que siguió este proceso ha sido GARRIGA, C., *Génesis y formación histórica de las visitas a las chancillerías castellanas (1484-1554)*, Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Salamanca en 1989, dirigida por GONZÁLEZ ALONSO, B., III, pp. 1055-1057; I, pp. 194-210.

<sup>263</sup> AGS, CC, leg. 2710, «Relación de la visita de los del Q[onsejo] y alcaldes y sus oficiales. Es de lo general.»

<sup>264</sup> *Ibid.*

en un memorial remitido a Antonio de Fonseca con objeto de que lo comunicara a los ministros del Consejo <sup>265</sup>.

La indagación pareció hacer consciente al príncipe de la precariedad que la acumulación aleatoria de disposiciones reguladoras tenía para el procedimiento consiliar, y decidió dotar al organismo de un único ordenamiento que rigiera su actuación <sup>266</sup>.

Igualmente, don Felipe dio noticia al Emperador de la labor de Diego de Córdoba, que se centró especialmente en los abusos cometidos por alguaciles y escribanos, si bien su labor se vio dificultada tanto por la novedad de ser sometida la justicia cortesana a visita, como por la permanencia de los visitados en sus plazas. Asimismo, el príncipe trasladó la incertidumbre del consejero de inquisición sobre los resultados de la inspección tras la partida del príncipe. Vaticinio que en realidad ocultaba la certeza de su actuación en favor de los *clientes* de Valdés, una vez que don Felipe delegó en él, el presidente de Castilla y algún miembro del Consejo la culminación de la parte jurisdiccional de la visita:

... así por s[er] tanta gente como por s[er] la visita tan nueva y estar en los oficios los visitados auido gran difiultad en ponerse en claro según me ha dicho don Di[eg]o sus culpas y también me ha dicho q. con my partida no se podría acabar este neg[oci]o como si yo estubiera p[re]sente. Dexe encomendado al P[re]sidente y a don Di[eg]o y creo q. a otro u otros del Q[onse]jo p[ar]la q. lo acabasen de manera q. no hiziese falta my ausencia <sup>267</sup>

Para el príncipe, razón importante del desconcierto propio de la actividad forense cortesana y de los abusos procedimentales y económicos que generaba era la carencia de ordenanzas y aranceles. Al partir, don Felipe publicó las primeras. Respecto a los segundos, dejó oidores del Consejo encargados de su elaboración. Una vez concluidos, fueron añadidos a las primeras <sup>268</sup>.

En tanto permaneció en Castilla, hasta cierto punto el príncipe supo mantener la visita ajena a la oposición faccional, según reflejan detalles como la ocultación de los

<sup>265</sup> *Ibid.* «De lo particular hare relación a Su Mt. de palabra p[ar]a q. mande lo q. fuere su s[er]uicio. Y de lo general mandé al presidente les dixese de my parte lo q. se contiene en un memorial q. ua con esta así reprehendiéndoles como aduirtiéndoles.»

<sup>266</sup> *Ibid.* «No tenían ordenanzas p[ar]a el buen gouierno de sus oficios, diles las q. uan con esta p[ar]a q. la conciencia de Su Md. fuese en todo descargada.»

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> Según se aprecia en el ejemplar utilizado por S. de Dios para la publicación de las mismas, que luego citaremos. *Ibid.* «No abía ordenanza ni arancel p[ar]a todos estos oficiales q. con au[er] leyes y no pocas p[ar]a todo el reyno, en la corte no la abía ni se guardaba orden. Hanse hecho ordenanzas p[ar]a cada oficio destos y dexe señalados p[er]sonas del Q[onse]jo p[ar]la q. hiziesen los aranceles y hechos se publicaran. y con lo q. dexé mandado.. q. todos estos oficiales sean visitados cada año juntamente con uiuir por ley Su Mt. será seruido y cesará el mucho desorden a. hasta agora a ayudo.»

cargos relativos a ministros fallecidos una vez iniciada la investigación, caso del licenciado Pedro Mercado de Peñalosa, oidor del Consejo, o el propio alcalde Ortiz:

No me pareció q. se scriuiese lo q. tocaba a p[er]sonas muertas del Q[onsej]o y al[ca]ld[e]s después de comenzada la visita. Y heran cosas muy graues y dignas de castigo y q. justamente y con gran fundamento se antepónia a Su Md. la necesidad q. della abía <sup>269</sup>

La relación se completó con alusión a las culpas halladas contra los alcaldes, principalmente percepción de derechos en perjuicio de la cámara, remedio de lo cual era para el príncipe el acrecentamiento de su salario <sup>270</sup>. Don Felipe estaba convencido de la bondad de un aumento de salario de los ministros de justicia para un ejercicio más correcto y eficaz de sus funciones:

Si Su Md. no es s[er]uido de acrescentar los salarios a los del Q[onsej]o y hazerles md. de manera q. tengan razonable posada o a lo menos con qué mantenerse no será la justicia administrada como conbiene a su conciencia pues esto se debe demandar antes por lo q. a esto toca q. no por hazerles m[er]ced. Quanto más q. [e]s Su Md. obligado a mandarla hazer a los q. bien si[r]ben <sup>271</sup>.

Con todo, la entidad propia de los alcaldes en el funcionamiento judicial de la corte bien merece estudio particular, que no podemos acometer aquí. Tampoco vamos a profundizar en el conocimiento del estrato inferior y periférico de la inspección judicial,

<sup>269</sup> *Ibid.* Yerno del alcalde Ronquillo (RUIZ AYUCAR, E., *El alcalde Ronquillo. Su época. Su falsa leyenda negra*, Ávila, 1997, pp. 21-22), el apoyo de Tavera le permitió ejercer como oidor tanto en la chancillería de Granada como en la de Valladolid (GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988, p. 248; *id.*, *La Real Chancillería de Granada (1505-1834)*, Granada, 1988, p. 283). Tras considerarse su paso como fiscal al Consejo Real (AGS, E., leg. 496, núm. 154, carta de Carlos V a Tavera, en Bruselas, 9 de marzo de 1531, pub. en *CRCV*, I, doc. C, p. 273), accedió al Consejo de Indias, con título de 15 de octubre de 1531 (SCHÄFER, E., *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, Sevilla, 1935, I, p. 354), organismo en el que permaneció hasta que fue designado alcalde de Casa y Corte, para ejercer la justicia cerca de Carlos V durante la jornada de Túnez (GIRÓN, P., *Crónica del Emperador Carlos V*, SÁNCHEZ MONTES, J. (ed.), Madrid, 1964, p. 53). Durante esta última labor, Mercado respondió a las expectativas del Emperador, como muestra el hecho de que el 1 de enero de 1537 recibió título del Consejo Real [GAN, P., «El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas (1499-1558)», *Crónica Nova*, 4-5 (1969), pp. 114-115]. Más datos en MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de (dirs.), *La Corte de Carlos V*, III, pp. 282-283.

<sup>270</sup> *Ibid.* «Los al[ca]ldes de corte lleban muchas cosas q. no les perteneçen y parte dellas son de la Cámara. Dicen q. Su Md. lo ha p[er]mitido sauiéndolo. Están en sus cargos apuntados los q. son y dello demás del interese de la cámara se siguen muchos inconbenientes. Sería gran s[er]uicio de Su Mt. no las llebasen y se les acrecentase el salario y de lo q. se aplicaría p[ar]a la cámara de lo q. agora lleban abría recompensa.»

<sup>271</sup> *Ibid.* Finalmente, el príncipe no vio adecuado que algún oficio de alguacil hubiese pasado por renunciación o venta, perjuicio para la justicia: «Algunos oficios de alguaciles se han pasado por renunciación y algunos se benden por dineros como fue un alguacil del canpo de corte. No es peq[ue]ño p[er]juicio de la justicia. Y estos oficios se debrian de proueer a p[er]sonas de confianza q. así conbiene al s[er]uicio de Su Md. y descargo de su conciencia» (*ibid.*).



que el príncipe comisionó a distintos religiosos, pues ya se han ocupado de él con detalle tanto C. Garriga como, en este mismo congreso, el profesor Fortea<sup>272</sup>. Sólo diremos que tal inquisición tuvo lugar tras numerosas peticiones de cortes para inspeccionar la labor de los corregidores y demás oficiales municipales y representó un ejemplo tardío y fuera de contexto de la visita según la concebía el ordenamiento de Toledo (1480). De acuerdo con su aptitud para este tipo de comisiones, la visita fue encargada a religiosos que inspeccionaron distintas partes de Castilla, de los que se conoce la tarea de los jerónimos fray Francisco de la Trinidad, prior del monasterio de la Victoria de Salamanca (quien indagó por Madrid, Guadalajara, La Mancha y Murcia y fray Jerónimo de Alabiano, prior del monasterio de la Mejorada (quien lo hizo en el reino de Granada)<sup>273</sup>. Con todo, la labor de estos religiosos no superó el rango de pesquisa y por ello careció largo tiempo de consecuencias prácticas<sup>274</sup>, lo que no sucedió con las otras partes de la inspección, si bien no cabe magnificar su resultado.

### *La visita del príncipe*

Don Felipe asimiló la instrucción de la visita de Diego de Córdoba a la chancillería de Valladolid y concluyó cargos particulares y generales, que reflejaron respectivamente la situación faccional y su preocupación funcional y utilitaria, su deseo de convertir al Consejo Real en un organismo adecuado a su objeto gubernativo y judicial.

### *Los cargos particulares*

Como resultado de su discreta actuación, el príncipe amonestó a los licenciados Beltrán de Galarza y Hernando Martínez de Montalvo, los doctores Bernardino de Anaya y Pedro López de Ribera y el licenciado Pedro López de Arrieta, antes de abandonar Valladolid camino de la Coruña (desde donde partiría hacia Inglaterra el 12 de julio de 1554). Esta admonición inicial consistió en cargos poco relevantes, aunque la identidad de los afectados permitió apreciar la orientación contra el inquisidor general que el entorno político de don Felipe había logrado imprimirle<sup>275</sup>. De su propia mano,

<sup>272</sup> FORTEA PÉREZ, J. I., «El gobierno de las ciudades de Castilla tras la rebelión de las Comunidades.»

<sup>273</sup> El resultado de su labor se contiene, respectivamente, en AGS, CC, legs. 2763 y 2733, y es estudiado por GARRIGA, C., *Génesis y formación histórica...*, pp. 199-210, e id., «Control y disciplina de los oficiales públicos. La visita del ordenamiento de Toledo (1480)», *Anuario de Historia del Derecho Español* (1991), pp. 378-390. Un aspecto relacionado en GONZÁLEZ ALONSO, B., «El Juicio de Residencia en Castilla. I. Origen y evolución hasta 1480», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 48 (1978), pp. 193-247

<sup>274</sup> GARRIGA, C., *Génesis y Formación Histórica...* I, p. 207.

<sup>275</sup> Remitimos a las biografías de estos personajes contenidas en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V, III*, respectivamente, pp. 142-145, 270-272, 39-43, 250-251 y 243-245. De Anaya se han ocupado

el príncipe relató a su padre cómo ordenó a Galarza tratar bien a los pleiteantes<sup>276</sup> y a Martínez de Montalvo ser diligente en sus resoluciones<sup>277</sup>. En esta fase inicial de la materialización de la visita el grueso de la admonición del príncipe se dirigió al doctor Bernardino de Anaya, quien, a juzgar por la primera, había mostrado una conducta irregular en el Consejo que hasta el momento desconocíamos:

A Anaya, q. no ruegue a caballeros q. reciban en su s[er]vicio a sus deudos ni amigos por lo q. hizo por uno q. traya pleyto en Consejo. Q. no se esque de v. pleitos con decir q. hasta q. sentencie uno no puede botar ni s. informado de otros. Q. no ruegue q. se vean pleitos de amigos y q. no ruegue... a los q. van a la visita de cárcel por ninguno<sup>278</sup>.

Finalmente fueron advertidos el doctor Pedro López de Ribera:

... q. no se reciban en su casa p[re]sentes de cosas de comer de nadie porq. parece q. se recibió de un juez de resid[enci]a... y el ldo. Pedro López de Arrieta, al que se ordenaba no recibir en su casa p[re]sentes así de cosas de comer como de otras...

No obstante, el príncipe aclaró a su padre que existían acusaciones más graves de las que convenía darle cuenta en persona, referidas al ejercicio de los licenciados Beltrán de Galarza y Hernán Martínez de Montalvo como camaristas de los regentes Maximiliano y María<sup>279</sup>.

Las culpas en que ambos incurrieron en común consistieron en el beneficio de una mina de plata en Cazalla otorgada anteriormente por el Emperador al duque de Arcos como merced. Ante esta circunstancia los contadores se negaron a asentar la provisión en sus libros, pero ello no impidió que los camaristas la enviaran al asistente de Sevilla, se labraran ocho arrobas (equivalentes a 92 kilos) y cada uno se beneficiara directamente de 87 marcos (20 kilos). Y todo ello pese a que el Duque reclamó y pidió inútilmente justicia a ambos camaristas, por lo que elevó pleito al Consejo, en el que era juez el propio Galarza<sup>280</sup>. Asimismo, ambos camaristas hicieron merced de una receptoría de la chancillería de Valladolid a Andrés de Montejo, criado de Galarza, quien estaba privado por visita<sup>281</sup>.

---

CUART, B., e HINOJO, G., *Nonnulla memoratu digna. Memorias de don Bernardino de Anaya, rector del Colegio de San Clemente de los españoles de Bolonia (1512-1513)*, Salamanca, 1985.

<sup>276</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n.: «q. aya bien a los negociantes y les dé puerta abierta y despache con brevedad las provisiones».

<sup>277</sup> *Ibid.*: «A Montalvo q. sea corto en el botar y se resuelva en lo que botare brevemente, q. no se resiban (sic) cosas de comer en su casa...»

<sup>278</sup> *Ibid.*

<sup>279</sup> *Ibid.* El príncipe escribió sobre ambos: «lo demás q[ue]da p[ar]a consultar a Su Mt.».

<sup>280</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n.

<sup>281</sup> *Ibid.*

Por su parte, Galarza fue particularmente acusado de orientar las determinaciones de la Cámara en provecho propio. Se le cargó el cobro de 13.000 mrs. de cierta merced hecha a un hijo suyo<sup>282</sup> y el beneficio de los bienes de Diego de Otáñez con relación falsa sobre que estaban condenados y aplicados a la Cámara y pasadas las sentencias en cosa juzgada<sup>283</sup>. Fue igualmente cargado de haber recibido ciertas piezas de plata de la orden de San Bernardo sin licencia, valerse de su posición para obtener varas de paño a muy bajo precio y finalmente de tratar con desdén a los negociantes<sup>284</sup>.

Las culpas achacadas en solitario al licenciado Martínez de Montalvo consistieron en llevar en comisión dos cahíces de trigo por la licencia de doce tramitada en favor de Pedro Laso; recibir ciertas piezas suntuarias de don Enrique de Guzmán tras haber entendido en un negocio que este mantenía contra su padre —en lo que constituía grave testimonio de iniquidad—; beneficiarse de bienes de moriscos sin ser su pleito cosa juzgada, de 90.000 mrs. en la residencia del licenciado Villota y finalmente valerse de su posición para comprar una hacienda a bajo precio<sup>285</sup>. Al margen de la intención política que impulsaba las acusaciones, el príncipe debió ver confirmado su temor acerca de la extensión y profundidad de la prevaricación y el cohecho en la alta administración de justicia, carácter que consideraba poco adecuado con su inminente acceso al trono. Aunque esta convicción se apreció con mayor claridad en los cargos extensivos a todo el cuerpo consiliar.

### *Los cargos generales*

Las indagaciones del príncipe sobre el procedimiento del Consejo Real dan idea tanto de la amplitud de su intervención administrativa como de las limitaciones que la afectaban. El primer cargo formulado por el príncipe les acusaba de diferir la determinación de pro-

<sup>282</sup> De lo perteneciente a la Cámara por la condena de unos caballos. La parte perjudicada apeló y se dio por ninguna la condena en vista y revista ante los contadores y se sacó ejecutoria contra el juez que condenó. Pese a todo, el Consejo emitió provisión para suspender la citada ejecutoria y sobreseer la ejecución que se había comenzado a hacer, por lo que la parte se vio obligada a concertarse con evidente pérdida (*ibid.*).

<sup>283</sup> Galarza pidió ante un juez le hiciese dar los dichos bienes y por su respeto se le entregaron y se hizo ejecución por 4.000 dcs. sin haber pasado en cosa juzgada. Se hizo la ejecución no sólo en los bienes de Diego de Otáñez sino de otros, «y p[ar]a cumplim[en]to a los 4.000 dcs. se hizo execuçion en la hacienda de Di[ego] de Aliedo», y Galarza tuvo posesión de los citados bienes más de un año. Lo que fue revocado en vista y revista en la chancillería de Valladolid y se restituyeron los bienes al heredero de Diego de Otáñez «y esta vexaçion se hizo por s. del Q[onsejo] y de la Cámara el d[ic]ho li[cencia]do siendo cosa tan injusta» (AGS, *ibid.*).

<sup>284</sup> *Ibid.*: «q. no a q[ue]rido oyr a los negoçiantes sobre sus causas y les a respondido á speram[en]te y se ençierra sin q[ue]rres dar aud[ien]cia y detiene quando es semanero mucho las ... y neg[oci]os q. son a su cargo».

<sup>285</sup> *Ibid.* Hubo una última culpa: «Q. entendió en un neg[oci]o en Q[onsej]l. de Yndias y pensó se hiziesse una escritura p[ar]a q. se diese por ning[un]o un testam[en]to de una señora en Yndias q. dexaua sin hazienda... Pidió pues cosa injusta y de mal exemplo.»

cesos de mercaderes por saca de moneda, lo que permite sospechar —si bien el príncipe no aludió a ello— beneficio de los oidores en esta actividad<sup>286</sup>. En segundo lugar, la alhóndiga recientemente constituida en Valladolid padeció tempranas irregularidades por culpa de sus primeros gestores, alguno allegado a comisionados del Consejo<sup>287</sup>. Semejante acusación contenía el tercer cargo, que culpaba a los oidores de prevalerse de su plaza para obtener leña más barata<sup>288</sup>.

A continuación se formulaban los cargos por conducta más lesiva para su ejercicio jurisdiccional. Con propósito de aligerar sus obligaciones, remitían las encomiendas de los procesos a los relatores<sup>289</sup> y se habían excedido en la aprobación de escribanos, de manera que eran reprobados por alguna de las salas del Consejo y aprobados en otra por ruegos e intercesiones<sup>290</sup>. La tendencia de los oidores a conseguir de corregidores, jueces de residencia y otros ministros de justicia que tomaran por oficiales a allegados o personas afectas a su grupo político motivó que menguara la fiscalización de los primeros mediante residencia o indagación de venta de varas<sup>291</sup>. De la misma manera, el despacho del Consejo padecía por la desatención de los oidores, quienes no consideraban adecuadamente los pleitos y despachaban provisiones con cláusulas innecesarias; ello provocó gran dilación en el despacho de pleitos, agravada por la comisión de pesquisadores, provistos más por su provecho que por el de los negocios<sup>292</sup>. Las irregularidades culminaban con la permisividad mostrada con los alcaldes y alguaciles en la visita a la cárcel, quienes, respectivamente, injuriaban a los presos y acudían con armas prohibidas contra las ordenanzas de Zaragoza<sup>293</sup>.

<sup>286</sup> *Ibid.* «Q. an diferido de uer y determinar los p[ro]cesos de los mercaderes cuyos libros se tomaron sobre el sacar de la moneda fuera del reyno siendo neg[oci]o q. tanto importaua al s[er]uy[cilo] de Su Mt. y bien p[ú]bli[co] y en q. se req[ue]ría breue determinación y castigo exemplar.»

<sup>287</sup> *Ibid.*: «Q. proueyeron se hiziese alhóndiga en esta villa y uino a perderse mucho por culpa de los ministros q. se pusieron y alg[un]os fueron allegados de alg[un]o del Q[onsejo] q. en ello entendía y se dieron excessiuos salarios y auiedo costado el trigo a treynta y dos, treynta, ueynte y q[ua]tro, ueynte y cinco y ueynte y ocho reales y la uendían a diez y ocho, diez y nueue, y ueinte sin la costa del traer se ordenó diesen el trigo a los del Q[onsejo], la... (?). A xxii reales y la ceuada a xvi y aún se deue p[ar]te de la q. se tomó.» Sobre el sentido de la alhóndiga, PEREIRA IGLESIAS, J. L., «Un aspecto del intervencionismo económico en el período moderno: la protección del consumidor urbano», *Gades*, 1997, núm. 22, pp. 425-453.

<sup>288</sup> AGS, *ibid.* «Q. p[ro]veyeron se les traxese a cada uno ciertos carros de leña y se les repartieron y se pagaron a seys o siete reales valiendo a ducado y los conceses q. la cortaron p[er]die[n] la costa de la corta y hizieron en ello otras costas.»

<sup>289</sup> *Ibid.*, cargo núm. 4. De acuerdo con su contenido, este cargo era más propio de la ocupación de Diego de Córdoba, por lo que no consta entre los que el príncipe formuló finalmente al Consejo.

<sup>290</sup> *Ibid.*, cargo núm. 5.

<sup>291</sup> *Ibid.*, cargos núms. 6, 7, 10 y 13.

<sup>292</sup> *Ibid.*, cargos núms. 8, 9, 11, 12 y 17; el último de los cargos, referido a la «falta y dilación en la expedición de las causas de comisiones de Órdenes». Sobre la acumulación de causas que afectaba a los tribunales castellanos en la edad moderna, cfr. KAGAN, R. L., *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700*, Salamanca, 1991, pp. 31-44.

<sup>293</sup> *Ibid.*, cargos núms. 15 y 16.

Ante estos cargos, el príncipe elaboró unos instrucciones generales para el tribunal <sup>294</sup>, cuya comunicación encargó al presidente Fonseca y que constituyeron el memorial aludido en el informe a su padre. Según la gravedad de las irregularidades, los puntos formulados se dividieron en advertencias y reprensiones. Se inició con sendas reprensiones al Consejo por su demora en resolver pleitos de mil y quinientas y otros en interés del erario regio como el relativo a saca de moneda de Castilla <sup>295</sup>, así como por la actuación del organismo relativa a la alhóndiga de Valladolid y la provisión de leña <sup>296</sup>.

Continuó con advertencia por la demora en la vista de encomiendas <sup>297</sup> y con reprensión por la aprobación irregular de escribanos <sup>298</sup>, a la que siguieron nuevas advertencias por la mediación ante instancias inferiores para colocar a allegados en plazas judiciales <sup>299</sup>, suavidad en la vista de visitas y residencias <sup>300</sup>, descuido del despacho y desprecio del secreto <sup>301</sup>. El príncipe perseguía dotar de mayor consistencia, estabilidad y eficacia a la administración cortesana de justicia, propósito con el que concordaba la exigencia al Consejo Real de no excederse en el despacho de pesquisidores <sup>302</sup>, y mostrar atención por los asuntos gestionados en el organismo <sup>303</sup>. De acuerdo con este propósito, se confirió a los miembros del Consejo una función inquisitiva sobre los oficiales subordinados. La libertad que habían dado a los alcaldes para ultrajar a los presos mereció severa reprensión por parte del príncipe <sup>304</sup>, quien les ordenó aplicarse en la vigilancia

<sup>294</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n., «Lo q. se dixo a los del Q[onsejo]lo en general».

<sup>295</sup> *Ibid.*: «Reprehendídoles la dilación q. a auído en los pleytos de IUD doblas y en otros y en particular de no au[er] determynado lo de los mercaderes q. sacaban el dinero del reyno importando tanto.»

<sup>296</sup> *Ibid.*: «Rreprehen[dídoles] sobre lo de la alhóndiga q. proueyeron se hiziese en V[al]l[ado]lid del orden y poco recado q. pusieron... Y también sobrel proueerse de leña a menos costa y con agrauio de los pueblos q. la hizieron traer.»

<sup>297</sup> *Ibid.*: «Aadu[er]tilles q. uean con breuedad las encomyendas y no las detengan por esqusarse de trabajo.»

<sup>298</sup> *Ibid.*: «R[eprehendídoles] del exceso q. a auído sobre el aprobar escribanos y q. parte se aya hecho por amistad y ruegos.»

<sup>299</sup> *Ibid.*: «A[duertil]les q. no rueguen a corregidores y otros justicias q. lleben por oficiales a los q. ellos les encomyendan ni les escriban cartas de ruego pues allende de no conbenir Su Mt. lo tiene mandado.»

<sup>300</sup> *Ibid.*: «A[duertil]les q. en las visitas y residencias hagan el castigo con todo rigor y q. no usen de la blandura q. hasta aquí abíendoselo Su Md. en particular mandado.»

<sup>301</sup> *Ibid.*: «Encargalles el secreto de lo q. en q[onsejo]lo se trata y q. estén en él con toda atención y q. se tenga más recatamy[ent]o y adu[er]tencia en el despacho de las prouisiones y q. los q. fueren semaneros estén muy adu[er]tidos desto y el pasarlas con breuedad.»

<sup>302</sup> *Ibid.*: «A[duertil]les q. las menos ueces q. pudieren p[ro]uean pesquisidores pudiéndose encomendar la execución de lo q. conbinyere a las justicias ordinarias.»

<sup>303</sup> *Ibid.*: «A[duertil]les q. quando botaren no hablen ni atrabiesen unos con otros ni tengan pláticas q. les impida en esto lo q. conbenga y q. sesqusen de hablar en otras cosas no conyuentes al lugar q. tienen.»

<sup>304</sup> *Ibid.*: «R[eprehendídoles] del lugar q. han dado en las visitas de la cárcel a q. los alcaldes injurien y maltraten los presos y a pasar por sola su relación en las causas q. se ueen y en no entrar en los aposentos de la cárcel y en no au[er] guardado cerca desto lo q. manda y dispone la Ordenanza de Zaragoza.» El

de su comportamiento y el de otros oficiales, mediante las Ordenanzas que dejaba sancionadas a su marcha como resultado de la indagación de Diego de Córdoba<sup>305</sup>. Ésta era la parte de la inspección que respondía más fielmente a la preocupación del príncipe por el procedimiento forense y de la que pasamos a ocuparnos.

### *La visita de Diego de Córdoba a los oficiales de la justicia cortesana*

En la primavera de 1553, con la sentencia de su indagación a la chancillería de Valladolid todavía pendiente, se encargó a Diego de Córdoba acometer visita «de los alguaziles y escribanos y otros oficiales de su corte» o «gen[er]al en la cort[e] de Su Mgt.»<sup>306</sup>. El celo con que el consejero de inquisición acometió su comisión supuso el envío por diferentes puntos de Castilla del notario apostólico Pero Luis, para profundizar la indagación sobre los oficiales cortesanos. La elección para ello de alguien ajeno a la estructura administrativa mostró la determinación del príncipe y el visitador porque la investigación tuviera resultado<sup>307</sup>. En este sentido, supuso un notable dispendio de medios, dado que alcanzó puntos muy alejados de la corte y recurrió a testigos

---

príncipe también formuló cargos a los alcaldes, centrados en los derechos que llevaban de forma ilegal en perjuicio de la cámara, así como en la provisión por renunciación o venta de algunos oficios de alguaciles. No profundizamos en tales cargos porque la entidad de los alcaldes en el funcionamiento gubernativo y contencioso de la monarquía aconseja dedicarles un estudio específico.

<sup>305</sup> *Ibid.*: «Q. guarden y hagan lo q. les he mandado en las Ordenanzas q. les dexo y de palabra, así en lo q. toca a los del Q[onsejo] y oficiales dél como de alcaldes y otros oficios de justicia.»

<sup>306</sup> Denominaciones presentes en la documentación generada por la inspección, también llamada: «Vissita que se hiço en la villa de Vall[ad]id de alguacilles de corte y scriuanos de prouincia el año de 1554 años por el licen[cia]do don Diego de Córdoba del Cons[e]jo de la Santa y General Ynquisición y contra s[ecreta]rios y relatores del Q[onsejo]» (AGS, CC, leg. 2746).

<sup>307</sup> En AGS, CC, leg. 2745, s. n., se contiene la comisión al notario y sus resultados: «Don Diego de Córdoba, del Consejo de su Magt. en la Santa y general Inquisición porq. conuiene al seruyçio de Su Magt. y alteza hazer algunas diligencias y aberiguaciones (*sic*) sobre la visita que han mandado hazer de los alguaziles y escribanos y otros oficiales de su corte confiando de la integridad y fidelidad de vos Pero Luys, notario q. con toda diligencia hareys los que por nos vos fuere mandado por virtud de la comisión que para ello tenemos de su alteza segund q. es público y notorio por la presente vos encomendamos y cometemos lo susod[ic]ho y vos mandamos que vays a todas las villas y lugares y otras partes que conuienen, y recibays los dichos y deposiciones de testigos y hagays las otras diligencias nesçesarias segund q. vays aduertido y por virtud de la dichas comisión real que tenemos mandamos a todas y qualesquier personas que llamáredes que vengan y parezcan ante vos y digan sus dichos y deposiciones so las penas q. vos de parte de su alteza les pusiéredes... En la villa de Madrid, a catorze días del mes de abril de mill y quinientos y cinquenta y tres años.» En el mismo legajo se contiene la «Ynformación fecha por comisión del muy yllustre señor don Diego de Córdoba del Consejo de Su Magestad en la Santa y General Inquisición, visitador gen[er]al en la cort[e] de Su Mgt. tomada por Pero Luis Notario Apostólico, por su m[anda]do año de myll y quinientos e cinquenta y tres años.»

que difícilmente podían declarar en favor de los inquiridos: se tomó declaración a los galeotes en Cádiz y el Puerto de Santa María sobre el proceder de alcaldes y alguaciles <sup>308</sup>.

Llevado de una doble intención política y administrativa, Diego de Córdoba alcanzó gran detalle en su labor y dedujo incontables cargos particulares a los siguientes oficiales <sup>309</sup>: los *secretarios* Francisco del Castillo, Juan Gallo de Andrada, Rodrigo de Medina, Domingo de Zabala, Blas de Saavedra, Francisco de Vallejo, Pedro del Mármol y Pedro de Gálvez <sup>310</sup>; los *relatores* Sançio, Guedeja, Paredes y Almorox; los *oficiales del crimen* Juan de Garibay, escribano, Francisco Arias, escribano, Diego Álvarez, relator; los siguientes oficiales de Garibay: San Juan, Lezama, Pedro Álvarez de Salinas, Juan Téllez, Estrada, Córdoba, Juan de la Peña, Sánchez <sup>311</sup>; los siguientes oficiales de Francisco Arias: Gil de Ávila, Luis Román, Alonso de Illescas, Guerra, Francisco de Henao <sup>312</sup>; *oficiales de lo civil*: los escribanos Juan de Santander y Diego de Hermosa (de la audiencia y juzgado del alcalde Durango); García de Hermosilla (de la del licenciado Morillas); Jerónimo de Atienza y Pero Ramírez (bajo órdenes del alcalde Ronquillo); Juan de Montoya y Juan de Cereceda (a las órdenes del alcalde Ortiz, con quien también colaboraba Atienza); y finalmente Galarza <sup>313</sup>; los *alguaciles* Diego de Salinas el viejo, Miguel Nebro, Juan de Soto (sus herederos), García Velázquez, Bartolomé de Santiago el viejo,

<sup>308</sup> AGS, CC, leg. 2746, carta del escribano Andrés Carvajal al doctor Hernán Pérez de la Fuente, de 19 de marzo de 1554: «Por quanto por mandado de Su Alteza y por su comysión particular entiendo en hazer algunas ynformaciones y aueriguaciones cerca de los negocios tocantes de la visita del Consejo Real de Castilla, de los fiscales y de los alcaldes de corte y rrelatores y scriuanos y alguaziles y porteros y carzeleros del d[ic]ho Consejo y de los d[ic]hos alcaldes en la qual uisita entiende don Diego de Córdoua del Consejo de Su Magtd. de la Sancta General Ynquisición mandó a uos Juan Hurtado scriuano del audiençia rreal de los grados desta çiudad de Seuilla que uais a la uilla del Puerto de Sancta María y a la ciudad de Cáliz a donde dizen q. están las galeras de Su Magd. y en las dichas... sabed de los galeotes que a ellas han sido lleuados por mandamyento de los d[ic]hos alcaldes de corte, de los quales rescebiréis juramento... a los quales preguntareis que digan y declaren lo que saben o uieron que algunos de los d[ic]hos alcaldes de corte y alguaziles o escriuanos o carzeleros o porteros hizieron yndiuida e ynjustamente su officio rescibiendo algunos cohechos, o haziendo algunos malos tratamyentos o soltando algunos presos que meresçieren castigo por algunos rrespectos sin castigallos... o prendieron algunos que no tuieron culpa o hecho alguna otra cosa indiuida».

<sup>309</sup> Tomados de una «Nómina de las personas de los oficiales del Consejo y de las audiencias criminal y çiuil de los alcaldes a quienes se dan cargos» (AGS, CC, leg. 2745).

<sup>310</sup> De manera que todos los secretarios recibieron cargos. Todos ellos son considerados escribanos por GAN GIMÉNEZ, P., «El Consejo Real de Carlos V. Tablas cronológicas (1499-1558)», *Chronica Nova*, 4-5 (1969), pp. 29 y ss.

<sup>311</sup> De esta manera, el único oficial de Garibay que no recibió cargos fue Astrada (AGS, CC, leg. 2746).

<sup>312</sup> La nómina de oficiales del crimen se completó con Luis Romero, Gallego, Medrano y Martín de Olalkiaga (AGS, CC, legs. 2745 y 2746).

<sup>313</sup> Ninguno de ellos aparece en las nóminas consignadas por GAN, P., quien debió fijarse sólo en los de lo criminal. La relación se completa con Francisco de Pantoja, escribano al servicio de Morillas que, pese a no aparecer entre los oficiales con cargos, también los recibió.

Juan de Irizar, Juan de Cuero, Jerónimo de Vallejo <sup>314</sup>, Antonio de Soria, Juan de Cuéllar, Pedro de Galdámez, Juan de Argüelles, Galarón (*sic*) de Zamudio, García de Hoyo, Diego de Ricote, Felipe de Salinas el mozo, Antonio de Santiago el mozo, Gregorio de Medina, Lázaro de Villa, Mercado <sup>315</sup>, Luis López, ex alguacil del campo, Marcos Bravo, alguacil del campo, Francisco de Ovelar, alguacil del campo; los *porteros* Brillones, Santander, Ponce, Miranda, Treviño, Portillo, Barahona, Pablo de la Horta y Ramírez, oficial de Pantoja <sup>316</sup>; los *abogados* Meneses, Pacheco y Soto; los *procuradores* Diego de Rosales <sup>317</sup>, Hernando de Cisneros —procurador en la cárcel real de corte <sup>318</sup>—, Sepúlveda el Viejo y Diego López; el *carcelero* Alonso Gómez y finalmente, el *portero* de la cárcel Montero.

Con todo, para nuestro propósito adicional de mostrar la regeneración judicial alentada por el príncipe tienen más interés los cargos generales formulados a cada clase de oficiales en conjunto, que permiten apreciar el afán del visitador por reconstituir el ejercicio forense en la corte, largo tiempo afectado por problemas que entorpecían la materialización de sus resoluciones y cuyo estudio en esta época no se ha abordado de forma unitaria. La realidad judicial cortesana superaba ampliamente la actividad de los oidores de Consejo Real o los alcaldes de Casa y Corte, la efectividad de cuyos acuerdos dependía en gran medida de la diligencia de una multitud de oficiales subordinados encargada de tramitarlos, oficiales de importancia creciente y correlativa a la consolidación del poder regio. Como ya hemos adelantado, la identificación de la función real con el cumplimiento y ejecución de la justicia, junto al amplio concepto que esta englobaba en el medievo, fue el camino por el que el poder real adquirió una posición preeminencial en la sociedad corporativa castellana <sup>319</sup>.

La justicia cortesana, según aquí la tratamos y se refirió a ella el propio príncipe, era un entramado concluso el siglo anterior pero plenamente vigente. A mediados del siglo XIV se elaboró la última enumeración de causas cuya determinación atañía al Rey «principalmente por razón de señorío», contrapuestas a los pleitos foreros, o sujetos

<sup>314</sup> CALVETE DE ESTRELLA, J. C., *El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe*, Madrid, 1930, I, pp. 38 y ss., alude a las dificultades sufridas en Génova por el alguacil Jerónimo de Vallejo, que siguió la *jornada* del príncipe en 1548 bajo órdenes del alcalde Francisco de Menchaca, por razón de la detención de don Antonio de Arce. El episodio, además de mostrar la acumulación jurisdiccional propia de la monarquía corporativa, aunque la jurisdicción se ejerciera lejos de los reinos propios, mostró el valor mediador de alguaciles y alcaldes entre fuerzas militares esfrentadas, en razón de su naturaleza «civil».

<sup>315</sup> Todos estos oficiales constan en GAN, P., *op. cit.*, pp. 148-149.

<sup>316</sup> Aparentemente, ninguno de ellos aparece entre los oficiales citados por GAN.

<sup>317</sup> Aparece como procurador de pobres en las nóminas de Gan entre 1536 y 1554 (GAN, «Tablas...», pp. 113-149), sustituyéndole Diego Sánchez desde 1556, al menos hasta 1558 (*op. cit.*, pp. 153 y ss.). Como se aprecia, Rosales fue un claro damnificado de la inspección.

<sup>318</sup> AGS, CC, leg. 2745.

<sup>319</sup> Tomamos lo dicho de PÉREZ DE LA CANAL, M. A., «La justicia de la corte en Castilla durante los siglos XIII al XV», *Historia, Instituciones, Documentos*, 2 (1975), pp. 383-481, p. 387, si bien este autor emplea vocabulario «institucionalista».



a la consideración de tribunales municipales o señoriales, si bien la diferencia entre ambos conductos jurisdiccionales distaba de ser rígida y nítida. Las primeras se denominaron «casos de Corte», eran resueltas donde residía el Rey, si bien la corte fue considerada fuero comunal de todos los moradores del reino.

Pronto se advirtió la imposibilidad del Rey para conducir el ejercicio judicial en solitario, por lo que recabó el auxilio de hombres encargados de colaborar en el desarrollo de su función jurisdiccional; tales oficiales se integraron en la casa del monarca, ambos formaron la corte, junto a la chancillería que legalizaba los documentos emitidos mediante el sello real. En un principio, la dependencia de las funciones de Rey, oficiales y chancillería supuso que estos últimos siguieran al primero allí donde fuera. Inicialmente las cortes castellanas protestaron en cada ocasión que se separaban, pero el creciente perjuicio que la movilidad conjunta provocaba a los súbditos necesitados del uso o posesión de documentos reales provocó que se admitiera la separación de Rey y chancillería, que se hizo sedentaria. La necesidad de estar cerca del sello real para autentificar los documentos resultantes de su actividad judicial supuso que los oficiales de justicia dejaran de acompañar al monarca para ir con la chancillería. Esta separación no significó que oficiales —como miembros de la casa real— y chancillería perdieran el rango de *corte*, dado que ésta poseía el sello real, que personificaba al Rey. He aquí un desarrollo culminado en el siglo xv, cuyo resultado fue vigente al menos durante casi toda la edad moderna. Y que ayuda a comprender el celo del príncipe Felipe por hacer útil a su propósito la justicia real, mediante la fiscalización no sólo de la actividad de los ministros dotados de capacidad jurisdiccional, sino de los oficiales encargados de tramitar sus resoluciones. Pues se trataba de manifestación tan importante de su majestad real como el ceremonial y el servicio del que se valía, y todo ello constituía su corte<sup>320</sup>. Es ésta una explicación jurídica del término que, en lo sustancial, coincide con aquella que lo concibe como un fenómeno de ampliación doméstica —que detallaremos en el epígrafe siguiente— y tiene ejemplo en la actividad múltiple de alcaldes y alguaciles.

La tarea de Diego de Córdoba resultaba, pues, de suma importancia para el príncipe, motivo por el que éste acometió tan tediosa tarea con suma decisión, y para la primavera de 1554 ya daba cargos a los oficiales<sup>321</sup>. A continuación desglosamos las conclusiones alcanzadas por el visitador sobre cada categoría de servidores, precedidas de una breve referencia sobre la función concreta de éstos, que no siempre ha sido posible aclarar dada la confusión que preside las fuentes.

<sup>320</sup> Simplificamos la cuestión a sabiendas, para evitar alejamientos del tema central, valiéndonos de PÉREZ DE LA CANAL, M. A., *op. cit.*, pp. 397, 412 y 414-416.

<sup>321</sup> AGS, CC, leg. 2745, cargos del alguacil Juan de Soto, dados a su mujer María de Medina por estar difunto. La fecha de 1 de mayo llevaban los cargos particulares del secretario Francisco de Castillo (*ibid.*). Al 13 de abril de 1554 pertenecen los cargos del licenciado Soto, abogado de pobres (*ibid.*).

## Alguaciles

Los alguaciles de Casa y Corte eran oficiales ejecutivos encargados de cumplir las órdenes dimanadas de la sala de alcaldes de Casa y Corte <sup>322</sup>. Eran, pues, auxiliares de éstos en cuestiones de *policía*, concepto que en la Edad Moderna superaba ampliamente el significado de mantenimiento del orden público que —convencionalmente— posee en la actualidad y cubría las múltiples y diversas manifestaciones del gobierno y administración de justicia de la corte <sup>323</sup>. La figura del alguacil se perfiló en el momento de recepción del Derecho romano en Castilla, en plena Baja Edad Media, y pronto se les atribuyó la seguridad de bienes y personas <sup>324</sup>. Desde su acceso al trono, el Emperador fue consciente de la importancia de la intervención de los alguaciles en un panorama político convulso y ocuparon la atención de las ordenanzas para los alcaldes de 1518, que fijaron su subordinación a éstos y sus ocupaciones en el control de abastos y visita de la cárcel <sup>325</sup>. En cuanto a su jerarquía institucional, el mayor concededor de

<sup>322</sup> Para el estudio de los alguaciles nos guiamos por el trabajo de MONTAGUT CONTRERAS, E., *Los alguaciles de Casa y Corte en el Madrid del Antiguo Régimen*, quien particulariza la función de los alguaciles en la detención de delinquentes, la realización de rondas y el mantenimiento del orden (*op. cit.*, p. 37). Sobre su importancia durante el reinado de los Austrias, *cfr.*, pp. 37-81.

<sup>323</sup> Es este concepto sobre el que ha habido amplia controversia, pues se perfiló teóricamente en el siglo XVIII y se ha tendido a ignorar manifestaciones anteriores, como la constituida por la *junta de policía* de tiempo de Felipe II estudiada por GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, A., «El bando de policía de 1591 y el pregón general de 1613 para la villa de Madrid», *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid*, 38 (1933), pp. 141-179, y por ANDRÉS, G. de, «Ordenación urbanística de Madrid dada por Felipe II en 1590», *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 12 (1976), pp. 15-31. En una consideración histórico-jurídica, han sido varios los autores que han tratado del término: FERNÁNDEZ DE VELASCO, R., «La noción de Policía. Supuestos y consecuencias», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1927, núm. 150, pp. 762 y ss.; NIETO, A., «Algunas precisiones sobre el concepto de Policía», *Revista de Administración Pública*, 1976, núm. 81, pp. 36-54; *id.*, *Estudios históricos sobre administración y Derecho administrativo*, Madrid, 1986, pp. 73-122; MARTÍNEZ RUIZ, E., *La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración*, Madrid, 1988, pp. 9-13. COVARRUBIAS, S. de, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Barcelona, 1988 (ed. facsímil de la de Barcelona de 1943, a cargo de MARTÍN DE RIQUER), p. 875, incluye el término y sus derivaciones sintácticas: «Término ciudadano y cortesano. Consejo de policía, el que gobierna las cosas menudas de la ciudad y el adorno della y limpieza. Es vocablo griego (*Politeia*), república. Político, el urbano y cortesano. Política, la ciencia y modo de gobernar la ciudad y república.»

<sup>324</sup> MONTAGUT, E., *op. cit.*, p. 52. Sus cometidos constaron ya en la ley XX del tít. IX de la segunda partida, «Código de las Siete Partidas», en *Los códigos españoles, concordados y anotados*, Madrid, 1848, II, pp. 371-372.

<sup>325</sup> Las *Ordenanzas para los alcaldes de Corte hechas por la reina doña Juana y don Carlos*, de 21 de mayo de 1518, se contienen en AGS, DC, leg. 1, núm. 60, están en *Novísima Recopilación*, lib. IV, tít. XXX, ley VIII, y han sido publicadas por GUARDIA, C. de la, *Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII*, Madrid, 1993, pp. 223-232. Pronto fue confirmada la relevancia intuida por el Emperador, con ocasión de las Comunidades, DANVILA, M., *Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla*, Madrid, 1897-1900, 5 tomos.

esta figura los considera oficiales, si bien en nuestra opinión en sus actos ejercían una autoridad delegada de los alcaldes y por tanto del Rey <sup>326</sup>.

Como se deriva de las precisiones hechas en el anterior epígrafe, y del mismo modo que sus superiores, los alcaldes de Casa y Corte, los alguaciles presentaron una notable vinculación con la Casa Real, patente en las atribuciones del alguacil mayor del Rey en tiempo de Alfonso X como dirimente de pleitos entre miembros de su casa <sup>327</sup>. La mayor parte de los beneficiarios del oficio habían ejercido previamente como criados de alguna Casa Real <sup>328</sup>, circunstancia que subraya la homologación entre Casa Real y aparato administrativo como componentes de la corte regia, según se deduce de las funciones compartidas tanto por alguaciles como por alcaldes en ambos ámbitos <sup>329</sup>.

La simultaneidad de ambas dedicaciones en alguaciles y alcaldes derivó de la lenta génesis del concepto *corte* al que antes nos referíamos. Pese a la dificultad de su definición, al confluir características políticas, culturales, sociales y económicas, Norbert Elías fue el primer autor que se aproximó a su sentido al afirmar que era la amplificación extraordinaria de la Casa y la economía doméstica. La consolidación del poder real desde la Baja Edad Media quedó expresada en un mayor dominio político o territorial, que fue asimilado por el monarca para su gestión desde un punto de vista *doméstico* <sup>330</sup>. «El dominio del Rey sobre los reinos no fue más que una ampliación del dominio del príncipe sobre su casa y administración» <sup>331</sup>. De esta manera, surgió el concepto «corte», en el que Casa Real y administración territorial poseían unidad, hasta tal punto que unos mismos oficiales repartían su actividad en ambos campos, caso de los alguaciles y los alcaldes.

De la misma manera, la provisión de estas plazas de alguaciles expresaba tal unicidad. El soberano estaba vinculado con sus servidores por lazos clientelares, constitutivos de una estructura suprafamiliar, que se mantenían vivos mediante recompensa y castigo. La fidelidad del servidor era premiada por el Rey con mercedes <sup>332</sup>. Una larga vida

<sup>326</sup> MONTAGUT, E., *op. cit.*, p. 41, suscribe la distinción aplicada entre ministros y oficiales por TOMÁS Y VALIENTE, F., «El Gobierno de la Monarquía y la administración de los Reinos en la España del siglo XVII», en *Historia de España Menéndez Pidal*, tomo XXV, Madrid, 1982, p. 52, para calificar del segundo modo a los alguaciles, dado que no ejercían jurisdicción.

<sup>327</sup> MONTAGUT CONTRERAS, E., *op. cit.*, p. 51

<sup>328</sup> MONTAGUT CONTRERAS, E., «Criadas y nodrizas en la Casa Real. Sus recompensas: varas de alguaciles de Casa y Corte», *Torre de los Lujanes*, 20 (1992), p. 75. Aunque este autor estudia esta interrelación desde la instalación de la corte en Madrid, no conocemos razones para negarla en tiempo del Emperador.

<sup>329</sup> TOMÁS Y VALIENTE, F., *op. cit.*, p. 154.

<sup>330</sup> ELÍAS, N., *La Sociedad Cortesana*, México, 1982, p. 60.

<sup>331</sup> Nos limitamos a transcribir a MARTÍNEZ MILLÁN, J., «Introducción», en *id.* (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, 1994, p. 15.

<sup>332</sup> Al respecto, cfr. ATIENZA, I., y FERNÁNDEZ VARGAS, V., «Organización estamental y estructuras "suprafamiliares" en Madrid a finales del siglo XVI: un modelo demopolítico», *Revista Internacional de Sociología*, 44 (1986), pp. 407-434; ATIENZA, I., «Pater Familias, Señor y Patrón: O-económica, clientelismo y patronato

de servicio en la Casa Real solía ser recompensada con plazas como las de alguacil, sobre todo considerando la escasa exigencia para su ejercicio: mayoría de edad, honradez y aptitud física genéricas, para asistir a las rondas nocturnas, repeso, prisión de delinquentes, guardas en el Consejo Real...<sup>333</sup> Algunas de estas comisiones expresaban su raíz «doméstica», ya que acompañaban las jornadas reales para auxiliar a los alcaldes en el ejercicio de la justicia propio del Rey y realizaban comisiones lejos de él, como lo hacían los alcaldes, en expresión de la amalgama cortesana de Casa Real y administración territorial, fuera judicial o gubernativa.

En cuanto a la visita de Diego de Córdoba, entre los cargos generales contra los alguaciles destacaron las acusaciones sobre consentimiento del juego en la corte, el beneficio de regalos o el prendimiento de personas sin información previa. A diferencia de otros oficiales, los cargos generales se relacionaron con su ejercicio y no fueron arancelarios. Ello reflejaba su protagonismo en la vida cortesana, del que sin duda derivó la arbitrariedad que trasluce en las culpas que les fueron formuladas. A juzgar por ellas, los apresados por los alguaciles tenían serios motivos de preocupación, dado que, en primer lugar, abusaban del tormento y ordenaban a los escribanos tomar informaciones de aquellos testigos más desfavorables para el reo<sup>334</sup>. Ningún remedio podían esperar de los alguaciles, quienes se preocupaban de recibir personalmente sus informaciones<sup>335</sup>, imponían el sentido de sus testimonios tanto a los presos como a los testigos y detenían sin información previa, por simple queja<sup>336</sup>. Como se aprecia, mostraban gran dureza

---

en el Antiguo Régimen», en PASTOR, R. (ed.), *Relaciones de Poder, de Producción y Parentesco en la Edad Media y Moderna*, Madrid, 1990, pp. 411-458.

<sup>333</sup> MONTAGUT CONTRERAS, E. *op. cit.*, p. 77. La responsabilidad femenina en este circuito de las varas ha sido tratada en *id.*, «Viudas y varas de alguaciles de Casa y Corte (siglos XVI-XVII)», *Torre de los Lujanes*, 1993, núm. 24, pp. 115-128. Un análisis más completo sobre la vinculación entre Casa Real y ejercicio administrativo, en *id.*, *Los alguaciles de Casa y Corte...*, pp. 255-282.

<sup>334</sup> «Q. dan los tormentos a los presos syendo ellos los acusadores y les aprietan los cordeles quanto pueden y los molestan y maltratan syno declaran lo q. los d[ic]hos alg[uaci]les les piden. E suelen traer guardafianes p[ar]a dar tormentos.

Q. hazen denunciations y mandan a los es[criba]nos q. resciban las ynformaciones q. tomen los t[estig]los q. saben ellos q. quieren mal a los tales denunciados diziéndoles examina a Fulano q. está mal con el denunciado y q. todo lo criminal por la mayor p[ar]te se trata desta man[er]a» (AGS, CC, leg. 2746, cargos núms. 2 y 3).

<sup>335</sup> «Q. q[uand]o han hecho algund maltratamy[ent]o o sienten q. se han de q[ue]xar dellos resciben los mesmos alguaciles la yn[n]formación como quieren» (*ibid.*, cargo núm. 6).

<sup>336</sup> «Q. q[uan]do... hazen algunas denunciations están p[rese]nt[e]s al tomar de los t[estig]los e a las confesiones de los p[re]sos e auisan o p[er]suaden o atemorizan a los d[ic]hos p[re]sos de lo q. han de dezir e q. los t[estig]los no osan d[espu]és syno lo que ellos quieren y el official q. los examina no es p[ar]te p[ar]a q. se uayan e si se lo dize al d[ic]ho alg[uaci]l tien enemistad con el tal official.

Q. prenden algunas p[er]sonas syn m[andamien]to ny ynformación porq. les dizen q. han cometido delitos y después de presos les hazen la yn[n]formación» (*ibid.*, cargos 4 y 5). En COVARRUBIAS, S. de, *Tesoro de la lengua castellana o española*, p. 891, se contiene el significado de «quexa» en un ámbito judicial: «La querella que tenemos de alguno... Dar quexa, agrauarse ante el juez de alguno.» En la actualidad, el DRAE

en el ejercicio de su autoridad, si bien en ocasiones se despreocupaban de súbito por las causas iniciadas<sup>337</sup>. La arbitrariedad se complementaba con la ineficacia, especialmente en aquellos casos en que la ejecución sobre los reos no partía de su propia iniciativa sino de una instancia superior<sup>338</sup>.

La actividad de los alguaciles también tuvo una intención de beneficio económico para los escribanos o ganancia material de otro tipo. Diego de Córdoba inició su lista de cargos generales contra los alguaciles acusándoles de formular difamaciones sin motivo, con el propósito de aprovechar a los escribanos<sup>339</sup>. Asimismo, la mencionada desidia en cumplir las órdenes de detención de delincuentes, que «no los quieren prender aunq. los topen», tenía un trasfondo económico, pues cobraban los derechos de carcelaje y los dejaban marchar, en flagrante inexecución de las resoluciones judiciales, tanto en casos graves como livianos<sup>340</sup>. Igualmente, los alguaciles hacían denuncias de muchos vendedores de subsistencias e inmediatamente desatendían la causa abierta, la mayoría de las veces contra el correspondiente pago; también se concertaban con los condenados en sentencias por menos de la multa impuesta, en infracción de la ordenanza<sup>341</sup>. Finalmente, se valían de su posición y su condición periódica de *fieles* para tomar mantenimientos sin pagarlos, o a menor precio del estipulado<sup>342</sup>.

En lo referido a los cargos particulares, ejemplares resultan las culpas formuladas contra Argüelles («quiso forzar una doncella»), Nebro («consentía jugar e jugaua») o Francisco Arias (a quien se acusaba de alcahuete)<sup>343</sup>. Asimismo, se adujo contra el alguacil Vallejo, que en el ejercicio de su plaza cometió abusos contra los reos y detenciones arbitrarias<sup>344</sup>. El alguacil Medina recibió cuarentaseis cargos, que fueron desde

---

define: «Acusación ante juez o tribunal competente, ejecutando en forma solemne y como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito.»

<sup>337</sup> «Q. con la autoridad de sus ofiços hazen malos tratamientos e usan de mucho descomedim[en]to y q. luego dexan de seguir algunas causas» (*ibid.*, cargo núm. 8). Asimismo, cargo núm. 10: «Que hazen muchos males tratam[en]tos a los q. lleuan p[ro]cesos... sin causa y los apuñean y apalean con las uaras y les dizen palabras injuriosas.»

<sup>338</sup> «Que son remisos y ponen poca dilig[en]cia en esecutar los m[an]dam[en]tos de la Just[ici]a en prender los delinquen[tes] y s[al]ir a rescibyr informaçiones» (*ibid.*, cargo núm. 9).

<sup>339</sup> *Ibid.*

<sup>340</sup> «Q. teniendo m[an]dam[en]tos para prender delinquentes ansy por questiones como por otras causas no los quieren prender aunq. los topen. E también q[uand]o tienen m[an]dam[en]tos p[ar]a prender a algunos sobre cosas de palabras y es el caso liuiano pagándoles el que a de s. p[re]so un real de carçalaje sin meterlos en la carçel los sueltan y que en otras causas donde no ay pena de cámara ny de sangre ny de sueldos aunq. los delinquentes estén mandados prender los d[ic]hos alguaziles cobran sus d[e]r[ech]os y no los prenden» (*ibid.*, cargo núm. 7).

<sup>341</sup> *Ibid.*, cargos núms. 11 y 12.

<sup>342</sup> *Ibid.*, cargo núm. 13.

<sup>343</sup> AGS, CC, leg. 2745.

<sup>344</sup> «Q. sacó a una moça donzella a medianoche de casa de su padre sin ninguna ynformación e porq. el padre de la d[ic]ha donzella le dixo q. porq. lo auia hecho... le respondió q. era un bellaco y q. juraba

la imposición ilegal de multas —por contravenir pragmáticas— hasta irregularidades durante la testificación en denuncias contra blasfemos y ladrones <sup>345</sup>.

Como el cuerpo de mayor relevancia investigado por el visitador, en la indagación de los alguaciles se apreció lo arduo de la tarea de Diego de Córdoba, según cabía esperar del sustrato político propio de su comisión. Ello queda reflejado en la carta elaborada por el alguacil Juan de Argüelles, al descargarse de las culpas mantenidas por el consejero de Inquisición:

Yo me espanté q. el señor don Di[e]go no quisiese rescibir mi carta pues el Rey y todos los demás me hacen m[er]ced de rescibir y ver lo q. les escribo mayormente que un señor xp[istia]nísimo y de tanto ser no debe tener rancor contra un gusano como yo, sino condolerse de tanto... <sup>346</sup>

### Secretarios

No existe una idea clara sobre las atribuciones de este oficial en el siglo xvi. En principio, los secretarios se distinguían de los escribanos de cámara de los Consejos, aunque de ignorar la fecha de las disposiciones relativas a ambos oficios contenidas en la Recopilación, que atribuían las mismas funciones a uno y otro oficial indistintamente, cabría suscribir con Martínez Gijón que bajo ambos nombres se escondía el oficio de escribano <sup>347 348</sup>. Pero el contenido de la visita de Diego de Córdoba permite descartar la mencionada identidad entre secretarios y escribanos.

El parentesco atribuido se debía al hecho de que, además de gozar de fe pública, los secretarios participaban en la redacción de escritos y en los documentos que regulaban

---

a Dios q. les echaría en el cepo si hablaua y que le q[ue]braría la bara en la cabeça y con esto no osó yrse a quejar». Asimismo, había tratado muy mal a los vendedores de mantenimientos, injuriándoles y «q[ue]brándoles la bara en las cabeças a mucha gente y hazía sacar las pescadas y mandaua q. quitasen las colas y cabeças y aún las partiesen porq. fuese todo bueno y se lo llebaua». También sustrajo pertenencias a los reos mientras permanecían detenidos por los alcaldes (*ibid.*).

<sup>345</sup> AGS, CC, leg. 2746: «Q. llegó a un hombre q. yua a cauallo y le dixo q. le diese la capa que traya porque era contra premática. El qual le respondió que la podía muy bien traer y por no quedar en a cuerpo le dio dos ducados y él los recebió e no se hablo más en ello y aunq. Antes y después ha traydo la d[ic]ha capa ninguno se la ha quitado.

Q. a otro hombre con dezir que traya una capa y muslos de calças contra premática le llebó un ducado...»

Igualmente, el cargo núm. 27 incidió en que en denuncias por juego, blasfemias y hurtos, entre otras, permanecía presente a las declaraciones de los testigos sin estar permitido, hostigándoles de no declarar en contra del imputado: «Que en las denunciaçiones q. ha hecho así de juegos como de blasphemias e hurtos y otras cosas al t[ie]mpo que presenta algún testigo se halla presente a su examen y no es p[ar]te el que le toma a dezirle que pues lleua ynterese se aparte y si tal le dize tiene enmystad y riñe con él sobreello.» Los descargos de los alguaciles Pedro de Mercado, Nebro, Soria, etc., se encuentran en AGS, CC, leg. 2746.

<sup>346</sup> AGS, *ibid.*

<sup>347</sup> MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, pp. 311-312.

<sup>348</sup> HOYOS SANCHO, M. de, «Nuevo diseño de la secretaría judicial y agilización de la justicia», *Revista del Poder Judicial*, 1998, núm. 50, pp. 24-29. Esta autora reparte los antecedentes del secretario judicial

su actuación se equiparaban a los escribanos de cámara ya desde tiempo de Juan II (1447). Si bien durante el reinado de los Reyes Católicos se perfiló su labor y se convirtieron en eslabón entre los escribanos de cámara y el monarca<sup>349</sup>. Ello en lo que hace a su actuación en el Consejo, puesto que al mismo tiempo refrendaban las cartas directamente emanadas del Rey<sup>350</sup>.

Si se da por seguro el fundamento de los cargos formulados por Diego de Córdoba a los secretarios el 7 de abril de 1554<sup>351</sup>, permiten dudar de la efectividad de las atribuciones conferidas al Consejo. Sus irregularidades se dividen en dos clases, procedimentales y económicas. La relación se inició con cargos del primer tipo: el decreto irregular de peticiones fuera del Consejo<sup>352</sup> y la vista repetida de procesos, circunstancia que provocaba retraso en el expediente<sup>353</sup>. Asimismo, los secretarios enviaban los registros de las provisiones con poco cuidado<sup>354</sup>, cuando no las enmendaban tanto en la parte expositiva como en la resolutoria una vez acordadas por los oidores del Consejo y antes de su sello y registro<sup>355</sup>. Cargos de esta clase mostraban las dificultades del Consejo Real para materializar sus decisiones hacia el final del reinado del Emperador.

Igualmente, el descuido de las escrituras y de su depósito provocaba serias distorsiones de procedimiento, como favorecer que los procuradores vieran antes de su publicación los méritos tanto de la parte representada como de la contraria, y que las partes extravíaran las peticiones de las contrarias<sup>356</sup>; en este sentido, las pérdidas también fueron responsabilidad de los secretarios por negligencia a la hora de coser las peticiones

---

contemporáneo entre escribanos, relatores y actuario (*op. cit.*, pp. 23-24), sin citar curiosamente a los secretarios.

<sup>349</sup> «Otro sí mandamos a los nuestros Secretarios, que agora son, ó fueren de aquí adelante, y a cada uno dellos, que todas las cartas que fueren acordadas en el nuestro Consejo que han de passar por los nuestros escriuanos de cámara, que cada que fueren requeridos por qualquier de los nuestro escriuanos de cámara, nos las den a librar, y luego las tornen a los dichos escriuanos de cámara, sin pedir ni llevar por ello cosa alguna» (*Nueva Recopilación*, lib. 2, tit. 18, ley 2).

<sup>350</sup> Al respecto, cfr. MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, pp. 287-288.

<sup>351</sup> AGS, CC, leg. 2745, s. n.

<sup>352</sup> «Q. decretan muchas peticiones syn leerlas en Consejo, en sus casas y fuera, poryendo las decretaçiones como sy en Consejo de proueyesen no siendo así» (AGS, CC, leg. 2746, cargo núm. 1).

<sup>353</sup> «Q. auiedo lleuado la vista de los processos al cabo quando se saca executoria tornan a llevar otra vista» (AGS, *ibid.*, cargo núm. 2). La influencia del tiempo en el Derecho actual, medido en diferentes unidades, ha sido subrayado por PELÁEZ BERASATEGUI, J. I., «La medida del tiempo en el Derecho», *Tapia*, 2000, núm. 110, pp. 15-23. Tal importancia puede ser proyectada al pasado, aún con mensurabilidad menos concreta, para comprender el afán por agilizar el proceso.

<sup>354</sup> «Q. los registros de las prouisiones q. se lleuan al registro los embían borrados, biçiosos y de mala letra» (AGS, *ibid.*, cargo núm. 5).

<sup>355</sup> «Q. después de firmadas las prouisiones y estando despachadas antes que se sellen y registren las enmiendan en la diezsiua (¿decisiva?) y en la narratiua» (*ibid.*, cargo núm. 7).

<sup>356</sup> «Q. tienen mal recaudo en sus es[cri]ptorios y es[cri]pturas que aconçe muchas uezes los procuradores uer las probanças de sus p[ar]tes y contrarias antes q. se haga publicación dellas y que conuenga uerse.

en los procesos <sup>357</sup>. Culpas semejantes eran la ausencia de sus escritorios <sup>358</sup> o del propio Consejo <sup>359</sup>, el descuido en estudiar las peticiones, no guardar compostura en el tribunal <sup>360</sup> o la inserción de las escrituras originales en los procesos, pese a que era obligatorio incluir copias <sup>361</sup>. Pero más influencia tuvieron en el funcionamiento del tribunal, al tiempo que denunciaban el amplio margen de intervención que los secretarios tenían en él, cargos como la inobservancia del secreto <sup>362</sup> o la elaboración de relaciones de algunos pleitos en sus propias casas, para así orientar con mayor calma la sentencia <sup>363</sup>. Semejante gravedad tenía la asignación de las residencias a sus amigos, potestad que confería al secretario cierta capacidad de intervención en la lucha faccional <sup>364</sup>.

Junto a estas irregularidades específicamente procesales, se advirtieron otras económicas que tenían consecuencias para la actividad judicial, puesto que la percepción abusiva e ilegal de derechos debió enajenar sin duda una extensa parte de la sociedad castellana del alcance de la justicia de apelación <sup>365</sup>. Además de aceptar presentes de los litigantes <sup>366</sup>, fueron numerosas las coyunturas del proceso aprovechadas por los secretarios para incrementar su bolsa. A continuación se ofrece un cuadro de las mismas, así como la cantidad ilegalmente percibida.

Junto a estas irregularidades mensurables, otras argucias beneficiaron la economía de los secretarios. Cobraban incluso por dar las escrituras y peticiones originales o procurar la vista de los procesos y para ocultar sus manejos no asentaban los derechos llevados en las causas <sup>367</sup>. Igualmente, presentado por las partes un proceso en el Consejo

---

Q. por el mal recaudo q. tienen en sus es[cri]pturas uen las p[ar]tes los maços de peticiones y toman las agenas y asy se pierden muchas» (*ibid.*, cargos núms. 8 y 9).

<sup>357</sup> *Ibid.*, cargo núm. 11.

<sup>358</sup> «Q. no están en sus es[cri]ptorios y por esto los negoçiantes son mal despachados y maltratados de sus oficiales» (*ibid.*, cargo núm. 12).

<sup>359</sup> «Q. hazen faltas y residen mal en el Consejo saliendo fuera y no estando como conuiene» (*ibid.*, cargo núm. 14).

<sup>360</sup> *Ibid.*, cargos núms. 15 y 16.

<sup>361</sup> *Ibid.*, cargo núm. 18.

<sup>362</sup> «Q. auiedo de tener secreto todo lo q. pasa en Consejo lo rebelan y auisan a las p[ar]t[e]s de lo q. han de hazer en sus negoçios, diziendo q. uno de los del Consejo nonbrándole no está bien en sus negoçios y a rasgado la prouisión y q. esperen hasta que uenga otro semanero» (*ibid.*, cargo núm. 10).

<sup>363</sup> «Q. no lleuan con tiempo las peticiones p[ar]a q. se saquen en relación y hazen en sus casas sacar las relaciones de algunas porq. se prouean como quieren» (*ibid.*, cargo núm. 13).

<sup>364</sup> «Q. aunque se reparten entre ellos las residencias toman las de sus amigos y después el que la tomó da otro negocio al secretario a quien cabía la tal residencia» (*ibid.*, cargo núm. 17).

<sup>365</sup> La transcendencia jurídica y sociológica del coste judicial, en LALINDE ABADÍA, J., «Los gastos del proceso en el Derecho histórico español», *Anuario de Historia del Derecho Español*, núm. 34 (1964), pp. 249-416.

<sup>366</sup> AGS, CC, leg. 2746, cargos núms. 20 y 21.

<sup>367</sup> *Ibid.*, cargos núms. 28, 35 y 36.



# REHABILITACIÓN DE LA JUSTICIA CORTESANA

Vistas de procesos y probanzas	4 mrs. la hoja a cada parte y tercer opositor <sup>368</sup>
Registro de provisiones en sus escritorios	Más de real y medio <sup>369</sup>
Asiento de cédulas del príncipe	Un real y medio <sup>370</sup>
Asiento de cédulas de merced	Cantidad variable <sup>371</sup>
Registro de las notarías	Un real <sup>372</sup>
Registro de ejecutorias	Un real cada hoja <sup>373</sup>
Otorgamiento de poder	Un real
Sustitución de otorgamiento de poder	Medio real <sup>374</sup>
Traslado de sentencia	Medio real
Notificación de sentencia	Medio real o un real <sup>375</sup>
Busca de proceso no fenecido	2 ó 3 reales <sup>376</sup>
Fe de litispendencias	Medio real y más <sup>377</sup>
Traslado de petición	Medio real <sup>378</sup>

para determinado trámite, cobraban como si hubiese de verse por entero <sup>379</sup>. Exacciones a las que se debían añadir las cometidas por sus oficiales <sup>380</sup>.

La relación de derechos consignada permite deducir la tipología forense del Consejo. La búsqueda de un pleito no fenecido era el segundo trámite más gravoso de los cobrados

<sup>368</sup> *Ibid.*, cargo núm. 23.

<sup>369</sup> *Ibid.*, cargo núm. 24.

<sup>370</sup> *Ibid.*, cargo núm. 25.

<sup>371</sup> *Ibid.*, cargo núm. 26.

<sup>372</sup> *Ibid.*, cargo núm. 27.

<sup>373</sup> *Ibid.*, cargo núm. 29.

<sup>374</sup> *Ibid.*, cargo núm. 30.

<sup>375</sup> *Ibid.*, cargo núm. 31.

<sup>376</sup> *Ibid.*, cargo núm. 32: «Q. se a llebado de cada oja de las fees de las litispendencias a medio real y a más y se an alargado por llevarse más d[e]r[ech]os.»

<sup>377</sup> *Ibid.*, cargo núm. 33.

<sup>378</sup> «Q. hazen que las p[ar]tes q. ante ellos litigan les paguen dos uezes las uistas de los proçessos syno les muestran conoçimiento y las p[ar]tes por no desabrirlos y tenerlos gratos se las pagan» (*ibid.*, cargo núm. 6).

<sup>379</sup> «Q. presentándose ante ellos un processo p[ar]a un solo effeto de es[cri]ptura declarando la p[ar]te lo q. presenta del d[ic]ho proçesso y no más lleban los d[e]r[ech]os de la vista de todo el d[ic]ho proçesso o es[cri]ptura como sy las p[ar]t[e]s lo presentasen todo» (*ibid.*, cargo núm. 3).

<sup>380</sup> *Ibid.*, cargo núm. 34.

por los secretarios, lo que hablaba de la lentitud reinante en el organismo. Asimismo, las imposiciones de los secretarios o sus oficiales tenían claras consecuencias para el expediente. Puesto que llegaron al extremo de cobrar por duplicado la vista de los procesos<sup>381</sup> y sus mozos recibían dinero de los litigantes por lograr del presidente del Consejo la encomienda de los procesos a los oidores que deseaban<sup>382</sup> o por despachar las provisiones y llevar los procesos a los letrados<sup>383</sup>. De todo lo dicho cabe destacar entre los propósitos de la visita la persecución de la demora judicial, concepto de difícil definición. Si se acude —con la prevención exigida— a las categorías jurídicas del presente, la «dilación indebida» es aquella que impide la satisfacción de los intereses litigiosos en tiempo razonable<sup>384</sup>.

Complemento de los cargos generales fueron los particulares, que reflejan mayor sensibilidad política y fueron publicados el primero de mayo de 1554. Entre otros cuya relación sería enojosa, el secretario Francisco de Castillo fue acusado de la posesión ilegal de 162.600 mrs. por cierta condena en el Consejo. Su compañero Saavedra recibió culpas más graves que reflejaban cómo la disputa política fluía tras la actividad de los secretarios, al ser acusado de detraer cierta causa a un compañero por afectar a un allegado<sup>385</sup>, así como de decretar peticiones en su casa según su conveniencia, en nombre de los oidores<sup>386</sup>. Ante culpas de este tipo, resultaban menos relevantes las acusaciones centradas en la alteración del estilo del tribunal de las que Saavedra también fue objeto<sup>387</sup>.

En lo tocante al secretario Gallo de Andrada, las acusaciones se centraron en la percepción de dádivas y regalos<sup>388</sup>. Vallejo fue acusado de poca diligencia, en perjuicio

<sup>381</sup> «Q. de los processos y probanças q. ante ellos penden han lleuado las uistas a quatro mrs. de cada oja de cada p[ar]te sin tener respeto a las p[ar]t[e]s e renglones q. la ordenança manda.

Q. quando alguna p[er]s[on]a sale a algún pl[e]ito o causa q. ante ellos pende como tercero opositor los d[ic]hos secreta[r]ios cobran la uista de todo el processo q. la d[ic]ha p[er]s[on]a se opone a quatro mrs. de cada hoja» (*ibid.*, cargos núms. 21 y 22).

<sup>382</sup> «Q. reçiben dineros y cohechos sus moços q. lleuan las encomiendas al presidente porq. tengan manera q. se encomienden a quien las p[ar]tes quieren, y en esto ha auído mucho exçeso y desorden» (*ibid.*, cargo núm. 4).

<sup>383</sup> *Ibid.*, cargo núm. 19. Llevaban a las partes por lo mencionado medio y hasta un real.

<sup>384</sup> Así lo define, HOYOS SANCHEZ, M. de, *op. cit.*, «Nuevo diseño de la Secretaría Judicial y agilización de la justicia», *Revista del Poder Judicial*, 50 (1998), p. 14.

<sup>385</sup> «Q. pendiendo cierto negocio y pl[e]ito ante otro secretario por atraerle para sí puso la presentación de una petición ante datta y sacó el negocio del otro secretario y le tomó para sí porq. tocaba a un amigo suyo» (AGS, CC, leg. 2745).

<sup>386</sup> «Q. sin leer ny llebar algunas peticiones al q[on]sej[o] las decreta en su casa poniendo en ellas q. los señores del Consejo proueen y mandan lo que él prouee no siendo así» (*ibid.*).

<sup>387</sup> «Q. en un negocio q. ante él pasó proueyó unas peticiones contra lo q. se suele proueer en Consejo y por ello se traxo cierto pl[e]ito al Consejo en caso que no se podía traer y quejándose la p[ar]te agraviada a uno de los del Consejo el d[ic]ho secreta[r]io boluió el processo y no dio en él la petición q. se auía dado sobreello aunq. Se lo pidieron por no manifestar lo q. en el Q[on]sej[o] se proueyó» (*ibid.*).

<sup>388</sup> «Q. tratándose cierto pl[e]ito ante él y e[st]ado pagado de sus derechos pidió a una de las partes ciertas posturas de árboles que se las hiziese traer y le traxeron una carga dellos de harto lexos» (*ibid.*).

de los pleiteantes<sup>389</sup>. Los cargos del secretario Diego de Gálvez reflejaron la discrecionalidad gozada por los secretarios para deslegitimar el ejercicio forense en el seno del Consejo Real, y mostraron ser tan importantes para la ejecución de las decisiones gubernativas y judiciales como lo eran los ministros jurisdiccionales. Fue acusado de falsear documentación para beneficiar a una de las partes incurso en cierto pleito<sup>390</sup>, así como de violar el secreto del tribunal<sup>391</sup>. Fue un cargo semejante al formulado contra el secretario Medina, con el agravante de viciar simultáneamente el proceso<sup>392</sup>.

### Relatores

En comparación con los secretarios, los cargos que Diego de Córdoba formuló a los relatores fueron mucho menos numerosos (tan sólo cuatro), hecho que revela menor protagonismo en el funcionamiento procesal del Consejo. Éste se redujo a hacer relación, leer los resúmenes de las causas ante el Consejo<sup>393</sup>, tarea que hablaba por sí misma sobre la densidad del procedimiento en el Consejo Real, muy relacionada con el cobro de los escribanos según la cantidad de documentos elaborados<sup>394</sup>. Las irregularidades que se les imputaron eran principalmente arancelarias. Junto a tomar los procesos de los secretarios de manera irregular<sup>395</sup>, se les acusó de recibir presentes de las partes, llevar derechos ilegalmente<sup>396</sup> y no asentar los percibidos por las vistas de las causas<sup>397</sup>.

<sup>389</sup> «Q. no tiene buen despacho en el offiçio y por ello resciben los negoçiantes agrauio» (*ibid.*).

<sup>390</sup> «Q. en un negocio q. pasaua ante otro secreta[ri]o en q. se pidia pesq[ui]sador la p[ar]te q. lo quería condezir pedía traslado y para que se le diese lleuó la petición en que lo pedía al d[ic]ho secretario e sin llevarla al Consejo la decretó e puso en ella cómo los del Consejo se lo mandauan dar no lo auiedo p[ro]beydo. E asy el otro secret[ari]o uista la petición con lo p[ro]beydo dió traslado del d[ic]ho negocio a la p[ar]te q. lo pedía» (*ibid.*).

<sup>391</sup> «Q. en cierto negoçio declaró a la p[ar]te lo q. auía pasado en secreto en Consejo diziéndole que uno de los del Consejo q. le nombró no estaua bien en su negocio e por esto no se probeyó» (*ibid.*). Cargos comunicados en Valladolid, a 9 de abril de 1554.

<sup>392</sup> «Q. tratándose cierto negoçio ante el secretam[en]te y tocando a çierta p[er]ssoa el d[ic]ho secretario auisó a la d[ic]ha p[er]ssoa de lo q. se auía proueydo y por su auiso dio petición en el caso pidiendo que en el negoçio se hiziese relación de lo q. él pedía y se diese prouisión con la d[ic]ha relación y auiedo el d[ic]ho secretario de dar una prouisión en el caso hizo hazer dos y la una entregó a una p[er]ssoa q. era p[ar]te contra quien se daua y detvuo la otra» (*ibid.*).

<sup>393</sup> Sobre estos oficiales, LÓPEZ GÓMEZ, M. A., «Los relatores del Consejo de Castilla y de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte», *Hidalguía*, 218 (1990), pp. 43-60.

<sup>394</sup> Los efectos de esta disposición, en KAGAN, R. L., *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700*, Salamanca, 1991, pp. 59-60.

<sup>395</sup> «Q. tomaban los proçesos syn encomendárselos de mano de los secretarios» (AGS, CC, leg. 2745, cargo núm. 3).

<sup>396</sup> «Q. lleuan d[e]r[re]ch[os] de vista de qualquier p[ro]ceso o probança q. se p[re]senta para sólo un hefeto de una aueriguación o es[cri]tura declarando la p[ar]te q. presenta el d[ic]ho p[ro]ceso y p[ro]bança para tal cosa y no más no auiedo de llevar la uista sino solamente de aquellas hojas e es[cri]ptura q. la p[ar]te declara que p[re]senta» (*ibid.*, cargo núm. 2).

<sup>397</sup> *Ibid.*, cargo núm. 4; cargos formulados en Valladolid el 7 de abril de 1554.

Los cargos particulares presentados contra uno de los relatores abundaban en tales irregularidades, incidiendo de manera especial en el retardo que su descuido provocaba en el expediente del Consejo:

Q. tiene mal expediente y es muy desgraciado con los litigantes y que detiene los negocios q. están en su poder y que los litigantes e personas que en su poder tienen neg[oci]os los trata mal de muchas malas crianças q. les dize en tanto grado q. algunos antes quieren perder los negocios q. negociar con él <sup>398</sup>.

### *Procuradores*

Todos los procuradores que ejercían funciones de representación de las partes por entonces en el Consejo, esto es, Fernando de Cisneros, Sepúlveda el Viejo, Diego López y Rosales <sup>399</sup>, fueron objeto del interés del visitador. Pero fue el primero de ellos, procurador en la cárcel real de la corte, quien recibió los cargos más contundentes <sup>400</sup>.

### *Abogados*

Los cargos formulados por Diego de Córdoba contra los licenciados Pacheco y Meneses debieron reflejar faltas comunes entre los abogados de la época. El primero resultó culpado de recibir regalos de sus defendidos, mientras el segundo, abogado de la cárcel <sup>401</sup>. Con todo, la permanencia de los abogados al margen de la organización judicial cortesana fue alegada por el licenciado Pacheco para considerarse inmune a la actividad del consejero de inquisición. Para fundar esta exención, Pacheco adujo no percibir remuneración alguna de la administración regia <sup>402</sup>. Por su parte, el licenciado Soto, abogado de pobres, recibió sus cargos el 13 de abril de 1554 <sup>403</sup>.

<sup>398</sup> *Ibid.*

<sup>399</sup> *Ibid.*

<sup>400</sup> *Ibid.*

<sup>401</sup> «Q. siendo abogado de uno de los q. acusaban la muerte de un hombre llebó el p[ro]ceso a o[tr]o ombre q. hera culpado de la d[ic]ha muerte y le dixo q. si se lo pagara le mostraría el p[ro]ceso y los titulos q. contra él deponían e ansy el d[ic]ho ombre dio al d[ic]ho lic[encia]do e a o[tr] q. yba con él xi d[ucad]os y le mostraron el d[ic]ho p[ro]ceso» (AGS, CC, leg. 2745).

<sup>402</sup> «El lic[encia]do Pacheco digo demás de lo que tengo respondido a los cargos que me fueron mandados hazer por V. Al. Que hablando con el acatamy[ent]o y reberencia que deuo no se le pudiera hazer pues yo no lleuo razón y quitación y ansí no a lugar con él la visita y en caso que V. Al. sea seruido q. la aya pues yo no soy de las personas de quien se tiene atención q. por myedo de los testigos no sean monestados p[ar]a no me dar traslado dellos p[ar]a q. los cargos sean particulares y ansí sup[li]co a V. Al. mande no se entienda conmygo pues está aueriguado q. [e]l menor que me quisiere pedir algo lo puede hazer libremente...» (AGS, *ibid.*). En el caso de la villa de Madrid, los abogados sólo vieron regulada su actividad en 1596. Sobre la formación del Colegio de Abogados en la corte madrileña, BARBADILLO DELGADO, P., *Historia*

*Escribanos de lo civil*<sup>404</sup>

La función de los escribanos era, según Martínez Gijón, «formar y conservar el protocolo»<sup>405</sup>. Según el mismo autor, eran los oficiales que «con su presencia, su firma y su signo autorizan los contratos de los particulares y las diligencias judiciales, dada la fe pública que se les ha atribuido». Eran depositarios de ésta, avalistas de la verdad contenida en los documentos de él emanados o por él refrendados, atribuciones que permiten valorar su importancia en el funcionamiento procesal. La fe pública del escribano se manifestó en dos ámbitos diferentes: por un lado, la vida jurídica privada (función escrituraria) y por otro, en la administración municipal y judicial (función actuaria), mediante su participación respectiva en contratos, testamentos, etc., y su intervención reglada en la administración municipal y la sustanciación de pleitos civiles y criminales, según el tipo de escribano<sup>406</sup>. Junto a su actividad estrictamente judicial, y del mismo modo que los escribanos del número

---

del Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 1956, I; PÉREZ BUSTAMANTE, R., *El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1596-1996*, Madrid, 1996. Sobre el Colegio de Valladolid, TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., «Las actividades benéfico-asistenciales del Colegio de Abogados de Valladolid en el Antiguo Régimen», *Investigaciones Históricas. Época moderna y contemporánea*, núm. 16 (1996), pp. 61-75.

<sup>405</sup> AGS, CC, leg. 2745.

<sup>404</sup> Hasta el momento presente, el trabajo más útil para conocer la figura del escribano en la Edad Moderna castellana es el de MARTÍNEZ GIJÓN, J., «Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna», en *Centenario de la Ley del Notariado. Sección primera. Estudios Históricos*, Madrid, 1964, I, pp. 265-340, si bien tiene una visión prioritariamente legislativa y aborda de manera uniforme desde la Baja Edad Media al siglo XIX. Igualmente, BEJARANO RUBIO, A., «Los escribanos públicos en Castilla: el condado de Ledesma en el siglo XVI», *Miscelánea Medieval Murciana*, 19-20 (1995-1996), pp. 9-26, ha trazado la trayectoria de este oficial, esp. pp. 9-12; como anteriormente hizo, centrada en la corte, LÓPEZ GÓMEZ, M.<sup>a</sup> A., «Los escribanos de Cámara (justicia y gobierno) del Consejo de Castilla», *Hidalguía*, 1989, núm. 212, pp. 119-144, con relación de sus atribuciones en p. 125. Por otro lado, otros trabajos trataron de perfilar la ocupación escribanil, caso de la conocida obra de ESCOLANO DE ARRIETA, P., *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos*, Madrid, 1796, que describía la organización notarial castellana en lo relativo a examen y aprobación, aranceles y visita de los escribanos (vols. I, pp. 280-284, y II, pp. 233-263 y 328-332). Como en el caso de los fiscales, también la figura del escribano alcanzó mayor conocimiento teórico con la eclosión del Estado liberal, a través tanto de los tratados elaborados para orientar el ejercicio de la plaza (por ejemplo MUÑOZ, J., *Guía del Escribano*, Madrid, 1847) como de aquellos dirigidos a superar las oposiciones convocadas para cubrir las plazas de notario (RADA Y DELGADO, R. de, *Manual preparatorio para los exámenes de primero y segundo año de Notariado, con la ampliación que pueda servir a los alumnos de Jurisprudencia*, Granada, 1853; ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Biblioteca de escribanos, o sea tratado teórico-práctico para la enseñanza de los aspirantes al Notariado*, Madrid, 1855). Con todo, todo este rosario de obras (que conocemos gracias a la cita de Martínez Gijón), carecen de un interés histórico, que puede ser parcialmente paliado por ESCRICHE, J., *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Madrid, 1874-1876 (reformada y aumentada por GALINDO Y DE VERA, L., y VICENTE Y CARAVANTES, J.), y en CORNEJO, A., *Diccionario histórico y forense del Derecho real de España*, Madrid, 1779.

<sup>405</sup> MARTÍNEZ GIJÓN, J., *op. cit.*, p. 274.

<sup>406</sup> MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, p. 302. En su primera función fueron sustituidos en el siglo XIX por los notarios, y en la segunda, por los secretarios judiciales y los municipales. Si bien las atribuciones referidas

podían sustituir a los escribanos de provincia de los juzgados de los alcaldes de Casa y Corte y los del crimen de audiencias y chancillerías, éstos podían autorizar escrituras extrajudiciales, conforme al arancel estipulado para los primeros <sup>407</sup>. En lo referido a los escribanos, y ante los cargos que concluyó, la visita de Diego de Córdoba mostró la conciencia existente entonces sobre su responsabilidad en la poca efectividad de la administración de justicia <sup>408</sup>.

Martínez Gijón no consideró <sup>409</sup>, relevantes las determinaciones tomadas por los Reyes Católicos respecto a la figura del escribano <sup>410</sup>. Carlos V mostró interés por el arancel de los escribanos eclesiásticos —esto es, los conocidos propiamente como notarios— en 1523 <sup>411</sup>, para ocuparse después de forma continua de los escribanos de la administración real, como mostró una sucesión de determinaciones culminada por la inspección de Diego de Córdoba <sup>412</sup>.

La conciencia sobre la responsabilidad de los escribanos en el precario funcionamiento de la justicia multiplicó disposiciones cuya misma reiteración refleja su escaso resultado. Tales medidas persiguieron limitar su libertad de actuación, para asegurar una fiel ejecución por su parte de las decisiones de sus superiores. Antes de la *visita* se les prohibió emplazar a las partes, decretar prisión, dictar sentencias, expedir mandamientos o notificar autos a las partes sin orden expresa de los jueces <sup>413</sup>. Pese a tan menuda legislación, la indagación de Diego de Córdoba testimonió su ignorancia y —como se tratará en su momento— sendos capítulos de las Ordenanzas del Consejo de 1554 prohibieron a los escribanos decretar peticiones ni asentarlas para su vista sin ser leídas <sup>414</sup>.

---

variaban entre los diferentes escribanos (*op. cit.*, p. 302). En *op. cit.*, pp. 303 y ss. se aluden las diferentes disposiciones que regulaban la intervención de los escribanos en la administración de justicia

<sup>407</sup> *Nueva Recopilación*, 2, 8, 27: «Que pone el arancel de los derechos que han de llevar los Escribanos de Provincia de los alcaldes de corte. Ordenanza de Molins de Rei de 1544 y cap. 89 de las Cortes de Segovia de 1524» (pp. 217-218 del tomo I); *Nueva Recopilación*, 2, 8, 28, para los alcaldes del crimen de las chancillerías.

<sup>408</sup> MARTÍNEZ GIJÓN, J., p. 278.

<sup>409</sup> Cita Fuero Real, I, 8, I. *op. cit.*, pp. 270-271.

<sup>410</sup> *Op. cit.*, p. 277. Al contrario que GONZÁLEZ DE AMEZUA Y MAYO, A. G., en el estudio preliminar de *La vida privada española en el protocolo notarial. Selección de documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII del Archivo Notarial de Madrid*, pub. con ocasión del II Congreso Internacional del Notariado Latino, Madrid, 1950, p. X.

<sup>411</sup> *Nueva Recopilación*, lib. III, tit. V, ley XVII.

<sup>412</sup> Antes de la visita a la chancillería de Valladolid que hemos tratado, se publicó el *Quaderno de las ordenanzas... cerca de la orden judicial, aranceles de los derechos que las justicias, escribanos del reino han de llevar por razón de sus oficios y cómo los han de usar*, Burgos, 1525. Asimismo, después de fijarse en 1543 el arancel de Molins de Rei un auto recopilado de 5 de septiembre de 1545 prohibió a los escribanos abusar de sus derechos en el trámite de ejecutorias (añadido a *Novísima Recopilación*, lib. IV, tit. XXI, ley XIII).

<sup>413</sup> Respectivamente: Ordenanzas de Alcalá de 1503 (*Nueva Recopilación*, lib. IV, tit. III, ley III); provisión de Carlos y doña Juana en Toledo 1539 (*Nueva Recopilación*, lib. VIII, tit. I, ley XI); don Carlos y doña Juana en la visita de 1543; Ordenanzas de la audiencia de Galicia, Monzón 1552, cap. 20, todo ello en MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, pp. 318-319.

<sup>414</sup> MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, p. 319.

Asimismo, durante la primera mitad del siglo XVI se exigió a los escribanos fidelidad en las declaraciones de partes y testigos e imparcialidad en sus actuaciones. A este último respecto, la conciencia del Emperador sobre la influencia ejercida por la dinámica de las relaciones de poder en el ejercicio judicial le llevó a sancionar en 1532 diferentes provisiones limitando la intervención de los escribanos en pleitos que afectaran a familiares o allegados, confirmadas en las Ordenanzas de Molins de Rei de 1543<sup>415</sup>. Finalmente, la labor de Diego de Córdoba mostró la conveniencia del secreto de los escribanos sobre de sus actuaciones, así como su competencia. Prioridades que ocuparon cuatro capítulos de las Ordenanzas resultado de su labor<sup>416</sup>.

Tras inquirir el visitador a todas las personas que por su oficio tenían relación con estos oficiales, el 11 de abril de 1554 Alonso de Mariana dio al escribano de provincia Francisco Pantoja diecisiete cargos, que como en el caso de otros oficios pueden dividirse en procesales y económicos, junto a otros de naturaleza mixta.

El reproche inicial de la primera clase se debió a la tendencia de estos escribanos a servir los oficios por sustitutos<sup>417</sup>, y el segundo a su costumbre de expedir emplazamientos en blanco<sup>418</sup>. Igualmente punible fue para el visitador su demora en decretar las peticiones, trámite que siempre superaba el fin de la audiencia<sup>419</sup>, o hacer constar en los autos de las audiencias que eran provistos por uno de los alcaldes, aunque estuviera ausente<sup>420</sup>. Otra costumbre procesal de estos escribanos fue la retención de mandamientos de ejecución y su traslado a alguaciles de su voluntad<sup>421</sup>. Los tres últimos impedimentos para la marcha del expediente derivados de la actividad de los escribanos fueron para el visitador la inserción de las escrituras originales en los procesos, la reticencia a tomar testigos de las partes y la retención de causas que impedía su sentencia por los alcaldes<sup>422</sup>.

Respecto a faltas de tipo económico, se iniciaron con su tendencia a no asentar sus derechos tanto en los procesos pendientes ante ellos como en aquellos que iban en grado de apelación al Consejo Real<sup>423</sup>. Muy probablemente, con ello estos escribanos

<sup>415</sup> *Op. cit.*, pp. 331-333.

<sup>416</sup> Los puntos 45, 51 y 52, en MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, p. 335. Por otro lado, Enrique II estipuló en 1371 que fueran ocho los escribanos de Cámara del Consejo Real. Los capítulos 38 y 40 de las Ordenanzas de Medina de 1489 asentaban su designación tras examen, en lo que insistió el cap. 12 de las Ordenanzas de La Coruña de 1554, así como el 27 (en *Nueva Recopilación*, lib. 2, tit. IV, ley 47); MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, pp. 336-337. Desde el siglo XV, se exigió al escribano algo más que destreza en el manejo del cálamo: se le exigió cierto dominio del derecho vigente que el permitiera sortear las argucias de las partes en perjuicio de la legislación regia (*op. cit.*, p. 338).

<sup>417</sup> AGS, CC, leg. 2746, cargo núm. 2.

<sup>418</sup> *Ibid.*, cargo núm. 3.

<sup>419</sup> *Ibid.*, cargo núm. 6.

<sup>420</sup> *Ibid.*, cargo núm. 8.

<sup>421</sup> *Ibid.*, cargo núm. 11.

<sup>422</sup> *Ibid.*, cargos núms. 12, 13 y 15.

<sup>423</sup> *Ibid.*, cargo núm. 1.

pretendían ocultar el beneficio económico ilegal que obtenían del manejo de los procesos. Por ejemplo, llevaban un real de las oposiciones, de las que sólo podían obtener 12 mrs., cuando no decían abiertamente a las partes que les dieran lo que quisieren <sup>424</sup>. Con esta exacción se puede iniciar un cuadro de derechos injustamente obtenidos por estos escribanos:

<i>Oposición</i>	<i>Un real</i>
Vista de procesos para publicación	4 mrs. por cada hoja <sup>425</sup>
Procesos con mejora para el Consejo	10 mrs. por hoja <sup>426</sup>
Memoriales de rebeldías	36 mrs. cada uno <sup>427</sup>
Probanzas y juramentos de testigos	Medio real en la audiencia o en casa del escribano; medio e incluso uno en casa del testigo <sup>428</sup>
Busca de procesos	Uno y dos reales y lo que las partes quisieren dar <sup>429</sup>

Otra irregularidad económica difícilmente mensurable fue la cobranza de derechos a los pobres y su mal despacho, que ocupaba el cargo número 16 de los formulados a estos escribanos de lo civil <sup>430</sup>.

Junto a los cargos de los que hemos hecho mención, existían otros de fundamento procesal con implicaciones económicas. Algunos escribanos tomaban memoriales de rebeldías y los asentaban en sus registros después de ausentarse los alcaldes de la sala y sin dar fe los porteros de los plazos correspondientes, y cobraban la suma indicada

<sup>424</sup> *Ibid.*, cargo núm. 5.

<sup>425</sup> Textualmente: «Q. lleban a quatro mrs. por cada oja de la uista de los proçessos quando los dan en publicación aunq. ayan pagado los d[e]r[e]chos del tomar de los t[est]igos y la presentación dello y sin tener repeto a p[ar]tes ny renglones ni a q. estén mal es[cri]ptas y lleban d[e]r[e]chos demasyados» (*ibid.*, cargo núm. 7).

<sup>426</sup> «Q. q[uan]do dan los proçessos con mejora para llevarlos al Consejo no los quieren dar algunos originalm[en]te syno sacado en limpio llebando de cada oja a diez mrs. ny están en ellos los d[e]r[e]chos que han regebido» (*ibid.*, cargo núm. 17).

<sup>427</sup> *Ibid.*, cargo núm. 4.

<sup>428</sup> La suma cobrada todavía aumentaba más: «Q. por su p[ro]pia autoridad cometen las probanças y juramentos de t[est]igos a escriuanos, los q[ua]lles lleban por cada t[est]igo a medio real sy los examinan en las audiencias (o en casa del escriuano y si los examinan en casa de los t[est]igos lleuan medio y un r[e]al de cada t[est]igo y quando les bueluen las probanzas los escribanos principales lleban cinco mrs. de cada oja los escriuanos que hazen las probanças y después lleban otra uez los derechos por entero» (*ibid.*, cargo núm. 9).

<sup>429</sup> *Ibid.*, cargo núm. 10.

<sup>430</sup> *Ibid.*



en el cuadro anterior <sup>431</sup>. Pese a la responsabilidad parcial en el extravío de los procesos, su busca era cobrada por estos escribanos a uno o dos reales, o lo que las partes estuvieran dispuestas a dar <sup>432</sup>. En general, los escribanos estaban siempre dispuestos a obtener beneficio económico del remedio de su desidia, hecho del que puede deducirse la intencionalidad de ésta <sup>433</sup>.

### *Escribanos del crimen*

La actitud de los escribanos del crimen ante la visita testimonió las dificultades que tuvo que afrontar Diego de Córdoba. Francisco Arias demoró notablemente la entrega de un proceso repetidamente solicitado por el visitador, necesario para sus indagaciones, y obligó a éste a tomar medidas extremas <sup>434</sup>. El 13 de abril de 1554, en Valladolid, Rodrigo de Mariana dio copia a Juan de Garibay de los 29 cargos generales formulados contra los escribanos del crimen por Diego de Córdoba, y les dio ocho días de plazo para presentar sus descargos <sup>435</sup>. El mayor número de cargos respecto a los formulados contra los escribanos de lo civil reflejó que la materia penal era más propicia a irregularidades.

Las responsabilidades en que incurrieron los escribanos del crimen confirmaron que la actividad de los tribunales cortesanos se veía intensamente afectada por los oficiales de menor rango, cuya responsabilidad en la dilación y mal funcionamiento del Consejo Real podía ser mayor incluso que la de oidores y oficiales más relevantes. Si se divulga el presentismo, la «oficina judicial» podía ser culpada en gran medida de la demora forense.

Entre los cargos de tipo procedimental presentados contra los escribanos del crimen y sus oficiales fueron acusados de poner todas las escrituras originales en los procesos

<sup>431</sup> *Ibid.*, cargo núm. 4.

<sup>432</sup> *Ibid.*, cargo núm. 10.

<sup>433</sup> «Q. por yr a negociar con los al[ca]ldes lleban d[e]r[ech]os y por yr a hazer relación al Q[onse]jo asimysmo lleban dineros y no lleban los processos al Q[onse]jo hasta q. las p[ar]tes se q[ue]xan aunq. ayan traydo mejora y también lleban din[er]os ellos y sus oficiales a las p[ar]tes por yr a hazer relación y relatar los processos ante el al[ca]lde» (AGS, CC, leg. 2746, cargo núm. 14. Por su parte, Juan de Montoya, escribano del juzgado del alcalde Ortiz, recibió 31 cargos particulares sobre todo de cariz económico, AGS, *ibid.*

<sup>434</sup> «Don Diego de Córdoba del Consejo de Su Magd. de la Santa y G[e]n[er]al Inq[ui]sición mando a uos Fran[cis]co Arias escriuano del crimen de la audiència de los señores al[ca]ldes de corte y a u[uest]ros oficiales a cada vno y qualquier de uos: Bien sabeys cómo muchas y diuersas uezes se os ha pedido un processo q. ha de estar en poder de uos el d[ic]ho Fran[cis]co Arias f[ec]ho sobre unos gitanos q. prendió el alguazil Galdames e no me lo aueys traydo ni entregado. Y porq. p[ar]a aueriguación de algunas cosas que resultan de la uisita que Su Alteza haze es neçessario y también (sic) p[ar]a el descargo del d[ic]ho alguazil por la p[re]sente mando a cada uno de uos q. dentro de q[ua]tro oras primeras de como os fuere notificado me traygays el d[ic]ho processo so pena de cada ueynte mill mrs. y de otras penas a my aluedrío las quales se executarán en u[uest]ras p[er]sonas y bienes...» (AGS, CC, leg. 2746, s. n.). Esta última advertencia muestra cómo las responsabilidades incurridas en el ejercicio de un cargo se sufragaban con el peculio propio.

<sup>435</sup> *Ibid.*

y tomar de mala gana los testigos <sup>436</sup>. Asimismo, en su labor relacionada con la cárcel, en ocasiones entraban en confrontación con los alcaldes y maltrataban a los reos <sup>437</sup>. De la misma manera, sus oficiales no dudaban en ejercer como solicitadores y procuradores de las partes <sup>438</sup>, tomaban quejas y hacían informaciones en su casa u otros lugares con conocimiento de los escribanos pero sin comisión de los alcaldes <sup>439</sup>, y se apropiaban de depósitos de delincuentes liberados <sup>440</sup>. Asimismo, los escribanos del crimen permitían que, después de la visita de la cárcel por los alcaldes y en su ausencia, los oficiales soltaran los presos y cobraran los derechos <sup>441</sup>. Sin duda, estas prácticas se debían a la carencia de ingreso salarial por parte de los oficiales de los escribanos. Finalmente, en ocasiones éstos servían los oficios por sustitutos <sup>442</sup>.

Como en otros de los oficios tratados, los escribanos del crimen también incurrieron en culpas económicas en perjuicio de las partes. A continuación, se esquematizan los ingresos percibidos por los escribanos del crimen y sus oficiales, ampliamente superiores a los fijados en el arancel:

Traslado de informaciones	5 mrs. por hoja
Probanza de información	10 mrs.
Publicación de la información	4 mrs. por hoja
Examen de testigos (oficiales)	Entre medio y 4 reales <sup>443</sup>
Traslado de examen de testigos	5 mrs. por hoja <sup>444</sup>
Soltura de presos (Oficiales?)	Entre 2 y 3 reales <sup>445</sup>
Proceso acumulado	5 mrs. por hoja <sup>446</sup>
Registro de ejecutorias	Un real cada hoja <sup>447</sup>

<sup>436</sup> *Ibid.*, cargos núms. 7 y 8.

<sup>437</sup> «Q. muchas uezes los escriuanos principales quando se uan de la cárcel dizen al all[ca]lde q. no suelte a nyngún preso sino uiere firma suya, aunq. por los al[ca]ldes esté mandado lo contrario y quando están a los tormentos atemorizan al atormentado diziéndole uellaco, apretalde, dí uellaco la u[er]dad hechalde más agua» (*ibid.*, cargo núm. 11).

<sup>438</sup> «Q. sus oficiales hazen peticiones en nombre de pleyteantes contra presos y lo saben y ueen los d[ic]hos escriuanos y les solicitan los pleitos» (*ibid.*, cargo núm. 13).

<sup>439</sup> *Ibid.*, cargo núm. 21

<sup>440</sup> *Ibid.*, cargo núm. 14.

<sup>441</sup> *Ibid.*, cargo núm. 24.

<sup>442</sup> *Ibid.*, cargo núm. 18.

<sup>443</sup> *Ibid.*, cargo núm. 1; sobre lo cobrado por la publicación de la información, cfr. también cargo núm. 22.

<sup>444</sup> *Ibid.*, cargo núm. 28, con el agravante de que no siempre realizaban el traslado cobrado.

El cargo noveno concluyó que los escribanos y sus oficiales no tenían cuenta con su arancel ni lo tenían expuesto en la cárcel <sup>448</sup>. Incluso cobraban pleitos sin estar sentenciados <sup>449</sup>. Como cabía esperar, este beneficio ilícito era facilitado por su cautela de no asentar los derechos en los procesos ni la razón por la que los llevaban <sup>450</sup>. El cargo decimonoveno reprochaba a los escribanos del crimen su permisividad con los derechos cobrados ilegalmente por sus oficiales <sup>451</sup>. Hay que considerar que, por ejemplo, éstos cobraban a los presos cada vez que hacían probanzas para demostrar su inocencia y que, además, cuando era liberados le cobraban a 10 mrs. cada hoja de su proceso, de manera que venían a pagar los derechos dos veces <sup>452</sup>.

Como en el caso de otros oficiales, las irregularidades cometidas por los escribanos del crimen y sus oficiales en el ejercicio de sus funciones tenían consecuencias en la bolsa de los encausados. Según el arancel, debían cobrar los derechos en persona y no abandonar la cárcel hasta la soltura de los presos. Pero no lo hacían y dejaban al cargo del cobro a sus oficiales, quienes aprovechaban para cobrar una cantidad superior. Igualmente, con la excusa de no perder tiempo en el trámite u otras, podían dejar a prisioneros en la cárcel aunque hubiera alguien dispuesto a pagar su fianza <sup>453</sup>. La ligereza procesal tuvo feroz enemigo en tal hambre de derechos. Por esta razón, buscaban procesos anejos contra un culpado si los alguaciles renunciaban a encausarle <sup>454</sup>. Aceptaban tomar declaración a testigos, sólo después de reiteradas negativas y tras el pago de por lo menos medio real por cada uno; si la queja no era corroborada por el tribunal, la parte perjudicada debía pagar todos los derechos del proceso y, además, el traslado de éste por el escribano <sup>455</sup>.

La eficacia forense también se vio perjudicada por la desatención de los escribanos hacia los negocios de pobres y la circunstancia de que en las causas sin pena de cámara, ni de sangre ni de sueldos, cobraban sus derechos aunque los delincuentes estuvieran sin prender, de manera que éstos continuaban libres <sup>456</sup>. Igualmente, los escribanos del

<sup>445</sup> Según el arancel no debían llevar más de 12 mrs., que se pagaban aparte al oficial o escribano que elaboraba la fianza (*ibid.*, cargo núm. 16). Asimismo, también le cobraban a razón de 10 mrs. cada hoja de su proceso (*ibid.*, cargo núm. 25).

<sup>446</sup> *Ibid.*, cargo núm. 20.

<sup>447</sup> *Ibid.*, cargo núm. 26.

<sup>448</sup> AGS, CC, leg. 2746, s. n.

<sup>449</sup> *Ibid.*, cargo núm. 12: «Q. en las causas fiscales al t[iem]po q. se suelta el preso aunq. no esté sentenciado quando se da en fiado cobra el escriuano ante quien passa los d[e]r[ech]os q. monta el processo hasta aquel punto así de su p[ar] como lo q. el fiscal auía de pagar y q. en los p[le]itos de las p[ar]t[e]s no cobran syno la información sumaria si alguna a hecho el tal preso no estando écondenado? en costas.»

<sup>450</sup> *Ibid.*, cargo núm. 17.

<sup>451</sup> AGS, CC, leg. 2746.

<sup>452</sup> *Ibid.*, cargo núm. 25.

<sup>453</sup> *Ibid.*, cargo núm. 2.

<sup>454</sup> *Ibid.*, cargo núm. 3.

<sup>455</sup> *Ibid.*, cargo núm. 4.

<sup>456</sup> *Ibid.*, cargos núms. 5 y 6.

crimen hostigaban a los testigos o cambiaban sus testimonios para que saliera adelante la queja contra los culpados, y así cobrar ellos sus derechos <sup>457</sup>. O, con el mismo objeto, acumulaban procesos, soltaban presos pobres contra pago —lo que estaba explícitamente prohibido— o cobraban a la parte cuando se arrepentía tras estar expedido mandamiento de prisión contra el culpado, para evitar su ingreso en la cárcel <sup>458</sup>. Igualmente, los escribanos usurparon el oficio de los alguaciles en casos de juego y otros incluidos en el pregón general leído por entonces, con su consentimiento y en su presencia, y cobrando asimismo derechos por ello <sup>459</sup>. Tal codicia de derechos también les llevó, finalmente, a realizar procesos en rebeldía «aun por cosas libianas», o a pedimento de parte <sup>460</sup>. La marea litigiosa que afectaba a la administración cortesana de justicia tuvo causa, parcial si no total, en la codicia de estos y otros oficiales. Las conclusiones de Diego de Córdoba hicieron evidente, para disgusto del príncipe, la parálisis virtual de la justicia cortesana.

### *Oficiales del crimen*

Junto a los cargos que surgieron al instruir la visita a los escribanos del crimen, referidos a sus oficiales, éstos también contaron con cuaderno de cargos propio, presentado el 4 de mayo de 1554 <sup>461</sup>. Se pueden dividir en procesales y arancelarios, junto a aquellos que compartían ambos caracteres. En primer lugar, su actividad también perjudicó la efectividad de las resoluciones judiciales. La atención exclusiva del Emperador a su patrimonio continental y la ausencia del príncipe entre 1548 y 1551 acentuaron esta grave disfunción, contra la que don Felipe pretendía luchar ahora, si bien no podría volcarse en la vertebración del entramado gubernativo y judicial castellano hasta su regreso en 1559. El cargo número 4 de los formulados por Diego de Córdoba, que de forma significativa desapareció del pliego definitivo —es de presumir que por la grave alteración en que incidía—, decía:

Q. está en las manos de los oficiales del crimen q. uno sea libre o condenado porq. no se haze más de lo q. ellos quieren screuir <sup>462</sup>.

Semejante iniciativa en el proceso mostró la toma de informaciones sin comisión del alcalde <sup>463</sup>, la elaboración de mandamientos de prisión sin indagación suficiente <sup>464</sup>

<sup>457</sup> *Ibid.*, cargo núm. 15.

<sup>458</sup> *Ibid.*, cargos núms. 20 y 23.

<sup>459</sup> *Ibid.*, cargo núm. 27.

<sup>460</sup> *Ibid.*, cargo núm. 29.

<sup>461</sup> AGS, CC, leg. 2746.

<sup>462</sup> *Ibid.*

<sup>463</sup> «Q. q[uan]do uan a algún lugar dentro de las cinco leguas reçiben las querellas q. ante ellos se dan y toman informaciones sin q. tengan comisión ni al[ca]lde alguno lo aya p[ro]ueydo» (*ibid.*, cargo núm. 11).

o la recepción de denuncias en ausencia de escribanos y alcaldes <sup>465</sup>. Asimismo estos oficiales usurparon las funciones de los procuradores, al realizar trámites en nombre de las partes <sup>466</sup>. Otras actividades, con ser menos llamativas, significaban un riesgo potencial para la limpieza de las causas, como la toma de informaciones sin indicar antes su autor <sup>467</sup>.

En lo relativo a culpas económicas, como en el caso de los secretarios, los oficiales del crimen también percibieron derechos abusivos, sintetizados en el siguiente cuadro:

Traslado de informaciones	5 mrs. diarios <sup>468</sup>
Recepción de testimonios en las quejas	Al menos medio real por cada uno <sup>469</sup>
Propina de los alguaciles por prisión o denuncia	De 2 a 4 reales <sup>470</sup>
Traslado de sentencias y peticiones	Cantidad variable <sup>471</sup>
Recepción o ratificación de testigos	Un real o más de derechos <sup>472</sup>

Además, por lo general, no se mostraban tan diligentes en los negocios de los pobres como en los de los ricos, o aquellos en los que había dinero de por medio <sup>473</sup>. Y aumentaban sus derechos artificialmente, sin hacerlos constar, o con asiento de menos cantidad de la que las partes afirmaban haber pagado <sup>474</sup>. Generalmente, sólo admitían probanzas

<sup>464</sup> «Q. quando algunas p[er]sonas uan a dar q[ue]xa ante los officiales les p[ro]meten que harán por ellos e así con información bastante e no bastante hazen los mandamientos de presión y los dan a los alguaziles e así los d[ic]hos oficiales pueden molestar a quien quieren» (*ibid.*, cargo núm. 14; desde «e así...» aparece tachado, seguramente por reparar Diego de Córdoba en la gravedad del cargo formulado).

<sup>465</sup> «Q. an tomado y toman todas las quejas q. ante ellos uienen e reçiben los t[estimoni]os sobre ellas sin estar p[rese]nt[e]s los escriuanos principales ny los alcaldes ny alguaziles» (*ibid.*, cargo núm. 15; el cargo núm. 18, que finalmente fue tachado por Diego de Córdoba, trataba sobre lo mismo).

<sup>466</sup> «Q. hazen peticiones en nombre de pleyteantes contra presos y les solicitan los pl[e]itos» (*ibid.*, cargo núm. 16).

<sup>467</sup> «Q. los d[ic]hos oficiales toman las informaciones y los d[ere]chos de los t[estimoni]os de las q[ue]relas que han dado en mynuta poyendo los nombres de los t[estig]os e después los estienden en sus espacios» (*ibid.*, cargo núm. 12).

<sup>468</sup> Ello pese a que los escribanos llevaban diez mrs. como probanza y en la publicación cuatro (*ibid.*, cargo núm. 2).

<sup>469</sup> Además de una cantidad aleatoria. Todo ello, «allende q. se paga al escriuano principal q[uan]do se sentencia el proçesso o se pierde la q[ue]xa todos los d[ere]chos del proçesso por entero como si no ouiesen pag[a]do cosa alguna a los officiales» (*ibid.*, cargo núm. 3).

<sup>470</sup> *Ibid.*, cargo núm. 5.

<sup>471</sup> *Ibid.*, cargo núm. 9.

<sup>472</sup> *Ibid.*, cargo núm. 8.

<sup>473</sup> *Ibid.*, cargo núm. 6.

<sup>474</sup> *Ibid.*, cargos núms. 10 y 13.

de los presos o las partes previo pago<sup>475</sup>. Estos oficiales explotaron incluso su propia indolencia y desorden para redondear sus ingresos más allá del arancel. Sólo buscaban pleitos fenecidos o por fenecer en el caótico archivo del tribunal, tras recibir sumas de los interesados<sup>476</sup>. Igualmente, evitaban recibir testigos de las partes (con la consiguiente procrastinación del proceso) y terminaban haciéndolo sólo contra el pago de un real o más por la parte interesada<sup>477</sup>. Finalmente, la amenaza de estos oficiales a los testigos para declarar lo que les interesaba —dado que sólo si la parte denunciada salía culpada ellos percibían sus derechos— fue paradigma de la supeditación del oficio al interés personal y de las distorsiones que afectaban al ejercicio judicial; entre las que no es desdeñable, como hemos aludido, la mengua del acceso de los castellanos a la tutela judicial<sup>478</sup>.

### *Porteros de alcaldes*

En esta categoría de oficiales destacó Ponce<sup>479</sup>, cuya actividad se señaló por superar su parcela de atribuciones e invadir la propia de los alguaciles, dado que llegó a prender personas<sup>480</sup>.

### *Alcaide de la cárcel*

Por su parte, el alcaide Alonso Gómez incurrió en 37 cargos basados fundamentalmente en estupros y excesos con los presos<sup>481</sup>.

## La visita después de la partida del príncipe

Con la salida de don Felipe en julio de 1554 se atenuó el progreso en el dominio cortesano de los ministros consolidados en la confianza del príncipe, encabezados por

<sup>475</sup> *Ibid.*, cargo núm. 1.

<sup>476</sup> AGS, CC, leg. 2746, s. n.

<sup>477</sup> «Q. toman de mala gana los t[estig]os q. acontece llebar la p[ar]te una, dos y tres uezes el t[estig]o e no lo quieren re[ce]bir poniendo mill dilaciones y escusas e si son de fuera de p[ar]te se uan sin deponer y hazen muchas estorsiones e molestias a las p[ar]tes sino les dan algún ynterese e también q[uan]do uan a re[ce]bir o ratificar algunos t[estig]os lleuan un real y más de d[erech]os» (*ibid.*, cargo núm. 8).

<sup>478</sup> *Ibid.*, cargo núm. 17.

<sup>479</sup> AGS, CC, leg. 2745.

<sup>480</sup> «Q. una uez q. fue a Santa M[ar]ya de la Vega a re[ce]bir cierta ynformación por comysión de un al[ca]lde de corte antes q. res[ce]biese la ynformación prendió a alg[un]os u[ec]inos de aquel pueblo y los ynjuró de palabras e por un día q. se ocupó en ello y no todo lleuó de derechos xv... q. la p[ar]te q. le lleuó p[ar]a re[ce]bir la d[ic]ha ynfor naci[ón] le dio de comer el t[ie]m[p]o q. estvuo en aquel lugar...» (*ibid.*).

<sup>481</sup> AGS, CC, leg. 2746.

su gentilhombre Ruy Gómez. Si bien esta mengua no fue uniforme, como mostró el distinto desarrollo que siguieron las medidas administrativas en curso. La inspección llevada a cabo por el doctor Velasco a las contadurías y cruzada continuó bajo un estrecho control por parte del príncipe y sus asesores, en gran parte debido a las cantidades dependientes de una gestión eficaz del ramo. El mismo día de su embarque en La Coruña, don Felipe escribió al visitador en alabanza de «las instrucciones (*sic*) que embiastes para las contadurías y cruzada, y assí las de los oficiales particulares y todo me a parecido bien y las he firmado...»<sup>482</sup>. Junto a las instrucciones firmadas, el príncipe envió otros documentos relacionados con la resolución de esta visita: los títulos de los dos oidores nuevamente provistos en Contaduría y la cédula para que el licenciado Villa cobrara en su casa los 180.000 mrs. que tenía por letrado de contadores<sup>483</sup>. Asimismo remitió cédula para que, entretanto que se determinaba el negocio de Francisco de Laguna o el Emperador proveía este oficio de contador, lo sirviera Antonio de Eguino. La consistencia que pretendía conferirse a los organismos de gobierno quedó patente en la disposiciones tomadas para que la audiencia de contaduría tuviera lugar en palacio<sup>484</sup>.

La discreción concedida a Velasco para culminar su labor se apreció en la siguiente afirmación del propio don Felipe:

También dexaré proueydo que lo que queda por hazer de las visitas de las contadurías y cruzada lo acabeyis conforme a v[uest]ra comiisión y al capítulo que çerca desto embiastes ordenado<sup>485</sup>.

Velasco también expresó su opinión respecto a la provisión de la plaza de comisario de Cruzada que, dada la importancia del cargo, el príncipe prefería consultar con su padre<sup>486</sup>. Con todo, la falta del príncipe provocó interferencias en el control de esta visita por el grupo de Ruy Gómez, patentes en la presencia del licenciado López de Otalora y el propio inquisidor general Valdés (con el presidente Fonseca, Velasco y

<sup>482</sup> AGS, E., leg. 104, núm. 70, cédula del príncipe al doctor Velasco de 12 de julio de 1554. El fragmento transcrito permite pensar que Velasco también remitió las instrucciones formuladas por Diego de Córdoba para los oficiales de la corte.

<sup>483</sup> *Ibid.*

<sup>484</sup> Otras medidas tomadas en relación con la labor de Velasco fueron el aumento del salario de los oficiales a 100.000 mrs., el pago de 400 dcs. al escribano que había ayudado a Velasco y 30.000 mrs. al portero (*ibid.*).

<sup>485</sup> *Ibid.*

<sup>486</sup> *Ibid.* El trasfondo político de esta visita se advierte en la siguiente carta, fechada a mediados de 1554, de la que desconozco autor y destinatario: «... holgado he de entender lo q. v.m. passó con el Sor pr[esiden]te y el doctor Velasco y con lo q. cerca destes negoçios apunta para aduertir a Su Al. dello y estar yo preuenido. El Sor. presidente ha embiado ya los despachos pero hasta ag[or]a no se an uisto con Su Al. Q[uan]do se tratare dello myraré por lo q. toca al Q[onsej]o de Haz[ien]da como es razón» (AGS, E., leg. 104, núm. 76. Entre el texto transcrito hay varias frases tachadas).

Vázquez de Molina), en la comisión encargada de valorar la presentación de descargos en persona, pretendida por el obispo de Lugo, Suárez de Carvajal <sup>487</sup>.

Esta tendencia quedó confirmada en el caso del Consejo Real, en el que la ausencia del príncipe supuso el apartamiento completo del organismo de las tentativas de control por parte de Ruy Gómez, pese a las prevenciones tomadas por el gentilhomme. Éstas consistieron principalmente en la presencia del mayordomo mayor de doña Juana, García de Toledo, en las consultas de los viernes <sup>488</sup>. Pese a que el intento no tuvo finalmente éxito, sí se consumó de forma menguada (en la Cámara) y denotó la amenaza que para la entidad orgánica de cualquier Consejo entrañaban las Casas Reales, como vehículo de influencia política. Del episodio provocado por la permanencia de don García en la consulta del viernes siguiente a la partida del príncipe, descrito por Juan Vázquez de Molina, se dedujo la complicidad de don Felipe en tal transgresión de la preeminencia del Consejo Real, no consumada en la regencia de la reina de Bohemia y ni siquiera en las de la emperatriz <sup>489</sup>.

La intervención del secretario parece que consiguió echar a García de Toledo de las consultas del Consejo y limitó su participación en la organización consiliar a su plaza de asiento en el Consejo de Estado y Guerra. Si bien el mayordomo expuso que en ningún caso faltaría a las reuniones de doña Juana con la Cámara de Castilla, aspecto sobre el que había recibido instrucciones taxativas de Ruy Gómez. Con ello,

<sup>487</sup> AGS, E., leg. 104, núms. 130-131, billete del secretario Vázquez de Molina al príncipe Felipe, de 9 de agosto de 1554.

<sup>488</sup> Las Instrucciones para el gobierno de Castilla durante la ausencia de don Felipe se iniciaban: «Primamente le encargo quanto puedo que tenga especial cuidado de la administración de la justicia, y que en las cosas que a ella tocaren no tenga respecto a personas ni supplicación de nadie, sino que mande que se haga y administre enteramente, y que tenga las consultas ordinarias los viernes de cada semana, y esté en ellas sola con los del Consejo. ...» (AGS, E., leg. 1, núm. 36, pub. en CDCV, IV, doc. DCXIV). Referencia biográfica de García Álvarez de Toledo en FERNÁNDEZ CONTI, S., *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II, 1548-1598*, Valladolid, 1998, pp. 47-48, y en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *La Corte de Carlos V, III*, pp. 420-421.

<sup>489</sup> «El p[residente] me a d[ic]ho q. esta tarde salió la S.<sup>a</sup>. Princesa a la q[onsul]ta de just[icia] y asentada su Al. salieronse todas las mugeres y don g[a]r[c]i[a] estubose. Quedó arrimado a la pared. El p[residente] le hizo de señas (*sic*) q. se saliese y él le hizo señal q. auía de estar allí. Levantóse el p[residente] y dixo a la princesa q. mandase salir a don G[a]r[c]i[a] porq. no auía de q[ue]dar allí. Su Al. le respondió q. V. Mt. lo mandaua asy. Y aunque los del Q[onsejo] se escandalizaron dello y se fueran de allí sino por el abtoridad de la p[ri]ncesa y por ... q. V. Al. lo mandaba pasaron por ello con determy[naci]ón de no tener más consulta con Su Al. sino lo remediau hasta auisar dello a Su Magt. y a V. Al. Yo pienso hablar a la princesa y acordarle q. V. Al. m[an]do lo contrario en la Instruçon y q. es cosa q. nunca se a f[le]chlo ny en tiem[po] de la emper[atr]iz ny de la rey[n]a de Bohemya. Y sino bastare auisaré a V. Al. p[ar]a q. lo mande p[ro]ue[ir] porq. esto sería cosa bien nueua si passasse assi» (AGS, E., leg. 104, núm. 132, billete autógrato de Juan Vazquez de Molina al principe Felipe. sin fecha pero inmediatamente después del suceso).



el grupo de ascendencia «mística» mostró la importancia del control de la gestión de la *gracia* para la consolidación en el poder cortesano <sup>490</sup>.

La atenuación de la influencia del gentilhomme en la administración castellana se apreció especialmente en la visita inacabada del Consejo, hasta el punto de que el impulso dado por el príncipe a la misma en las fechas previas a su viaje bien pudo ser un intento de evitarla. Pero llegó el momento de partir y el príncipe encargó a algunos miembros del Consejo la fijación del arancel que desde entonces se aplicaría en los trámites judiciales del organismo y delegó en Diego de Córdoba la materialización de las consecuencias de su labor previa y la recepción de los memoriales enviados por los diferentes comisarios enviados por Castilla. Con ello, el visitador superó la parcela de los oficiales y tomó el testigo del príncipe en lo relativo a las plazas jurisdiccionales. Desde entonces se hizo patente que el vaticinio de don Diego sobre la dificultad que la ausencia del príncipe impondría a la culminación de la visita era mucho más que la descripción de un hecho objetivo y encubría el verdadero punto hasta el que estaba dispuesto a proseguir la orientación de la visita impuesta por los mentores políticos del príncipe. Como pasamos a describir, con la partida de don Felipe Diego de Córdoba pudo atender más cómodamente los intereses políticos del grupo del inquisidor general Valdés y no le fue complicado influir en el presidente Fonseca, cuya resolución política no era proporcional a su obediencia a Ruy Gómez, para que el castigo a los culpados quedara en mera reprensión. Valdés supo recompensar el desvelo de su protegido con el encargo a uno de los familiares de Diego de Córdoba de la impresión del catálogo de biblias <sup>491</sup>.

Una vez formulados los cargos y presentados los descargos por los culpados, se publicó la sentencia de la inspección de Diego de Córdoba a la justicia cortesana. El momento y la manera en que ésta fue presentada, así como los personajes que inter-

<sup>490</sup> «Ya scriu a V. Al. lo que hauia passado en la consulta de justiciá el viernes passado. Luego otro día hable a don García y le dixé que V. Al. no mandaría q. él se hallase en la consulta de justiciá porq. era cosa muy nueua y nunca usada ni en t[iem]po de la emperatriz Nra. Sra. ni de la ser[enisi]ma reyna de Bohemia, que bien creya que lo que V. Md. mandaría será que en las consultas destado y guerra de que él era del Consejo se hallasse, porque si otra cosa quisiera q. lo mandara poner en la instrucción que yo traxe a la Ser[enisi]ma prinçesa. En fin con ver que en la d[ic]ha Instrucción V. Md. mandaua que Su Al. estuiesse sola que él lo tenía por bien, pero q. en las de los otros Consejos y espeçialmente, del de m[er]ce[d]e le dixo Ruy Gómez que se hallasse y aún la Camarera Mayor con él con q. estuuiessen apartados. Yo le dixé q. ninguno de los Consejos lo permitiría. Porq. por lexos que se hallasse no podrá dexar de oyr lo que ally se tratasse. Él está en q. ha de hallarse presente a todo, y esto ya V. Al. vee si conuernía y la desautoridad que sería para la S.<sup>a</sup> prinçesa, demás de la introducción que se tomaría para adelante. Paresçieme de auisar a V. Md. dello para que embie a mandar lo q. es seruido q. se haga. Q. entretanto no se terná consulta de propósito sino lo q. se offresçiere se le consultará a Su Al. particularmente, digo lo q. no se pudiere dilatar» (AGS, E., leg. 104, núms. 130-131, billete de Juan Vázquez de Molina al príncipe, Valladolid, 9 de agosto de 1554).

<sup>491</sup> CDCV, III, pp. 256-257, así como la relación biográfica elaborada por PIZARRO LLORENTE, H., en MARTÍNEZ MILLÁN, J., *La Corte de Carlos V*, III, pp. 98-99.

vinieron en ella, reflejaron una tensión política en la corte acrecida por la partida del príncipe Felipe. Pocos días después del incidente en el Consejo Real con el mayordomo de doña Juana, comenzó la lenta participación de la sentencia a los finalmente castigados, comunicación aleatoria sin organización por categorías de oficiales, que reflejaba prisa por culminar la resolución de la inspección, ante lo confuso del panorama cortesano. Junto a la represión del desempeño irregular de los oficios, se hizo especial hincapié en la reparación de los particulares directamente afectados por la codicia de los oficiales.

El intento de vigilancia del Consejo que supuso la presencia de García de Toledo en la consulta de los viernes fue contrarrestado por el grupo del inquisidor general Valdés mediante la incorporación del licenciado Sancho López de Otálora a la elaboración y comunicación de la sentencia. Este letrado ya había sonado para el Consejo Real en 1546, cuando ejercía como oidor de la audiencia de los grados de Sevilla, si bien su título fue despachado finalmente el 20 de marzo de 1547 por influencia de Valdés, momento a partir del cual mostró inclinación hacia el patrón responsable de su progreso administrativo <sup>492</sup>. Éste continuó cuando el inquisidor general consiguió su nombramiento para la Suprema en 1553 <sup>493</sup>, así como cuando entró en la Cámara de la regente al año siguiente, con el doctor Velasco y Juan Vázquez de Molina como secretario, a quienes vino a unirse dos años después Juan Briviesca de Muñatones <sup>494</sup>.

La notificación de la sentencia de la visita fue realizada por ambos, López de Otálora y Diego de Córdoba, junto con el presidente Antonio de Fonseca, a partir del 10 de

<sup>492</sup> Durante su permanencia en Sevilla, también ejerció como juez de los bienes confiscados en el tribunal inquisitorial (AGS, E., leg. 139, núm. 196, documento regio al inquisidor general de 14 de noviembre de 1560, pub. por GONZÁLEZ NOVALÉN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés*, II, pp. 276-278). Tomó posesión como consejero en Aranda de Duero el 8 de junio, AGS, EMR, QC, leg. 39; *ibid.*, E., leg. 13, núm. 134, ambos doc. cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, p. 252.

<sup>493</sup> MARTÍNEZ MILLÁN, J., y SÁNCHEZ RIVILLA, T., «El Consejo de Inquisición: (1483-1700)», núm. 73 (1984), *Hispania Sacra*, p. 50.

<sup>494</sup> La protección de Valdés queda patente en el destino seguido por Otálora desde entonces. Al ingresar Juan Rodríguez de Figueroa en el comité en agosto de 1558, tanto Otálora como Velasco tuvieron que abandonarlo. AGS, PR, legs. 26-137; *ibid.*, CC, LC, 123, fol. 102v, primera cédula firmada durante la regencia en 15 de agosto de 1554, todo ello cit. por MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, «La administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-1575)», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir.), *Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, pp. 34-35; *id.*, «Las elites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)», *Hispania*, núm. 168 (1988), pp. 103-167 y 124-133. En testimonio de su relevante papel durante la regencia de doña Juana, Felipe II dispuso que en las discusiones que ésta sostuviera sobre Castilla se hallaran presentes los integrantes de la Cámara (CABRERA DE CÓRDOBA, L., *Historia de Felipe II. Rey de España*, I, Salamanca, 1998 —ed. a cargo de MARTÍNEZ MILLÁN, J., y CARLOS MORALES, C. J. de, p. 22). Su importancia administrativa también debió a su entrada en Consejo de Hacienda (CARLOS MORALES, C. J. de, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Ávila, 1996, p. 75). Finalmente, fi e alejado de la corte en torno a la primavera de 1562, regresando a su lugar de origen, donde continuó percibiendo su quitación. Su última señal como camarista, de 30 de mayo de 1562, en AGS, CC, LC, 128, fol. 432r; igualmente, *ibid.*, EMR, QC, leg. 39.

agosto de 1554<sup>495</sup>. En primer lugar se prohibió a Miguel Ruiz Nebro ejercer como alguacil sin licencia expresa del Emperador, en sentencia muy detallada y centrada especialmente en los bienes usurpados a justiciables<sup>496</sup>. El mismo día fue comunicada su sentencia a Juan de Argüelles, alguacil que como consecuencia de la visita vio convertida en definitiva la suspensión del oficio por un año que el Consejo le había impuesto anteriormente, además de ser obligado a satisfacer diferentes bienes tomados de forma arbitraria<sup>497</sup>. Asimismo, su compañero Diego de Salinas fue condenado a destierro de la corte y sus cinco leguas de jurisdicción durante seis meses, y una vez cumplido este castigo, suspendido del oficio de alguacil por otros seis, además de devolver antes de diez días ciertas prendas tomadas irregularmente en el ejercicio de su cargo<sup>498</sup>. Simultáneamente fue multado con 50.000 mrs. a repartir entre la Cámara y los pobres y condenado al pago de diferentes sumas<sup>499</sup>. La condena del alguacil Gregorio de Medina, desterrado de la corte durante un año, demostró asimismo el celo del visitador, dado que también se le ordenó:

... q. deposite las spadas del cargo ueynte e seis y treynta e ocho y buelba quatro r[ea]les q. lleuó por una spada q. tomó no dando razón por qué los llebó en el cargo treynta y dos... Y más le condenaron en diez myll mrs. mytad p[ar]a la cámara y mitad p[ar]a la pobres todo lo qual cumpla dentro de ocho días y pague lo q. paresciere debe conforme al memorial q. se dará<sup>500</sup>.

<sup>495</sup> AGS, CC, leg. 2746, «Sentencias y notificaciones de la visita q. Su Al[ez].\* mandó hazer de alg[un]os off[ic]iales de corte. Año 1554»; comenzaba: «En la billa de Val[lado]l[i]d a diez días del mes de agosto ano del nascim[en]to de n[uest]ro redemptor Jhu Xpo de myll e q[uin]ientos e conquenta e quatro años el muy Ill[ustr]e y R[eu]erendí[sim]o señor el ob[is]po don Antonyo de Fonseca presidente del Consejo Real y los señores lic[en]cia[do]do Sancho López de Otálora del Consejo Real y don Di[eg]o de Córdoua, del Consejo de Su Magt. de la Gene[r]al Ynquisición abiendo bisto las culpas, cargos y descargos y lo q. más conuino ber q. resultó de la uisita q. Su Alteza mandó hazer de algunos off[ic]iales de su corte cuya determinación y execución por su real çedula cometió a los d[ic]hos señores, dixeron q. fallaban e debían de mandar e mandaron lo sig[ui]ente...»

<sup>496</sup> «Miguel Nebro alguazil de corte no use el off[ic]io de alguazil sin expresa lic[en]cia de Su Magt. y q. dentro de ocho días muestre cómo los dineros del primer cargo se contaron ante es[criba]no y no lo mostrando buelua cinco coronas a la persona de cuyos bienes lleuó los dineros. Y q. pague quatro d[ucad]os por un sayo de q. se le hizo cargo en el segundo capítulo o quien lo tomó. Y muestre cómo por mandado de los al[ca]ld[e]s lleuó los ueynte y çinco reales del cargo quarenta e tres. Donde no q. los buelua a los dueños y muestre cómo uendió la capa del cargo cinquenta e dos y por cuyo mandado y a quien y no lo mostrando la buelba al dueño o su justo valor sacada la décima q. a de auer, y q. muestre cómo las spadas de los cargos cinquenta e çinco e cinquenta e seis fueron sentenciadas. Donde no q. las deposite para q. dellas se haga lo q. de justia fuere y q. muestre cómo los al[ca]ldes de corte le mandaron llebar çinquenta e tres reales del cargo setenta e uno. Donde no q. los buelba a quien los tomó. Y más le condenaron en beynte myll mrs. mytad para la cámara y mitad para pobres, y pague lo q. debe conforme al memorial q. se dará» (AGS, CC, leg. 2746).

<sup>497</sup> *Ibid.*

<sup>498</sup> «... q. pagándole los d[e]r[ec]hos de la execución buelba las prendas tales y tan buenas como al t[ie]m[p]o q. las tomó de que se le haze cargo en el cargo nueue...» (*ibid.*).

<sup>499</sup> *Ibid.*

<sup>500</sup> *Ibid.*

El mismo 10 de agosto Alonso Gómez, alcaide de la cárcel real de corte, fue removido de su cargo, se ordenó a los alguaciles nombrar un sustituto y fue condenado a veinte ducados para la cámara y diez para pobres, en el plazo de diez días. Por su parte, se ordenó al escribano del crimen Francisco Arias que en cuatro meses renunciase su oficio en persona hábil y se le condenó al pago de 40.000 mrs. a repartir entre la Cámara y los pobres, además de cumplir con cierta cantidad que adeudaba. Por su parte, el licenciado Diego Álvarez, relator del crimen, fue objeto de reprensión por diferentes culpas, «con aperçebymyento q. no se enmendando será remouido del off[ici]o y pague ueynte ducados mytad p[ar]a la Cámara y mitad p[ar]a la pobres»<sup>501</sup>. El alguacil García de Hoyo fue condenado a destierro de la corte y su contorno de cinco leguas durante cuatro meses, así como al pago de 4.000 mrs., mitad para la Cámara y mitad para pobres, además de ser obligado a dar cuenta de diferentes bienes. Igualmente, el escribano del crimen Juan de Garibay debía recibir reprensión por su labor en el cargo, repartir 10.000 mrs. entre la Cámara y los pobres y pagar todo lo que debía, todo lo cual debía cumplir en el plazo de ocho días. El alguacil Juan de Irizar debía ser reprendido y satisfacer una multa de diez ducados a repartir entre la Cámara y los pobres. Un tal Escobar, asistente del alcalde Ortiz en sus comisiones, debía pagar ocho ducados para los pobres por las culpas que contra él se formularon en el curso de aquellas<sup>502</sup>.

La pretensión de regeneración del sistema judicial perseguida por la *visita* quedó clara en el caso de los oficiales del crimen. Las culpas averiguadas en Pedro Alves Salinas, Gil de Ávila, Juan de la Peña, Francisco de Enao y Luis Román supusieron no sólo la remoción de sus cargos en el tribunal del crimen, sino el destierro de la corte y las cinco leguas antes de ocho días<sup>503</sup>. Más ligera fue la condena de otro oficial del crimen, San Juan de Sardaneta, obligado a recibir reprensión y pagar dos ducados para pobres<sup>504</sup>.

Tras la comunicación de sus condenas a estos oficiales, el mismo día se pusieron en conocimiento de otros alguaciles las culpas resultantes de su actuación. El alguacil del campo Marcos Bravo debía devolver diferentes bienes y pagar 6.000 mrs. a modo de multa, mitad para la Cámara y la otra mitad para pobres. Diego de Ricote recibió pena menor que varios de sus compañeros, al ser condenado a reprensión, pago de seis ducados para la Cámara y los pobres y cumplir un memorial particular. Igualmente leve fue la condena de sus compañeros Juan de Cuero y Antonio de Santiago, quienes debían ser reprendidos y advertidos por descuidos cometidos durante su actuación, y el segundo pagar diez ducados, la mitad para la Cámara y la otra para los pobres.

---

<sup>501</sup> *Ibid.*

<sup>502</sup> *Ibid.*

<sup>503</sup> *Ibid.*

<sup>504</sup> *Ibid.*

Además, ambos fueron obligados a atender un memorial con las rectificaciones que debían aplicar en su ejercicio. La misma ligereza tuvo la condena de su compañero el alguacil Felipe de Salinas<sup>505</sup>. Con este último finalizó la comunicación de las sentencias de 10 de agosto<sup>506</sup> y la continuación del proceso tuvo que esperar casi un mes, en lo relativo a los oficiales.

Ello no significó que la conclusión de la visita se paralizase, puesto que Diego de Córdoba continuó entretanto la tarea del príncipe Felipe sobre las plazas jurisdiccionales del Consejo y consiguió menguar sutilmente efectos indeseados para sendos *clientes* de Valdés sobre los que recayeron los cargos más graves: los licenciados Beltrán de Galarza y Hernando Martínez de Montalvo. En un principio, Diego de Córdoba no alteró el sentido original de la visita y ante sus culpas expresó al Emperador que debía «... mandarles V. Md. hazer alguna md. en sus casas sin la administración de los oficios...»<sup>507</sup>. Pero no tardó en matizar esta opinión y pasó a mostrarse partidario de que devolvieran al duque de Arcos la plata ilegalmente beneficiada en Cazalla e indemnizaran a la mujer de Villazán, difunto receptor de la chancillería de Valladolid<sup>508</sup>. Igualmente, el licenciado Montalvo debía devolver a don Enrique de Guzmán dos piezas de plata que confesaba haber recibido de él sin licencia regia<sup>509</sup>.

Como venimos apuntando visitador y visitados compartían origen político, e incluso habían servido juntos a Fernando de Valdés. Desposada doña Mayor Osorio (nieta de don Francisco Osorio, señor de Valdunquillo e hija de Francisco Osorio y doña Catalina de Acevedo) con el sobrino del inquisidor general, de igual nombre, éste no aceptó renunciar a las legítimas y sucesiones correspondientes a la madre y el abuelo de doña Mayor. En respuesta, la retuvieron en su casa con intención de hacerla monja, y el Consejo, a impulso de Galarza y Martínez de Montalvo, emprendió las acciones necesarias para que el matrimonio se efectuase. El propio don Diego de Córdoba estuvo al cargo de las velaciones<sup>510</sup>.

El presidente Fonseca no permaneció al margen de la situación abierta con la partida del príncipe, y mostró su escasa utilidad para el interés de Ruy Gómez al manifestar

<sup>505</sup> *Ibid.*

<sup>506</sup> En Valladolid, ese día, el presidente Fonseca, el licenciado López de Otálora y Diego de Córdoba «dixerón que p[ro]nunciauan y mandauan e mandaron e determynaron las determynaciones y sentençias su[r]ascriptas y q. se guarden, en presençia de my, A.º de Mariana» (AGS, *ibid.*).

<sup>507</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n., carta de 29 de agosto de 1554: «No escriuí a V. Md. lo q. parecía se deua de hazer con los licenciados Galarça y Montalbo y dotor Ortiz, así por lo au[er] de palabra dicho a V. Md. como porq. mandandoles restituir lo mal llebado q[ue]daba claro lo q. conbenía al descargo de la real conciencia de V. Mt. y execución de Justicia proueerse, q. es mandarles V. Md. hazer alguna md. en sus casas sin la administración de sus oficios auíendose en ella como de la uisita resulta q. en los q. tienen semeiante lugar no se çufre disimulación en el castigo auiendo restitución de parte.

<sup>508</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n.

<sup>509</sup> *Ibid.*

<sup>510</sup> Relación del caso en AGS, E. leg. 121, núm. 286.

que, en su opinión, ambos odores no merecían castigo grave por la publicidad que habían dado a sus actuaciones en la Cámara de Maximiliano y María <sup>511</sup>. Si bien distinguió otras culpas en el licenciado Martínez de Montalvo, a quien consideraba un obstáculo para la diligencia del Consejo Real, que le hacían merecedor de la remoción:

... y porque v[er]daderam[en]te el licen[cia]do Montalvo no está de p[ro]uecho y muchas vezes sirue más de impedir el despacho de los negocios y se entyende q. no estudia ny a my uer se le puede confiar la determynacion de pl[ei]tos importantes en buena consciencia y asy rehuso yo quanto puedo de encargarselos. Siendo Su Magt. seruydo como pasasen algunos dias... por guardarle su onor se le podrya hazer alguna md. en su casa y sería bien empleada <sup>512</sup>.

Como se aprecia, la partida del príncipe Felipe y de su mentor político supuso la pérdida de calado de la inspección, mengua de la que no permanecieron al margen los oficiales. El 4 de septiembre de 1554 se retomó la comunicación de la sentencia a estos últimos. Se impuso al portero Bernardino Ponce el destierro de la corte y dar cuenta de bienes por los que había sido culpado <sup>513</sup>. Igualmente, Barahona, Tremiño, Santander y Bullones, porteros emplazadores de los alcaldes, debían ser reprendidos por las irregularidades cometidas, y el último dar cuenta de cierto bien adquirido ilegalmente, mientras Pablos de la Horta debía salir desterrado de la corte.

Según se advierte, la comunicación de la sentencia comenzó por los acusados más graves y siguió por los más leves, si bien ello no significó un menor celo, como prueba que se ordenara a los herederos del alguacil Juan de Soto el pago y depósito de los bienes y cantidades usurpados por el difunto <sup>514</sup>.

Al día siguiente, 5 de septiembre, continuó la comunicación de la sentencia por el escribano de provincia Juan de Montoya, a quien se condenó a reprensión y pago de 6.000 mrs. a repartir entre la Cámara y los pobres. Su compañero Jerónimo de Atienza recibió la misma condena, si bien en su caso debía pagar la mitad. Ese día

<sup>511</sup> AGS, CC, leg. 2710, s. n.: «... cierto parece q. están notados de cubdicia en algunas cosas q. hizieron siendo de la Cámara en tiempo de los serenys[imo]s reyes de Bohemya y de auer p[ro]curado mer[ce]des q. no les estaua bien recibirlas ny hazer los conçiertos q. hizieron. Mas considerando q. en los cargos donde resulta más culpa tyenen alg[un]as excusas o salidas pues lo q. llevaron fue público y por scripturas de m[er]ced y títulos colocados; puesto q. qualquier culpa o exçesso en p[er]sonas q. están en lugar tan premy-niente sea de mayor consideracion. Para remouer o castigar con infamyia un hombre de Consejo sería menester q. uvyese muy mayores causas q. en otros y más euidentes y aún mejor prouadas y asy me parece q. deuen s. rep[re]hendidos significándoles q. sy V. AL. no myrara la authoridad del q[on]sejo y el mucho t[iem]po q. ha s[er]uido a Su Magt. p[ro]cediera adelante en la satisf[c]cion del mal exemplo q. en esto dieron».

<sup>512</sup> *Ibid.*

<sup>513</sup> Ciertamente, a juzgar por los cargos que le fueron formulados este portero no era de los menos codiciosos, pues fue condenado a dar cuenta «de la saya del cargo quarto y de la sobremesa del cargo quinto y de las medias calças del cargo ieynte y de la espada del cargo catorze y de la saya del cargo diez y ocho», aparte de ser reprendido por algunas cosas particulares (AGS, CC, leg. 2746).

<sup>514</sup> *Ibid.*

aconteció un hecho novedoso, al constar en los autos la rúbrica de los tres instructores, quizá por la resistencia que encontraban en el cumplimiento de sus determinaciones <sup>515</sup>.

La participación de las sentencias continuó el 11 de septiembre, con los alguaciles Garcí Velázquez y Bartolomé de Santiago: reprensión por la responsabilidad incurrida en el desempeño de su cargo y el pago respectivo de ocho ducados y 20.000 maravedís a repartir entre la Cámara y los pobres, así como cumplir los respectivos memoriales particulares <sup>516</sup>. Una semana después los tres ministros concluyeron la comunicación de la sentencia, que definitivamente dio muestra de un aliviamiento paulatino como consecuencia de la situación reinante en la corte de Valladolid, según ejemplifica la ligera condena finalmente impuesta al alguacil Diego de Salinas <sup>517</sup>.

La ponderación de la sentencia de los alguaciles, los oficiales de mayor relevancia, trasluce la intención de Diego de Córdoba de culpar a aquellos que procedían del círculo político ajeno al inquisidor general o con mayor antigüedad en la corte, cuya edad era claro obstáculo para su ejercicio. En este caso se hallaban Diego de Salinas «el viejo» (quien ejercía la plaza desde 1517), el difunto Soto (quien lo hacía desde 1526), García Velázquez, Bartolomé de Santiago el Viejo, Juan de Irizar, Salinas y Juan de Cuero, presentes en la corte, respectivamente, desde 1526, 1520, 1517, 1530 y 1531, sin que podamos precisar la fecha de incorporación del último <sup>518</sup>.

Por su parte, Miguel Ruiz Nebro había sido nombrado alguacil en tiempo del presidente Niño, el 4 de julio de 1549, en sucesión de Gudiel <sup>519</sup>, igual que Gregorio de Medina, incorporado en 1548 <sup>520</sup>. Pero como quiera que, en aplicación de las instrucciones impuestas por el Emperador durante la ausencia del príncipe entre 1548 y 1551, Valdés había podido intervenir en su designación, el celo de Córdoba y López de Otalora se centró especialmente en aquellos alguaciles llegados en tiempo de Tavera, o entrados durante la presidencia del propio Valdés pero impulsados por el arzobispo de Toledo. Era el caso de Antonio de Santiago el mozo, nombrado el 9 de noviembre de 1540 <sup>521</sup>,

<sup>515</sup> *Ibid.*

<sup>516</sup> *Ibid.* Asimismo, el segundo debía entregar lo que era a cargo de los gitanos.

<sup>517</sup> El 18 de septiembre, «dixeron q. se notifique al alguacil Di[eg]lo de Salinas q. escoja sy quiere salir a cumplir el destierro q. le está m[an]da[do] salga o sy quisiere q. comience a correr la suspensyon de los seys meses q. uea qual de las dos cosas quiere començar a cumplir q. lo dexauan en libertad e uoluntad, lo qual mandaron ante my Al[fon]so de Mariana» (AGS, *ibid.*). Estas «Sentencias y notificaciones de la visita...» vinieron seguidas de las notificaciones particulares de las determinaciones relacionadas.

<sup>518</sup> GAN GIMENEZ, P., «El Consejo Real de Castilla. Tablas Cronológicas (1499-1558)», *Chróica Nova*, 1969, núms. 4-5, pp. 44-45, 64-67, 74-75, 78-79, 92-93 y 98-99.

<sup>519</sup> AGS, QC, leg. 39, cit. por GAN, P., *op. cit.* p. 138.

<sup>520</sup> *Ibid.*, leg. 22, cit. en *op. cit.*, pp. 136-137. Presente en su plaza todavía en 1558, fecha en la que concluye el estudio de Gan que venimos citando.

<sup>521</sup> AGS, QC, leg. 8, cit. por GAN, P., *op. cit.*, pp. 120-121, en cuya nómina consta que en 1552 había residido tanto en la corte como fuera de ella y su último año de actividad había sido 1557 (*op. cit.*, pp. 144-145 y 156-157).

Domingo de Zabala, esta aparición puede ser interpretada como un retorno a su cargo, al no aparecer en la nómina de 1553, cuando se inició la inspección. Ante lo dicho, cabe afirmar que el resultado más tangible de esta fueron las Ordenanzas aprobadas por el príncipe a su partida, aprontadas como remedio para las faltas averiguadas por Diego de Córdoba en el procedimiento del Consejo.

## Resultados de la visita de Diego de Córdoba: las Ordenanzas del Consejo Real de 1554

Para las culpas derivadas del procedimiento del Consejo se arbitraron nuevas ordenanzas (12 de julio de 1554), ignorantes de las responsabilidades de fuste político, que como hemos visto comenzó a ventilar el príncipe antes de su partida y culminó el propio Diego de Córdoba. Estas instrucciones resultaron no sólo de la indagación del visitador, sino de las conclusiones remitidas por los ministros temporales y eclesiásticos comisionados por Castilla para valorar la distribución periférica de la justicia<sup>536</sup>. Estas últimas inspiraron los primeros diez puntos de las ordenanzas (de un total de setenta), consagrados al trámite cortesano de las residencias.

En primer lugar, se estableció tabla de las residencias de jueces y oficiales de justicia en el Consejo Real, que serían vistas cada martes y jueves, y se ordenó que fueran concluidas por los mismos oidores que habían iniciado su vista y se procediera con rigor contra los culpados. De la misma manera, en salvaguarda del interés regio se estipuló la intervención de los fiscales en el trámite de las residencias, quienes debían asentar en libro específico el resultado de las residencias tramitadas en el Consejo<sup>537</sup>. Este celo en la tramitación alcanzó al oficial objeto del juicio, pues se estipuló que la suplicación a que hubiera lugar fuera respetada, ordenanza que previamente había

<sup>536</sup> Las Ordenanzas, tituladas de manera significativa *Ordenanças del Consejo Real de su Magestad. Y los aranzes que han de guardar los relatores, escrivanos de cámara, escrivanos del crimen, escrivanos de provincia, alguaziles, e alguaziles del campo, porteros, y emplazadores, verdugos, y pregoneros, que residen en la corte, en los Consejos, Real, y de la Sancta Ynquisición, e Indias, e Ordenes, e Hazienda, e Contaduría, que la Magestad del Rey nuestro señor mandó ordenar, en la visita que hizo, en el año de M.D.LIII* (conservadas en BUS 44.056 y pub. por DIOS, S. de, *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca, 1986, pp. 100-112, y referidas con anterioridad por PÉREZ MARTÍN, A., y SCHOLZ, J. M., *Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, Valencia, 1978, p. 72), vinieron inmediatamente precedidas de la siguiente cédula: «Presidente, y los del consejo del Emperador y rey mi señor, ya sabeys la visita que por mandado de su Magestad hemos hecho, por la qual parece bien el celo e rectitud con que se a administrado y administra justicia en ese consejo, de que su Magestad se tendrá por servido para mandároslo gratificar como es razón. Y porque de la dicha visita resultan ansi mismo algunas cosas en que conviene proveer para la buena orden e despacho de los pleytos y negocios que en ese consejo se tractan. Por ende yo vos mando que de aquí adelante guardéys y cumplays, y fagays guardar y cumplir las Ordenanças siguientes» (pub. por DIOS, S. de, *op. cit.*, pp. 100-101).

<sup>537</sup> Puntos 1-4 de las Ordenanzas, pub. por DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 101.



Felipe de Salinas el mozo, posesionado el 20 de mayo de 1542 (quien, en prueba de su orientación ideológica, estuvo presente en la corte itinerante del príncipe Felipe entre 1554 y 1556)<sup>522</sup>. Aunque el principio resulta más dudoso en los casos de García de Hoyo, llegado al alguacilazgo el 30 de noviembre de 1544, y Juan de Argüelles, incorporado en 1546 y el único, junto con Ruiz Nebro, que desapareció definitivamente de la lista de alguaciles tras la visita, mientras Diego de Salinas reapareció en 1556, una vez cumplida su condena<sup>523</sup>.

Igualmente inocua fue la visita en lo referido a los relatores. Pese a haber sido presentados cargos contra todos ellos, al tiempo de su partida el 12 de julio de 1554 el príncipe Felipe volvió a nombrar a todos los que en los años inmediatamente anteriores habían ejercido el oficio: Sancio, el licenciado Guedeja<sup>524</sup>, el licenciado Juan de Paredes<sup>525</sup>, así como el licenciado Miguel Gómez de Almorox<sup>526</sup>, sin dejar de constar en las nóminas del Consejo utilizadas por Gan desde 1555<sup>527</sup>. De la misma manera ajenos a alteraciones fueron los secretarios Francisco del Castillo<sup>528</sup>, Rodrigo de Medina<sup>529</sup>, Juan Gallo de Andrada<sup>530</sup>, Blas de Saavedra<sup>531</sup>, Domingo de Zabala<sup>532</sup>, Pedro de Mármoles<sup>533</sup>, Francisco de Vallejo<sup>534</sup> y Diego de Gálvez<sup>535</sup>. Todos ellos constaban en la nómina de 1555, si bien es cierto que en dos de los casos, Francisco del Castillo y

<sup>522</sup> AGS, QC, leg. 14, cit. por GAN, P., *op. cit.*, pp. 124-125, 148-149 y 156-157.

<sup>523</sup> GAN, P., *op. cit.*, pp. 132-133 y 148-149.

<sup>524</sup> Nombrado para la relatoria con Salazar, el 3 de julio de 1545, AGS, QC, leg. 31; GAN GIMÉNEZ, P., *op. cit.*, pp. 138-139.

<sup>525</sup> Nombrado el 24 de enero de 1549 (AGS, *ibid.*; *op. cit.*, *ibid.*).

<sup>526</sup> GAN, P., *op. cit.*, pp. 148-149.

<sup>527</sup> *Op. cit.*, *ibid.*, Guedeja y Sanz habían desaparecido de manera transitoria en 1549, nombrándose a Paredes, a causa de la excesiva ocupación de los primeros. Es más: por auto de 14 de diciembre (recopilado, auto XVIII, lib. III), el Emperador aumentó la retribución de cada uno de ellos de 20.000 a 30.000 mrs. Pero esta determinación en realidad no fue efectiva, dado que el licenciado Guedeja percibió 40.000 mrs. y sus compañeros Sánchez, Paredes y Almorox continuaron recibiendo 20.000 mrs. anuales (LÓPEZ GÓMEZ, M. A., «Los relatores del Consejo de Castilla y de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte», *Hidalguía*, 1990, núm. 218, p. 46).

<sup>528</sup> Quien, según Gan, aparecía ya en 1478, luego debió ser sucedido por su hijo del mismo nombre (*op. cit.*).

<sup>529</sup> Nombrado en lugar de Gamboa el 3 de agosto de 1527 (AGS, QC, leg. 39, cit. por GAN, P., *op. cit.*, pp. 94-95).

<sup>530</sup> En quien su padre renunció el oficio el 18 de abril de 1534, para morir el día 24 (GAN, P., *op. cit.*, pp. 108-109).

<sup>531</sup> Quien sustituyó a Tejeda por su renuncia el 3 de septiembre de 1534 y nombrado el día 28, tomó posesión el 23 de noviembre (AGS, QC, leg. 10, cit. por GAN, P., *op. cit.*, pp. 108-109).

<sup>532</sup> Nombrado el 10 de noviembre de 1539 (AGS, QC, leg. 13, s. n., cit. por GAN, P., *op. cit.*, p. 118).

<sup>533</sup> Nombrado el 31 de octubre de 1543 (AGS, QC, leg. 37), se asienta en 1545 (GAN, P., *op. cit.*, p. 129).

<sup>534</sup> Nombrado el 31 de diciembre de 1543 y posesionado a 14 de febrero de 1544, sustituye a Zárate, quien había ido a Perú: cfr. la dedicatoria de su *Historia del Perú*.

<sup>535</sup> Quien, según Gan, entró en 1546, no apareció en la nómina de 1548 y recibió título formal en 1557 (GAN, P., *op. cit.*, pp. 132-133 y 155).

sido tramitada como auto en el seno del Consejo <sup>538</sup>. De la misma manera, consciente el príncipe de la demora que los juicios de residencia provocaban en el organismo, ordenó que sus instructores evitaran en lo posible remitir la determinación de los cargos de la residencia secreta, aunque se hubiera puesto demanda pública sobre ellos. Jueces a los que asimismo se encareció ejercer su comisión con la máxima solicitud, asentando las sumas gastadas en su curso. En este sentido, cuando el juez necesitase escribano por ejercerla en lugar de entidad, su salario sería fijado y aprobado en el Consejo <sup>539</sup>.

Por su influencia en la percepción social de la eficacia del Consejo, aquellos puntos orientados a agilizar u ordenar el despacho del organismo merecen atención especial. El punto 11 ordenó a los escribanos de cámara anotar los negocios confiados a los fiscales y las provisiones de oficio <sup>540</sup>. De la misma manera se aconsejó dar pocas *incitativas* a jueces inferiores y provisiones de información sobre asuntos que luego no eran conocimiento del Consejo <sup>541</sup>. Los puntos consagrados en las Ordenanzas a la agilización del expediente reflejaron el caótico procedimiento reinante en el Consejo Real, al solicitar el voto inmediato de aquellos pleitos «de fácil expedición» y la señal en día cierto

<sup>538</sup> «5. Mandamos assi mismo que ninguna residencia se consulte sin que las condenaciones que en ella se ovieren hecho, en que haya lugar suplicación, se notifiquen a partes y estén passadas en cosa juzgada» (pub. en *op. cit.*, p. 101, y previamente, auto núm. 15 de los sancionados por el Consejo).

<sup>539</sup> Puntos 6-9 de las Ordenanzas, *op. cit.*, p. 102. En cuanto a los juicios de residencia, finalmente el punto décimo punía la negociación de derechos con sus tenientes por parte de jueces de residencia y corregidores (*ibid.*). La insistencia en los juicios de residencia tenía relación con el olvido que esta figura venía padeciendo en tiempo del Emperador, CHAMBERLAIN, R. S., «The Corregidor in Castile in the sixteenth century and the Residencia as applied to the Corregidor», *The Hispanic American Historical Review*, 23 (1943), pp. 223-257, p. 247: «This important institution, the use of which was made general by Ferdinand and Isabella, but which was somewhat neglected by Charles V, was extensively employed by Philip II.» Incide en la idea MERRIMAN, R. B., *The rise of the spanish empire in the old world and in the new*, IV, *Philip the Prudent*, Nueva York, 1934, pp. 463-464, quien aborda su origen y desarrollo previo en *op. cit.*, I, pp. 234-235, y II, pp. 150-152. Asimismo, GONZÁLEZ ALONSO, B., *El Corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970, pp. 182-196. Y, especialmente, *id.*, «El Juicio de Residencia en Castilla. I. Origen y evolución hasta 1480», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1978, núm. 48, pp. 193-247. Una revisión doctrinal, en COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., «El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina jurídica en la Edad Moderna», *Historia, Instituciones, Documentos*, núm. 25 (1998), homenaje al profesor don José Martínez Gijón, pp. 151-184. Por otro lado, el procedimiento de los juicios de residencia venía llamando la atención de las Cortes por las distorsiones que causaba. En 1551 solicitaron que al tiempo que expirara un corregidor fuese nombrado el sucesor, eliminando así la jurisdicción interina del juez de residencia. Asimismo, el nuevamente nombrado iría acompañado por magistrados encargados de residenciar al corregidor anterior y sus oficiales. La petición alcanzó forma de pragmática real en 1564 (CHAMBERLAIN, R. S., *op. cit.*, pp. 249-250).

<sup>540</sup> «Y en el dicho libro assi mismo se ponga qualquier otra cosa que en consejo se mandare a los jueces inferiores sobre que ovieren de embiar relación o información, y de allí saquen sus memoriales los dichos fiscales e porque de todo aya la razón y quenta que conviene e más fácilmente se entienda cómo se cumple y executa lo proveydo. Mandamos que el sábado de cada semana cada uno de los dichos fiscales dé razón en consejo de lo que estuviere a su cargo» (DIOS, S. de, *op. cit.*, pp. 102-103).

<sup>541</sup> Puntos 12 y 13, en DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 103. Al último respecto, se expresó: «Mandamos que los del nuestro consejo antes que manden dar provisión para que algún juez de oficio o a pedimento de parte aya información, e la embie con su parecer, vean e platiquen primero si es negocio en que venida la información se deve proveer por escusar las costas que en hazerla se recrescen si después no se provee.»

de aquellos que necesitaran mayor información, los cuales, como el resto de los negocios, debían ser votados «resolutamente sin repetir los unos las razones e motivos que los otros han dado...»<sup>542</sup>. Igualmente, la sanción o derogación de leyes o pragmáticas debía contar con la aprobación de dos terceras partes de los oidores presentes, y la recusación de jueces en pleitos de tenuta, mil y quinientas doblas, residencias, asuntos eclesiásticos y remitidos se limitó a treinta días de incoado el procedimiento<sup>543</sup>.

La rapidez y facilidad en el despacho, tanto en el Consejo Real como en el resto de organismos, guardó clara relación con el deseo del príncipe de identificar su acceso al trono con la imposición de la justicia. La limitación a los dos meses siguientes de la vista del pleito de las informaciones y diligencias de las partes, así como de la determinación del mismo a los dos meses subsiguientes, de manera que no superara los cuatro meses de duración total, se proveía para evitar «los daños y gastos, e inconvenientes que las partes resciben en dilatarse tanto la determinación de sus pleytos y causas, queriendo proveer en ello de suerte que más brevemente puedan conseguir su justicia, y se descargue nuestra conciencia...»<sup>544</sup>.

De la misma manera la casuística dilatoria que generaban los pleitos de mil y quinientas y de tenuta en el funcionamiento del tribunal originó varios puntos de las Ordenanzas, que conminaban a no interponer otros nuevos hasta que estuviesen concluidos los ya comenzados, y a crear tabla de los pleitos de mil y quinientas y ver con ligereza aquellos que lo admitieran<sup>545</sup>. Semejante voluntad de mejora del funcionamiento forense supusieron los puntos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, que comprometían a presidente y oidores en la agilidad del expediente<sup>546</sup>, y aquellos que limitaban temporalmente el examen de escribanos en el Consejo<sup>547</sup> y encarecían la breve determinación de las visitas llegadas a él. El contenido de este punto (el vigésimo octavo) permite deducir la modificación del propio trámite de la visita en el seno del Consejo, como consecuencia de la actividad inspectora del príncipe y don Diego de Córdoba:

Otrosí, por lo mucho que importa que las visitas que se hazen por nuestro mandado, en las audiencias y en los juzgados, y en las universidades destos reynos, se vean y deter-

<sup>542</sup> Punto 17, pub. en *op. cit.*, p. 104. Continuaba: «... y en tener todo silencio y atención quando votaren, pongan el cuydado que conviene a la autoridad de sus personas y breve despacho de los negocios, pues saben de quanta estimación es el tiempo que allí se pierde».

<sup>543</sup> Puntos 18 y 20, en *op. cit.*, pp. 104-105.

<sup>544</sup> Punto 21 de las Ordenanzas, pub. en *op. cit.*, p. 105.

<sup>545</sup> Puntos 22 y 23 de las Ordenanzas, pub. en *op. cit.*, p. 105.

<sup>546</sup> «24. Mandamos que el presidente tenga cuydado que a su cargo incumbe de hazer cómo las partes sepan el día en que se han de ver sus pleytos, para que mejor puedan prevenir lo que les convenga.

25. Otrosí mandamos que los pleytos remitidos se pongan en memoria, e que así en la vista como en la determinación sean preferidos a los otros, y el presidente luego que se remitiere el pleyto nombre los juezes que le han de ver en remisión» (pub. en *op. cit.*, p. 106).

<sup>547</sup> Punto 27 de las Ordenanzas, limitando tal examen a los meses de marzo y abril y septiembre y octubre (*op. cit.*, p. 106).

minen con brevedad, mandamos al presidente e a los del Consejo, que sin dilación alguna, luego que ante ellos vinieren las dichas visitas, se comiencen a ver, e prosigan hasta el cabo, desocupándose quanto fuere possible de otros negocios, repartiendo por salas lo que no fueren para todos los del consejo, de manera que más brevemente se pueda ver y determinar lo que resulta de las dichas visitas. E porque mejor sean advertidos de lo que conviene proveer, así en lo general como en lo particular, mandamos que si el visitador fuere persona de alguno de nuestros Consejos, haziendo ante todas cosas juramento de guardar secreto, se pueda hallar presente a la determinación de lo que en Consejo se votare e proveyere en la visita que oviere fecho, e a qualquier que sea visitador por nuestro mandado los del Consejo, para sólo informarse de lo que siente en las cosas que se han de proveer por la dicha visita, le pidan su parescer por escripto o de palabra <sup>548</sup>.

Con esta alusión, pasamos a tratar ciertos puntos de las Ordenanzas dedicados a los oficiales objeto de la inspección de Diego de Córdoba. En primer lugar, las numerosas denuncias de arbitrariedades cometidas por los alguaciles condujeron a redactar el punto número 19, que encomendaba a los miembros del Consejo Real vigilar el tratamiento recibido por los presos en la cárcel, y a los relatores y escribanos hacer la relación de los delitos por los que estaban allí, así como el estado de sus causas, en vez de los alcaldes <sup>549</sup>. Las irregularidades arancelarias detectadas por el visitador impulsaron aquellos puntos que prohibían los depósitos por recusación u otras causas en los escribanos de cámara, o la instauración de la figura del tasador, que fijase los derechos de los procesos <sup>550</sup>. Asimismo, clara continuidad con la labor del consejero de Inquisición guardó la visita anual de los oficiales cortesanos encomendada a un miembro del Consejo en el punto número 30 <sup>551</sup>. Con él, se daba paso en el documento

<sup>548</sup> Punto 28 de las Ordenanzas, pub. por DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 106.

<sup>549</sup> *Op. cit.*, p. 104. Con objeto de fiscalizar más intensamente el régimen penitenciario, se estableció que uno de los oidores que había visitado la semana anterior fuera con otro la siguiente, «e así por su orden las hagan continuadamente».

<sup>550</sup> «9. Mandamos que de aquí adelante aya una persona qual nombrare el presidente y los del nuestro Consejo que tasse los derechos de los processos y escripturas que ovieren de llevar los relatores y escrivanos de cámara, y los escrivanos del crimen, y relator de la cárcel, y escrivanos de provincia de las audiencias de los alcaldes, y no puedan cobrar ni llevar derechos algunos de processos ni escripturas sin que vaya tassado por la misma persona, e que por el trabajo que en esto ha de tener le señalen el salario que fuere justo, el qual se le paguen de las penas que se condenaren para nuestra cámara» (pub. en *op. cit.*, pp. 106-107). La conciencia regia sobre esta clase de abusos económicos, llevó al Consejo a sancionar la estipulación de derechos, caso de RIBERA, D. de, *Prácticas y aranceles de escrivanos del número y reyno y de las provincias, de los alcaldes de Casa y Corte y de las Chancillerías y los que van con los jueces de comisión*, Granada, 1577.

<sup>551</sup> «Es nuestra voluntad y mandamos, que de aquí adelante los relatores, escrivanos de cámara, e porteros del nuestro consejo, alguaziles de nuestra corte, escrivanos del crimen e provincia ante quien passan las causas civiles e criminales que penden ante los nuestros alcaldes e sus oficiales, e otrosí los porteros de los dichos alcaldes, alcaide de cárcel, alguaziles del campo, procuradores y abogados, se visiten en cada un año por la persona que nombrare el presidente del nuestro consejo, porque mejor se pueda entender cómo usan sus officios, y los del nuestro Consejo castiguen con cuydado los que por la dicha visita se hallaren culpados proveyendo lo que así mismo les paresciere que conviene, para que en todo aya buena orden y se descargue nuestra conciencia y lo mismo se entiende quanto al relator del crimen, e qualesquier otros

a puntos particularmente dedicados a distintas categorías de oficiales: fiscales, relatores y escribanos de cámara.

En lo relacionado con los primeros, las atribuciones que tenían conferidas condujeron a subrayar su responsabilidad en la tramitación de las residencias y se les obligó al reparto cuando hubiere más de un fiscal y al despacho de las ejecutorias resultantes<sup>552</sup>; así como a encarecerles el mantenimiento de libro en que apuntara las causas criminales y fiscales de su conocimiento del que daría cuenta ante el Consejo tras la consulta de cada viernes<sup>553</sup>.

Consecuencia directa de la labor de Diego de Córdoba fueron los diez puntos consagrados a los relatores, de tipo procedimental y económico, y reveladores tanto del vacío legislativo en que ejercían su labor, como de la responsabilidad que desde entonces les fue atribuida en la agilización del Consejo. En primer lugar, los relatores debían ser examinados y aprobados en el Consejo, y jurar un ejercicio de su oficio diligente, discreto y ajustado al arancel; razón por la que no podrían recibir presentes de pleiteantes

---

oficiales que traten en nuestro consejo, o con los alcaldes de corte» (punto trigésimo de las Ordenanzas, pub. en *op. cit.*, p. 107).

<sup>552</sup> Puntos 31 y 32 de las Ordenanzas, pub. por DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 107.

<sup>553</sup> Punto 33, en *op. cit.*, p. 107. Un rápido pero notable bosquejo sobre los fiscales del Consejo Real, o más correctamente, sobre los fiscales reales presentes en el Consejo, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., «Pasado y presente del ministerio fiscal español: de las Cortes de Briviesca a la Constitución de 1978», *Boletín de la Institución Fernán González*, 1984, pp. 237-242. Cfr. asimismo, CORONAS GONZÁLEZ, S. M., *Ilustración y Derecho: los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII*, Madrid, 1992. Como en el caso de otros organismos y oficiales, el estudio de los fiscales regios surgió con el Estado liberal, hasta el punto que las primeras obras modernas que se ocuparon de estos ministros fueron los temarios de oposiciones para cubrir las plazas convocadas como expresión de su consolidación: ALONSO COLMENARES, E., *Manual del promotor fiscal*, Madrid, 1847; CASAS Y MORAL, A. de, *Guía de los promotores fiscales*, Martos, 1855.

En Castilla, la primera referencia sobre la representación del rey en los juicios, menos concreta que en Aragón, Valencia y Navarra, se da con las *Partidas*, en las que se considera al fiscal (*Patronus Fisci*) «home que es puesto para razonar, é defender en juicio todas las cosas é los derechos que pertenescen a la Cámara del rey» (Ley 12, tít. 18). Pero no fue hasta el reinado de Juan I, que la institución del ministerio público tomó forma, con el establecimiento de los tribunales permanentes. En 1385 este rey instituyó la audiencia real, en principio itinerante, y dos años después suscribió petición de las cortes de Briviesca solicitando el nombramiento de un *procurador fiscal*. Juan II fortaleció el oficio mediante las ordenanzas de Guadalajara de 1436, que encomendaban al fiscal «la promoción de la mi justicia» y le conferían la potestad de acusar o denunciar por pesquisa. Sólo fijado definitivamente el sistema de tribunales superiores permanentes, adquirió el fiscal fisonomía como defensor de los intereses del rey y del pueblo. Esta evolución, en los *Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. José María Huet. El día 30 de junio de 1867*, Madrid, 1867, pp. 19 y ss. La evolución histórica del oficio en la Baja Edad Media, en PÉREZ DE LA CANAL, M. A., «La justicia de la corte en Castilla durante los siglos XIII al XV», *Historia, Instituciones, Documentos*, núm. 2 (1975), pp. 383-481, 428-429 y 440. Alusión a su protagonismo en la carga procesal, en KAGAN, R. L., *Pleitos y pleiteantes en Castilla (1500-1700)*, Salamanca, 1991, pp. 35-36. Por su parte, BECERRIL Y ANTÓN MIRALLES, J., *Presencia e historia del Ministerio Fiscal español*, Madrid, 1976, defiende la originalidad del ministerio fiscal hispano en relación a figuras con parecidas atribuciones en distinto tiempo y lugar.

o solicitadores, abogar en pleito pendiente en el Consejo o delegar sus funciones <sup>554</sup>. Igualmente, ninguno debía recibir procesos de los escribanos sin encomendación previa por parte del presidente, quien también debía repartir las causas pendientes por muerte de un relator <sup>555</sup>. Con la remodelación forense que suponían las Ordenanzas, se atribuyó a los relatores responsabilidad en la diligencia del Consejo, al encargárseles recordar aquellos pleitos de los que hubieran hecho relación y permanecieran sin votar y hacer balance semanal de las causas que continuaban en sus manos <sup>556</sup>. En cuanto a la percepción ilegal de derechos, las Ordenanzas conminaron a asentar los que percibían, y no obtenerlos de pleitos que incluían relación <sup>557</sup>.

Pero el grueso de las Ordenanzas se centró en los escribanos de cámara, cuya labor ocupó veinticinco de sus setenta puntos. Como en el caso de los relatores, su acceso al oficio también debía estar precedido de juramento de secreto, y serles encomendado el orden de las provisiones que debieran ser despachadas y la custodia correcta y cuidadosa de los documentos del proceso, sin confiarlos a las partes <sup>558</sup>. Dada la importancia de su labor, se incidió en un ejercicio correcto de su cargo y el de sus subordinados, los cuales debían ser hábiles y suficientes, como aquellas personas encargadas de trasladar las encomiendas al presidente <sup>559</sup>. Los escribanos debían incorporar a los procesos los documentos presentados por las partes de forma inmediata, y no añadir los originales emanados por los jueces, sino copia <sup>560</sup>. Igualmente, debían estar presentes en su plaza, no alterar las provisiones ordinarias del Consejo —práctica que pervertía gravemente la actividad judicial— y asentar las peticiones y escrituras en forma y letra y no por suma. Así como no sacar relación de las peticiones de las partes, traer con tiempo las peticiones y darlas al relator que debía hacer la primera <sup>561</sup>.

Se apreció voluntad por racionalizar la actividad de los escribanos, según se desprende de la decisión de conferir al mismo tanto la parte pública de la residencia como la secreta <sup>562</sup>, si bien resulta menos clara su participación en la agilización del trámite

<sup>554</sup> Puntos 34-37 y 42, *op. cit.*, pp. 107-108.

<sup>555</sup> Puntos 38 y 43, *op. cit.*, p. 108.

<sup>556</sup> Punto 44, en *op. cit.*, pp. 108-109: «Que los relatores de los pleytos que uvieren fecho relación en consejo que no estén votados, den memoria por escripto dos días en la semana al presidente e a los jueces que los ovieren visto. Y el sábado de cada semana los dichos relatores vayan a casa del dicho presidente, y le informen cada uno de los dichos pleytos que tienen a su cargo, e de la calidad y antigüedad dellos, para que visto, él mande los que se han de ver la semana adelante, y ellos se puedan mejor prevenir e avisar a las partes.»

<sup>557</sup> Puntos 39-41, en *op. cit.*, p. 108.

<sup>558</sup> Puntos 45-49, en *op. cit.*, p. 109. La infracción del secreto llegó a castigarse con la privación del oficio. Igualmente, se encarecía a los escribanos de cámara que las partes no supieran lo que estaba provisto en Consejo sobre su pleito (puntos 51-52, en *op. cit.*, pp. 109-110).

<sup>559</sup> Puntos 53-54, pub. en DÍOS, S. de, *op. cit.*, p. 110.

<sup>560</sup> Puntos 55-56, pub. en *op. cit.*, p. 110.

<sup>561</sup> Puntos 60-62 y 70, pub. en *op. cit.*, pp. 111-112.

<sup>562</sup> Punto 58, pub. por DÍOS, S. de, *op. cit.*, p. 110.

consiliar. Es cierto que se les prohibió repetir peticiones de las partes en el Consejo, y que se les conminó a trasladar los pleitos con la máxima urgencia a jueces inferiores en caso de traslado de la corte —decisión que mostraba el contenido judicial que aparejaba la fijación de la corte y permite aventurar que en 1554 se pensaba en un cambio de sede del gobierno—<sup>563</sup>. Pero en lo relativo a los escribanos gran parte de las resoluciones adoptadas debieron causar demora en el despacho, al primar la persecución de aquellas conductas que perjudicaban gravemente la recta imposición de la justicia. Así, la súplica de un auto venía acompañada de la designación de nuevo escribano para la nueva fase del proceso; no podrían dar peticiones a miembros del Consejo sin antes ser leídas en él y provisto que se vieran; asimismo, no podrían dar procesos a relatores sin ser encomendado por el presidente<sup>564</sup>. La intención expuesta queda clara en el punto 69, que decía de forma explícita:

Que ningún escrivano de cámara sea osado a decretar ninguna petición de qualquier calidad que sea, si primero no fuere leyda e proveyda en Consejo, sopena de suspensión de oficio por un año, e si lo hiziere segunda vez sea privado de su oficio<sup>565</sup>.

Igualmente, se dedicaron ciertos puntos a la codicia de los escribanos, y de este modo se prohibió que sus oficiales pudieran recibir sumas por despachar provisiones o procesos, cobraran por encontrar pleitos en el Consejo Real o recibieran presentes de negociantes<sup>566</sup>. Con todo, la fijación de los aranceles que cada oficio debía cobrar, fundamental para limitar sus excesos, fue añadida a continuación de las Ordenanzas del Consejo<sup>567</sup>. Por último cabe destacar una importante atribución conferida en exclusiva al Consejo Real, la concesión de licencias de impresión, que adquirió creciente significado con el camino «confesionalizador» tomado por la monarquía de Felipe II<sup>568</sup>.

Esta circunstancia ilustra entre otras cómo las Ordenanzas (aprobadas por el príncipe don Felipe la misma mañana de su partida a Inglaterra)<sup>569</sup> ofrecieron vehículo para la consolidación orgánica del Consejo Real y la paralela imposición de la justicia pre-

<sup>563</sup> Puntos 59 y 63, pub. en *op. cit.*, pp. 110-111.

<sup>564</sup> Puntos 65-67, pub. en *op. cit.*, p. 111.

<sup>565</sup> *Op. cit.*, p. 112.

<sup>566</sup> Puntos 50, 64 y 68, en pp. 109 y 111-112.

<sup>567</sup> Al menos en el ejemplar manejado por DIOS, S. de, contenido en BUS 44056, fols. 11v-25v, cuyo estudio resulta fundamental para conocer la tipología judicial del Consejo.

<sup>568</sup> Punto 14, en *op. cit.*, p. 103. De este punto se han ocupado tanto SIERRA CORELLA, A., *La censura de libros y papeles en España y los índices y catálogos españoles de los prohibidos y expurgados*, Madrid, 1947, p. 96, como MARTÍNEZ MILLÁN, J., «Aportaciones a la formación del Estado moderno y a la política española a través de la censura inquisitorial durante el período 1480-1559», en PÉREZ VILLANUEVA, J. (ed.), *La Inquisición Española. Nueva Visión. Nuevos Horizontes*, Madrid, 1980, pp. 558-559.

<sup>569</sup> DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 112; BNM. Ms. 5938, «Lo subcedido en el viage de S. A.», fol. 114r: «El Príncipe Nuestro Señor Don Phelipe se embarcó en La Coruña, Puesto (*sic*) despaña jueves en la tarde XIII de julio MDLIII años...»

tendida por el príncipe. La trascendencia que se les quiso dar queda patente en su pronta incorporación a la recopilación legislativa castellana<sup>570</sup>, pero cabe dudar de su efectividad a causa de la situación política que acompañó su elaboración y aprobación. Como pasamos a tratar, una vez que Ruy Gómez consiguió recomponer su influencia en la corte de Valladolid —a cuyo propósito se desplazó ex profeso en marzo de 1557—, la consideración mostrada hacia los intereses del inquisidor general Valdés perjudicó tanto la posición del visitador como la plasmación de las determinaciones funcionales que hemos descrito, resultado de su actividad.

## Tras la visita

Consecuencia de la situación política en la corte vallisoletana fue una mitigación del impulso de la remodelación administrativa, que siguió a buen ritmo por la propia inercia del proceso, antes que por la instigación del grupo «ebolista». La contienda cortesana pareció detenerse a la espera de nuevas e inminentes oportunidades de manifestación como el acceso del príncipe Felipe al trono. Señales de este relativo estancamiento fueron la pasividad del Emperador y su hijo ante la vacante causada por Miguel Muñoz en la presidencia de Valladolid (fallecido el 8 de septiembre de 1553) pese al dramatismo mostrado por el presidente Fonseca al describir las consecuencias de la misma<sup>571</sup> y, sobre todo, la pendencia de la aprobación por el Consejo Real de las Ordenanzas dejadas por el príncipe; entre tanto que algún oficial encausado en la visita era absuelto e incluso Fonseca solicitaba mejora salarial para los miembros del Consejo ante los resultados de la indagación de Diego de Córdoba<sup>572</sup>. Asimismo,

<sup>570</sup> Fueron numerosos los puntos localizables en la *Novísima Recopilación de las leyes de España...*, Madrid, 1805. En el lib. IV, tít. XVII, la ley primera correspondió al cap. 30 de las Ordenanzas. Pero la relación fue más elocuente en el tít. XXI, en el que la Ley III correspondió a los caps. 45 y 51; la cuarta, al 46; la quinta a los caps. 55, 56 y 58; la sexta, a los caps. 53, 48 y 62; la séptima a los caps. 66 y 69; la novena a los 67 y 70; la décima, al 57; la undécima, a los 60 y 63; la duodécima a los 50 y 64, además de otros capítulos en diferentes ubicaciones.

<sup>571</sup> MARTÍN POSTIGO, M. S., *Los presidentes de la real chancillería de Valladolid*, Valladolid, 1982, pp. 44-45; AGS, E., leg. 103, núm. 309, billete de Fonseca al Emperador de 4 de octubre de 1554: «Esta audiencia de Valladolid ha treze meses que está sin presidente. El daño que padecen los neg[oci]os y pleitos que en ella se tratan es muy grande, y mayor de lo q. fuera en otro tiempo por algunos respectos dexado aparte lo q. toca a la auctoridad q. es de tanto preçio como V. Mt. sabe para el crédito de la justiçia. V. Magt. lo mandará proueer conforme a esta neçessidad, q. çierto qualquiera dilación trahe mucho inco-nueniente.»

<sup>572</sup> AGS, E., leg. 103, núm. 309, billete de Fonseca al Emperador de 4 de octubre de 1554: «La visita que el Príncipe N. Sor. hizo del Consejo, alcaldes de corte, y otros oficiales se acabó antes de su dichosa partida, y por lo q. della ha resultado se han hecho tam buenas prouisiones para ambos tribunales que espero en Dios serán muy prouechosas y de q. V. Magt. se seuirá con entero contentamiento. Lo mesmo puedo certificar a V. Magt. de lo q. se ha proueydo en la contaduría y cruzada, donde se ha puesto orden no menos prouechosa para la hazienda q. para los otros neg[oci]os que allí ocurren. Y pues con hauerse



la coyuntura fomentó la inoperancia política del presidente Fonseca, quien, aunque debía su progreso administrativo a Ruy Gómez, mantuvo correspondencia preferentemente con el Emperador, pese a su alejamiento de los asuntos de gobierno <sup>573</sup>.

No obstante, la atenuación transitoria de la oposición faccional y la rehabilitación administrativa que la acompañaba no fue incompatible con la paulatina consolidación orgánica del Consejo Real y la continuidad —aunque a menor ritmo— del proceso de revisión de los organismos gubernativos y judiciales.

Una vez partido don Felipe a Inglaterra, las relaciones de correspondencia del Consejo Real elaboradas en la corte itinerante del Emperador reflejaron (por lo esporádico de las cartas) la independencia del organismo con don Felipe y su padre lejos de Castilla <sup>574</sup> y una voluntad de consumir medidas que favorecieran la ejecución de las determinaciones gubernativas y judiciales, de acuerdo con el deseo del príncipe. El organismo defendió la nueva provisión de alcaldes de chancillería, suscrita por el príncipe en el caso de la de Valladolid y sancionada por el Emperador en el de la de Granada <sup>575</sup> y ordenó el consumo de oficios de justicia perpetuos como el de alguacil de Sevilla ostentado por el conde de Castellar <sup>576</sup>. Asimismo, consciente por experiencia propia de la necesidad de una buena remuneración para la independencia de los ministros de justicia, el Consejo solicitó crecimiento de sus propios salarios, en lo que halló proclive al Emperador <sup>577</sup>. En la misma línea se persiguió la percepción ilegal de derechos de

---

hecho las diligenci[as] posibles por todo el reyno en las personas del Consejo se ha hallado tanta limpieza y rectitud, con más esfuerzo osaré importunar a V. Magt. por el aumento de su salario como otras vezes lo tengo supplicado.»

<sup>573</sup> Así, por ejemplo, en lo relativo a la ejecución del decreto tridentino sobre visita de los cabildos por los prelados y la posible derogación del breve *Ex Credita Nobis* (AGS, E., leg. 103, núms. 315-322 y 345-346). En este mismo congreso, FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., «Conflictos entre Carlos V y los cabildos catedralicios hispanos durante los años finales de su reinado», se ha ocupado de este asunto.

<sup>574</sup> AGS, E., leg. 103, núm. 173-174, «Relación de lo que los del Consejo Real consultan a V. Md. por sus cartas de xvii de diziembre del año passado, xix de março, xx y xxviii de junio y vi de jullio deste p[rese]nte.»

<sup>575</sup> *Ibid.*: «Que haviendo sido ynformado el rei de Inglaterra q. conbernia a la buena administra[ci]ón de la justia y despacho de los negocios que occurren ante los alca[ldes] de la audiencia de V[all]ad[ol]id q. houiessse otro alcalde a cumplimiento de quatro lo proueyo y que paresçe q. en la chancillería de Granada ay la misma neçessidad y conbiene que sean otros quatro.» Respecto a esto último, Eraso y su oficial apuntaron al margen: «Paresçe que se deue prouer (*sic*) como se hizo en la chancillería de Vall[adol]id: (desde aquí de mano de Eraso) escreuyrles q. se hará q[uan]do se proueyeren los otros offi[ci]os q. están vacos». Cfr. asimismo *ibid.*, núm. 316, consulta original del Consejo datada el 20 de octubre de 1554.

<sup>576</sup> *Ibid.*, núm. 175, consulta del Consejo al Emperador de 12 de junio de 1554. El 20 de octubre el Consejo remachaba que «conbiene a su rreal seruicio que no faga m[e]r[ce]d de ofi[ci]os de justia de por bida a grandes ny a caualleros ny a otra persona alguna por los ynconbenyentes que dello se siguen....» (*ibid.*, núm. 316).

<sup>577</sup> *Ibid.*, núms. 173-174: «Acuerdan lo que otras vezes han supp[li]ca]do sobrel creçimiento de sus salarios y que aunque se les ha respondido lo mandaria V. Md. proueer les fuerça la neçessidad a hazerlo assí por los presçios a que se han subido todas las cosas como por auer faltado las ayudas de costa q.

la que se beneficiaban los alcaldes y alguaciles, bien por su usurpación o el vacío legislativo. Con este propósito, se fijó a los primeros una quitación de 200.000 mrs.<sup>578</sup> Igualmente, atraieron la atención del Consejo las irregularidades cometidas por los promédicos, castigadas en la persona de Ceballos, por las que fue suspendido, si bien posteriormente se le permitió ejercer en tanto se dirimía su causa<sup>579</sup>.

No obstante, y pese a otros ejemplos de afirmación jurisdiccional, como la suscripción de la orden regia de observar los cánones tridentinos en los reinos hispanos<sup>580</sup>, desde el punto de vista del Consejo Real hubo lagunas en la política de refundación judicial alentada por el príncipe. A pesar de petición del Consejo al respecto, se siguió sin pasar por Cámara las licencias particulares de saca de moneda. La consolidación del Consejo y el aparato judicial debía encajar con el proceso de escisión y desarrollo consiliar que la administración hispana venía experimentando con mayor énfasis desde el fin de las Comunidades, y que el Consejo Real insistía en menospreciar con invocación de la preeminencia gozada desde el medievo como asistente legal del Rey y germen de los flamantes organismos (caso del de Indias). Es decir, tenía que producirse sin confrontación con el momento administrativo vivido por la monarquía. De esta manera, el Consejo Real hubo de adaptarse al visible fortalecimiento de otros sínodos, producido en muchas ocasiones bajo capa de la excepcionalidad de la regencia de doña Juana, durante la cual la pérdida de precedencia de los oidores del Consejo Real que entraban en la Suprema se extendió también al Consejo de Aragón<sup>581</sup>. El primero protestó por

---

se les solían hazer...». Los miembros del Consejo volvieron a suplicar por el aumento de sus salarios el 17 de diciembre de 1554 (*ibid.*, núm. 175).

<sup>578</sup> De mano de Eraso, se lee al margen: «Q. se les den a cumply[mient]o de los CCU a los al[ca]ldes y q. no lleuen las penas...» (AGS, *ibid.*, núms. 173-174). La consulta original del Consejo al respecto se contiene en *ibid.*, núm. 178.

<sup>579</sup> AGS, *ibid.*, núms. 173-174. No obstante, nuevas irregularidades cometidas en Extremadura condujeron al Consejo a solicitar la suspensión de las cédulas reales en su favor. El procurador de Cáceres solicitó al corregidor que abriese información «... de ciertos agravios que dizque fazía en ella el doctor Gaba-llos... a dado liçencias a personas ynábiles para que curen de enfermedades así a honbres como a mugeres porque se lo pagauan y sin estar presentes y pribaba a otros que heran áviles y los suspendía que no curasen y si se lo pagaban les tornaba a dar liçencia y abilitaua para curar y a mugeres pobres de tierra de la d[ic]ha uilla de Cáceres parteras las fazía parecer ante sí y por usar el oficio de parteras les lleuaua dineros y a otras sin las hexaminar dió liçencia para usar de oficio de parteras...» (AGS, E., leg. 109, núm. 91, consulta del Consejo Real al Emperador de 19 de marzo de 1555).

<sup>580</sup> Entre los avisos dados por el príncipe al embajador en Roma Juan Manrique de Lara se halló lo siguiente: «Que Su Magt. a mandado que en estos rreynos despaña se guarde y obserbe el conçilio de Trento y todo lo en el estatuydo y hordenado mobido así por la exortación que en el fin del d[ic]ho conçilio se faze a todos los príncipes xristi[ti]anos como por la obligación que como tan principal e obediente hijo de la igl[esi]a y cathólico príncipe tiene a hazer guardar y executar en sus rrey[n]os y señoríos lo que la igl[esi]a unibersal en el d[ic]ho conçilio manda y hordena y que más specialmente a Su Magt. toca la guarda y obseruancia del d[ic]ho conçilio...» (AGS, E., leg. 103, núm. 318, cédula del príncipe a Manrique de Lara de 9 de mayo de 1554).

<sup>581</sup> El Consejo Real manifestó su disgusto por la decisión imperial de que Velasco y Pedrosa se reunieran por su antigüedad con el Consejo de Aragón, lo que les relegaba a las últimas plazas a causa de su poco

la determinación de doña Juana, amparada por su hermano, de reunir por antigüedad a los miembros del Consejo de Aragón, el doctor Velasco y el licenciado Pedrosa, oidores del Consejo Real, dado que éstos eran los de nombramiento más reciente y la medida podía considerarse perjudicial para la precedencia del Consejo Real. El trasfondo corporativo que se deduce de la protesta bien merece su transcripción:

Si esta horden se obiese de guardar hera ygualar en todo al Consejo de Aragón con el de Castilla lo qual va tan lexos de lo que los rreys cathólicos y Vra. Magt. en sus bien auenturados t[iem]pos a mandado guardar y es de creer que lo mismo querrán otros Consejos. Y porque este no es negoçio del Consejo sino de Vra. Magt. y deste reyno de Castilla cuya autoridad y preminençia Vra. Magt. es seruido que se guarden siempre y conserben a parecido suplicar a V. Mt. lo mande proueer así para este negoçio como para los que adelante se ofrējeren <sup>582</sup>.

Los sucesivos ejemplos de Inquisición y Aragón permiten aventurar que este desenlace, la paulatina equiparación entre el Consejo Real y el resto de los Consejos, fue conscientemente propiciado por el príncipe mediante la demora intencionada de la provisión de las vacantes del Consejo Real, y la sanción del criterio de antigüedad para organizar aquellas reuniones consiliares en las que debían participar oidores del mismo. Con todo, la sensibilidad de la materia se deduce del hecho de que los licenciados Menchaca y Briviesca abogaron en Hampton Court porque la determinación sobre la entrada por antigüedad de los oidores del Consejo Real en el de Aragón no sentara precedente <sup>583</sup>.

El desarrollo administrativo hispano, estrechamente relacionado con la creciente complejidad y diversidad gubernativa, no pareció ser del agrado del Consejo Real de Castilla, por considerarlo dañino para su eminencia tradicional en la resolución de los asuntos, mantenida desde su origen. Es por ello que las reivindicaciones acerca de su autoridad secular y la atribución de la consolidación de otros Consejos a la transitoriedad creada por la ausencia regia se dirigieron al Emperador, la autoridad que compartía en mayor grado la citada concepción, antes que al príncipe, cuyo acercamiento al trono parecía animar las novedades administrativas tan denostadas por los miembros del Consejo Real. De acuerdo con ello, se insistía al César en la conveniencia de su pronto regreso a Castilla <sup>584</sup>.

---

tiempo en el Consejo Real (AGS, *ibid.*). La consulta original del Consejo solicitando el trámite por la Cámara de las licencias particulares de saca de moneda, en *ibid.*, núm. 180.

<sup>582</sup> *Ibid.*

<sup>583</sup> AGS, E., leg. 109, núm. 89, billete del rey-príncipe al Emperador de 1 de junio de 1555.

<sup>584</sup> *Ibid.*, leg. 103, núm. 172, presidente Fonseca al Emperador, 17 de marzo de 1555: «La nueva que se ha dicho de la bienaventurada buelta de Vra. Mgt. a estos sus reynos los tiene tan llenos de contentamiento q. solo el miedo de alguna dilación puede templar esta alegría quanto sea necesaria para su remedio. El amor q. V. Mgt. les ha tenido siempre es de creer que lo aurá representado a V. Mgt. muchas vezes mayormente

La más contundente de tales protestas, en la que el organismo subrayó la necesidad de que «... el Consejo tenga la autoridad q. sienpre ha tenido y conuiene que tenga pues de la justicia es la mayor y más principal parte...», fue dirigida al Emperador en fecha que indicaba alejamiento de la cúspide decisoria; dado que fue remitida el 24 de enero de 1556, ocho días después de la abdicación de los reinos hispanos por parte de Carlos V en don Felipe <sup>385</sup>. En generalización un tanto burda, se puede afirmar que la historia del reinado de Felipe II en lo relativo al Consejo Real fue el intento permanente de acoplamiento de un organismo tradicional a una administración crecientemente compleja y cambiante (transitoriamente cancelado cuando su propia autoridad residual y preeminencial resultó útil para acometer la política «confesionalizadora») y alcanzado *in extremis* en la reforma de 1598.

En cuanto a otros tribunales, la ausencia del príncipe supuso una mengua tanto del ritmo como de la profundidad del proceso de rehabilitación administrativa, como se apreció en manera especial en el caso de la audiencia de los Grados de Sevilla. Poco tiempo después de la partida de don Felipe el presidente Fonseca trató de alejar

---

después que el Ser[en]is[í]mo rey de Ynglaterra príncipe n. sor. está fuera dellos, cuya presencia en gran manera satisfacía los ánimos de todos estados. Plega a N. Sor. dar a V. Mgt. la salud y desocupación de otros negocios que es menester para hazerles tan señalado beneficio.»

<sup>385</sup> AGS, CC, Diversos, leg. 2, núm. 27. Carta del Consejo Real al Emperador, de 24 de enero de 1556: «S.C.C.M.: El crédito q. Vra. Magt. y sus progenitores de gloriosa memoria han dado sienpre (*sic*) a este real Consejo y la confianza q. Vra. Magt. faze de las personas q. en él siruen nos obliga representar a Vra. Magt. algunas cosas q. nos paresçe q. conuienen a su seruyçio y al descargo de su real conçiencia.

Algunas uезes el Consejo ha significado a V. Mt. los grandes daños q. por caresçer de su real presencia estos reinos han recebido los quales por diuersas partes se uan más aumentando cada día, y como el remedio dellos pende de la bienauenturada uenyda de Vra. Magt. qualquiera dilación q. en ella aya nos pone en neçesidad a suplicar de nueuo a Vra. Magt. lo que otras uезes en este caso hemos suplicado.

La esperiencia de los negocios y ueer cómo al presente uemos las cosas destos reynos tan apretadas nos da a entender cada día más lo mucho q. ynporta al serui[ci]o de Dios y de Vra. Mt. y p[ar]a el buen gobierno destos reynos que el Consejo tenga la autoridad q. sienpre ha tenido y conuiene que tenga pues de la justicia es la mayor y más principal parte y no tenyendola el Consejo como cabeça entendemos que se han enflaq[ue]cido y enflaquecen los mynistros de just[i]cia ynferiores q. son sus myenbros y los unos ny los otros cada uno en su respeto no puede tener el uigor que es menester p[ar]a la admy[nistración y execu[ci]ón de la just[i]cia y de aquí también resultan diferencias y competencias entre los Consejos y otros tribunales pretendiendo no auer superioridad de unos a otros con que dan y darán continuamente a V.Mt. ynportunidad y pesadumbre y estos y otros muchos ynconuiniens q. no así con facilidad se podrían referir cesarían auiendo paradero para determynar casos semeiantes y todos los demás negoçios de justia q. en estos reynos subçedieren porq. pretendiendo ser todos los mynistros yguales sin reconocimynento de superioridad ninguna república puede sergouernada sin gran turbación y confusión. Paresçionos representarlo y significarlo así por cumplir con lo q. deuemos a n[uest]ros officios y al serui[ci]o de Vra. Mt. y descargo de su real conçiencia. V. Mt. mandará proueer lo q. a su real serui[ci]o más conuenga». La carta continuó denunciando situaciones relacionadas con el estado de cosas descrito, como la venta de jurisdicciones, o el mal recaudo de la justicia que existía en Navarra (*ibidem*). Además, se aludía al contencioso derivado por el cumplimiento episcopal de la legislación tridentina en lo referido a los cabildos catedrales.

de la ciudad al visitador Pérez de la Fuente <sup>586</sup>, y el concejo sevillano, como damnificado por las determinaciones tomadas por este último, hizo público su disgusto y envió un comisionado ante el Emperador <sup>587</sup>. Entre los promotores de las inspecciones cundió el desánimo por el retardo que la situación política imponía al proceso y se llegó a plantear su repetición, ante las trabas surgidas. Por entonces, Juan Vázquez de Molina elaboró un memorial sobre «las personas q. ocurren p[ar]a las visitas de las audiencias de Vall[adol]id, Granada y Galizia y las uniuersidades de Salamanca y Alcalá», e incluyó entre los candidatos para inspeccionar la chancillería de Valladolid a «don Ju.º de Cordoua, dean de Cordoua q. otra uez la visitó» <sup>588</sup>.

Pero todas las rémoras que venimos ilustrando desaparecieron con el acceso del príncipe Felipe al trono hispano el 16 de enero de 1556, que revitalizó la renovación administrativa y favoreció la promoción de ministros cercanos a Ruy Gómez. La nueva situación también tuvo temprano síntoma en la audiencia de Sevilla, cuyas ordenanzas no tardaron en ser publicadas con un sesgo de racionalidad y mejora en la gestión, visible en medidas como la atribución a los escribanos de cámara de las funciones de control de la asistencia de los oidores, hasta entonces realizado por el «receptor de las multas y faltas de los oidores y otras personas» <sup>589</sup>. De la misma manera, la aprobación pendiente de las ordenanzas del Consejo Real se consumó el 23 de junio, por cédula de la princesa señalada por el presidente Fonseca, los licenciados Galarza, López de Otalora, Arrieta, el doctor Diego Gasca, el licenciado Pedrosa y el doctor Cano <sup>590</sup>.

<sup>586</sup> AGS, *ibid.*: «El doctor Hernán Pérez del Consejo de las Indias está en Sevilla, donde se han hecho por su industria buenos efectos, y dado nueva orden en muchas cosas de las q. tocan a la justicia y gouernación de aquella cibdad (de q. V. Magt. se puede tener por seruido); preside aora en tanto que otra cosa se prouee en la audi[enci]a de los grados. Él acabará muy presto su principal ocupación de la visita, y residencia q. ha tomado a los oficiales de aquel pueblo y su tierra. Entiendo por lo q. he visto, que así como ha sido prouechosa su estada allí hasta ora (*sic*) podría ser que adelante no lo fuesse: es persona en quien cabrá la m[e]r[ce]d q. V. Magt. le mandare hazer, diligente y de negocios...»

<sup>587</sup> AGS, E., leg. 109, núm. 239, billete de la audiencia al Emperador de 9 de enero de 1555: «Del doctor Hernán Pérez, que por mandado de Vra. Magd. preside en esta su real audienciã desta çiudad de Seuilla hemos entendido que tiene Vra. Magd. noticia de la m[e]r[ce]d que el rey de Inglaterra príncipe nro. Señor hizo a esta çiudad y su tierra antes de su partida de mandar embiar justiçia a ella de que tanta neçesidad auia y que Vra. Magd. ha aprouado y tenido por bueno el seruicio que aqui le haçemos las personas que mandó nos ocupásemos en ello lo qual nos ha dado gran ánimo para continuall y lleuallo adelante aunque ha tenido todos los estropieços que las obras buenas y santas suelen tener. Y aunque la çiudad ha hecho sus clamores antel rey príncipe nro. Señor y después de él ydo antel conseio real de V. Magd por no ser justificados y ser fundados en pretensiones particulares no han hallado acogida y pensando que con esto estaua ya rematado hemos agora entendido que la van a buscar ante V. Magd. Y aunque estamos çiertos la que suelen hallar semejantes demandas en Vra. Magd. y que en la proposición dellas se entiende su iniustiçia todokdía (*sic*) nos ha parecido dar a V. Magd. particular relaçon de los inconuenientes que sus pretensiones traerían...». Con la firma de: dr. Hernán Pérez, ldo. Medina, ldo. Muñoz de Salazar, ldo. Melchor de León, ldo. Juan de Montalvo, ldo. Espinosa, ldo. Antonio de Ulloa.

<sup>588</sup> AGS, E., leg. 103, s. n.

<sup>589</sup> *Nueva Recopilación*, lib. 3, tit. 2, Ley 14; MARTÍNEZ GIJÓN, E., *op. cit.*, pp. 293 y 323.

<sup>590</sup> DIOS, S. de, *op. cit.*, p. 112.

Tan pronto como el 25 de febrero Felipe II resolvió su primera consulta para la provisión de oficios, que contenía varios nombramientos pendientes por la etapa de transitoriedad. Se inició con la alcaldía de corte vacante por el doctor Ortiz como consecuencia de la visita del príncipe y Diego de Córdoba, que fue conferida al doctor Gaspar de Jarava, alcalde de la chancillería de Granada. La regencia de Navarra, libre por la promoción de Fernando Cano al Consejo Real, fue provista en la persona del licenciado Diego de Espinosa, ambos por título de 29 de febrero. Las vacantes del doctor Santander y el licenciado Ordoño en la chancillería de Valladolid fueron cubiertas por Arceo y don Pedro de Deza, ocupando la plaza del primero como alcalde de Valladolid el licenciado Alvar García de Toledo. Igualmente, las plazas dejadas en la chancillería de Granada por Covarrubias —nominado para la Isla Española— y Jarava, promovido como decíamos a alcalde de Casa y Corte, fueron cubiertas por el doctor Francisco de Avedillo y el licenciado Rodrigo Vázquez. La plaza vacante en Navarra por Arbizu, que se desplazaba a las Indias, fue ocupada por el licenciado Miguel Ruiz de Otálora. Por su parte, el licenciado Juan Díaz de Fuenmayor ocupó la vacante del licenciado Francés como alcalde mayor de Galicia, mientras Pedro de Córdoba pasó a la asistencia de Sevilla. La plaza de alguacil mayor, de duración vinculada a la de asistente, se decidió que recayera en Juan de Céspedes<sup>591</sup>. Para proveer todas estas plazas el Rey atendió a Antonio de Fonseca, el presidente de Castilla, quien renovó su obediencia a Ruy Gómez, y cuya propuesta contuvo además candidatos para otras plazas que en ese momento no fueron cubiertas: la audiencia de los grados de Sevilla, una alcaldía de corte en Navarra o una alcaldía mayor de Sevilla<sup>592</sup>.

Considerado el giro que Diego de Córdoba dio a la visita de la justicia cortesana desde la partida de don Felipe, la nueva situación no tardó en afectarle profundamente y desembocó, combinada con otros factores, en su alejamiento de la corte. Remoción que, con todo, pudo esquivar gracias a circunstancias excepcionales. Ciertamente, no vino a atenuar el malestar regío por su actitud postrera durante la inspección, la libre iniciativa mostrada por su padre el conde de Alcaudete en el norte de África. La instalación permanente de un destacamento turco en Tremecén en 1551 aconsejaba consumir alguna respuesta militar y, ausente el Conde, su hijo consiguió la captura del rey de Tremecén al año siguiente<sup>593</sup>. Pero ello no terminó con las dificultades del presidio

<sup>591</sup> AGS, E., leg. 13, núm. 181.

<sup>592</sup> *Ibid.*, núm. 182. Originalmente, el *fiat* para la asistencia de Sevilla en la memoria del presidente correspondió a Gonzalo Mexía, pero finalmente el elegido fue Pedro de Córdoba. Otra memoria de Fonseca por entonces, para la fiscalía de la chancillería de Valladolid, se contiene en AGS, *ibid.*, núm. 172, en la que proponía al doctor Avedillo, colegial del arzobispo, el licenciado Isunza, colegial de Valladolid, el doctor Carrillo, que había sido juez de residencia en Segovia, estaba en Oviedo y era yerno del doctor Ovando; igualmente, el licenciado Bartolomé de Ortega, colegial de Cuenca, y el doctor Francisco Hernández, fiscal de Granada. Otro memorial de candidatos propuestos por Fonseca para diferentes plazas, en AGS, *ibid.*

<sup>593</sup> El 8 de junio de 1552, el Emperador recibió carta desde la corte, afirmando: «Don Martín de Córdoua que está en Orán por el conde su padre me scriue a XIX de mayo q. desbarató y prendió al rey de Tremeçén

castellano de Orán, más bien lo contrario, ante lo que el gobernador decidió tomar Mostaganem, plaza mediante la que los turcos recibían los suministros. El plan no era del agrado de don Felipe, partidario de consagrar todos los recursos a la guerra con Francia. Esta reticencia motivó largas discusiones en el Consejo de Guerra, que hicieron perder sazón a los planes de Alcaudete, de tal manera que cuando por fin los acometió en 1558, con autorización de doña Juana pero a espaldas del Rey, desembocaron en un sonado fracaso y su propia muerte <sup>594</sup>.

La determinación del conde debió ratificar a Felipe II en la multiplicación de decisiones perjudiciales a sus deudos, iniciadas con don Diego de Córdoba, caso en el que tenía fundamento propio dada la forma de culminar su inspección judicial. Lo presentó para la diócesis de Calahorra antes del 23 de octubre de 1556, fecha en la que el Rey comunicó su decisión a uno de sus principales protectores, el arzobispo Silíceo. Paulo IV firmó sus bulas el 1 de octubre del año siguiente y el licenciado Sepúlveda tomó posesión en su nombre el 6 de febrero de 1558, convirtiéndose así en sucesor de Juan Bernal Díaz de Luco <sup>595</sup>.

Con su nombramiento, Diego de Córdoba asumió la mitra de una diócesis de complejo gobierno. A la excesiva extensión y número de parroquias, la ineptitud de los abundantes clérigos, el control de los patronos laicos sobre muchas iglesias, el desconocimiento de la doctrina católica por los feligreses y las profundas diferencias culturales e idiomáticas entre las diferentes partes que constituían el obispado <sup>596</sup>, vinieron a añadirse otras distorsiones. Las originadas en los años anteriores tanto por la im-

---

y los turcos que con él se hallaron como V. Md. mandará ver por la copia del capítulo de su carta q. va con esta» (AGS, E., leg. 89, núms. 88-99).

<sup>594</sup> El contexto político del episodio y sus importantes consecuencias ha sido abordado por FERNÁNDEZ CONTI, S., *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II (1548-1598)*, Valladolid, 1998, pp. 70-71; RODRÍGUEZ SALGADO, M. J., *Un imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo*, Barcelona, 1992, pp. 376-413. Para la situación del territorio y la política de Alcaudete, cfr. BRAUDEL, F., *El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, México, 1987, II, p. 430; HAEDO, P. D. de, *Topografía e historia general de Argel y epitome de los reyes de Argel*, Valladolid, 1612, p. 430; CAZENAVE, J., *Les sources de l'histoire d'Orán*, s. l., 1933; VERONNE, C. de la, «Política de España, de Marruecos y de los turcos en los reinos de Fez y Tremecén a mediados del siglo XVI», *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, núm. 3 (1954), pp. 87-95; RUFF, P., *La domination espagnole a Oran sous le gouvernement du Comte d'Alcaudete, 1534-1558*, París, 1900, especialmente pp. 144-164. Finalmente, FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., *op. cit.*, pp. 293-294.

<sup>595</sup> *Op. cit.*, pp. 295-296; *Episcopologio Calagurritano...*, p. 47, añade que el 13 de junio de 1557, el Rey escribió al cabildo de Calahorra para que le nombrasen administrador en tanto llegaban sus bulas.

<sup>596</sup> Caracteres que traslucen los trabajos de TELLECHEA IDIGORAS, J. I., «Diócesis de Calahorra y Santo Domingo. Las relaciones de visitas *ad limina* (1598-1794)», *Anthológica Annua*, 1991, núm. 38, pp. 107-201, e IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S., «La diócesis de Calahorra a mediados del siglo XVI según el libro de visita del licenciado Martín Gil», *Brocar*, núm. 21 (1998), pp. 135-198.

sibilidad de aplicar la jurisdicción episcopal en el señorío de Vizcaya<sup>397</sup>, como por la decidida oposición del cabildo catedralicio a someterse a la *visita* episcopal preconizada por la legislación de la segunda asamblea tridentina, padecida en manera especial por su predecesor<sup>398</sup>, pero que imposibilitó a sus inmediatos sucesores la realización de visitas al cabildo<sup>399</sup>. Con todo, la permanencia de Diego de Córdoba en la corte le evitó afrontar problemas episcopales de esta u otra índole.

La ausencia de su diócesis se debió a la urgente necesidad de la intervención interina de antiguos consejeros de Inquisición en la Suprema, para abordar los núcleos luteranos surgidos en Valladolid y Sevilla. Con la baja de Galarza, el inquisidor general Valdés adujo el moroso despacho de la Suprema para solicitar el 14 de mayo de 1558 al Emperador la provisión de su plaza. De mano del secretario de Felipe II en la *jornada*, en el margen de la carta de Valdés no sólo quedaron apuntados los candidatos más gratos al Rey y sus asesores para la vacante, sino que se ordenó la intervención de servidores

<sup>397</sup> Parece que, en un principio, los vizcaínos se mostraban opuestos a franquear el paso a cualquier individuo con condición episcopal, según pudo comprobarse en el recibimiento del propio Fernando el Católico el 30 de julio de 1476, circunstancia en la que expulsaron a Antonio Carrillo, obispo de Pamplona (GALÍNDIZ DE CARVAJAL, L., *Anales breves del reinado de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, de gloriosa memoria...*, pub. por ROSELL, C., *Crónicas de los Reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio hasta los católicos don Fernando y doña Isabel*, III, Madrid, 1953). En la oposición a permitir el paso del obispo propio influyeron los factores señalados por IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S., *op. cit.*, pp. 138-140. Carlos V mostró desde su llegada al trono castellano su preocupación por la limitación jurisdiccional que afectaba a los prelados de Calahorra y los consiguientes daños morales, y por ello vio con buenos ojos la tentativa de arreglo con el señorío protagonizada por los obispos Alonso de Castilla —ex miembro del Consejo Real— y Juan Bernal Díaz de Luco, y culminada con el acuerdo de 1545. Son numerosas las fuentes que se han ocupado del particular: LABAYRU, E. de, y HERRÁN, F., *Compendio de Historia de Vizcaya*, Bilbao, 1975, pp. 179 y 192-193; IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S., *op. cit.*, p. 140; MANSILLA REOYO, D., «Antecedentes históricos de la diócesis de Vitoria», en VV.AA., *Obispos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta la erección de la diócesis de Vitoria*, Vitoria, 1964, pp. 185-238, p. 232; SAINZ RIPA, E., *Sedes episcopales de La Rioja*, III, Siglos XVI-XVII, Logroño, 1996, pp. 189-190. Las capitulaciones definitivamente suscritas por Luco se hallan en MAÑARICÚA, A. E. de, *Las nuevas diócesis de Bilbao y San Sebastián y sus antecedentes históricos*, Salamanca, 1951, pp. 57-73.

<sup>398</sup> El 3 de marzo de 1547 se aprobó en el concilio el derecho de los prelados a visitar sus cabildos, y ya en junio de ese año el obispo Díaz de Luco, presente en la asamblea, había comisionado al licenciado Pisa para visitar el cabildo de Calahorra. El desarrollo del enfrentamiento, en MARÍN MARTÍNEZ, T., «Primeras repercusiones tridentinas: el litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra», *Hispania Sacra*, 1948, núm. 1, pp. 325-349. Sobre este prelado y su dilatada actuación, y entre la numerosa bibliografía que podríamos citar, cfr. BERNAL DÍAZ DE LUCO, J., *Soliloquio y carta desde Trento*, MARÍN MARTÍNEZ, T. (ed.), Barcelona, 1962; id., «El obispo Juan Bernal Díaz de Luco y su actuación en Trento», *Hispania Sacra*, 1954, núm. 7, pp. 47-138, así como la entrada sobre el personaje por este mismo autor en ALDEA VAQUERO, Q.; MARÍN MARTÍNEZ, T., y VIVES GATELL, J., *Diccionario de historia eclesiástica de España*, pp. 750-753.

<sup>399</sup> Fallecido el 6 de septiembre de 1556, la apelación del cabildo a Roma (opuesta al fortalecimiento episcopal), motivó la inhibición contra Díaz de Luco, según se escribió en tiempo del obispo Ochoa de Salazar: «D. Juan Bernal de Luco, de lo que en el Concilio tridentino se decretó pretendió que la concordia estaba derogada... y así pretendió visitar la dicha iglesia y capítulo, y de todo lo que se hizo se apeló y se introdujo pleito en la Rota, y se dió inhibición contra el dicho señor obispo y sus sucesores y se le notificó, y estando en este estado murió» (pub. por MARÍN MARTÍNEZ, T., «Primeras repercusiones tridentinas...», p. 349).



de la Suprema ya nominalmente alejados de la corte como Diego Tavera o Diego de Córdoba <sup>600</sup>. En realidad, este último ya llevaba tiempo vinculado al asunto, mediante la censura de los escritos de los culpados y la indagación del trato de la marquesa de Alcañices con el arzobispo Carranza <sup>601</sup>. En estas tareas le sorprendió la muerte el 15 de septiembre de 1558, sin haber pisado su sede episcopal. En principio, había dispuesto su entierro en ella, pero finalmente fue sepultado en la capilla familiar de San Pedro Apóstol, en la catedral de Córdoba <sup>602</sup>.

\* \* \*

En cuanto a la administración de justicia, la transición del Imperio de Carlos V a la Monarquía Hispánica de Felipe II perjudicó la materialización de las conclusiones alcanzadas como consecuencia del proceso de visitas iniciado con la década. En una consideración faccional, los protegidos de Éboli teñirían el tejido administrativo desde el acceso del príncipe Felipe al trono y más decididamente tras el viaje del *patrón* a Castilla en marzo de 1557, y sobre todo, con el regreso de Felipe II en septiembre de 1559 <sup>603</sup>. Pero desde un punto de vista funcional, las interrupciones y trabas experimentadas en el proceso de rehabilitación administrativa confirmaron al grupo de Ruy Gómez en la necesidad expresada ya en 1554 de afrontarlo de nuevo desde un principio, lo que sucedería incluso antes del retorno del monarca <sup>604</sup>. Entre tanto, arreciaron nuevamente por doquier alegatos en denuncia de la situación judicial y más en concreto del Consejo Real, emparentados con los que ambientaron el inicio de las indagaciones de Diego de Córdoba en 1553. Desde la experiencia administrativa ganada en Sicilia,

<sup>600</sup> AGS, E., leg. 129, núm. 129, carta de Valdés a Felipe II de 14 de mayo de 1558, pub. por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés*, II, Oviedo, 1971, p. 192: «Parece que sería a propósito el licenciado Vaca de Castro y, no yendo a las Indias, el licenciado Briviesca, o Anaya, o Montalvo, o Arrieta, o Pedroso (Léase Pedrosa) Hernández, o Lagasca. Entre estos o los otros elegirá V. Md. al que le pareciere, pues los conoce a todos, y parece que, en esta ocasión, para las resoluciones, se deberán llamar al tiempo a don Diego Tavera y don Diego de Córdoba, por de la isperiencia; pero de manera que sepan que han de volver a residir y estar en sus iglesias, y otros preladados que han sido inquisidores, si son menester».

<sup>601</sup> TELLECHEA IDÍGORAS, J. L., *Fray Bartolomé Carranza. Documentos Históricos*, I, *Recusación del Inquisidor General Valdés*, Madrid, 1962, pp. 170, 198, 261-262 y 342; GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., *El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568)*, II, *Cartas y Documentos*, pp. 197-198 y 210-211.

<sup>602</sup> *Episcopologio Calaguritano...*, p. 47. Esta capilla se hallaba en el mismo mihrab de la mezquita, y contaba con cripta usada como panteón familiar. Fue patronazgo de los condes de Alcaudete hasta 1779 (NIETO CUMPLIDO, M., *La Catedral de Córdoba*, Córdoba, 1998, pp. 366-367. Agradezco la referencia al doctor Juan Aranda Doncel). Al tiempo de su muerte ya había comenzado la construcción de la puerta de S. Jerónimo en la catedral de Calahorra (SOLANO ANTOÑANZAS, J. M., *El gobierno eclesiástico de la vasta diócesis de Calahorra. Sus obispos durante XX siglos*, Calahorra, 1967, p. 91).

<sup>603</sup> FERNÁNDEZ CONTI, S., *Los Consejos de Estado y Guerra*, p. 62; GONZÁLEZ PALENCIA, A., *Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II*, Madrid, 1946, I, p. 226.

<sup>604</sup> AGS, E., leg. 130, núms. 135-147. El obispo de Ciudad Rodrigo, Pedro Ponce de León, visitó la chancillería de Valladolid, y don Diego de Castilla la de Granada.

el presidente Juan de Vega —nombrado en abril de 1557<sup>605</sup>— criticó los «usos pesados e impertinentes» dominantes en el Consejo Real<sup>606</sup>. Por su parte, el contador de Burgos Luis Ortiz abogó por la conversión de las escribanías de consejos, chancillerías y adelantamientos, públicas y del número, en perpetuas<sup>607</sup>. Mientras en la coyuntura del regreso regio, el doctor Bartolomé de Torres reivindicó la provisión imparcial de los oficios de justicia<sup>608</sup>.

Indagar como hemos hecho en los oficiales de justicia no significa claudicar ante la historia institucionalista. Muy al contrario, los alegatos mencionados encubrieron la continuidad de un sistema administrativo fundado en las relaciones personales, que desvirtuaba y llegaba a impedir la materialización de las resoluciones judiciales. Ante su acceso al trono, el príncipe mostró interés por fundamentos de la majestad regia como la tutela de la justicia. Por ello decidió fortalecer aquella parcela de la gestión forense encargada del trámite de las mencionadas resoluciones, mediante inspección conducida por un visitador experto y culminada con ordenanzas que la dotasen de consistencia institucional. Sobre este fundamento, el Consejo Real llevó la iniciativa en la imposición de la política «confesionalizadora». Pero de inmediato se impuso la realidad del sistema político y el Consejo y la justicia cortesana no ganarían en entidad formal hasta final de siglo.

---

<sup>605</sup> AGS, EMR, QC, leg. 30. Cit. por GAN GIMÉNEZ, P., *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988, p. 271.

<sup>606</sup> AGS, E., leg. 130, núms. 135-147; BNM, ms. 5938, s. f.

<sup>607</sup> FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., «El memorial de Luis de Ortiz», *Anales de Economía*, 17 (1957), pp. 101-200, p. 180.

<sup>608</sup> ABAD, C. M.<sup>a</sup>, «Dos inéditos del siglo XVI sobre provisión de beneficios eclesiásticos y oficios de justicia. El primero de Fray Francisco de Vitoria, O. P. El segundo del Doctor Bartolomé Torres, Obispo de Canarias», *Miscelánea Comil.* 15, 16/II (1951), pp. 271-372, esp. 367-372.